

EXPEDIENTE No. 79
ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA



5EXPEDIENTE No. 79

HONORABLES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-----
ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA, de datos de identificación conocidos dentro del presente expediente, comparezco ante ustedes y,

EXPONGO:

ANTECEDENTES:

Por medio de notificación electrónica de fecha seis de febrero del año en curso, me enteré que la señora Mayra Liseth Rodríguez Castro, compareció ante este Órgano Colegiado a plantear objeción en mi contra como postulante para ser nominada candidata a Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que no soy apta para integrar dicha Corte, por encontrar en mi persona falta de idoneidad conforme los artículo 113 y 207 de la Constitución política de la República de Guatemala y falta de imparcialidad e independencia judicial en el ejercicio de la profesión; razón por la cual por este medio respetuosamente **comparezco a evacuar la audiencia** para ejercer mi derecho de defensa y presentar las pruebas de descargo que desvanecen el impedimento planteado. Tomando en cuenta que la denunciante alude a mi persona varios aspectos, de la misma manera daré explicación y razonamiento a cada una de ellos, a efecto que la máxima autoridad que constituye la Asamblea de la Comisión de Postulación, (si así lo considera), desestime las objeciones y me permita continuar en el proceso de selección al que me encuentro sometida; para tal efecto procedo de la manera siguiente:

I. FALTA DE IDONEIDAD PARA OPTAR AL CARGO POR NO CUMPLIR

REQUISITOS CONTITUCIONALES CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULO 113 Y 207 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA:

La denunciante expresa de forma imprudente e inconsistente, que no reúno los requisitos establecidos en los artículos 113 y 207 de la Constitución Política de la República, consecuentemente carezco de ética, honorabilidad y honradez, siendo que para pronunciarse sobre estos aspectos de la vida de una persona, deben conocerse sus antecedentes personales y su trayectoria de vida, porque son circunstancias inherentes a la conducta del ser humano, la denunciante no está en condición de externar opinión al respecto, porque no me conoce ni la conozco personalmente y menos conoce de mi vida privada; en ese orden de ideas cabe advertir que el procedimiento para la selección de las nóminas para aspirante a Magistrados de Corte Suprema de Justicia, está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulación, a las que me he sometido conforme los perfiles requeridos; sin embargo, es importante resaltar que como funcionaria del Organismo Judicial me encuentro sometida de manera irrestricta a las Normas contenidas en el Código de Ética Profesional y cuya contravención a dichas normas deben ser tramitadas y resueltas por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, por lo que acompaño la constancia reciente extendida por dicho Tribunal de Honor en la cual se confirma que **no aparece sanción emitida en mi contra** ante el referido Tribunal (**ANEXO 1**), no obstante que ya obran dentro de mi expediente. Tampoco aparece sanción disciplinaria en mi vida profesional dentro del Organismo Judicial como Jueza y/o Magistrada por faltas a la buena conducta ética que debemos mostrar tanto jueces como magistrados, como lo acredito con la constancia extendida por el presidente de la Junta de Disciplina del Organismo Judicial en la cual se confirma que **no**

EXPEDIENTE No. 79

ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA

aparece sanción emitida en mi contra por el referido tribunal (**ANEXO 2**), no obstante ya obra dentro del expediente. Es de extraordinaria importancia dejar constancia que cumplo con los requisitos o méritos de capacidad, idoneidad y honradez que exige el artículo 113 constitucional, para optar a cargos públicos, requisitos que fueron requeridos por la Honorable Comisión a la que me dirijo y evaluados oportunamente al revisar mi expediente. Por otro lado tengo IDONEIDAD Y CAPACIDAD para ostentar tan digno cargo de Magistrada de Corte Suprema de Justicia, pues basta con revisar mi hoja de vida la cual es pública, para establecer que soy una **profesional del derecho integra competente e idónea** aunado a que soy Jueza con Carrera Judicial (**ANEXO 3**), ingrese por primera vez al Organismo judicial en 1990 como auxiliar judicial, a partir de ese año fui ascendiendo a diferentes puestos como auxiliar judicial y luego a diferentes judicaturas hasta llegar a la Magistratura (**ANEXO 4**); la capacidad y solvencia para optar al cargo de Magistrada de Corte Suprema de Justicia me la dan aproximadamente 22 años de experiencia en el ejercicio profesional de la judicatura; por otro lado acredité conforme el perfil requerido mi preparación académica, pues cuento con un Doctorado en Ciencias Penales, graduada con la distinción Suma Cum Laude (**ANEXOS 5**), asimismo cuento con la maestría en Gestión Jurisdiccional la cual es específica para el conocimiento del trabajo en el campo judicial, graduada con la distinción Cun laude (**ANEXOS 6**), una maestría en Genero y Justicia y el estudio de una maestría en Derecho Penal (**ANEXOS 7 Y 8**); por otro lado ejerzo la docencia universitaria a nivel de posgrado en la rama del derecho penal por 9 años (**ANEXO 9**) por lo que me mantengo en constante estudio del derecho.-----

En ese orden de ideas tanto el ejercicio profesional en la judicatura, mis grados

académicos, así como la docencia universitaria me dan la solvencia para ser CAPAZ e IDONEA no solo para optar sino que también para desempeñar el cargo de Magistrada a la Corte Suprema de Justicia, lo antes manifestado lo acredito con los anexos enumerados y con el expediente que presente a esa comisión el cual se identifica con el numero 79. De tal manera que la objeción plateada por la denunciante no tiene asidero legal, evidentemente la denunciante no conoce mis antecedentes laborales ni académicos.-----

Hablar de honradez es muy subjetivo, pues cada persona tiene su propia concepción de lo que es la honradez, al respecto manifiesto a los Honorables comisionados que soy una mujer honrada, creyente y temerosa de Dios, dedicada a mi trabajo y a mi hogar, la denunciante no aporta en su denuncia ningún prueba que acredite que no soy una mujer Honrada, es más ni siquiera da explicación alguna por lo que considera que no soy honrada, siendo esta una objeción absurda y que deja mucho que decir de la denunciante que me descalifica sin siquiera conocer mi vida privada.-----

II. FALTA DE IMPARCIALIDAD CON LA JUSTICIA E INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL: La denunciante refiere a las incompatibilidades, incapacidades e impedimentos contemplados en los aspectos éticos con los que deben cumplir los aspirantes; al revisar los datos personales de la denunciante establezco que la misma no es abogada, ella es periodista, razón por la cual es evidente que confunde las normas éticas con las normas jurídicas, por lo que hace una confusión en el impedimento que plantea, al respecto debemos que tener claro que las normas éticas son personalísimas y no coercitivas, en tanto que las normas jurídicas las crea el Estado y surgen como consecuencia de regular la conducta de los individuos en la sociedad, en ese orden de ideas no pueden existir

EXPEDIENTE No. 79

ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA

incompatibilidad entre ambas clases de normas porque tienen funciones y objetivos diferentes, este impedimento que plantea no solo no tiene asidero legal sino que es confusa.-----

III. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA OBJECION: La denunciante es periodista consecuentemente se mantiene en búsqueda de información para promover la noticia, pues es su modus vivendi; en ese orden de idea la información que generan los tribunales penales mediante los casos judiciales que en su mayoría son públicos fundamentan su denuncia; principalmente los casos que ella considera han sido desarrollado mediáticamente; cabe advertir que los casos sometidos a jurisdicción se resuelven en los tribunales de justicia y no a través de los medios de comunicación, tomando en cuenta el desempeño objetivo de los periodistas, en relación a los casos que les interesa les corresponde informar a la sociedad lo acontecido mediante las decisiones judiciales y no la interpretación que ellos consideran tuvo que haber dado el juez al caso; también viene al caso indicar que con nuestras resoluciones los jueces y magistrados estamos obligados a fundamentar y dar respuestas a los sujetos procesales y en ultima instancia a la sociedad en general del porqué de las decisiones que se toman en un juicio, pudiendo ser estas impugnadas mediante los recursos correspondientes únicamente por los sujetos procesales que tengan legitimación activa, y solo a los órganos jurisdiccionales superiores corresponde analizar la legalidad, la razonabilidad y la logicidad de las resoluciones y sentencias que se generan en los juicios. Dicho lo anterior se analizan de manera sucinta cada uno de los casos a los que mediáticamente considera la denunciante tuvieron que tener un resultado diferente y principalmente acorde a su criterio como periodista, toda vez que si el resultado de cada uno de los casos a los que alude hubiesen sido atendiendo a su

criterio mediático esta denuncia fuera inexistente.-----

1. CASO DENOMINADO BITKOV. La denunciante no indica con claridad cuál es el problema que le generó a ella el caso denominado Bitkov, sin embargo se explica que el caso fue conocido por los titulares de la Sala Tercera del ramo penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, no lo conocí a título personal ni fui la ponente, mediante un Amparo promovido por el señor Igor Bitkov en contra del Juzgado de Primera Instancia penal narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de mayor Riesgo grupo "D", en su momento con fecha diecinueve de octubre del dos mil diecisiete se dictó sentencia declarando la procedencia del amparo en favor del señor Btkov, posteriormente la Corte de Constitucionalidad mediante apelación y en sentencia de fecha veintiocho de abril del dos mil dieciocho confirmó la sentencia de la Sala Jurisdiccional, por lo que se ordenó a la jueza contralora diera cumplimiento a la referida sentencia, sin embargo por inconformidad de la jueza contralora en la ejecución de la sentencia, presento Queja ante la Corte de Constitucionalidad, y en una segunda resolución de la Corte de Constitucionalidad, ordenó a la Sala Jurisdiccional resolver lo que en derecho corresponde en relación a la debida ejecución de la sentencia, tanto las resoluciones de la Sala Jurisdiccional, de la Corte de Constitucionalidad y las de la jueza contralora se decretaron cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley, principalmente el de fundamentación; la documentación que acredita los extremos indicados se incorpora en el anexo (ANEXO 10); **aunado a lo anterior es evidente que la denunciante sin conocerme ejerce acoso personal en mi contra toda vez que el caso relacionado no solo no fui la ponente, sino que también fue resuelto por un tribunal colegiado integrados por los magistrados Jaime Amilcar Gonzalez**

EXPEDIENTE No. 79
ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA

Davila como Presidente, Beyla Addaly Xiomara Estrada Barrientos como Vocal I y me persona como Vocal II, sin embargo la referida denuncia solo la presentó en mi contra, no así contra de los otros miembros del tribunal quienes también son postulantes a Corte Suprema de Justicia y a Corte de Apelaciones.-----

2. CASO DENOMINADO WILLIAMS MANSILLA. La denunciante no indica con claridad cuál es el problema que le género a ella el caso denominado Williams Mansilla, sin embargo procedo a explicar que el caso fue conocido por los titulares de la Sala Tercera del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, no lo conocí a título personal ni fue la magistrada ponente, en el caso en referencia el Ministerio Público presento acusación en contra del sindicado Williams Agberto Mansilla Fernández por los delitos de Peculado por Sustracción y Abuso de Autoridad, ante la Jueza Quinto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en resolución de fecha once de junio del dos mil dieciocho la jueza contralora decretó la Clausura Provisional del proceso, la referida resolución fue apelada por el Ministerio Público y mediante resolución de fecha veintinueve de junio del dos mil dieciocho, la sala jurisdiccional confirmó la resolución de primera instancia, por encontrar dicha resolución apegada a derecho, tanto la resolución de primer grado como la de segundo grado se dictaron cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, principalmente el de fundamentación; la documentación que acredita los extremos indicados se incorpora en el anexo **(ANEXO 11)**, aunado a lo anterior es evidente que la denunciante sin conocerme ejerce acoso personal en mi contra toda vez que el caso relacionado no solo no fui la ponente, sino que también fue resuelto por un tribunal colegiado integrados

por las magistradas Beyla Addaly Xiomara Estrada Barrientos como Presidente, Edith Marilena Pérez Ordóñez como magistrada de apoyo y me persona como Vocal II, sin embargo la referida denuncia solo la presentó en mi contra, no así contra de las otros miembros del tribunal quienes también son postulantes a Corte de Apelaciones.-----

3. CASO DENOMINADO EL REGISTRO. La denunciante no indica con claridad cuál es el problema que le género a ella el caso denominado el Registro, sin embargo procedo a explicar que el caso fue conocido por los titulares de la Sala Tercera del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, no lo conocí a título personal pues integramos los titulares de la Sala Jurisdiccional, en el caso en referencia la Jueza Sexto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, con fecha dieciocho de enero del dos mil diecisiete decretó prisión preventiva en contra de los sindicados Mario Estuardo Orellana López, Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, la referida resolución fue apelada por los sindicados y mediante resolución de fecha dieciséis de febrero del dos mil diecisiete se revocó la prisión preventiva decretada en contra de los apelantes y se les otorgo a medidas sustitutivas, tanto la resolución de primer grado como la de segundo grado se dictaron cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, principalmente el de fundamentación; la documentación que acredita los extremos indicados se incorpora en el anexo **(ANEXO 12)**, aunado a lo anterior es evidente que la denunciante sin conocerme ejerce acoso personal en mi contra toda vez que el caso relacionado fue resuelto por un tribunal colegiado integrados por los magistrados Jaime Amilcar Gonzalez Davila como Presidente, Edith Marilena

Pe3rez Ord3ñez como magistrada de apoyo y me persona como Vocal II, sin embargo la referida denuncia solo la present3 en mi contra, no as3 contra de los otros miembros del tribunal quienes tambi3n son postulantes a Corte Suprema de Justicia y a Corte de Apelaciones, respectivamente .-----

4. CASO DENOMINADO IGSS PISA. La denunciante no indica con claridad cu3l es el problema que le g3nero a ella el caso denominado IGSS PISA, sin embargo procedo a explicar que el caso fue conocido por los titulares de la Sala Tercera del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, no lo conoc3 a t3tulo personal ni fui la magistrada ponente, el caso el en referencia se conoci3 por apelaci3n especial por motivos de forma y de fondo, planteados por los diversos acusados, el veinte de junio del dos mil diecinueve se llev3 a cabo el debate oral de segunda Instancia y con fecha cinco de julio del mismo a3o dos mil diecinueve se dict3 la sentencia en la que se acogieron los recursos por motivos de fondo de los diversos apelantes acusados, no as3 los recursos planteados por motivos de forma, decretando en segunda instancia la absoluci3n de los acusados, la referida sentencia fue impugnada por la v3a de la Casaci3n ante la Corte Suprema de Justicia, tr3mite en el cual se encuentra actualmente., tanto la resoluci3n de primer grado como la de segundo. grado se dictaron cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, principalmente el de fundamentaci3n; la documentaci3n que acredita los extremos indicados se incorpora en el anexo **(ANEXO 13)**, **aunado a lo anterior es evidente que la denunciante sin conocerme ejerce acoso personal en mi contra toda vez que el caso relacionado no solo no fui la ponente, sino que tambi3n fue resuelto por un tribunal colegiado integrados por los magistrados Jaime Amilcar Gonzalez Davila como Presidente, Beyla Addaly Xiomara Estrada Barrientos**

como Vocal I y me persona como Vocal II, sin embargo la referida denuncia solo la presentó en mi contra, no así contra de los otros miembros del tribunal quienes también son postulantes a Corte Suprema de Justicia y a Corte de Apelaciones.-----

IV. NOTA DE PRENSA EMITIDA POR DIARIO LA HORA EL 8 DE JULIO DEL 2019 POR SEÑALAMIENTO DEL MOVIMIENTO PRO JUSTICIA. La denunciante no indica con claridad cuál es el problema que le género a ella la publicación aludida en la que se indica que yo dirigí una negociación que determino la integración de una planilla única en el inicio del diligenciamiento de esta Comisión de Postulación, señala que la negociación por la que se integró únicamente una planilla única para elegir Comisionados representantes de Magistrados de Apelaciones resultó ser un vicio de procedimiento grave, pues motivó la suspensión y eventual cancelación de proceso de Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia.-----

Ante lo denunciado se pueden extraer las siguiente conclusiones: Es evidente que la denunciante no estuvo presente el día y hora de la celebración de la Asamblea del Instituto de Magistrados en la que se determinó por dicha Asamblea la integración de una Planilla Única, dejándose llevar la denunciante únicamente por un discurso mediático publicado por la Institución denominada Movimiento Pro Justicia, de tal manera que la denunciante al no tener conocimiento directo de lo acontecido en la referida asamblea y tampoco tener conocimiento de la forma de elección de los comisionados Representante del pleno de magistrados de Cortes de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría, tergiversa y distorsiona los hechos acaecidos en aquel memorable, democrático e histórico momento, tal como se evidencia en el Acta número 24-2019 del Instituto de Magistrados de la

Corte de Apelaciones la que acompaño en copia simple (**ANEXO 14**), suscrita el jueves, veintisiete de junio del dos mil diecinueve, por el Presidente de la Junta Directiva y el Secretario de la referida agrupación gremial la que acompaño y queda demostrado en su punto **CUARTO**: “el Presidente de la Junta Directiva... indicó a la Asamblea continuar con el procedimiento de elección, por lo que solicitó la presencia de los Magistrados que deseen proponer planillas ... seguidamente el Presidente de Junta Directiva... pregunta si hay alguna otra planilla que quiera ser inscrita, no respondiendo ningún Magistrado, por lo que se le asignó el número uno (1) a la única planilla inscrita”. (Lo resaltado es propio). En función de lo anterior puedo acreditar que **jamás** propuse una planilla única, sino que ésta fue el resultado de la libre y consciente voluntad de cada uno de los Magistrados de Sala de Corte de Apelaciones, por ende la no presentación de otras propuestas en la Asamblea de mérito, es decir jamás vede el derecho a ninguno de mis colegas Magistrados para proponer planilla alguna y mucho menos violentar el derecho constitucional del cual estamos investidos cada uno de los que integramos esta Asamblea, como lo es el derecho de elegir y ser electo. Por tanto, entonces queda totalmente desvirtuado con el medio de prueba de descargo que documenta la Asamblea de elección que no se dio ninguna negociación, como equivocadamente lo refieren las denunciante. Si bien es cierto, el Instituto de Magistrados se ha caracterizado por desarrollar varios procesos de elección durante el periodo constitucional 2014-2019, hemos participado dentro de la política gremial en agrupaciones a lo interno del mismo en algunas ocasiones de manera consensuada y en otras no, pero siempre de manera libre democrática y sin presiones de ningún tipo, mediante la presentación de diferentes planillas, pero reitero en el ejercicio de nuestro derecho

constitucional de elegir y ser electos, con fundamento en el **artículo 7 literales a), b) y g) de los estatutos de la Asociación del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, aprobado por Acuerdo Ministerial número 92-97 del Ministerio de Gobernación**, acompaño en copia simple de los Estatutos como **(ANEXO 15)**.

En conclusión **RECHAZO CATEGÓRICAMENTE** los señalamientos de que negocié la planilla única y que no permití la competición en condiciones de igualdad, siendo que en la relación de hechos que quedaron documentados en el acta de la Asamblea General Extraordinaria de elección de elección, puede evidenciarse que yo no dirigí tal acto, tampoco fui presentada como una negociadora, ni tuve posibilidad de vedarle el derecho a ningún Magistrado para hacer sus propuestas y ejercer libremente su derecho constitucional de elegir y ser electo. Por consiguiente queda plenamente desvanecida la afirmación tendenciosa indicada.

V. CONCLUSIONES:

1. La denunciante incumplen con el principio de **la carga de la prueba**, no hay un solo elemento de prueba que acredite el supuesto impedimento que denuncia en mi contra, lo cual violenta el principio de contradicción y el derecho de defensa, pues no existe una imputación objetiva ni una plataforma fáctica y jurídica sobre la cual pueda defenderme, únicamente se advierte una intención de dañarme. Por consiguiente la Comisión al momento que ejerza el control formal de la denuncia, debe objetivamente desestimarla.
2. Los casos aludidos por las denunciante a excepción del identificado como numero 3 denominado El Registro, no fui la ponente, integre la resolución

EXPEDIENTE No. 79

ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA

como parte de mi función como Magistrada vocal II de la sala en la que me desempeño, sin embargo controle que todas las resoluciones dictadas por la Sala Tercera Jurisdiccional Penal, fueron emitidas apegadas a derecho y en su momento impugnadas por los medios legales correspondientes por parte de los sujetos procesales respectivamente.

3. Queda evidenciado fehacientemente, que la **denuncia es infundada, improcedente y espuria**, y que no genera impedimento en mi contra, sobre la base que me atribuye hechos no cometidos, presenta una precariedad en el relato y además no existe una lógica argumentativa que aluda al supuesto tipo de impedimento que en mi calidad de postulante pueda tener, los planteamientos se concretan a enfatizar casos que como periodista posiblemente ventilo mediáticamente, desconociendo que los únicos que tienen el poder de decisión son los jueces que ejercen jurisdicción y que solo a ellos corresponde resolver los conflictos atendiendo a las pruebas y al derecho, así como de que el sentido de las decisiones puede modificarse solo mediante la vía recursiva y no mediante el discurso mediático que generan los medios de comunicación.
4. Es indispensable dejar constancia, que ostento el perfil idóneo y cumplo con lo regulado en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, habiéndome desempeñado como Magistrado de la Corte de Apelaciones como se acredita en mi hoja de vida y la integralidad del expediente que se conoce ante esta honorable Comisión.
5. **Así también demuestro y ratifico, que en ningún momento pude vedar el derecho de participación de mis colegas Magistrados**, ya que la participación en la Asamblea tantas veces mencionada, fue convocada

X

legalmente con asistencia masiva, contundente, transparente y pública; por las autoridades correspondientes dentro del Instituto de magistrados; y la planilla que participo conto con el apoyo de la mayoría de asociados participantes (117 magistrados titulares), rechazando categóricamente la manifestación **tendenciosa y con temerario desprecio absoluto a la verdad** que me atribuye la calidad de negociadora, situación que tampoco quedo acreditada en qué momento se dio tal circunstancia, por lo cual solo puede existir en la mente de personas que buscan hacer el mal.

MEDIOS DE PRUEBA:

Ofrezco y adjunto al presente los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTOS:

1. **Identificado como ANEXO 1:** Constancia de Carencia de Sanciones del Tribunal de Honor del colegio de Abogados y Notarios de Guatemala de fecha seis de febrero del dos mil veinte.
2. **Identificado como ANEXO 2:** Constancia de Carencia de Sanciones de la junta de disciplina Judicial del Organismo Judicial de fecha seis de febrero del dos mil veinte.
3. **Identificado como ANEXO 3:** cuatro copias simples de diplomas que acreditan que pertenezco a la carrera judicial, fui jueza certificada en el 2013 con 98.57% y posteriormente con 99.52% en las funciones de carrera judicial como jueza; constancia extendida por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial, del Organismo Judicial, que acredita mi ingreso a la carrera judicial a partir del 01-04-1998 al presente periodo como magistrada, de fecha 4 de octubre del 2019.
4. **Identificado como ANEXO 4:** Constancia extendida por la Secretaria

EXPEDIENTE No. 79

ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA

Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial, del Organismo Judicial, que acredita los cargos desempeñados en la judicatura y magistratura de fecha cuatro de octubre del 2019.

5. **Identificado como ANEXO 5:** Copia Simple del diploma extendido por la universidad San Carlos de Guatemala en el que consta el grado académico de Doctora en –ciencias Penales, otorgado el 15 de julio del 2014.
6. **Identificado como ANEXO 6:** Dos copias simples que contienen los diplomas el primero acredita que me otorgaron Maestría en Gestión Jurisdiccional y el segundo el reconocimiento Cum Laude por la maestría en referencia ambos otorgados por la Universidad San Pablo de Guatemala y Rural de Guatemala de fechas 26 de abril del 2013.
7. **Identificado como ANEXO 7:** Una copia simple que contiene diploma con que acredita que me otorgaron Maestría en Género y Justicia otorgados por la Universidad Mariano Galvez de Guatemala de fechas 14 de junio del 2017.
8. **Identificado como ANEXO 8:** Copia simple de la certificación de cursos aprobados de la maestría de derecho penal de fecha 28 de julio del 2005 extendida por el Director de la Escuela de Posgrados de la Universidad San Carlos de Guatemala.
9. **Identificado como ANEXO 9:** Copias simples la primera extendida por el Director de la Escuela de Posgrados de la Universidad San Carlos de Guatemala de fecha 7 de mayo del 2019, en la que consta los cursos y los años de docencia universitaria en esa escuela y la segunda extendida por el Tesorero del Centro Universitario del Sur (CUNSUR) de fecha 18 de junio del 2019, con la que acredita docencia universitaria.
10. **Identificado con el ANEXO 10.** Certificación extendida por la Secretaría

de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala de fecha once de febrero del dos mil veinte que contiene el amparo y sentencias del caso identificado con el numero 1019-2017-0017 referente al caso denominado Igor Bitkov.

- 11. Identificado con el ANEXO 11:** Certificacion extendida por la Secretaria de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala de fecha once de febrero del dos mil veinte que contiene auto de fecha veintinueve de junio del dos mil dieciocho del caso identificado con el numero 1077-2017-00527 referente al caso denominado Williams Mansilla.
- 12. Identificado con el ANEXO 12:** Certificacion extendida por la Secretaria de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala de fecha once de febrero del dos mil veinte que recurso de apelacion y auto de fecha dieciseis de febrero del dos mil diecisiete del caso identificado con el numero 1080-2015-00372 referente al caso denominado el Registro.
- 13. Identificado con el ANEXO 13:** Certificacion extendida por la Secretaria de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala de fecha once de febrero del dos mil veinte que contiene sentencia de fecha cinco de julio del dos mil diecinueve identificado como apelacion 02-2019 referente al caso denominado IGSS PISA.
- 14. Identificado con el ANEXO 14:** Copia simple de la Certificacion extendida por el Secretario del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial de

EXPEDIENTE No. 79

ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA

fecha 11 de septiembre del 2019 y contiene el acta numero 24-2019 de la Asamblea del Instituto de Magistrados, celebrada el 27 de junio del 2019.

15. Identificado con el ANEXO 15: Copia simple de la Certificación extendida por el Secretario del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial de fecha 11 de septiembre del 2019 y contiene los Estatutos de la Asociación del Instituto de Magistrados.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

El artículo 28, de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su parte conducente preceptúa: Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Así mismo el Artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación que establece: (...) Las Comisiones verificarán la información que recaben, excluyendo la que no pueda ser confirmada, y notificará al día siguiente al profesional, quien deberá ser escuchado dentro de un plazo de cinco días, con el objeto de que presente sus pruebas de descargo si las tuviere.

SOLICITO:

1. Se tenga por presentado en tiempo el presente escrito y documentos adjuntos como prueba de descargo, agregándose a sus antecedentes.
2. Después del análisis respectivo, se tenga por desvanecido el impedimento planteado en mi contra ante la Comisión de Postulación para elección de Magistrados a Corte Suprema de Justicia periodo 2019-2024, por referirse a hechos puramente jurisdiccionales en los que actué en el ejercicio de mis funciones como Magistrada, así como aspectos personales de mi vida sin acreditar de ninguna manera los extremos a los que se refiere en la

denuncia planteada.

3. Habiendo subsanado el impedimento planteado por las denunciantes, **se me permita continuar en el proceso de postulación como aspirante a Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.**

CITA LEGAL:

Artículos: 4, 14, 28, 215, 216, 217, de la Constitución Política de la República; 15, 16, 17, 18 y 20 de la ley de Comisiones de Postulación; 7 de los Estatutos del Instituto de Magistrados.

Acompaño 01 copia escrita y una copia en versión digital (pdf) del presente escrito y documentos adjuntos;

Guatemala, 12 de febrero del 2020.



Dra. ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA

Anexo 1



*Colegio de Abogados y Notarios
de Guatemala*

00908

**EL INFRASCRITO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR DEL
COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA: -----**

----- HACE CONSTAR: -----

Que de conformidad con los registros existentes, lo cual está sujeto a la confrontación con el sistema matriz, a la fecha de emisión de la presente constancia, a la Abogada y Notaria **ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA (Colegiado 5,443)**, no le aparece sanción emitida en su contra por este órgano colegiado.-----

Y para los usos legales que a la interesada convengan, se extiende la presente constancia el seis de febrero del año dos mil veinte.-----

LIC. ERICK MIGUEL CASTILLO LOPEZ

PRESIDENTE

TRIBUNAL DE HONOR

Confrontó y revisó la base:

Lic. Hernan Soberanis Gatica

Secretario Ejecutivo



Anexo 2



GUATEMALA, C.A.

**LA SECRETARIA DE LA
JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL**

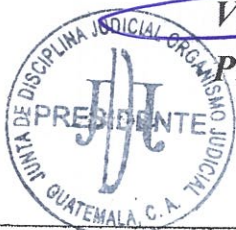
CERTIFICA:

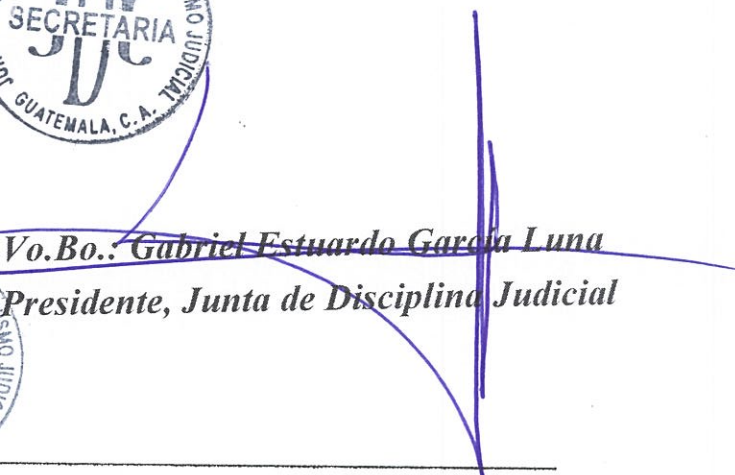
Según la base de datos de la Junta de Disciplina Judicial, órgano disciplinario que inició funciones el veintiuno de agosto del año dos mil a la presente fecha; la Abogada **ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO, NO TIENE NINGUNA SANCION DISCIPLINARIA VIGENTE;** no tiene recursos ni notificaciones pendientes, en la Junta de Disciplina Judicial.-----

La presente se extiende de conformidad con los Artículos Artículo 33, "... En las certificaciones que extiendan los órganos disciplinarios o el Consejo de la Carrera Judicial no se harán constar aquellas quejas declaradas con lugar después de cinco años de haber sido ejecutoriada la sanción...; Artículo 59 "...La Junta podrá brindar los informes que le sean requeridos con relación a determinado funcionario judicial, excluyendo las denuncias que hayan sido desestimadas o declaradas sin lugar, por no constituir antecedente."; y Artículo 66, "Certificaciones. La Junta de Disciplina Judicial podrá extender las certificaciones que le requieran...". También podrá extenderse certificación o constancia de carencia de sanciones disciplinarias por parte de la Junta.-----

A solicitud de la interesada, para los usos legales que convenga, se extiende la presente en la ciudad de Guatemala, el seis de febrero de dos mil veinte.-----


Sandra Eleonora González Cuevas
Secretaria




Vo.Bo.: Gabriel Estuardo García Luna
Presidente, Junta de Disciplina Judicial

Anexo 3



Consejo de la Carrera Judicial Organismo Judicial de Guatemala

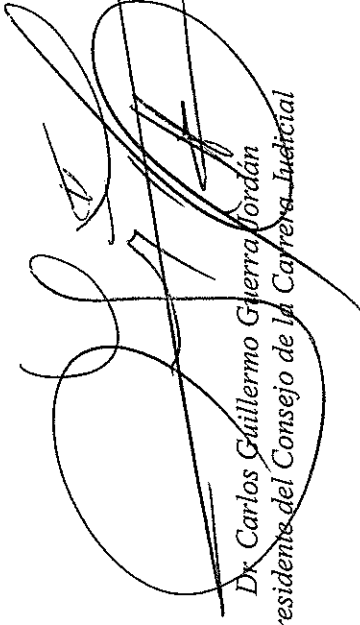
Reconocimiento a:

***Zonia de la Paz Santizo Corleto
Magistrada de la Corte de Apelaciones***

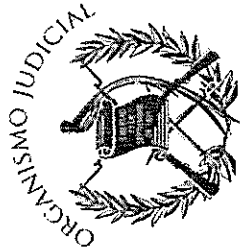
*por pertenecer a la Carrera Judicial del Organismo Judicial de Guatemala,
según punto tercero del acta 117-2019 de fecha 12 de junio de 2019 del Consejo
de la Carrera Judicial y con fundamento en el Artículo 14 de la Ley de la Carrera
Judicial.*

Guatemala, agosto de 2019




Dr. Carlos Guillermo Guerra Jordán
Presidente del Consejo de la Carrera Judicial





GUATEMALA, C.A.

EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL
Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

y
CÁMARA PENAL

Otorgan el presente



Certificado

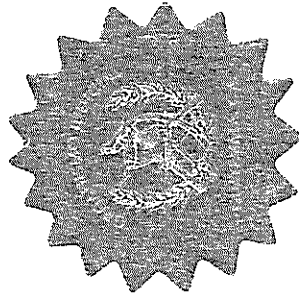
a:

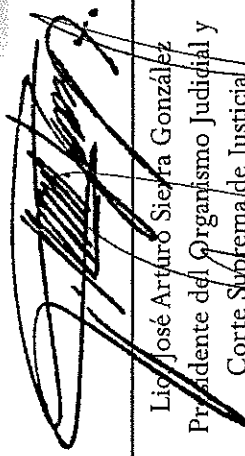
JUEZA ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO

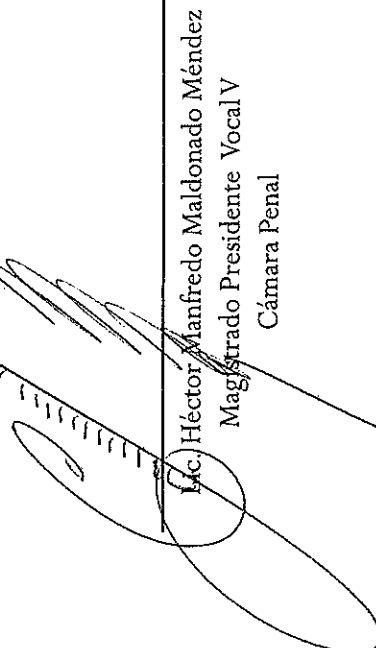
Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Amatitlán

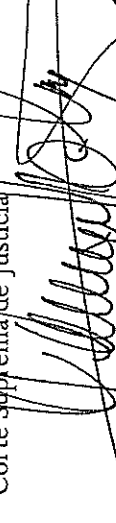
Por su contribución al despacho judicial a cumplir en un 98.57% las funciones contenidas en las normas y requisitos establecidos para la Gestión Penal por Audiencias, durante el año 2013.

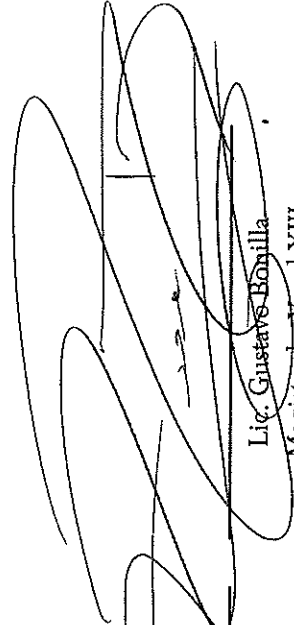
Guatemala, 04 de abril de 2014.-




Lic. José Arturo Sierra González
Presidente del Organismo Judicial y
Corte Suprema de Justicia

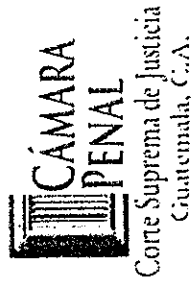

Lic. Héctor Manfredo Maldonado Méndez
Magistrado Presidente Vocal IV
Cámara Penal


Lic. Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos
Magistrado Vocal IV
Cámara Penal


Lic. Gustavo Bonilla
Magistrado Vocal XIII
Cámara Penal



EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL
Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



y
CÁMARA PENAL

GUATEMALA, C.A.

Otorgan el presente

Certificado

a:

JUEZA ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO

Jusgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Amatitlán



Por su contribución al despacho judicial a cumplir en un 99.52% las funciones contenidas en las normas y requisitos establecidos para la Gestión Penal por Audiencias, durante el año 2013.

Guatemala, 04 de abril de 2014--.

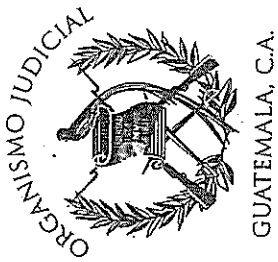


Lic. José Arriaga Sierra, González
Presidente del Organismo Judicial y
Corte Suprema de Justicia

Lic. Héctor Manfredo Maldonado Méndez
Magistrado Presidente Vocal V
Cámara Penal

Lic. Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos
Magistrado Vocal IV
Cámara Penal

Lic. Gustavo Bonilla
Magistrado Vocal XIII
Cámara Penal



EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL
Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

y
CÁMARA PENAL

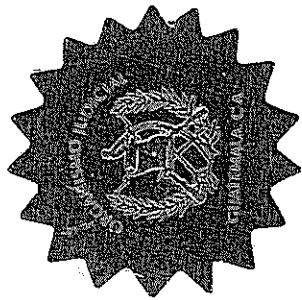
Otorgan el presente

Certificado

a:

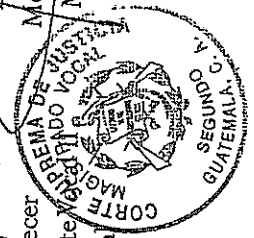
*Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente y Familia de Amatitlán*

Por cumplir en un 96.20% las funciones contenidas en las normas y requisitos establecidos para la
Gestión Penal por Audiencias, durante el año 2012.
Guatemala, junio de dos mil trece.

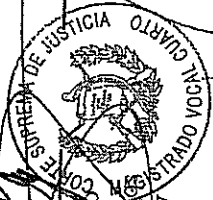


Dr. Gabriel Antonio Medrano Valenzuela
Presidente del Organismo Judicial y
Corte Suprema de Justicia

Dr. César R. Crisóstomo
Barrientos Pellecer
Magistrado Presidente
Cámara Penal



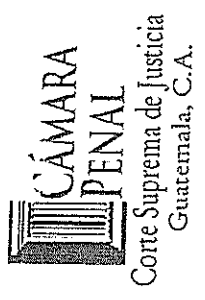
Lic. Gustavo Adolfo
Mendizábal Magariños
Magistrado Vocal IV
Cámara Penal



Lic. Héctor Manfredo
Maldonado Méndez
Magistrado Vocal V
Cámara Penal



Lic. Gustavo Bonilla
Magistrado
Vocal XIII
Cámara Penal



Para uso del despacho judicial

Secretaría Ejecutiva

1527-2019/aba

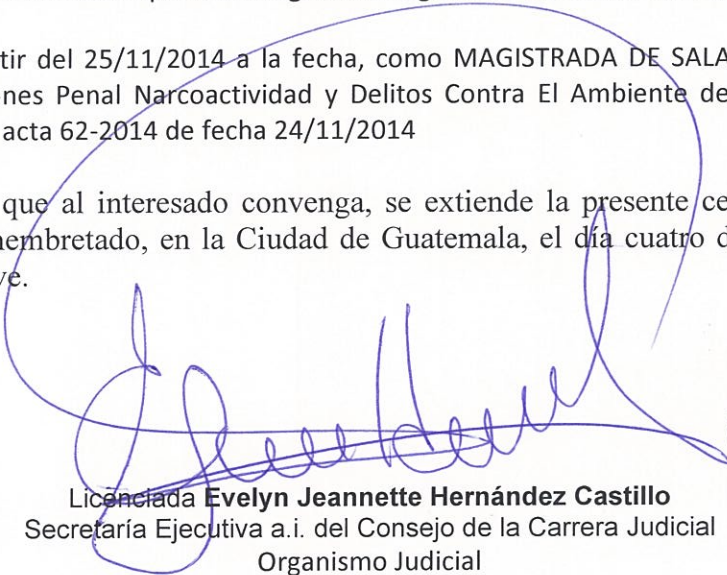
**LA INFRASCRITA SECRETARIA a. i. DEL CONSEJO DE LA
CARRERA JUDICIAL**

CERTIFICA:

Que de acuerdo a los registros electrónicos del Sistema de Recursos Humanos, actualizados a la fecha de la Abogada **ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO**, se hace constar la siguiente información de puestos desempeñados: Ingreso al Organismo Judicial el 01/04/1998

Designación a partir del 25/11/2014 a la fecha, como MAGISTRADA DE SALA de la Sala Tercera Corte de Apelaciones Penal Narcoactividad y Delitos Contra El Ambiente del departamento de Guatemala, según acta 62-2014 de fecha 24/11/2014

Y para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente certificación en dos hojas de papel membretado, en la Ciudad de Guatemala, el día cuatro de octubre del año dos mil diecinueve.


Licenciada **Evelyn Jeannette Hernández Castillo**
Secretaría Ejecutiva a.i. del Consejo de la Carrera Judicial
Organismo Judicial



Elaboró y Confrontó	Alejandrina Butz Avila 
------------------------	---

Anexo 4

Secretaría Ejecutiva

1524-2019/aba

**LA INFRASCRITA SECRETARIA a. i. DEL CONSEJO DE LA
CARRERA JUDICIAL**

CERTIFICA:

Que de acuerdo a los registros electrónicos del Sistema de Recursos Humanos, actualizados a la fecha de la Abogada **ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO**, se hace constar la siguiente información de puestos desempeñados: Ingreso al Organismo Judicial el 01/04/1998

Nombramiento (primer ingreso) a partir del 01/04/1998 al 13/04/2007, como JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA del Juzgado Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra El Ambiente Santa Lucia Cotzumalguapa del departamento de Escuintla, según acta 10-98 de fecha 19/03/1998

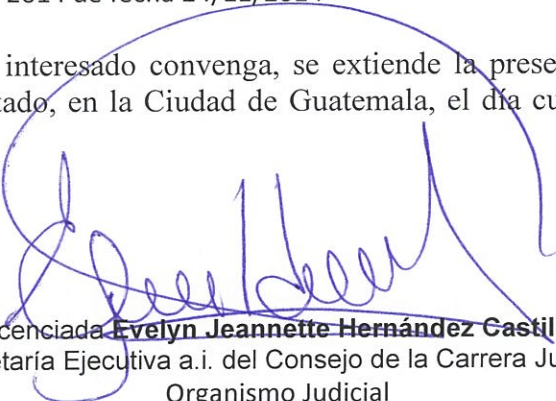
Traslado definitivo a partir del 14/04/2007 al 26/07/2007, como JUEZA DE SENTENCIA del TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEPARTAMENTO DEL QUICHE del departamento de El Quiche, según acta 12-2007 de fecha 11/04/2007

Traslado definitivo a partir del 27/07/2007 al 10/07/2012, como JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 24 horas de la Villa de Mixco del departamento de Guatemala, según acta 28-2007 de fecha 25/07/2007

Traslado definitivo a partir del 11/07/2012 al 24/11/2014, como JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA del Juzgado de Primera Instancia, del municipio de Amatitlán del departamento de Guatemala, según acta 26-2012 de fecha 20/06/2012

Designación a partir del 25/11/2014 a la fecha, como MAGISTRADA DE SALA de la Sala Tercera Corte de Apelaciones Penal Narcoactividad y Delitos Contra El Ambiente del departamento de Guatemala, según acta 62-2014 de fecha 24/11/2014

Y para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente certificación en dos hojas de papel membretado, en la Ciudad de Guatemala, el día cuatro de octubre del año dos mil diecinueve.


Licenciada **Evelyn Jeannette Hernández Castillo**
Secretaría Ejecutiva a.i. del Consejo de la Carrera Judicial
Organismo Judicial



Elaboró y Confrontó	Alejandra Bótz Avila 
------------------------	---

Anexo 5

La Universidad de San Carlos de Guatemala



Por cuanto:

La Maestra

Zonia De La Paz Santizo Corleto

Miembro de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

cumplió con los requisitos de ley para optar al Grado Académico de

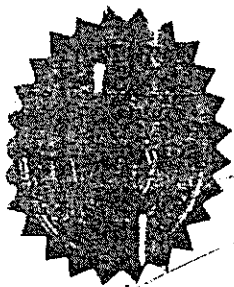
Doctora en Ciencias Penales

Por tanto:

le expide el presente Diploma y le concede el derecho de gozar de los honores y preeminencias debidos a su grado.

Dado en la ciudad de Guatemala, a los quince días del mes de julio
del año dos mil ratorce.

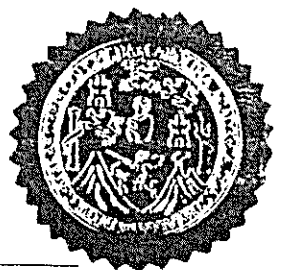
0536-04-2016



[Signature]
Rector



[Signature]
Secretario de la Universidad



23

11003

REPUBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
100079001

10 AGO 2016

ING. FENGIO ROBERTO SARRIOS SANDOVAL
SUBJEFE

REPUBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
100079001

231552

JEFE

ING. LUIS FELIX IRIAS GIRÓN
JEFE

Superintendencia de Administración Tributaria
Gerencia Regional Central
Agencia Tributaria Zona 9

Nº de Solución 774375E Impuesto Circulado Q 100.00

Débito PAM SAT-100 No. 19 705 872 322

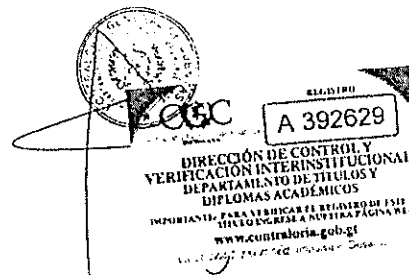
Fecha de Pago 31/07/2016

Fecha 31 de Julio de 2016

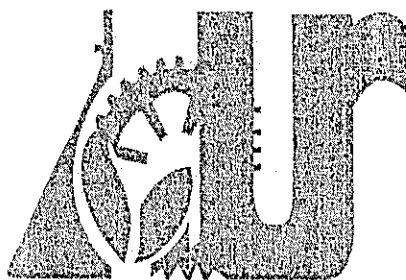
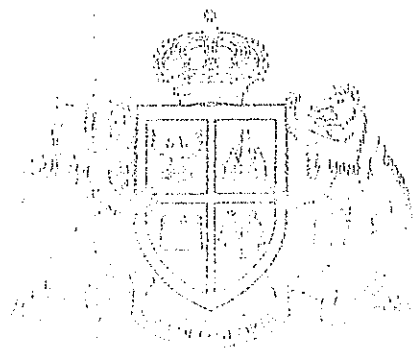
Firma y Sello del Técnico

Superintendencia de Administración Tributaria
Gerencia Regional Central
Agencia Tributaria Zona 9
HABILITACIONES Y CANCELACIONES

Firma



Anexo 6



UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA

Universidad San Pablo de Guatemala

y

Universidad Rural de Guatemala

Por cuanto

Zonia de la Paz Santizo Corleto

ha llenado los requisitos administrativos y académicos establecidos por la

Facultad de Derecho y Justicia

y

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

para optar al grado de

Magíster Artium en Gestión Jurisdiccional

Le extienden el presente Diploma
con sus correspondientes privilegios, derechos y obligaciones.

Dado en la ciudad de Guatemala, el veintiséis de abril de dos mil trece.

SAN PABLO
RECTORIA

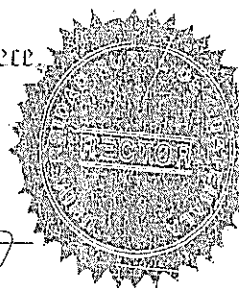
Rector
Universidad San Pablo de Guatemala

SAN PABLO
Facultad de Derecho y Justicia
DECANO

Decano

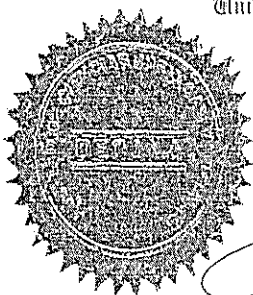
SAN PABLO
SECRETARIA

Secretario General



Rector

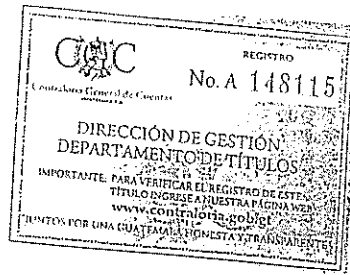
Universidad Rural de Guatemala



Decano

Secretario General

Dependencia de Administración Tributaria
 Gerencia Regional Central
 Tributaria Zona 9
 No. 779375-8 Año 100. -
 Nombre: JAGUAROSAHU 4 0692409
 Fecha de Pago: 11/12/2013
 Fecha: 11/12/2013 de 2013
 Firma y Sello del Técnico
 AGENCIA TRIBUTARIA ZONA 05
 TÉCNICO No. 035
 11 DE 2013
 DIVISION RECAUDACION Y GESTION
 GERENCIA REGIONAL CENTRAL
 F.

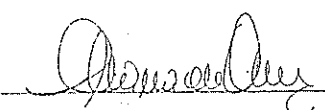


Universidad San Pablo de Guatemala

REGISTRO ACADÉMICO

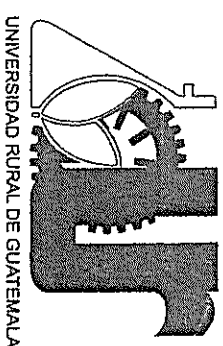
Inscrito bajo el No. - 250 -
del Registro de Títulos respectivo.

Guatemala, 26 de 04 del año 2013


 SAN PABLO
 CENTRO ACADÉMICO



Universidad San Pablo de Guatemala
y
Universidad Rural de Guatemala



Por Cuanto:

Donia de la Paz Santiago Carleto

Se destacó en defensa de su tesis de graduación, previo a obtener el título de Magister Artium en Gestión Jurisdiccional;

Por tanto:

En el cumplimiento a lo establecido en los Reglamentos de Evaluación de ambas casas de estudio, se le otorga

Mención Honorífica Cum Laude

Correspondiente a las Facultades de Derecho y Justicia y Ciencias Jurídicas y Sociales,
de ambas universidades.

Habo en la ciudad de Guatemala a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil trece.

UNIVERSIDAD
SAN PABLO
GUATEMALA
RECTORIA

Dr. Ricardo Francisco Amillón Morales
Rector

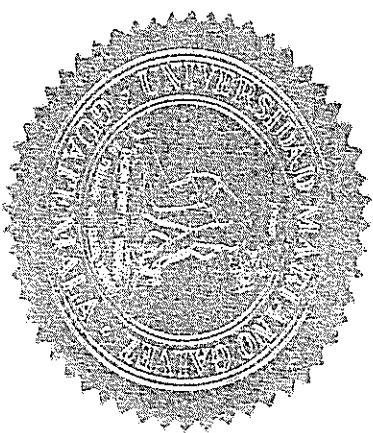
Dr. Fidel Rojas Escobar
Rector



Anexo 7

La Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

82



Por cuanto:

Zonia de la Paz Santizo Corleto

ha cumplido los requisitos legales para optar al posgrado de

Maqster Artium en G6nero y Justicia

por tanto:

se le extiende el presente

Diploma

que le acredita como miembro de la Escuela de Posgrado y le autoriza para el ejercicio de dicha especialidad con todos los derechos y preeminencias debidos a su dignidad Acad6mica.

Dado en la Ciudad de Guatemala, a los catorce d1as del mes de julio del a1o dos mil diecisiete.

Director de Posgrado

Director

Secretaria General

Nit 2793-358 Fecha: 01/09/2017
Ingresos: 100.00 Fecha de pago: 01/09/2017
Banco: 100.00 SAT-100 No. 19764-258450

Firma y Sello



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Registrado el día de hoy

Bajo el número: 25794
Tomo: 07 19 OCT 2017 Folio: 996
Guatemala
f.) Dirección General de Registro y Control Académico

CAC Control Académico y Control de Calidad
REGISTRO
A 424311

DIRECCIÓN DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS

IMPORTANTE: PARA VERIFICAR EL REGISTRO DE ESTE TÍTULO INGRESE A NUESTRA PÁGINA WEB
www.controloria-gob.gt

La transacción se liquida al Desarrollo

Licenciado Omar N. Recasol/Registra/ Diplomados

Ruby Santizo de Hernández
Dra. Ruby Santizo de Hernández
SECRETARIA GENERAL

El presente título lo firman las autoridades actuales de la Universidad Mariano Gálvez, de acuerdo con resolución del Consejo Directivo contenido en Punto 6.2 del Acta 25.89 del 24 de Julio de 1989

Anexo 8

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, Zona 12
Guatemala, C. A.



Ref.E.D.E.E.P-DP-0078-2005

El Infrascrito Director de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, **CERTIFICA:** *Que la Licda. **ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO**, cursó y aprobó el Pensum de la Maestría en Derecho Penal, de la siguiente manera:*

PROMOCIÓN 2000-2001 SECCIÓN "E"

01. **Introducción a la Investigación Científica**, impartido por la Dra. Gladys Gil de Hernández, con una nota de ochenta y cinco (85) puntos, correspondiéndole la literal "B";
02. **Criminología**, impartido por el Lic. Alejandro Rodríguez Barillas, con una nota de setenta y un (71) puntos correspondiéndole la literal "C";
03. **Dogmática Penal I**, impartido por el Lic. José Alfredo Cabrera Martínez, con una nota de noventa y tres (93) puntos, correspondiéndole la literal "A";
04. **Derecho Procesal Penal I**, impartido por el Licenciado Wilfredo Valenzuela, con una nota de ochenta y tres (83) puntos, correspondiéndole la literal "B";
05. **Derecho Procesal Penal II**, impartido por la Licda. Yolanda Pérez Ruíz, con una nota de setenta y dos (72) puntos, correspondiéndole la literal "C";
06. **Dogmática Penal II**, impartido por el Lic. José Alfredo Cabrera Martínez, con una nota de noventa y un (91) puntos, correspondiéndole la literal "A";
07. **Política Criminal**, impartido por el Lic. Alejandro Rodríguez Barillas, con una nota de setenta y cinco (75) puntos, correspondiéndole la literal "C";

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, Zona 12
Guatemala, C. A.

Hoja No. 2 Cert. Licda. Santizo Corleto

- 08. Dogmática Penal III**, impartido por el Lic. Alfredo Cabrera Martínez, con una nota de ochenta y dos (82) puntos, correspondiéndole la literal "B";
- 09. Derecho Probatorio**, impartido por la Licenciada Yolanda Pérez Ruíz, con una nota de setenta y ocho (78) puntos, correspondiéndole la literal "C";
- 10. Derecho Penal Internacional**, impartido por el Lic. Jorge Luis Borrayo Reyes, con una nota de noventa y dos (92) puntos, correspondiéndole la literal "A";
- 11. Clínicas y Destreza para el Debate**, impartido por el Lic. Alfredo Cabrera Martínez, con una nota de noventa y cinco (95) puntos, correspondiéndole la literal "A"; y
- 12. Medios de Impugnación**, impartido por la Licda. Yolanda Pérez Ruíz, con una nota de setenta y cinco (75) puntos, correspondiéndole la literal "C".

Y para los usos legales que a la interesada convengan, se le extiende, firma y sella la presente en dos hojas de papel membretado, en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil cinco.

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"


Dr. René Arturo Villegas Lara
DIRECTOR
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

gadeg



Anexo 9



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

EL INFRASCRITO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, SEGÚN REGISTROS OFICIALES Y A SOLICITUD DE LA INTERESADA EL DÍA DE HOY SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIMUEVE.

HACE CONSTAR

QUE LA DOCTORA ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 029 Y RENGLON PRESUPUESTARIO 189, IMPARTIENDO CURSOS EN LAS SIGUIENTES MAESTRÍAS:

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL:

CURSO	SEMESTRE	AÑO
TEORÍA GENERAL DEL DERECHO	PRIMER SEMESTRE	2015
DERECHO PROCESAL PENAL I	SEGUNDO SEMESTRE	2015
TEORÍA GENERAL DEL DERECHO	PRIMER SEMESTRE	2016
DERECHO PROCESAL PENAL I	SEGUNDO SEMESTRE	2016
TEORÍA GENERAL DEL DERECHO	PRIMER SEMESTRE	2017
DERECHO PROCESAL PENAL I	SEGUNDO SEMESTRE	2017
TEORÍA GENERAL DEL DERECHO	PRIMER SEMESTRE	2018
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN	TERCER SEMESTRE	2018
DERECHO PROCESAL PENAL I	SEGUNDO SEMESTRE	2018

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL (ESCUINTLA):

CURSO	SEMESTRE	AÑO
PROCESO PENAL GUATEMALTECO I	CUARTO SEMESTRE	2015
ORALIDAD Y ETICA I	PRIMER SEMESTRE	2016
ORALIDAD Y ETICA II	SEGUNDO SEMESTRE	2016

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL (ESCUINTLA):

CURSO	SEMESTRE	AÑO
DERECHO CONSTITUCIONAL IV (PODER JUDICIAL)	TERCER SEMESTRE	2017

MAESTRÍA EN DERECHO MERCANTIL Y COMPETITIVIDAD:

CURSO	SEMESTRE	AÑO
TEORÍA GENERAL DEL DERECHO	PRIMER SEMESTRE	2018

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL (ESCUINTLA):

CURSO	SEMESTRE	AÑO
DERECHO PROCESAL PENAL I	SEGUNDO SEMESTRE	2018
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN	TERCER SEMESTRE	2019

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL:

CURSO	SEMESTRE	AÑO
PROCESO PENAL GUATEMALTECO I	TERCER SEMESTRE	2019

Y PARA EL USO LEGAL QUE CONVENGA SE EXTIENDE LA PRESENTE EN ÚNICA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MEMBRETADA, FIRMADA Y SELADA.

DR. LUIS ERNESTO CÁCERES RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



33





CERTIFICACIÓN LABORAL

El infrascrito Tesorero del Centro Universitario del Sur, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de acuerdo a los controles de personal, por este medio hace constar que: **La Licda. Zonia de la Paz Santizo Corleto**, con registro de personal número 20110400, laboró en esta Unidad Académica en el período comprendido del 17 de enero de 2011 al 07 de febrero de 2015, como Profesora Interina en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Para los usos legales que a la interesada convengan, se extiende, firma y sella la presente en la ciudad de Escuintla, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil diecinueve.

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"


Lic. Yovanis Alejandro González Salazar
Tesorero I



Anexo 10

01019-2017-00014
01019-2017-00014
01019-2017-02235

0019-2017-



Amparo Nuevo

HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA DE LA CORTE DE APELACIONES
DEL RAMO PENAL DE PROCESOS DE MAYOR RIESGO Y DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE AMPARO

IGOR BITKOV, también conocido como IGOR VLADIMIROVICH BITKOV, LEONID ZAHARENCO o GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA, de cuarenta y ocho años de edad, casado, ruso, Ingeniero Forestal, de este domicilio, ante ustedes respetuosamente comparezco y:

EXPONGO

I.

Auxilio Profesional y Lugar para recibir Notificaciones

Dentro del presente asunto actuaré bajo la dirección y procuración profesional del Abogado JOSÉ ROLANDO ALVARADO LEMUS, colegiado activo siete mil doscientos ochenta seis, cuya oficina profesional ubicada en la Doce calle uno guión veinticinco, zona diez, Edificio Géminis Diez, Torre Norte, oficina seiscientos uno, ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, señalo como lugar para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos.

II.

Razón de mi Gestión

Por este acto vengo a promover Acción Constitucional de AMPARO en contra del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE EN PROCESOS DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D", DEPARTAMENTO DE GUATEMALA a cargo de la Jucza Erika Lorena Aifán Dávila. La



autoridad recurrida puede ser notificada en la Veintiuna calle siete guión setenta, zona uno, Centro Cívico, Torre de Tribunales, catorce nivel, ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala.

III.

Participación del Ministerio Público

Al Ministerio Público, a quien por disposición de la ley, debe tenerse como parte en esta Acción Constitucional de Amparo, se le puede notificar en la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibiciones, ubicada en OCTAVA CALLE TRES GUIÓN SETENTA Y TRES DE LA ZONA UNO, JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

IV.

Terceros Interesados

Solicito se tenga como Terceros Interesados dentro de la presente acción constitucional de Amparo, a las señoras IRINA BITKOVA y ANASTASIA BITKOVA, de quienes desconozco su residencia pero pueden ser notificadas del presente amparo en los lugares siguientes: (a) La señora IRINA BITKOVA puede ser notificada en la octava avenida veinte guión veintidós, zona uno, oficina treinta y tres, tercer nivel, ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala; y, (b) La señora ANASTASIA BITKOVA puede ser notificada en dieciocho calle veinticuatro guión sesenta y nueve, zona diez, Centro Empresarial Zona Pradera, Torre Uno, nivel quince, oficina un mil quinientos nueve, ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala.

V.

Acto que causa agravio



Lo constituye la resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, proferida por la señora Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo, Grupo "D", Departamento de Guatemala, a cargo de la licenciada Erika Lorena Aifán Dávila, dictada dentro del proceso penal CERO UN MIL SETENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL DIEZ GUIÓN CERO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (01071-2010-01644) a cargo del oficial cuarto, por medio de la cual se dicta AUTO DE APERTURA a juicio y se admite acusación en mi contra por los delitos de USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS, USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL y SUPRESIÓN Y ALTERACIÓN DEL ESTADO CIVIL.

La resolución que me causa agravio me fue notificada en la audiencia del día veinte de febrero del presente año.

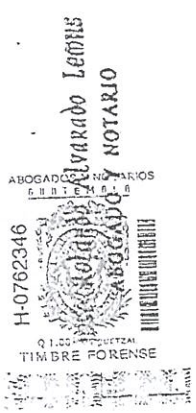
VI.

Definitividad

La resolución judicial que me causa agravio, esto es, la resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete -AUTO DE APERTURA A JUICIO-, NO ADMITE en lo judicial, recurso de Apelación ni ningún otro medio de impugnación por el que pueda ventilarse adecuadamente, conforme al principio de *Debido Proceso*. Dicha resolución se ha dictado en evidente violación a los derechos que garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Ley de Migración y demás leyes del país.

En consecuencia, la resolución judicial referida, constituye un acto definitivo en el orden judicial, que solo puede ser materia del proceso constitucional de amparo que promuevo.

La presente Acción Constitucional de Amparo se apoya en la siguiente relación de:



HECHOS

I

ANTECEDENTES

-a-

De mi condición de Migrante

Yo, IGOR BITKOV, soy migrante en Guatemala, ya que nací y viví en la Federación de Rusia, soy de nacionalidad rusa y emigré con destino a Guatemala. Enfatizaré mi calidad de Migrante toda vez que la autoridad recurrida, sin fundamento alguno y violando mis derechos constitucionales y normas internacionales en materia de derechos humanos, me ha perjudicado deliberadamente al no reconocirme como Migrante en Guatemala. El hecho de no reconocirme como MIGRANTE en la República de Guatemala, ha sido determinante y trascendente para dictar el AUTO DE APERTURA A JUICIO en mi contra, sirviendo de excusa para no aplicarme EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL perfectamente reguladas en la Ley de Migración y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional -conocida internacionalmente como Convención de Palermo-.

Como es del conocimiento de los Honorables Magistrados, la Ley guatemalteca no define el significado de "Migrante", y esa falta de definición ha sido el "pretexto" o la "excusa" que tiene la autoridad recurrida para no reconocirme como tal, al punto que dicha Juzgadora, en notoria violación de mis derechos humanos y a pesar de que mi Defensa le ha insistido en que me reconozca como Migrante, se ha negado a hacerlo, y ha hecho interpretaciones tan sorprendentes y tan carentes de legalidad argumentando que yo no soy migrante sino posiblemente "refugiado". Yo personalmente le he dicho a la Juzgadora que



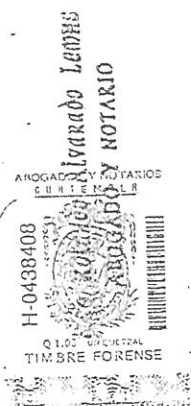
soy ruso y que estoy en Guatemala y por ende, son extranjero, soy migrante. En el expediente obra mi pasaporte ruso y el de mi esposa e hija.

La necesidad y el daño que me ha producido y me sigue produciendo la Juzgadora o autoridad recurrida, es tal que a nivel internacional es conocido mi caso como una notoria injusticia ya que no se me está tratando como Migrante, al contrario, se me ha discriminado por mi condición de extranjero y ha sido uno de los argumentos para tratar de "justificar" la prisión en mi contra, olvidando las normas internacionales y la doctrina internacional como la de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que en múltiples fallos ha dicho que un extranjero no puede ser discriminado por su condición de "extranjero" y que no se justifica la prisión por esa condición.

En primer lugar, Honorables Magistrados, la no definición del término "Migrante" obliga a la Juzgadora a aplicar el contenido del Artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República, que dispone: "El idioma oficial es el Español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente." (La negrilla es mía). En efecto, el Diccionario de la Real Academia Española define al Migrante de la forma siguiente:

- MIGRANTE: adj. "*Que migra*" Apl. a pers., u. t. c. s.
- MIGRAR: Del lat. *migrāre*. "*Trasladarse desde el lugar en que se habita a otro diferente.*"

No obstante la claridad de la definición de "Migrante" que nos proporciona el Diccionario de la Real Academia Española, que debe aplicarse por mandato del Artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según Opinión Consultiva OC-18/03, nos



aclara y comprueba que yo soy migrante. Dicha Corte establece que se debe utilizar los siguientes términos con el significado señalado a continuación:

a) emigrar o migrar	Dejar un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él.
b) emigrante	Persona que deja un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él.
c) inmigrar	Llegar a otro Estado con el propósito de residir en él.
d) inmigrante	Persona que llega a otro Estado con el propósito de residir en él.
e) migrante	Término genérico que abarca tanto al emigrante como al inmigrante.
f) estatus migratorio	Situación jurídica en la que se encuentra un migrante, de conformidad con la normativa interna del Estado de empleo.
g) trabajador	Persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada.
h) trabajador migrante	Persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del cual no es nacional.
i) trabajador migrante documentado o en situación regular	Persona que se encuentra autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte.
j) trabajador migrante indocumentado o en situación irregular (...)	Persona que no se encuentra autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte, y que, sin embargo, realiza dicha actividad.

Honorables Magistrados, como pueden apreciar, esta clara mi condición de “Migrante” en Guatemala, es por ello que considero que existe mala fe en no reconocermé como tal. ¿O qué otra



calidad o condición tengo, extraterrestre? Si soy ruso y me encuentro en Guatemala. Es necesario aclarar que tampoco soy refugiado ya que no se me ha otorgado el estatuto de Refugiado y, además, aunque se me otorgue, la calidad de Migrante no la eliminaría la condición a futuro de Refugiado. Sobre este tema tan sencillo, pero a la vez tan perjudicial, sobre si soy o no migrante, versa el presente Amparo, ya que, al no reconocermelo como tal, me han dictado en mi contra un AUTO DE APERTURA A JUICIO, admitiendo una Acusación que se refiere a delitos que, de conformidad con la ley, están exentos de responsabilidad penal por mi condición de Migrante, tal como refiero más adelante.

-b-

Delitos atribuidos en la Acusación

Al Postulante se le acusa de los delitos tipificados en los artículos 240, 325 y 241 del Código Penal que refieren a los delitos de *SUPRESIÓN Y ALTERACIÓN DEL ESTADO CIVIL*, *USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS* y *USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL*.

El Ministerio Público considera que el Postulante es autor de los delitos antes citados, por la utilización que hizo del **DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN, CÉDULA DE VECINDAD y PASAPORTE** (documentos de identidad y de viaje), que fueron emitidos a nombre de LEONID ZAHARENCO y GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA. Según la acusación que ha hecho el Ministerio Público, los *documentos de identidad* (DPI y CÉDULA) y el *documento de viaje* (Pasaporte), citados, fueron emitidos por parte de instituciones públicas guatemaltecas y con base a datos de identidad falsos y que, según el Ministerio Público, "no me corresponden".

No obstante que el Postulante jamás ha sido empleado o funcionario de las instituciones públicas guatemaltecas donde fueron emitidos tanto el DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DPI)



como el DOCUMENTO DE VIAJE (pasaporte), y por ende, existe imposibilidad material y jurídica de que el presentado haya alterado documentos de soporte (libros, partidas, etcétera) de los documentos supuestamente FALSOS (ya que, repito, nunca fui funcionario o empleado público ni sabía el idioma español al momento de obtener dichos documentos por parte del Estado de Guatemala), ha sido ordenada, a través de la resolución impugnada, la apertura a juicio, admitiendo la acusación por los delitos indicados que a todas luces no procede su tipificación en el caso concreto de mi persona y de mi familia, ya que todos somos Migrantes, a excepción de mi hijo de cinco años quien nació en Guatemala y quien tiene cinco años de edad.

El absurdo y aberrante hecho de no reconocerse como Migrante, me ha impedido estar con mi pequeño hijo y mi familia por más de dos años, me ha impedido realizar mi trabajo y dedicarme a mis empresas, de manera que el daño es y sigue siendo grave, por ello acudo a este Honorable Tribunal Constitucional para que cese la evidente violación a mis derechos humanos y de mi familia. Hemos sido tratados como criminales y no como migrantes.

Siempre he hablado con la verdad, he declarado ante la Jueza Erika Lorena Aifán Dávila, que los documentos de identidad y de viaje por los cuales se me acusa, fueron transitados a través del bufete de Abogados denominado "Cutino International Off Shore". Esa entidad ya fue denunciada por su responsabilidad en el delito de Tránsito Ilícito de Personas. Dentro de la denuncia presentamos medios de investigación, el sitio web, números telefónicos de contacto, montos que fueron pagados por el trámite de cambio de nombre, nombres de los contactos, hasta el Ministerio Público secuestró en el allanamiento una TARJETA DE CRÉDITO a nombre de CUTINO INTERNATIONAL (tarjeta que utiliza el traficante con todos sus clientes extranjeros y que ofrece en su sitio web), pero nada de esto llama la atención del ente acusador ni de la Juzgadora, que más parecen ser una misma parte procesal, ya que el órgano jurisdiccional no ha mostrado

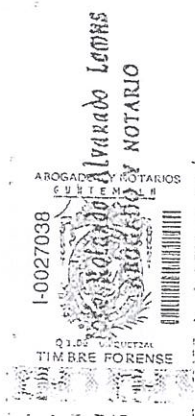


50

imparcialidad, sólo repite y hace lo que le pide el Ministerio Público, a pesar que lo que le pide es ILEGAL, y no atiende ni resuelve conforme a Derecho lo que dicen mis defensores.

El Ministerio Público, con el aval de la Juzgadora (al dictar auto de apertura a juicio), ha acusado a las víctimas (Migrantes) y no a los victimarios (Traficante -Cutino International Off Shore). Entonces: ¿dónde está la justicia en este caso? Si ya denunciarnos al traficante ¿por qué no lo investigan y ligan al proceso? El Ministerio Público, hasta hoy, ni nos ha llamado a ratificar la denuncia penal que presentamos hace diez meses en contra de Cutino International Off Shore. Cabe cuestionarse: ¿Qué intereses hay en estructuras del crimen organizado para no vincular a esta organización criminal transnacional? No lo sé, yo solo cumplí con denunciar y enterar a la Juzgadora sobre la existencia real de un traficante, si ella y el Ministerio Público no actúan, se convierten en cómplices de dicha estructura criminal, ya que la ley los obliga a actuar aún de oficio, ya que son hechos graves que perjudican a muchas personas, como a nosotros que fuimos víctimas de sus servicios.

La juzgadora, al no aplicar las leyes nacionales e internacionales aquí denunciadas, esta creando un precedente nefasto en contra de los Migrantes, olvidándose que Guatemala es un país de constante emigración para otros países y que los migrantes guatemaltecos al incurrir en engaño de traficantes, como fue el caso de mi familia, no son tratados como nos está tratando la Juzgadora, de manera inhumana y a todas luces al margen de la Ley. Desde que fuimos capturados hemos sufrido la tortura de un proceso penal cruel que nos hizo estar cinco días en las carceletas de la torre de tribunales, sin alimentos y sin agua. Nuestro hijo, en ese entonces de tres años, fue llevado a un orfanato donde, luego de una lucha legal intensa, logramos una sentencia de un Tribunal de Alzada que ordenó su salida y declaró la violación a sus derechos humanos por no haberse tutelado el "interés superior del niño". Mi hijo fue devuelto por el orfanato con un diente quebrado, con



conjuntivitis, y otras enfermedades debidamente certificadas. Mi hijo fue remitido a ese orfanato en el interior del país, teniendo tutores legales que lo reclamaron. Fue remitido sin poder explicarse, ya que él hablaba únicamente ruso y muy poco español. Nuestro caso ha sido y es una tragedia, todo por un DPI y un pasaporte que fueron extendidos por el Registro Nacional de las Personas y por la Dirección General de Migración. Lo absurdo también en este caso, es que ahora los funcionarios de RENAP son querellantes en nuestra contra. ¿Por qué? Si ellos eran parte de la estructura criminal que engañaba a los Migrantes. Es evidente que la justicia está mal dirigida, acusan a víctimas y no a victimarios. Es por ello que se justifica la presente acción constitucional de Amparo para enmendar la injusticia e ilegalidad en nuestro caso.

El colmo de todo es que, tal como lo dijeron mis abogados en la audiencia de la etapa intermedia, los nombres consignados en el DPI y el PASAPORTE, no corresponden a nadie, el mismo Registro Nacional de las Personas informó que esos nombres NO EXISTEN. Entonces: ¿quién es el perjudicado? Nos acusan por habernos casado en Guatemala habiendo estado casados en Rusia con mi esposa. ¿A quién daño con eso? Nos acusan de tener una sociedad anónima con nuestros bienes legítimos. Además, mi esposa y yo tenemos IDENTIFICACIÓN DE PERSONA por los nombres utilizados.

El Ministerio Público, con el aval judicial, se ha excedido en sus funciones, al punto que secuestró nuestros vehículos y parte de nuestras joyas. Durante el allanamiento en nuestra vivienda (el día que toda la familia fue capturada) el Ministerio Público secuestró la mitad de las joyas y la otra mitad las dejó en la casa. Posteriormente nuestra casa fue saqueada y ahora nadie asume la responsabilidad. Hasta hoy no nos han devuelto nuestros vehículos y no han informado quién robó nuestros bienes. Cabe cuestionarse también: ¿Qué tiene que ver nuestras joyas y vehículos con el uso de un DPI y de un PASAPORTE? La respuesta es: Nada. Estamos cansados de tanto



abuso, de tanto daño, injusticia y trato inhumano; ahora confiamos en que el Tribunal Constitucional nos brinde la tutela constitucional que ha sido negada por la jurisdicción ordinaria.

Por toda esta tragedia, ilegalidad, daños continuados, daños económicos, daños morales, etcétera, me reservo las acciones legales correspondientes para que la Juzgadora oportunamente sea condenada a reparar, en alguna manera, el gran daño que hace y sigue haciendo a mi familia, ya que el caso de la familia Bitkov evidentemente trascenderá a nivel internacional para exigir la condena de todas aquellas personas que, directa o indirectamente, hayan participado o consentido la violación de nuestros derechos humanos.

Yo, IGOR BITKOV y mi esposa IRINA BITKOVA, fuimos empresarios de un nivel alto en la Federación de Rusia. Un Senador republicano de Estados Unidos de América extendió una constancia donde hace ver que fuimos VÍCTIMAS de una red de Abogados corruptos (traficantes). ¿Será que un Senador estadounidense emite una carta sin investigar? No, definitivamente que no. Así también, el mayor inversionista extranjero en Rusia en el año 2006, el señor Bill Browder, también extendió una constancia donde nos reconoce como empresarios rusos y víctimas de traficantes.

La Honorable CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD recientemente otorgó un AMPARO a favor de mi esposa IRINA BITKOVA, según el expediente dos mil doscientos ochenta y dos guión dos mil dieciséis (2282-2016), que obliga a fundamentar las resoluciones judiciales tomando en cuenta la normativa aquí denunciada como INAPLICADA, es por ello que tengo la esperanza en que se haga justicia a mi favor a través de la presente acción constitucional de Amparo.



De manera, Honorables Magistrados, que el sustento de la acusación que se hace dentro del proceso penal que origina el acto reclamado, es por el USO de un *DOCUMENTO DE IDENTIDAD y DOCUMENTO DE VIAJE*, emitidos con documentación "FALSA". Estos documentos de soporte son de acceso restringido para particulares ya que se refieren a Partidas, Papel y Libros de uso interno, es decir, que a ellos sólo tenían acceso sólo empleados y funcionarios públicos del Estado de Guatemala, no así los ciudadanos guatemaltecos y MENOS un migrante o extranjero que ni hablaba el idioma español en ese entonces, como es mi caso.

La función de la Juzgadora en la etapa intermedia, era la de verificar la legalidad de la acusación formulada en mi contra. Es por ello que debió aplicar la normativa nacional e internacional que denuncio en el presente Amparo, y de esa manera "evitar" la violación a mi Derecho de Defensa y demás derechos constitucionales. De tal manera que la Juzgadora debió, como es su deber jurisdiccional, aplicar la normativa denunciada al caso concreto, y de esa manera no admitir la acusación en mi contra por los delitos que se originan de la "creación" o del "uso" de un DOCUMENTO DE IDENTIDAD o de VIAJE falsos, ya que existen EXIMENTES LEGALES DE RESPONSABILIDAD PENAL.

No obstante la obligación de la Juzgadora de no admitir la acusación por lo indicado, dictó *auto de apertura a juicio*, y admitió la Acusación por delitos exentos de responsabilidad penal por mi condición de migrante y la de mi familia, tal como indico a continuación.

II

RESOLUCIÓN DE AUTO DE APERTURA dictada en evidente VIOLACIÓN a una
CONVENCIÓN INTERNACIONAL, ratificada por el Congreso de la
Republica de Guatemala y a la Ley de Migración

7



Actualmente me encuentro en prisión, ya llevo dos años y dos meses, por delitos exentos de responsabilidad penal, lo cual constituye una evidente violación a mis derechos humanos. Yo, IGOR BITKOV, mi esposa IRINA BITKOVA, mi hija ANASTASIA BITKOVA, todos somos migrantes, ya que nuestro país de origen es Rusia y nuestro país de destino es Guatemala.

Lo que origina el proceso penal promovido en nuestra contra, tal como indiqué anteriormente, fue la creación y posesión de un DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DPI y CÉDULA) y de VIAJE (pasaporte), que fueron emitidos y entregados por AUTORIDADES DEL ESTADO DE GUATEMALA (Registro Nacional de las Personas -RENAP- y Dirección General de Migración -MIGRACIÓN-) con documentos de soporte FALSOS, según lo afirmado por el Ministerio Público.

En la audiencia de etapa intermedia mi defensa argumentó por varias horas y de una manera clara y precisa, lo siguiente:

1. Que soy Migrante, al igual que mi esposa y mi hija.
2. Que la autoridad denunciada esta obligada a aplicar el contenido del Artículo 107 ter de la Ley de Migración, Decreto 10-2015 del Congreso de la República de Guatemala, que establece: ☐ "Artículo 107 Ter.- Sin perjuicio de la responsabilidad por otros ilícitos penales, no serán punibles las actividades o acciones que para entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, realicen el migrante o su familia."
4. Que el verdadero sujeto activo que comete el delito de creación de un documento de viaje o de identidad falso, NUNCA ES EL MIGRANTE, sino el TRAFICANTE, de conformidad con lo que establece el Artículo 106 de la Ley de Migración, que establece: "Artículo 106.- Facilitación ilícita de permanencia. Comete delito de facilitación ilícita de permanencia quien, con el fin de obtener directa o indirectamente, un



beneficio económico u otro beneficio de orden material, facilite la estadía de personas extranjeras en el territorio nacional mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso, o facilite el suministro del documento. El responsable será sancionado con prisión de seis a ocho años." El subrayado y negrilla son míos. De manera que, de mala fe, la Juzgadora confunde a la víctima (MIGRANTE) con el victimario (TRAFICANTE), según la resolución que constituye el acto reclamado en la presente acción constitucional de Amparo.

3. Que es obligatorio que la Juzgadora aplique el contenido del Decreto número 36-2003 del CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, por medio del cual el ESTADO DE GUATEMALA aprobó el contenido de la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, conocida a nivel internacional como la "CONVENCIÓN DE PALERMO", la cual, en su función de protección de los derechos de los migrantes como personas vulnerables, claramente exime de responsabilidad penal a los migrantes que hayan realizado las conductas relativas a la creación o posesión de un documento de viaje o de identidad falso.

4. Que la autoridad denunciada por virtud del principio "*Iura Novit Curia*" (*el juez conoce el Derecho*), debe aplicar el contenido de los artículos 5 y 6 del PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE, de la citada Convención de Palermo. El artículo 5 del mencionado Protocolo, literalmente dice así: "*Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.*" (El subrayado y negrilla son nuestros).

Entre las conductas exentas de responsabilidad penal, el artículo 6 del mencionado Protocolo, establece las siguientes:



...i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso.

ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento.” (El subrayado y negrilla son propias).

De manera, Honorables Magistrados, que el Postulante continúa ligado a un proceso penal por delitos exentos de responsabilidad penal por su condición de Migrante, de conformidad con lo que establece la LEY DE MIGRACIÓN y la CONVENCIÓN DE PALERMO, convención que ha sido aprobada mediante el DECRETO número 36-2003 del CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Es aberrante y notoriamente violatorio de nuestros DERECHOS HUMANOS, la INAPLICACIÓN deliberada de la eximente de responsabilidad penal a que se refiere la LEY DE MIGRACIÓN y una Convención de las Naciones Unidas debidamente aprobada por el CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ya que los delitos de la acusación ilegalmente admitida y por la que me envían a debate, son conductas que, al amparo de la Ley, NO CONSTITUYEN DELITO.

III

Preeminencia del Derecho Internacional

▷ La autoridad recurrida, al no aplicar el contenido de la Convención de Palermo, ya mencionada, viola el contenido del artículo 46 de CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, que preceptúa:

“Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.”

Honorables Magistrados, como podrán apreciar, el AUTO DE APERTURA A JUICIO decretado en contra del Postulante viola el Artículo 46 de la Constitución Política de la República de



Guatemala, al inaplicarse el contenido de la CONVENCIÓN DE PALERMO, ya que esta Convención Internacional prohíbe enjuiciar penalmente a los migrantes por hechos relacionados a la creación o posesión de un DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DPI) o de VIAJE (pasaporte) FALSOS. Por ello acudo ante ese Honorable Tribunal, denunciando la violación a mis derechos humanos, pidiendo que cese de inmediato la vulneración a mi derecho de defensa y demás derechos constitucionales.

El actuar perjudicial de la autoridad recurrida no puede justificarse o soslayarse, ya que para ello el juez tiene obligación de “conocer el Derecho”, por el Principio “*Iura Nonit Curia*”, por esas razones solicito el decreto del AMPARO PROVISIONAL a efecto de dejar en suspenso el acto reclamado, por ser evidente su ilegalidad.

De conformidad con lo expuesto, las normas violadas por la autoridad recurrida son: Artículos: 5, 12, 13, 46 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA; Artículos 5 y 6 del PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional -CONVENCIÓN DE PALERMO- y el Decreto 36-2003 del Congreso de la República de Guatemala; 106 y 107 ter de la Ley de Migración.

MEDIOS DE PRUEBA

I. DOCUMENTOS: Consistentes en la totalidad del expediente que contiene el proceso penal, CAUSA cero un mil setenta y uno guión dos mil diez guión cero un mil seiscientos cuarenta y cuatro (01071-2010-01644) oficial cuarto, JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, MAYOR RIESGO

90



GRUPO "D", que constituye los antecedentes del presente amparo y deberá ser requerido al citado Tribunal, juntamente con los audios de la etapa intermedia.

II. PRESUNCIONES Legales y Humanas que de lo actuado se desprendan.

FUNDAMENTO DE DERECHO

El artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece: "Los habitantes de la República de Guatemala, tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna".

El artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece: "Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violación a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan".

Por su parte el artículo 1° de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad dispone que la Ley de Amparo tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del Orden Constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala.



El artículo 3 de la citada Ley de Amparo indica que la Constitución prevalece sobre cualquier Ley o Tratado.

Asimismo el artículo 8 de la citada ley estipula que el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido.

El artículo 10 de la Ley de Amparo establece que la procedencia del Amparo se extiende a toda situación susceptible de un riesgo, amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las Leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de persona y entidades de derecho público o entidades de derecho privado.

El artículo 20 del mismo cuerpo legal establece que la petición de amparo debe hacerse dentro de un plazo de treinta días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por éste el hecho que a su juicio le perjudica.

En tal virtud, a los señores Magistrados de manera respetuosa:

SOLICITO

- I. Que, con el presente memorial se inicie la formación del expediente respectivo;
- II. Se tome nota de la dirección y procuración profesional bajo la cual actúo, así como del lugar que señalo para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos.
- III. De conformidad con lo expuesto se tenga por interpuesta y se admita para su trámite la presente petición de amparo en contra de resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por la señora Jueza Erika Lorena Aifán Dávila, del JUZGADO DE PRIMERA

10



INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE EN PROCESOS DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D".

IV. De conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad se sirva ese honorable tribunal pedir los antecedentes o informe circunstanciado al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE EN PROCESOS DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D", en relación a los hechos que se indican en este amparo.

V. Recibidos los antecedentes o informe respectivo, se sirva ese honorable tribunal decretar el **AMPARO PROVISIONAL** y se ordene a la autoridad recurrida deje sin efecto la resolución que causa agravio a la Postulante, esto es, la resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, por medio de la cual se dicta auto de apertura a juicio y se admite la acusación del Ministerio Público en contra del presentado, por ser contraria a la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada o Convención de Palermo, la Ley de Migración, y otras leyes vigentes del ordenamiento jurídico guatemalteco, ordenando mi inmediata libertad;

VI. Se confiera audiencia por cuarenta y ocho a las partes interesadas.

VII. Se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados;

VIII. Vencido el término común de cuarenta y ocho horas, hayan o no alegado las partes, se sirva ese honorable tribunal disponer que el presente amparo se abra a prueba por el plazo común e improrrogable de ocho días, indicando en la resolución respectiva, los hechos que se pesquisarán de oficio, sin perjuicio de cualesquiera que fueran necesarios o de las pruebas que rindieren las partes.

IX. Concluido el término probatorio, se sirva ese Honorable tribunal dictar providencia dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de cuarenta y ocho horas;

X. Oportunamente se sirva dictar sentencia, por virtud de la cual declare **CON LUGAR** la presente petición de amparo y, como consecuencia de ello, con base en lo que dispone el inciso a) del



artículo 49 de la Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad se sirva dejar en suspenso la resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete que contiene auto de apertura a juicio, dictada por la señora Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE EN PROCESOS DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D" y, al reestablecer la situación jurídica afectada, declare:

i. CON LUGAR el presente AMPARO interpuesto en contra de la resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por la señora Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE EN PROCESOS DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D", y se me restaure en mi situación afectada, ordenando el sobreseimiento del proceso en mi contra y, por ende, mi inmediata libertad.

XI. Se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponda.

Acompaño siete copias del presente memorial.

CITA DE LEYES: Los artículos citados y 1-2-4-5-12-28-29-175-203-204-265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1 al 12-19-20-21-24-27-28-32-33-34-35-36-37-38-39-40-42-43-44-45-46-49-51-52-53-55-56-57-58-59-77-78 y 79 de la Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Guatemala, dieciséis de marzo del año dos mil diecisiete.

A RUEGO DEL PRESENTADO, QUIEN SABE FIRMAR PERO POR EL MOMENTO NO PUEDE HACERLO Y EN SU AUXILIO Y DIRECCIÓN PROFESIONAL:

RECEBIÓ
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL
ORGANISMO JUDICIAL
16 MAR 2017
Paz y amor
medios de prueba

Jose Rolando Alvarado Lemus
ABOGADO NOTARIO



46



Amparo 01019-2017-17 OF. 4to. Not. 3ro.
Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Otorga
2 de 11

F) **Leyes calificadas como vulneradas:** Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Ley de Migración y Convención de Palermo, convención aprobada por el Decreto 36-2003 del Congreso de la República de Guatemala.-----

G) **Objeto del Amparo:** Que al dictar sentencia declare dejar en suspenso la resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, que contiene auto de apertura a juicio, dictada por la señora Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo, grupo "D" y que se le restaure al amparista la situación jurídica afectada ordenando el sobreseimiento del proceso en su contra y por ende su inmediata libertad.-----

H) **Hechos que motivan el amparo:** El accionante indica que es migrante en Guatemala, ya que nació y vivió en la Federación Rusa, es de nacionalidad rusa y emigró con destino a Guatemala. El amparista enfatiza su calidad de migrante toda vez que la autoridad recurrida, sin fundamento alguno y violando sus derechos constitucionales y normas internacionales en materia de derechos humanos, le ha perjudicado deliberadamente al no reconocerle como migrante en Guatemala. Agregó que, el hecho de no reconocerle como migrante en la República de Guatemala, ha sido determinante y trascendente para dictar el auto de apertura a juicio en su contra, sirviendo de excusa para no aplicarle exámenes de responsabilidad penal perfectamente regulados en la Ley de Migración y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional, conocida como Convención de Palermo.-----

Trámite del Amparo:



a) **Amparo Provisional:** No fue otorgado.-----

b) **De la Prueba:** Fue relevado el período de prueba, en virtud que ya obran como medio de comprobación, copia certificada de las partes conducentes al acto reclamado y en su momento este Tribunal estimó que no habían hechos que pesquisar de oficio.-----

c) **Vista Pública:** Se celebró el veintidós de agosto del presente año, por solicitud del accionante.-----

d) **De los alegatos de las partes:**

12
255



72
255

Amparo 01019-2017-17 OF. 4to. Not. 3ro.
Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. 1ta. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Otorga
3 de 11

- **Amparista:** Ratificó los hechos vertidos en el memorial de interposición.-----

- **Entidad Banco VTB, por medio de su apoderada judicial especial con representación Ana Rocío De La Cruz Recinos:** Indicó que no es procedente ni viable otorgar la protección constitucional instada, derivado que el amparo no constituye una instancia revisora de lo actuado en la justicia ordinaria, sino un medio para garantizar y proteger los derechos y garantías de las personas, extremo que en el presente caso no sucede.-----

- **Ministerio Público:** A través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal: Manifestó que la decisión de la autoridad impugnada de someter a juicio al imputado, es consecuencia de lo actuado en el procedimiento intermedio, cuya finalidad, de conformidad con el artículo 322 del Código Procesal Penal, es la de permitir al juez evaluar si existe o no sospecha fundada para cometer a una persona a juicio oral y público por la posibilidad de su participación en un hecho delictivo. Por lo que del análisis de las argumentaciones formuladas por el postulante determinan de manera evidente que pretende constituir una instancia revisora de lo resuelto en la jurisdicción ordinaria penal. Por otra parte, señala que la solicitud de acusación y apertura a juicio en contra del postulante fue discutida en audiencia oral y pública ante la autoridad impugnada, en donde el Ministerio Público presentó argumentos suficientes y sustentables que hicieron convencer a la autoridad impugnada que era procedente llevar a juicio al postulante. Por lo que solicita que se deniegue la protección constitucional de amparo solicitada por el accionante y se condene en costas y se imponga la multa respectiva al abogado patrocinante.-----

- **Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-**, Expresa que es importante considerar que la decisión de ligar a proceso a una persona, es susceptible de ser modificada mediante su reforma a tenor de lo establecido en el artículo 320 del Código Procesal Penal. De igual manera en el trámite del proceso podrán ejercerse diferentes acciones, peticiones o recursos que cuestionen la existencia de un acto de procesamiento. De esa cuenta, en la audiencia de etapa intermedia se podría solicitar el sobreseimiento del caso, que dejaría sin validez la decisión relacionada. También, según las circunstancias,-----





Amparo 01019-2017-17 OF. 4to. Not. 3ro.
Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Oforga
4 de 11

discutirse un procedimiento abreviado; la aplicación de criterio de oportunidad, la suspensión de la persecución penal, entre otros. De mantenerse los reproches formulados, pueden ser discutidos en las etapas subsiguientes del proceso e incluso, ser sometido el asunto a conocimiento de los tribunales de apelación especial o casación. Asimismo hace relación a la sentencia del expediente 5875-2016 de la Corte de Constitucionalidad, en la que ésta, luego de revisar la normativa legal referente a la reforma del auto de procesamiento, varió el criterio Jurisprudencial sosteniendo que dicha modificación no está indefectiblemente reservada a que hayan variado las circunstancias por las cuales el juez ligó a proceso al sindicado, limitación que estimó podía ser violatoria del derecho de defensa. Es evidente que el auto de procesamiento no constituye un acto de autoridad que revista el carácter de definitivo y, por ende, no es susceptible de ser cuestionado mediante amparo, en tanto que en la jurisdicción ordinaria existen los mecanismos procesales idóneos mediante los cuales puede válidamente discutirse su contenido o efectos.-----

- Irina Bitkova, único nombre y apellido, identificada también como: Maria Irina Rodríguez Germanis, Smelova Irina Vyacheslavovna e Irina Vyacheslavovna Selelova; y Anastasia Bitkova, único nombre y apellido: quienes indicaron que se adhieren en todos los argumentos expuestos por el postulante en la interposición de la presente acción constitucional, pues como es lógico se están vulnerando derechos individuales y derechos humanos personales del recurrente, así como convenios ratificados y aceptados por la legislación guatemalteca, reiteran que en la resolución de apertura a juicio, la autoridad recurrida no tomó en consideración los argumentos presentados por la defensa y que el postulante y su familia fueron víctimas de un bufete jurídico de abogados denominado "CUTINO INTERNACIONAL, OFF SHORE", con sede en la República de Guatemala, a quien pagaron la cantidad de cincuenta mil dólares de Estados Unidos de América, por cada persona, con el objeto de obtener legalmente la nacionalidad guatemalteca, cambio de nombre legal y documentos de identificación, tales como pasaporte y el documento personal de identificación. Ante la actitud negligente y falta de interés del Ministerio Público, no ha investigado a los

13
256



Amparo 01019-2017-17 OF. 4to. Not. 3ro.
Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. Via. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Otorga
5 de 11

personeros del de entidad "CUTINO INTERNACIONAL, OFF SHORE", por lo cual están sujetos a proceso penal, por lo que piden que se deje en suspenso la resolución de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete que contiene auto de apertura a juicio, dictada por la autoridad recurrida.-----

- **Procuraduría General de la Nación:** Considera que no existe agravio susceptible de protección, aunado a que, el artículo 203 constitucional faculta al juzgador a que de acuerdo al ordenamiento jurídico emita una resolución, lo que se complementa con un análisis jurídico de acuerdo a las reglas de la sana crítica razonada, por ende es evidente que la autoridad impugnada, emitió la resolución recurrida de acuerdo a las facultades que la ley le otorga y de acuerdo al análisis realizado del caso concreto, mismo que determinó motivo suficiente para dictar auto de apertura a juicio en contra del amparista. Por lo tanto, se puede concluir que la intención del postulante consiste en cuestionar lo ya resuelto por la autoridad recurrida, sin que se demuestre concretamente la amenaza, violación o restricción de derechos fundamentales que se denuncian, y en consecuencia se advierte que pretende trasladar a un plano constitucional, la discusión de temas que ya fueron dilucidados ante los órganos jurisdiccionales ordinarios y sobre los cuales ya se obtuvo pronunciamiento en esa vía.-----

e) **Auto para mejor fallar:** Se dictó con fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.-----

Considerando

-I-

Constitución Política de la Republica de Guatemala. Arto. 12 Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso penal ante juez o tribunal competente y preestablecido.

Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.

Artículo 203 Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.



Amparo 01019-2017-17 OF. 4to. Not. 3ro.
Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Olorga
6 de 11

Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado... Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes... La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observaran obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.-----

Artículo 211. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias... -----



-II-

Del estudio de las actuaciones se establece que el acto reclamado lo constituye la resolución del veinte de febrero del año dos mil diecisiete, en la que la Autoridad impugnada resuelve dictar auto de apertura a juicio por la comisión del delito Uso de documentos falsificados, Usurpación del estado civil y Supresión y altercación del estado civil. El amparista al respecto manifiesta que: "...el Postulante continúa ligado a un proceso penal por delitos exentos de responsabilidad penal por su condición de Migrante, de conformidad con lo que establece la Ley de Migración y la Convención de Palermo, convención que ha sido aprobada mediante el Decreto número 36-2003 del Congreso de la República de Guatemala. Es aberrante y notoriamente violatorio de nuestros Derechos Humanos, la inaplicación deliberada de la eximente de responsabilidad penal a que se refiere la Ley de Migración y una Convención de la Naciones Unidas debidamente aprobada por el Congreso de la República de Guatemala, ya que los delitos de la acusación ilegalmente admitida y por la que me envían a debate, son conductas que, al amparo de la Ley, No constituyen delito...".-----

-III-

El caso que nos ocupa ha llegado al momento procesal de dictar sentencia por parte del Tribunal de Primera Instancia Constitucional, por lo que los Magistrados

74
257



Amparo 01019-2017-17 OF. 4to. Not. 3ro.
Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Otorga
7 de 11



que integramos esta Sala realizamos un análisis sobre los hechos que fueron expuestos por el interponente y demás interesados en el amparo correspondiente, las pruebas aportadas y arribamos a las siguientes conclusiones: a) El amparo es una acción constitucional expresamente establecida contra las arbitrariedades de autoridades y que lleve implícita una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala o demás leyes garantizan. b) Por lo anterior, los que juzgamos tenemos la obligación de establecer si el agravio existe y que no haya otra forma ordinaria de restituir el derecho que ha sido vulnerado. En este orden de ideas tenemos que el solicitante denuncia que la autoridad judicial contra quien se planteó la acción constitucional de amparo ha vulnerado sus derechos constitucionales al emitir la resolución del veinte de febrero de dos mil diecisiete, dentro del proceso penal número 01071-2010-1644, por medio de la cual declaró la apertura a juicio y admitió la acusación en contra del accionante por los delitos de Uso de documentos falsificados, Usurpación del estado civil y Supresión y altercación del estado civil. Para dar respuesta a la pretensión es necesario analizar la norma pues el amparista indica que por su condición de migrante en el Estado de Guatemala, no se le puede juzgar por la comisión de dichos delitos y que debe aplicarse el artículo 107 de la Ley de Migración. Este Tribunal considera importante que los jueces interpreten de manera correcta la ley, pues el Decreto número 95-98 Ley de Migración fue reformado por el Decreto 10-2015 de Congreso de la República y que a pesar de una nueva modificación de la ley, a través del Decreto 44-2016 del Congreso de la República, los artículos 106 y 107 de dicha ley, continúan vigentes. A tenor de lo anterior, y acorde a lo establecido por el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en sus artículos 5 y 6 los cuales se transcriben a continuación: "...Responsabilidad penal de los migrantes. Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo." Artículo 6. Penalización. 1. Cada Estado Parte,



Amparo 01019-2017-17 OF. 4to. Not. 3ro.
Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Oforga
8 de 11

adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se comentan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico y otro beneficio de orden material: a) El tráfico ilícito de migrantes; b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes: i) La creación de un documento de viaje o de identidad falsa; ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento. c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio ilegal. 2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito: a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del presente artículo; y c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que: a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados; o b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación. 4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno..." Y tomando en cuenta que Guatemala es

15
258



Amparo 01019-2017-17 OF. 4to. Not. 3ro.
Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Otorga
9 de 11

signataria de la dicha Convención, los artículos ya mencionados continúan vigentes, por lo que no puede desconocerse la condición de migrante del accionante. Aunado a ello se extrae del informe número Oficio-DGM-0766-2017/CEMC-km rendido por el Licenciado Carlos Emilio Morales Cancino, Director General de la Dirección General de Migración, quien aclaró a este Tribunal, que persona tiene la calidad de migrante, y manifestó: "...La Dirección General de Migración no les da a las personas extranjeras las calidad de Migrante, ellos se convierten por derecho en migrantes al momento que deciden salir de su país, ya sea de forma regular o irregular, de forma voluntaria o forzada y para las personas extranjeras que desean permanecer de forma temporal o permanente en el territorio guatemalteco tienen derecho a obtener visa en el país, toda vez que el interesado llene los requisitos de ley; y para dicho trámite es la Subdirección de Operaciones de Extranjería de esta Dirección, la encargada de aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de visas de ingreso y permanencia a los extranjeros en el territorio nacional...". Este Tribunal advierte que los hechos imputados por la Fiscalía contiene como hipótesis normativa presupuestos que están vinculados directamente al estado de calidad de migrante del amparista, consecuentemente conforme la normativa enunciada y transcrita tenemos certeza jurídica que por el respeto al derecho que le asiste el postulante Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García, no puede ser objeto de proceso penal, pues Guatemala como país signatario de dicho Protocolo no puede dejar de observar para su aplicación una norma de orden internacional. En virtud de lo anterior, es procedente otorgar la protección constitucional, dejando en suspenso en forma definitiva el acto reclamado y se ordena a la autoridad recurrida dictar una resolución con una clara y precisa fundamentación, congruente con lo aquí considerado y efectúe las declaraciones que en derecho corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo, pero podrá exonerarse al responsable cuando su



Amparo 01019-2017-17 Of. 4to. Not. 3ro.

Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Otorga
10 de 11

interposición se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos que a juicio del tribunal, se haya actuado con evidente buena fe. En Razón de lo anterior, este Tribunal considera que en este caso no se condena en costas a la autoridad impugnada por la buena fe que se presume en las actuaciones judiciales. -----

Leyes Aplicables:

Artículos citados y 265, de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º., 2º., 3º., 4º., 8º., 10, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 57, 60, 61, 67, 149, 163 inciso c), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.-----

Por Tanto:

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Constituida en Tribunal de Amparo, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I) Se Otorga el amparo solicitado por Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García, en contra de la Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo grupo "D" y para sus efectos positivos, ordena a la autoridad reclamada: a) dejar sin efecto en cuanto al postulante, la resolución del veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la autoridad impugnada dentro del proceso penal número 1071-2010-1644, por medio de la cual declaró auto de apertura a juicio y se admite acusación en contra del accionante por los delitos de uso de documentos falsificados, usurpación del estado civil y supresión y alteración del estado civil; b) Se conmina a la autoridad impugnada a dictar resolución tomando en cuenta lo aquí considerado. II) Ordena a la autoridad reclamada de cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que reciba ejecutoria de lo resuelto, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de un mil quetzales, y de quedar sujeto a las responsabilidades legales consiguientes; III) No hay condena en costas con base al artículo 45 de la ley de la materia; IV) Notifíquese y en su oportunidad envíese copia certificada del presente fallo a la



Amparo 01019-2017-17 OF. 4to. Not. 3ro.
Ref. 01071-2010-1644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal, NDCA en procesos de mayor riesgo "D"
Otorga
11 de 11

Autoridad Recurrida y a la honorable Corte de Constitucionalidad, para los efectos legales correspondientes.

Jaime Amilcar González Dávila
Magistrado Presidente

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos
Magistrado Vocal I

Zonia De la Paz Santiza Corleto de Bocanegra
Magistrado Vocal II

Manolo Otóniel López Morales
Secretario

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 1 de 40

EXPEDIENTES ACUMULADOS 6098-2017 y 6130-2017

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. ✓

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete que dictó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de amparo que promovió Igor Bitkov ó Igor Vladimirovich Bitkov o Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García contra la Jueza Primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo, Grupo "D" del departamento de Guatemala. El postulante actuó con el patrocinio del abogado José Rolando Alvarado Lemus. Es ponente en el presente caso la Magistrada Vocal II, Gloria Patricia Porrás Escobar, quien expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES

I. EL AMPARO

A) Solicitud y autoridad: presentado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Organismo Judicial y, remitido posteriormente a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. **B) Acto reclamado:** resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad cuestionada, en la cual dictó auto de apertura a juicio y admitió la acusación formulada por el Ministerio Público contra Igor Bitkov o Igor Vladimirovich Bitkov o Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García por los delitos de Usurpación de Estanco Civil y Falsificación de documentos falsificados y



52

Supresión y alteración del estado civil. C) Violaciones que se denuncia: a los derechos de defensa, de preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos, así como al principio jurídico de imparcialidad. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante y del estudio de las constancias procesales se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) ante la Jueza Primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo, Grupo "D" del departamento de Guatemala –autoridad cuestionada– se tramitó proceso penal contra Igor Bitkov o Igor Vladimirovich Bitkov o Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García –postulante– por la utilización de documento personal de identificación, cédula y pasaporte que fueron emitidos por entidades públicas guatemaltecas a nombre de Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García con base a datos de identidad falsos; y b) en su oportunidad procesal la juzgadora citada, derivado de la presentación de acto conclusivo por parte del Ministerio Público, emitió resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete –acto reclamado–, en la que admitió la acusación formulada y dispuso la apertura a juicio oral y público -con respecto- al sindicado por los delitos de Usurpación de estado civil, Uso de documentos falsificados y Supresión y alteración del estado civil. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: manifestó el amparista que la jueza objetada, al decretar la apertura a juicio en su contra: a) desconoció su calidad de migrante tratándolo como criminal, pues dejó de considerar que, en lo personal, le era materialmente imposible alterar documentos de soporte -libros y partidas-, pues no ha sido empleado o funcionario de las instituciones públicas que le emitieron los documentos personal de identificación y de viaje; es decir no pudo tener acceso a los documentos de soporte, aunado a que al momento en que



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 3 de 40

obtuvo los documentos de identificación, estos se emitieron por el Estado de Guatemala y no sabía el idioma español, ni tenía conocimiento de la falsedad de los mismos; b) no aplicó la normativa internacional y nacional vigente, pues no obstante que denunció desde hace más de diez meses al bufete de abogados denominado "Cutino Intenational Off Shore" por su responsabilidad en el delito de Tránsito ilícito de personas, al ser la entidad que tramitó los documentos por los que se le acusa, no ha sido citado para ratificarla, además de que se han afectado sus derechos humanos como migrante, porque se le procesa con base en la expedición de documentos que le fueron extendidos por el Registro Nacional de las Personas y por la Dirección General de Migración, en un proceso penal en el que ahora funcionarios de la primera institución citada se pretenden querellar en su contra, no obstante ser parte de la estructura criminal que lo engañó; c) no se analizó que los delitos por los que se le abre a juicio no tienen sustento, porque según informó el Registro Nacional de las Personas el nombre consignado en los documentos, no corresponde a nadie, no existe, por lo que no hay persona perjudicada; se le acusa de que con su esposa se casaron en Guatemala, sin considerar que ya estaban casados en Rusia; y de tener una sociedad anónima con sus bienes legítimos, sin estimar que, en todo caso, cuenta con identificación de persona por el nombre que utiliza; d) se violó la normativa internacional y lo regulado en la Ley de Migración por lo siguiente: i) lleva dos años y dos meses de privación de libertad por la tramitación de proceso penal por delitos que se eximen de responsabilidad penal, dada su condición de migrante, pues la causa en su contra se sustenta en la creación y posesión de un documento de identidad o de viaje, el cual fue extendido y entregado por autoridades del Estado de Guatemala que fueron las que se los emitieron con



53

base en documentos de soporte falsos; ii) era obligatorio que la juzgadora cuestionada aplicara el contenido del Decreto 36-2003 del Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual el Estado aprobó el contenido de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional "Convención de Palermo", en la que en uno de sus protocolos se protege a los migrantes por ser personas vulnerables, eximiéndoles de responsabilidad penal en cuanto a acciones relativas a la creación o posesión de documento de viaje o de identidad falsos; iii) conforme el principio *iura novit curia*, la jueza debió aplicar lo regulado en los artículos 5 y 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, de la Convención de Palermo, los cuales determinan que los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal por la creación de documentos de viaje o de identidad falsos o la posesión de dichos documentos; iv) admitió la acusación y abrió a juicio en su contra, por lo que continúa ligado a proceso penal por delitos que están exentos de responsabilidad por su condición de migrante, de conformidad con lo establecido en los artículos 106 y 107 *Ter* de la Ley de Migración, advirtiéndose la deliberada inaplicación de la eximente de responsabilidad penal por parte de la juzgadora, la cual, confundiendo a la víctima con el victimario, dejó de aplicar la ley pues el sujeto activo del delito debe ser el traficante nunca el migrante. D.3)

Pretensión: solicitó que se otorgue el amparo y, como consecuencia, se deje en suspenso definitivo la resolución que constituye el acto reclamado, se le restituya en la situación jurídica afectada, ordenando el sobreseimiento del proceso y se emitan las demás declaraciones que en Derecho corresponda. E) **Uso de procedimientos y recursos:** ninguno. F) **Casos de procedencia:** invocó el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, sin



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 5 de 40

invocar literal alguna. **G) Leyes que estima violadas:** citó los artículos 5º, 12, 13, 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 5, 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; 106 y 107 Ter de la Ley de Migración y Decreto 36-2003 del Congreso de la República de Guatemala.

II. TRÁMITE DEL AMPARO

A) Amparo provisional: no se otorgó. **B) Terceros interesados:** a) Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–; b) Registro Nacional de las Personas; c) Banco VTB, Sociedad Anónima; d) Procuraduría General de la Nación; e) Irina Bitkova; y f) Anastasia Bitkova. **C) Remisión de antecedentes:** copia certificada de las partes conducentes del expediente 01071-2010-01644 del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “D” del departamento de Guatemala. **D) Medios de comprobación:** se relevó del período de prueba. **E) Sentencia de primer grado:** la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, **consideró:** “... Para dar respuesta a la pretensión es necesario analizar la norma pues el amparista indica que por su condición de migrante en el Estado de Guatemala, no se le puede juzgar por la comisión de dichos delitos y que debe aplicarse el artículo 107 de la Ley de Migración. Este Tribunal considera importante que los jueces interpreten de manera correcta la ley, pues el Decreto número 95-98 Ley de Migración fue reformado por el Decreto 10-2015 de Congreso de la República y que a pesar de una nueva modificación de la ley, a través del Decreto 44-2016 del Congreso de la República, los artículos 106 y 107 de dicha ley, continúan vigentes. A tenor de lo anterior, y acorde a lo establecido por el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de



Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, Transnacional en sus artículos 5 y 6 los cuales se transcriben a continuación: "... Responsabilidad penal de los migrantes. Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. Artículo 6. Penalización. 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se comentan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico y otro beneficio de orden material: a) El tráfico ilícito de migrantes; b) Cuando se cometan, con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes: i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso; ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento; c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer (sic) legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio ilegal. 2. Cada Estado parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito: a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) de párrafo 1 del presente artículo; y c) La organización o dirección de otra personas para la comisión de un



CORTE DE CONSTITUCION
REPÚBLICA DE GUATEMALA



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 7 de 40

delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que: a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados; o b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación. 4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno... Y tomando en cuenta que Guatemala es signataria de dicha Convención, los artículos ya mencionados continúan vigentes, por lo que no puede desconocerse la condición de migrante del accionante. Aunado a ello se extrae del informe número Oficio-DGM-0766-2017/CEMC-km rendido por el Licenciado Carlos Emilio Morales Cancino, Director General de la Dirección General de Migración, quien aclaró a este Tribunal, que persona tiene la calidad de migrante, y manifestó: "... La Dirección General de Migración no les da a las personas extranjeras las calidades de Migrante, ellos se convierten, por derecho en migrantes al momento que deciden salir de su país, ya sea de forma regular o irregular, de forma voluntaria o forzada y para las personas extranjeras que desean permanecer de forma temporal o permanente en el territorio guatemalteco tiene derecho a obtener visa en el país, toda vez que el interesado llene los requisitos de ley; y para dicho trámite es la Subdirección de Operaciones de Extranjería de esta Dirección encargada de aplicar y vigilar el cumplimiento



de las disposiciones legales y reglamentarias, en materia de visas de ingreso y permanencia a los extranjeros, en el territorio nacional... Este Tribunal advierte que los hechos imputados por la Fiscalía contienen como hipótesis normativa presupuestos que están vinculados directamente al estado de calidad de migrante del amparista, consecuentemente conforme la normativa enunciada y transcrita tenemos certeza jurídica que por el respeto al derecho que le asiste al postulante Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García, no puede ser objeto de proceso penal, pues Guatemala como país signatario de dicho Protocolo no puede dejar de observar para su aplicación una norma de orden internacional. En virtud de lo anterior, es procedente otorgar la protección constitucional, dejando en suspenso en forma definitiva el acto reclamado y se ordena la autoridad recurrida dictar una resolución con una clara y precisa fundamentación, congruente con lo aquí considerado y efectúe las declaraciones que en derecho corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo, pero podrá exonerarse al responsable cuando su interposición se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos que a juicio del tribunal, se haya actuado con evidente buena fe." Y resolvió: "... I) Se Otorga el amparo solicitado por Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García, en contra de la Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo grupo "D" y para sus efectos positivos, ordena a la autoridad reclamada: a) dejar sin efecto en cuanto al postulante, la resolución del



CORTE DE CONSTITUCION
REPÚBLICA DE GUATEMALA



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 9 de 40

veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la autoridad impugnada dentro del proceso penal número 1071-2010-1644, por medio de la cual declaró auto de apertura a juicio y se admite acusación en contra del accionante por los delitos de uso de documentos falsificados, usurpación del estado civil y supresión y alteración del estado civil; b) Se conmina a la autoridad impugnada a dictar resolución tomando en cuenta lo aquí considerado. II) Ordena a la autoridad reclamada de cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que reciba ejecutoria de lo resuelto, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de un mil quetzales, y de quedar sujeto a las responsabilidades legales consiguientes; III) No hay condena en costas con base al artículo 45 de la Ley de la materia...

III. APELACIONES

A) El Banco VTB, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario Judicial con Representación, abogado Juan Carlos Alvizurez Salguero, tercero interesado, apeló, señalando: a) el acto reclamado fue dictado dentro de las facultades que la ley le otorga a la autoridad objetada en su calidad de Juez contralor de la investigación de acuerdo a lo que establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley que regula la audiencia de discusión de la acusación y el auto de apertura ajuicio artículos 332 Bis, 337, 338, 339, 340, 341, 342 y 344 del Código Procesal Penal; b) se declaró con lugar la acusación planteada contra el amparista y se dictó auto de apertura ajuicio, teniendo con su abogado defensor la oportunidad de señalar vicios, plantear excepciones y obstáculos a la persecución penal, formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, como preceptúa el artículo 336 de la ley citada como efectivamente así se hizo, utilizándose los



56

mismos, los cuales en su momento procesal oportuno fueron analizados al dictar el acto reclamado; c) la decisión emitida no constituye un acto definitivo porque el interponente del amparo, puede hacer los requerimientos que considere pertinentes para contradecir las circunstancias de la acusación en el correspondiente juicio oral y público, pues lo resuelto no constituye la última decisión y conforme a su naturaleza ese acto no tiene efectos, ya que no le pone fin a ningún asunto o aspecto del proceso penal, sino únicamente concluye una incidencia que no trasciende más allá del ámbito procedimental; d) el amparista tendrá la oportunidad, en el juicio oral y público, de hacer valer lo pertinente a sus pretensiones, conforme las pruebas de descargo que ofrezca y que considere oportunas, en ejercicio de sus respectivos derechos; asimismo, el planteamiento de los medios de impugnación a su alcance, si así lo estiman adecuado, para probar o no la situación de migrante que se aduce tener en Guatemala y que se argumenta no se le ha querido reconocer, resultando prematuro el amparo ya que no se han agotado los recursos ordinarios que se pueden hacer valer; e) si la valoración o fundamentación jurídica del fallo no fue satisfactoria para el accionante, ello no implica que se le haya violado algún derecho, ya que el pronunciamiento fue emitido en condiciones de igualdad y lo resuelto también pudo ser insatisfactorio para la otra u otras partes en el juicio; f) la sentencia de amparo desnaturaliza el objeto de la acción constitucional, ya que más allá de determinar si existió una vulneración a algún derecho o garantía procesal, se convirtió en un tribunal constitucional de revisión de la justicia ordinaria, pues revisó el criterio lógico jurídico del juez al decidir aceptar la acusación planteada y decretar la apertura a juicio, realizando un análisis que únicamente puede ser efectuado por la justicia ordinaria; g) el amparo no puede constituirse en una vía



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 11 de 40

procesal paralela donde las partes pretendan dilucidar sus conflictos, cuando estos corresponden exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, por ello, tiene limitación de entrar al conocimiento de fondo del asunto, porque su fin lo constituye la verificación del cumplimiento de los principios y garantías constitucionales, dentro del sistema difuso; h) el acto reclamado no ha vedado al amparista el acceso debido a la tutela judicial, en el que la motivación jurídica y parte decisoria corresponden a la autoridad competente, sin que esta haya hecho nugatoria, por formalismos no fundados en ley o por acto de arbitrariedad, los derechos del interponente, como se pretende hacer ver; i) el hecho de ser migrante y que no se haya reconocido dicha calidad, debe de ser discutido en debate oral y público, no en amparo, ya que es un hecho que únicamente puede ser valorado bajo la sana crítica razonada al momento de dictarse sentencia y declarar la culpabilidad o no de la persona en los hechos por los cuales se le acusa; y j) se cumplió con el artículo 11 Bis del Código Procesal Penal, pues, de forma clara y expresa, la autoridad objetada fundamentó su decisión haciendo las consideraciones de hecho y de derecho en las que sustentó admitir la acusación planteada y dictar auto de apertura a juicio, plasmando el análisis lógico jurídico referente a las acciones y argumentos en el cual se establecen las razones jurídicas y fácticas por las que estimó que era procedente abrir a juicio oral y público contra dicho procesado por los delitos de Uso de documentos falsificados, Usurpación del estado civil y Supresión y alteración del estado civil. B) La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, tercera interesada, apeló señalado: a) el amparista en varios momentos procesales, ha señalado que es migrante, sin embargo se considera que no llena los requisitos establecidos en la normativa internacional en relación a dicha calidad; b) en lo



57

que respecta al Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Internacional, su finalidad es el fortalecer la cooperación internacional en la esfera de la migración internacional y el desarrollo, a fin de abordar las causas fundamentadas de esta, especialmente las relacionadas con la pobreza y aumentar al máximo los beneficios que la migración podía reportar a los interesados, pretendiendo brindar un trato humano a los migrantes y protegerlos plenamente en sus derechos; c) conforme diversos instrumentos internacionales, los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, por reunificación familiar, o por otras razones, a diferencia de los refugiados quienes no pueden volver a su país, los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno; d) el amparista no llena los requisitos para considerarse migrante, porque salió de su país en forma legal, tiene posibilidades económicas para garantizar su traslado y sobrevivencia en condiciones de lujo y abundancia, realizó pagos elevados en dinero, cincuenta mil dólares por cada uno de los tres miembros que integran su familia a una estructura criminal con el fin de garantizar su ingreso a Guatemala y obtener una serie de documentos que le permitieran identificarse como guatemaltecos, siendo personas con conocimientos para establecer que lo que estaban haciendo era ilegal; e) "el artículo 4)" (sic), del Protocolo citado, señala que un Estado Parte podrá adoptar las medidas necesarias en los casos que las conductas constituyan un delito dentro de la normativa interna, y el Código Penal señala que la supresión y alteración del estado civil, la usurpación del estado civil y el uso de documentos falsos son considerados hechos delictivos; f) no existe



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 13 de 40

agravio, pues la autoridad cuestionada al dictar el acto reclamado no incurrió en las violaciones denunciadas, existiendo un evidente mal uso de la jurisdicción ordinaria, al hacerse una mala interpretación del caso por parte del Tribunal de Amparo de primer grado; y g) existe falta de definitividad para acudir al amparo, por cuanto que no se han agotado los medios ordinarios para acudir a la garantía constitucional. C) El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, apeló señalando: a) la actuación de la autoridad objetada refleja la correcta actuación en el uso de sus facultades legales, cumpliendo las exigencias expresadas en los artículos 342 y 344 del Código Procesal Penal; b) el postulante pretende constituir el amparo en una instancia revisora de lo resuelto por la jurisdicción ordinaria penal, al impugnar el criterio valorativo plasmado en el acto reclamado, en el cual no se le causa agravio personal y directo en los derechos que le asisten, al resolverse conforme a las constancias procesales; c) en la audiencia para decidir la apertura a juicio, se argumentó para convencer a la juzgadora de la procedencia de llevar a juicio al amparista, habiendo tenido la defensa la oportunidad de plantear las objeciones y peticiones que estimó pertinentes; d) la decisión cuestionada no es antojadiza pues existen sospechas de la comisión de hechos delictivos, siendo en el proceso penal que debe demostrarse la culpabilidad o inocencia, dado que existen medios de convicción suficientes y razonables para discutirlos en el debate; y e) sin atender a la diversidad de acción que se enuncia en el artículo 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, se establece la intencionalidad del procesado de ingresar al país utilizando documentos que le fueron proporcionados para ingresar ilegalmente y los cuales utilizó a sabiendas de su falsedad, lo que se le acusó y solicitó apertura a juicio



en su contra por los delitos de Uso de documentos falsificados, Usurpación del estado civil y Supresión y alteración del estado civil.

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA

A) El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, reiteró lo expuesto en el escrito de apelación, agregando disenter del criterio emitido por el Tribunal de Amparo de primer grado contenido en la sentencia impugnada, el cual calificó de aberrante por rebasar las facultades que tiene asignadas como Tribunal Constitucional, invadiendo la esfera de facultades de la autoridad cuestionada; y que la autoridad objetada, hizo el análisis para llevar a juicio al sindicado, teniendo el procesado la oportunidad de hacer valer las excepciones que estimaron, dado que el artículo 332 del Código Procesal Penal permite que en la audiencia se dé el contradictorio, por lo que si no estaban de acuerdo con la decisión asumida, debieron interponer cuanto recurso, incidente o remedio procesal consideraran oportuno. Solicitó se declare con lugar la apelación planteada, se revoque la sentencia impugnada, denegando el amparo, condenando en costas al postulante y se imponga multa al abogado patrocinante.

B) Banco VTB, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario Judicial con Representación, abogado Juan Carlos Alvizurez Salguero, tercero interesado, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto, agregando que: a) el amparo promovido debió ser suspendido por falta de agravio o por incumplimiento del presupuesto procesal de definitividad, aunado a que la normativa que se invocó es para fortalecer la cooperación en la esfera de la migración internacional, por lo que no le es aplicable al no cumplir con los requisitos que la ley determina para ser considerado como migrante; b) la



CORTE DE CONSTITUCIÓN
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 15 de 40

regulación que se invoca busca evitar actividades ilícitas, no promoverlas, como en el presente caso, en que el postulante de forma voluntaria, espontánea y premeditada cometió una serie de hechos calificados como delitos e incluso pagó cantidades exorbitantes de dinero para obtener documentos que no reflejan la verdad, con la única intención de entrar a otro país para esconder su verdadera identidad, lo que vuelve inaplicable la norma que se invoca, al no ostentar la calidad de migrante, es decir, se tergiversó y manipuló, hechos y afirmaciones; c) la sentencia apelada conlleva una interpretación y aplicación contraria al objeto de la convención relacionada y la desnaturalización del amparo, al fallarse en contra de la normativa internacional y ordinaria; d) el artículo 4) del Protocolo citado, señala que un Estado Parte podrá adoptar las medidas necesarias en los casos que la conductas constituyan un delito dentro de la normativa interna; y, la legislación penal guatemalteca determina los hechos incoados al amparista como delitos, lo que es parte de su soberanía y facultad de no aplicación en casos concretos, contenidas incluso en el mismo Protocolo. Solicitó se declare con lugar la apelación, se revoque la sentencia impugnada y se rechace la protección solicitada. **C) La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, tercera interesada** reiteró lo expuesto en su planteamiento de apelación y solicitó se declare con lugar la impugnación que planteó contra la sentencia de amparo por la violación a los derechos a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. **D) Igor Bitkov ó Igor Vladimirovich Bitkov ó Leonid Zaharenko ó Gregorio Igor Benítez García –postulante–**, reiteró aspectos señalados en el escrito inicial del amparo y agregó : a) la autoridad cuestionada dictó auto de apertura a juicio en su contra, a pesar de exponerle que legalmente, él y su familia, no podían estar vinculados a un proceso penal originado por la creación o



el uso de documentos de identidad y de viaje, específicamente DPI y pasaporte, supuestamente falsos, por existir eximente de responsabilidad penal, regulada en dos normativas, la Convención de Palermo, en el Protocolo de Tránsito Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la cual establece en su artículo 5 que ningún migrante puede ser perseguido penalmente por la creación o posesión de dichos documentos, normativa ratificada por Guatemala, debiendo aplicarse por ser regulación en materia de derechos humanos, que establece eximentes específicas de responsabilidad penal; asimismo que en la Ley de Migración, la cual fue reformada, por el Decreto 10-2015 del Congreso de la República, estableciéndose que ningún migrante y su familia, pueden ser objeto de proceso penal, por actos o actividades relativos al ingreso, permanencia o salida del territorio nacional; normativas que respaldan que ninguna de estas personas pueda ser perseguida penalmente por los delitos objeto de la acusación; agregó que contra el acto reclamado no cabe recurso ordinario por lo que en amparo denuncia que se reconozca la calidad de migrante, dado que la juzgadora al dictar su resolución señaló que tenía duda si era migrante o no, porque también existía la figura de refugiado y que la familia del sindicado, había iniciado un proceso en Guatemala, para que se les otorgue la calidad de refugiado, solicitud que no ha sido resuelta, sin embargo la declaratoria o no de refugiado no afecta en nada la calidad de migrante; b) la jueza señaló que no existe una definición de migrante, por lo que se le argumentó que en ese supuesto debía acudir a la Ley del Organismo Judicial la cual refiere que debe entenderse la que disponga el Diccionario de la Real Academia Española, el cual indica que migrante es la persona que se traslada de un país de origen a un país de destino, simplemente; c) el caso de la familia del procesado es una tragedia de violaciones de derechos



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 17 de 40

humanos, porque siendo migrantes fueron sentenciados, no obstante existir un amparo definitivo otorgado que la autoridad cuestionada no quiso acatar, señalando que no había un amparo provisional que la obligara y en lugar de detener el proceso en relación al sindicato se aceleró y se dictó sentencia condenándolo a diecinueve años de prisión aun y cuando tiene eximente de responsabilidad penal, sin considerar que un amparo decretado en sentencia es más que un amparo provisional; d) tienen un niño que desde los tres años ha estado con extraños, ahora tiene seis años y sigue solo, con dos tutores guatemaltecos, el cual se ha visto gravemente afectado; e) la causa iniciada contra el procesado es por la utilización de documentos de identificación supuestamente falsos, misma en la que se le ha negado el reconocimiento de su calidad de migrante no obstante que nació en la Federación Rusa y emigró a Guatemala, en donde se encuentra en prisión por más de tres años por delitos que están exentos de responsabilidad penal; f) según la Ley de Migración, el único sujeto activo por acciones delictivas derivadas de la creación de un documento de viaje o de identificación es el traficante, pero no el migrante o extranjero; g) al momento de plantear el amparo el Banco VTB, con base en una deuda en Rusia, actuó como querellante en el proceso penal, banco que ha sido sancionado por muchos delitos por parte de los Estados Unidos, sin embargo, derivado de excepción de falta de acción interpuesta, la cual fue declarada con lugar, se le excluyó del proceso, resolución que quedó firme, de ahí que conforme lo regulado en el artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad dicho tercero no tiene ningún interés, vinculación o relación con la situación planteada, debiendo ~~excluirse~~sele del recurso de apelación; h) la sentencia impugnada se refiere a una cuestión de derecho, ya que contiene un



60
80

análisis profundo sobre la procedencia de aplicar la eximente de responsabilidad penal contenida en la normativa nacional e internacional, estableciendo su calidad de migrante, la cual nunca debió ser ignorada, al ser obvio que con su familia son extranjeros, es decir, migrantes, por lo que no podían ser vinculados a proceso penal al ser víctimas de traficantes como lo son la entidad Cotino International Off Shore, la que fue debidamente denunciada; i) su calidad de migrante no puede ser afectada con base en argumentos tales como, si salió legal o ilegalmente de su país de origen, si tiene capacidad intelectual o económica para la comprensión de un engaño por parte de un traficante, si habla o no el idioma del país de destino, si pagó al traficante; j) en lo relativo al pago, esto no tiene trascendencia, pues el beneficio económico lo recibe el traficante de parte del migrante, lo cual es una consecuencia lógica de su participación en el delito de tránsito ilícito de migrantes, el cual se diferencia de la trata de personas, en que en este último hay engaño del migrante y en el de tránsito ilícito no hay engaño, hay consentimiento, pero sustentado en una causa legítima; y k) del contenido del numeral 4) del artículo 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, se deduce que si un migrante comete un delito distinto a la creación o posesión de un documento de identidad o de viaje falso, debe ser juzgado penalmente por esa conducta delictiva, en ese sentido resulta erróneo que se adopten medidas que perjudican lo relativo a la exención de responsabilidad penal a que se refieren los artículos 5 y 6 de la norma internacional con base en el numeral 4) citado. Solicitó se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirme la sentencia impugnada; E) Irina Bitkova –tercera interesada– señaló adherirse a los argumentos expuestos por el postulante del amparo, agregando que la Corte de Constitucionalidad conforme



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 19 de 40

el artículo 265 constitucional tiene asignas facultades entre las que esta restablecer los derechos que han sido vulnerados en la presente acción. Solicitó se confirme la sentencia de amparo y que en aplicación del principio de igualdad los efectos del otorgamiento le sean también aplicables a su persona. **F) Anastasia Bitkova –tercera interesada–** señaló que: a) en su caso específico no se respetó su calidad de migrante, puesto que se dictó sentencia en su contra imponiéndole las penas máximas para los delitos que se le imputaron, condenándosele a catorce años de prisión, sin respetar el ordenamiento internacional ratificado por Guatemala; b) existe expectativa de organizaciones de derechos de los migrantes con relación al caso, por la falta de respeto que se ha generado a los derechos de los mismos, y que si bien en el delito de tráfico de personas puede existir voluntad de la persona migrante, eso no la convierte en delincuente, pues ella sigue siendo víctima; c) en el presente caso, se tiene claro que existe el delito de Tráfico de migrantes pero extrañamente no quiere reconocérsele a las víctimas la calidad de migrante, a pesar de que al caso se le conoce como el "Caso Migración", sin que en el fallo emitido exista alusión siquiera a la Ley de Migración; d) en el presente caso, ha existido un secuestro de estado, porque a las personas afectadas no se les puede resarcir, existen derechos del niño que no pueden ser ignorados, citándose que en el fallo sentencial emitido se solicita la expulsión de la familia del procesado, y la de un niño que es nacido en el territorio nacional así como de su persona, a pesar de estar casada con un guatemalteco. Solicitó se confirme el otorgamiento del amparo. **G) Procuraduría General de la Nación –tercera interesada–** señaló: a) la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos no deben ser utilizados como excusa para evadir



61

la responsabilidad penal de sujetos por acciones típicas y antijurídicas cometidas en el territorio nacional, pues migración no significa que la persona no esté sujeta a la normativa de un país; b) las conductas ilícitas sindicadas al postulante no fueron realizadas con motivo de una migración ilícita, pues consta que ingresó al país en forma legal en el mes de abril de dos mil diez y posteriormente, realizó dichas conductas, permitiéndole salir del país en junio de ese año, portando un pasaporte guatemalteco, sin haber realizado los trámites correspondientes con arreglo a la ley nacional; c) el artículo 3 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, Mar y Aire, define qué tráfico ilícito de migrantes, siendo este el prerequisite para que sea procedente o no la eximente contenida en el artículo 5, en este se señala que Tráfico ilícito de migrantes debe entenderse como: *"... la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material..."* de ahí que no resulte aplicable al postulante la exención de responsabilidad penal establecida en el artículo 5 del Protocolo, citado porque en su caso, conforme las constancias procesales, quedó acreditado que no existió un ingreso ilegal, su ingreso fue legal, lo cual puede ser corroborado; d) las conductas ilícitas que se acusan al postulante, no fueron realizadas con el fin de entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, ya que ingresó legalmente al país, y fue después, en que estando legal, decidió utilizar más de siete documentos de diversas identidades, dentro de múltiples actos civiles, incluyendo un matrimonio; además, cabe indicar que dicha persona inicialmente no tenía restricción alguna para su libre tránsito, y a pesar de ello libremente decidió contar con una estructura criminal para la comisión de los tipos penales por los cuales enfrentó



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 21 de 40

juicio, no obstante que si deseaba obtener la nacionalidad guatemalteca podía iniciar los procedimientos administrativos que nuestra legislación contempla; e) no existe agravio de relevancia pues la autoridad cuestionada actuó en el ejercicio de sus atribuciones y funciones reconocidas por la ley, interpretando y aplicando la norma internacional, en su sentido apropiado, lo que no patentiza violación alguna a la normativa constitucional, internacional y ordinaria; y f) se advierte una mera inconformidad con la decisión de la autoridad cuestionada, pretendiéndose que el Tribunal de Amparo se convierta en una instancia revisora de lo resuelto por la jurisdicción ordinaria. Solicitó se declaren con lugar los recursos de apelación interpuestos y, como consecuencia, se revoque la sentencia impugnada y se deniegue el amparo, emitiéndose las declaraciones que en derecho correspondan.

CONSIDERANDO

- I -

Existe agravio que amerita el otorgamiento de la protección constitucional, cuando la autoridad cuestionada, al dictar auto de apertura a juicio, no realiza la debida motivación y fundamentación, en la que dé respuesta razonable y acorde al planteamiento realizado sobre la eximente de responsabilidad penal derivado de lo regulado en la normativa ordinaria y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

- II -

Igor Bitkov o Igor Vladimirovich Bitkov o Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García acude en amparo contra la Jueza Primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo, Grupo "D" del departamento de Guatemala señalando como agravante la



62

resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, emitida por dicha autoridad, en la cual admitió la acusación formulada por el Ministerio Público y, como consecuencia, abrió a juicio oral y público el proceso penal promovido, en lo que corresponde a su persona, por los delitos de Supresión y alteración del estado civil, Uso de documentos falsificados y Usurpación de estado civil.

Como cuestión previa y con relación a lo expuesto por el apelante, en cuanto a que el amparo resulta prematuro y, en atención a lo argumentado tanto por el Ministerio Público como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, quienes aluden al incumplimiento del presupuesto de definitividad para acudir al amparo, señalando, específicamente la última de las citadas, que era aplicable la jurisprudencia constitucional contenida en sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictada por esta Corte en el expediente 5875-2016, en el sentido de que el asunto en discusión aún podía ser sometido, a consideración de tribunales de apelación especial o casación; esta Corte estima oportuno señalar que contra el fallo que se señala de agravante, es decir, el auto en el que se admitió la acusación formulada y se abrió a juicio el proceso penal contra el postulante, no ha existido un pronunciamiento específico que determine que no pueda acudirse directamente al amparo, y si bien, pudiese extraerse del fallo que se invoca —el cual es específico para un auto de procesamiento—, que eventualmente se podría analizar lo denunciado incluso en apelación especial o casación, cabe indicar que la jurisprudencia citada no resulta aplicable, pues la misma se refiere a casos en los que se acude al amparo contra lo resuelto en autos de procesamiento o de reforma del mismo, no contra el auto de apertura a juicio como en el presente caso.

Por lo anterior, la Corte estima que resulta procedente realizar el examen



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 23 de 40

de los agravios denunciados en la acción constitucional.

- III -

Dilucidado lo anterior y del estudio de las constancias procesales, esta Corte establece que la *quid iuris* del caso radica en la denuncia que hace el postulante respecto a que la autoridad cuestionada dictó auto de apertura a juicio en su contra sin tener motivos de hecho y de Derecho para fundamentar su decisión, dada la inexistencia de elementos típicos en los hechos imputados que encuadren en las conductas delictivas que se le imputaron, así como por la omisión de pronunciarse en lo referente a la eximente de responsabilidad penal que hizo saber en su oportunidad, la cual estima le es aplicable, derivado de su calidad de migrante, conforme lo establecido en normativa internacional aceptada por el Estado de Guatemala y ordinaria vigente, aplicable al caso concreto.

Para la resolución del asunto, primeramente se hace necesario transcribir la parte conducente de la audiencia en la que se dictó el acto reclamado, fallo en que se dispuso la admisión de la acusación formulada contra el postulante al estimar la juzgadora lo siguiente: "... en el caso de la defensa de los señores Igor Vladimirovich Bitkov y/o Gregorio Igor Benítez García y/o Leonid Zaharenko y María Irina Rodríguez Germanis y/o Irina Bitkova el abogado defensor indicó que existían motivos de improcedencia en las acusaciones formuladas por el Ministerio Público a su patrocinado y que dentro de sus motivos de improcedencia, existían motivos jurídicos de fondo, esta judicatura no puede entrar a analizar motivos jurídicos de fondo, ya que no le está permitido hacer una valoración y análisis del, perdón una valoración de los medios de prueba que pudieran llevarlo a arribar a una decisión sobre inocencia o culpabilidad. Hizo referencia también a que los delitos que se le atribuían a su patrocinado



63

conllevaran una exclusión mutua por los verbos rectores y las acciones que contemplan, sin embargo, en el caso de dichos procesados, como lo manifesté en el momento procesal oportuno el Ministerio Público, en una misma plataforma fáctica fue detallando diferentes acciones que imputaba, las cuales están diferenciadas en esa plataforma fáctica y corresponde a un órgano jurisdiccional distinto, el determinar si se cumplen o no se cumplen, se prueba o no se prueba esa plataforma fáctica y no a este órgano jurisdiccional, que en su momento procesal oportuno indicó que reunían los elementos de cada uno de los tipos penales. Yo con todo respeto don Igor Vladimirovich Bitkov le voy a pedir que tome con seriedad esta audiencia (...) así también los abogados defensores de dicho procesado hicieron referencia a que el estado civil de una persona no comprende únicamente el nombre de esta persona, sino que otros datos que la identifican y la individualizan de otras, también indicaron que para los delitos que se atribuyen a su patrocinado debe existir una persona agraviada y presentaron elementos de investigación relacionados con la inexistencia de homónimos con respecto a sus patrocinados, en este caso, los elementos de investigación que fueron incorporados se dice que existió la posibilidad de falsedad material en algunos documentos ya que se dice que le aplicaron a los mismos corrector, y que sobre estos documentos se insertaron datos, que el Ministerio Público no ha podido determinar hasta este momento procesal quien o quienes pudieron haber sido ya que estos documentos solo fueron utilizados, para los documentos que les fueron extendidos a los señores, se dice dentro de esta carpeta judicial Anastasia Bitkova, Igor Vladimirovich Bitkov y María Irina Rodríguez Germanis no se les acusa por parte del Ministerio Público a ninguno de ellos de haber intervenido directamente en esa falsedad material, pero si se hacer referencia



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 25 de 40

concretamente a cuáles son esos hechos que pudiesen constituir la falsedad material en los documentos. Hago referencia también que en el caso de la señora Anastasia Bitkova, se dice que la partida de nacimiento que se indicó le correspondía para extenderle un documento guatemalteco, sin cumplir con los requisitos legales, se dice que ni siquiera existe, porque se hace referencia a un número de partida mayor al que consta como último folio en el referido libro. Así también el abogado defensor como mencionaba indicó que no se había generado ningún daño a otra persona, pero hacía referencia a esto ya que si se indica dentro de la investigación de mérito que la partida de nacimiento que los documentos que están orientados a probar el estado civil de otra persona, fueron utilizados para sobreponer los datos de algunas de estas personas para poder extenderles documentos con una identificación distinta a la que pudiera corresponderles. Así también, hice referencia a las contradicciones de los documentos que hacían constar una inscripción en el mes de enero cuando se decía que la persona había nacido en el mes de junio del mismo año, lo que atendiendo a la lógica no es posible. También hizo referencia el abogado defensor a la eximente de responsabilidad penal de sus patrocinados de acuerdo a la Convención de Palermo y ya hizo referencia también a la Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de estos aspectos esta judicatura se pronunció oportunamente cuando fue solicitada la revisión de medidas de coerción e hizo referencia a la distinción entre una persona migrante y una persona refugiada y respecto de estos hechos también se ha pronunciado ya la honorable Sala jurisdiccional al resolver la apelación, indicando en dicha resolución que asistía la razón a esta judicatura, por lo que en este



64

momento procesal debo indicar que con respecto de esta argumentación de la defensa deberá estarse a lo ya resuelto por la honorable Sala jurisdiccional. Así también indicó el abogado defensor que las señoras Anastasia Bitkova y María Irina Rodríguez Germanis fueron sorprendidas en su buena fe, esas circunstancias por las razones que ya he expuesto no pueden acreditarse en esta etapa procesal, corresponde el dilucidar esos hechos en un juicio oral y público. Así también solicitó la clausura provisional dicho abogado defensor para que se investigara a otra entidad, en el caso concreto la juzgadora al analizar la plataforma fáctica la plataforma jurídica y los elementos de investigación que fueron incorporados por el Ministerio Público estima que los mismos cumplen con los requisitos legales y así también que en cuanto a lo solicitado en cuanto a la investigación de la otra institución o empresa que hiciera referencia no constituyen medios de investigación indispensables en el caso concreto de dichos procesados. Y que asimismo, considera esta judicatura, los abogados defensores tampoco presentaron elementos de investigación que acreditaran los extremos que hicieran relación a esa empresa...". (El resaltado es para efectos de análisis del presente fallo y el extracto fue tomado del audio que reproduce la audiencia oral de veinte de febrero de dos mil diecisiete, a partir del minuto 01:53:30 al 02:03:12). Posteriormente la Juzgadora cuestionada, especificó que admitía la acusación en contra del amparista, por los delitos de Usurpación de estado civil, Uso de documentos falsificados y Supresión y alteración del estado civil y abrió a juicio oral y público en su contra por dichos delitos, según consta del minuto 03:03:10 al 03:03:28 del audio de la audiencia relacionada.

- IV -



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 27 de 40

En atención a lo expuesto, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si con los argumentos expresados en el acto reclamado se garantizó el derecho a la tutela judicial efectiva de quien reclama la protección constitucional.

Al respecto cabe considerar que para el cumplimiento de los fines del proceso penal, es imperativo que en su tramitación se cumpla con el respeto al debido proceso, que es un derecho que asiste en igual proporción, a todas las partes en contienda, y es lo que les permite ejercer su actividad con oportunidades equivalentes, cada una en su ámbito de actuación. A su vez, el derecho a la tutela judicial efectiva exige, como instrumento que garantiza decisiones exentas de arbitrariedad e irrazonabilidad, que la resolución que se emita esté fundada en Derecho, lo que requiere una motivación fáctica y jurídica clara, completa y congruente con el asunto en discusión. Así, debe cumplirse, de manera imperativa, con respeto al debido proceso, garantía contenida en los artículos 12 y 14 constitucionales.

La normativa procesal penal establece que al concluir la etapa preparatoria e iniciar la etapa intermedia dentro del proceso penal, el Ministerio Público deberá presentar acto conclusivo, ya sea formulando acusación, solicitando la clausura provisional o pidiendo el sobreseimiento del proceso, conforme lo regulado en el artículo 332 del Código Procesal Penal, norma que en su segundo párrafo determina: *"...La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público."* Si se formula acusación, el juez contralor, debe señalar la audiencia respectiva para discutir respecto a la pertinencia del requerimiento fiscal, los hechos planteados y la



14



[Handwritten signature]



65

probabilidad de participación en los delitos imputados, tal como lo preceptúa el artículo 340 de la ley procesal penal, en la cual, luego de escuchar los argumentos de todos los sujetos procesales y tomando en consideración los medios de convicción presentados, deberá decidir si los hechos delictivos pueden o no, ser demostrados en el debate o juicio oral, decretando si lo considera procedente, el auto de apertura a juicio debidamente fundamentado, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 342 de la ley *ibidem*.

Al tenor de lo considerado, es importante traer a colación la sentencia de dieciocho de julio de dos mil doce, dictada por esta Corte, dentro de los expedientes acumulados 4121-2011, 4143-2011, 4237-2011, 4307-2011 y 4379-2011, la cual abordó el tema del auto de apertura a juicio, considerando: *"El juez contralor de la investigación penal, al conocer de la solicitud del acto conclusivo de la etapa preparatoria, debe establecer si existen fundamentos serios para someter a una persona a juicio o, por el contrario, debe decretarse el sobreseimiento, clausura provisional o en su caso, aplicar alguna medida desjudicializadora (...) la apertura a juicio procede cuando de los hechos planteados, exista la posibilidad seria de que la persona sujeta a proceso penal, deba comparecer a debate oral y público para que el ente acusador pueda demostrar que tiene alguna implicación en la comisión del hecho delictivo que se le endilga. El auto de apertura a juicio debe contener los hechos por los cuales debe defenderse el sindicado y que son suficientes para someterlo a juicio, de ahí que en su emisión deba observarse, de manera estricta, lo preceptuado en los artículos 11 Bis y 342 del Código Procesal Penal"*. (En similar sentido se pronunció esta Corte en las sentencias de diecinueve de julio de dos mil diecisiete y catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictadas dentro de los



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 29 de 40

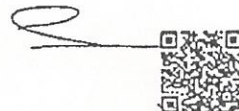
expedientes 172-2017 y 5227-2015, respectivamente).

El precedente relacionado, permite concluir que para que los autos de apertura a juicio sean constitucionalmente válidos, deben cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 11 *Bis*, 341 y 342 del Código Procesal Penal, debiendo explicar, además, los motivos de hecho y de derecho por los cuales el juez contralor de la investigación asume la decisión, con el fundamento serio y racional.

- V -

Al realizar el estudio de las constancias procesales, los alegatos de las partes, la doctrina antes citada y, en especial, del contenido de la resolución que constituye el acto reclamado, esta Corte estima que la autoridad cuestionada, al emitir la resolución reprochada, actuó sin realizar el debido análisis legal al que estaba obligada, en sujeción al derecho a la debida tutela judicial y al principio jurídico del debido proceso. Lo anterior porque con relación a la eximente de responsabilidad penal planteada por el amparista se limitó a señalar que ese aspecto ya había sido analizado en una audiencia anterior (revisión de la medida de coerción), que esa resolución había sido avalada por la Sala jurisdiccional y que en esa oportunidad hizo la distinción entre migrante y una persona refugiada. Esto evidencia que la autoridad impugnada faltó al deber de fundamentar, pues el planteamiento de la eximente de responsabilidad penal debió analizarlo en dicha audiencia y, posteriormente conocer de los otros argumentos defensivos, esto porque ese aspecto viabilizaba conocer la subsiguiente tesis de la defensa, y no simplemente indicar que la eximente de responsabilidad ya había sido resuelta.

Lo anterior conlleva a esta Corte advertir indebida fundamentación en la emisión del acto reclamado, razón por la que la autoridad cuestionada deberá



66

emitir nuevo pronunciamiento en el que analice cada uno de los planteamientos formulados por las partes.

Por otra parte, y con relación al agravio expuesto por el amparista respecto a que la autoridad impugnada no aplicó la normativa nacional e internacional vigente, especialmente la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional "Convención de Palermo" y, los artículos 5 y 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, de la Convención de Palermo; esta Corte estima pertinente señalar que la autoridad impugnada al momento de dictar nueva resolución, deberá tomar en consideración lo dispuesto en la Ley de Migración, especialmente lo contenido en el artículo 106 que preceptúa: *"Facilitación ilícita de permanencia. Comete delito de facilitación ilícita de permanencia quien, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, facilite la estadía de personas extranjeras en el territorio nacional mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso, o facilite el suministro del documento. El responsable será sancionado con prisión de seis a ocho años."*; así como lo contenido en el artículo 107 Ter, el cual establece: *"Sin perjuicio de la responsabilidad por otros ilícitos penales, no serán punibles las actividades o acciones que para entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, realicen el migrante o su familia."*, en congruencia con lo regulado en el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, Transnacional.

En atención a lo anterior, la autoridad impugnada deberá analizar y determinar lo referente a lo que debe entenderse por el término migrante,



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



336

Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 31 de 40

tomando en consideración lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en opinión consultiva OC-18/03, -Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados-, resolución de 17 de septiembre de 2003, en la que definió los siguientes conceptos: "a) *emigrar o migrar*: Dejar un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él. b) *emigrante*: Persona que deja un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él. c) *inmigrar*: Llegar a otro Estado con el propósito de residir en él. d) *inmigrante*: Persona que llega a otro Estado con el propósito de residir en él. e) *migrante*: Término genérico que abarca tanto al emigrante como al inmigrante." (Los dos puntos (:) son para efectos de separación y comprensión, no se encuentran en el texto original). Asimismo, deberá considerar lo rendido en el informe remitido por el Director General de la Dirección General de Migración, en el que se refiere que migrante es la persona que decide salir de su país, ya sea de forma regular o irregular, voluntaria o forzada y que desea permanecer de forma temporal o permanente, en este caso, en el territorio guatemalteco.

Asimismo, la autoridad objetada, al emitir el nuevo pronunciamiento, deberá tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sobre la aplicación de Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, debiendo analizar la aplicabilidad del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, Transnacional, el cual se sustenta en el aumento de actividades de grupos dedicados al tráfico ilícito de personas, estimando que ello ha generado perjuicio para estas y para los Estados y en la inexistencia de un instrumento apropiado que aborde todos los aspectos relativos a ese delito y



67

otras cuestiones conectadas con el mismo; asimismo que en dicho instrumento, los Estados Parte se comprometieron a abordar la problemática desde un enfoque más amplio e internacional, para facilitar la cooperación, el intercambio de información y para adoptar medidas, que se estimen necesarias para afrontarlo, proteger los derechos humanos, principalmente la vida, integridad y seguridad de las personas, lógicamente refiriéndose a los migrantes; que en el propio Protocolo, se establece que este complementa el texto de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumento internacional que está dirigido específicamente al tráfico ilícito de migrantes, por cualquier medio, para combatir la delincuencia y que el mismo debe interpretarse en forma conjunta, *mutatis mutandis*, salvo disposición expresa en contrario (Organización de las Naciones Unidas. Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Adoptado mediante Resolución A/RES/55/25, del 13 de noviembre del año 2000, durante la 55ava. Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos de América); y que las acciones tendientes a obtener, como fin, directa o indirectamente, un beneficio económico o de orden material, deben ser consideradas y legisladas internamente como delitos, señalando en estas acciones el tráfico ilícito de migrantes, el posibilitar el tráfico ilícito de migrantes, ya sea mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso o la facilitación, suministro o posesión de dicho instrumento; asimismo, el habilitar la permanencia de personas, nacionales o extranjeras, para que permanezcan en el Estado, sin cumplir los requisitos legales, por cualquier medio; la tentativa de comisión del delito de tráfico ilegal de migrantes, el grado de participación, la organización y dirección para la comisión de los mismos, así como las



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 33 de 40

circunstancias agravantes que se estimen necesarias y en cuanto a los migrantes la responsabilidad penal de estos.

En ese contexto, la autoridad objetada deberá desentrañar lo regulado en el referido Protocolo en sus artículos 5 y 6, para determinar su aplicabilidad al caso concreto, normas que establecen lo siguiente: **"Artículo 5. Responsabilidad penal de los migrantes. Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo."** **"Artículo 6. Penalización. 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico y otro beneficio de orden material: a) El tráfico ilícito de migrantes; b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes: i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso; ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento. c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio ilegal. 2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito: a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con**



68

sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) de párrafo 1 del presente artículo; y c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que: a) Ponga en peligro, o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados; o b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación. 4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno."

En ese sentido, corresponderá a la jueza reprochada pronunciarse realizando el análisis legal que está obligada, con relación a lo establecido en el Protocolo citado, específicamente en cuanto a lo que debe entenderse por documento de identidad o de viaje falso, conforme lo regulado en el artículo 3, en atención a que este contiene varias definiciones: "c) Por "documento de identidad o de viaje falso" se entenderá cualquier documento de viaje o de identidad: i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado; o ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 35 de 40

coacción o de cualquier otra forma ilegal; o iii) Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo."

Asimismo, la juzgadora deberá analizar lo establecido en el numeral 4) del artículo 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que regula: *"Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno."*; de donde se entiende que los Estados que han ratificado el Convenio de Palermo y el Protocolo citado, no limita a los Estados para sancionar a los migrantes que cometan delitos conforme a la normativa sustantiva correspondiente; pero ello en concatenación con lo indicado en los artículos 5 y 6, del mismo Protocolo, en cuanto a si estos son distintos a los relacionados con la creación o posesión de un documento de identidad o de viaje falso, es decir, dichas personas pueden ser sometidas a enjuiciamiento penal por cualquier conducta delictiva distinta a aquellas, ya que por virtud de esa normativa tienen exención de responsabilidad penal, dada la calidad de migrante, víctima, de la persona que los cometa.

En ese sentido, corresponderá a la autoridad cuestionada, previo a disponer la apertura a juicio, contra la persona que invoca la eximente de responsabilidad penal, con sustento en la calidad de migrante que aduce tener, determinar si, conforme la normativa citada, la conducta de dichas personas es o no susceptible de enjuiciamiento, por su participación en actividades ilícitas relacionadas con la creación o posesión de documento de identidad o de viaje falso, la determinación de dicha calidad y, en su caso, su condición o no, de víctimas, lo cual se relaciona directamente con la vulnerabilidad en el caso concreto; ello sin dejar de observar que el Estado de Guatemala como parte de la



convención relacionada y su protocolo, no deben sancionar a personas migrantes por la adquisición o posesión de documentos que no reúnan las condiciones de legalidad requeridas.

Cabe agregar que en la opinión consultiva citada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltó que: *"Lo establecido por la Corte Interamericana se extiende a la obligación de los Estados de cumplir con todo instrumento internacional que les sea aplicable. Sin embargo, es importante señalar que, al referirse a esta obligación estatal, este Tribunal considera que no solo se debe adecuar toda normativa interna al respectivo tratado, sino que, además, las prácticas estatales relativas a su aplicación, deben adecuarse al derecho internacional. Es decir, no basta con que el ordenamiento jurídico interno se adecue al derecho internacional, sino, que es menester que los órganos o funcionarios de cualquier poder estatal, sea ejecutivo, legislativo o judicial, ejerzan sus funciones y realicen o emitan sus actos, resoluciones y sentencias de manera efectivamente acorde con el derecho internacional aplicable."*

Por otra parte, pero íntimamente relacionado con el trato a los migrantes, la juzgadora deberá tomar en consideración que no puede subordinarse o condicionarse la observancia de los derechos de igualdad ante la ley y el de no discriminación por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra, lo que resulta aplicable a los migrantes, dada su especial condición de vulnerabilidad. Asimismo, que en la opinión consultiva citada, en su numeral 101, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló: *"... Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En*



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 37 de 40

339

la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del *jus cogens*". Estimación que resultaría aplicable al caso concreto, en el supuesto de así considerarlo la autoridad cuestionada, en lo relativo al trato para las personas migrantes, la igualdad y no discriminación deben respetarse y garantizarse; pues cualquier actuación u omisión en sentido contrario resulta incompatible con los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y en especial compatible en lo pertinente, con lo sostenido por dicha Corte Interamericana, en la referida opinión.

Oportuno resulta citar que en el sistema interamericano, la Corte indicada en el Caso Vélez Llor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil diez, manifestó que: "... el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana. En efecto, si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes." En el mismo sentido refiere la Corte, en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de veintiocho de agosto de dos mil catorce, párr. 350. Caso, el primero, en el que el señor Jesús Tranquilino Vélez Llor, de nacionalidad ecuatoriana, fue retenido el once de noviembre de dos mil dos, en el Puesto



19



70

Policial de Tupiza, en la Provincia del Darién, República de Panamá, por presuntamente no portar la documentación necesaria para permanecer en dicho país, posteriormente, se dictó una orden de detención en su contra y fue trasladado a una cárcel pública y el seis de diciembre de dos mil dos se resolvió imponerle una pena de dos años de prisión por haber infringido las disposiciones del Decreto Ley No. 16 sobre Migración.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad reprochada, en la emisión del acto reclamado actuó sin realizar el debido análisis legal al que estaba obligada, en sujeción al derecho a la debida tutela judicial y al principio jurídico del debido proceso, ocasionando agravio de relevancia constitucional, por lo que el amparo solicitado debe otorgarse y, al haber resuelto en el mismo sentido el *a quo*, procede confirmar el fallo emitido declarando sin lugar los recursos de apelación interpuestos, aclarando que dicha autoridad deberá motivar y fundamentar debidamente su decisión, atendiendo a lo aquí considerado, debiendo dar respuesta clara, precisa y puntual a los argumentos de las partes, analizando si resultaba aplicable al caso concreto o no, la normativa nacional e internacional citada, restituyéndolo así en los derechos afectados.

Si al emitir la resolución que en este fallo se ordena, la autoridad cuestionada, al asentar la debida fundamentación que se le requiere, advierte que su nueva decisión resulta aplicable a la situación jurídica de las personas que integran el núcleo familiar del postulante, deberá emitir las declaraciones que en derecho corresponden.

Por la forma en que se resuelve, esta Corte estima que es improcedente



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017
Página 39 de 40

realizar pronunciamiento con relación a los motivos de impugnación expuestos por los apelantes, en virtud de haber determinado la existencia de agravio al postulante, razón por la que corresponderá a la autoridad cuestionada, al emitir nueva resolución, examinar los argumentos expuestos por las partes en la audiencia de apertura a juicio antes referida.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265, 268 y 272 literal c) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 8º, 10, 42, 44, 60, 61, 66, 67, 149, 163 literal c), y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 29 y 36 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.

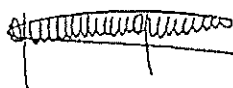
POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I) **Sin lugar** los recursos de apelación interpuestos por Banco VTB, Sociedad Anónima, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal y, como consecuencia, **confirma** la sentencia venida en grado. II) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes.

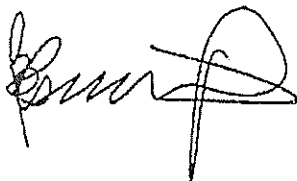


71

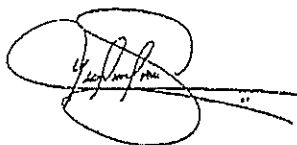
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Firmado digitalmente
por DINA JOSEFFINA
OCHOA ESCRIBANA
Fecha: 25/04/2018
1:03:31 p. m. Razón:
Aprobado Ubicación:
Corte de
Constitucionalidad



Firmado digitalmente
por BONERGE
AMILCAR MEJIA
ORELLANA Fecha:
25/04/2018 1:04:00 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad



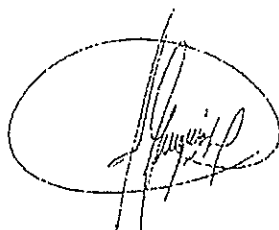
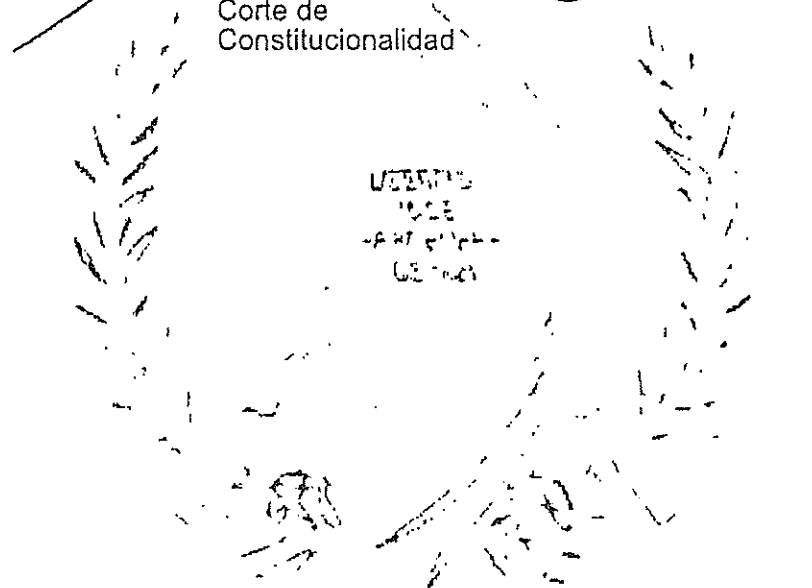
Firmado digitalmente
por GLORIA
PATRICIA PORRAS
ESCOBAR Fecha:
25/04/2018 1:04:11 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad



Firmado digitalmente
por NEFTALY
ALDANA HERRERA
Fecha: 25/04/2018
1:05:35 p. m. Razón:
Aprobado Ubicación:
Corte de
Constitucionalidad



Firmado digitalmente
por JOSE
FRANCISCO DE
MATA VELA Fecha:
25/04/2018 1:07:44 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad



Firmado digitalmente
por MARTIN RAMON
GUZMAN
HERNANDEZ Fecha:
25/04/2018 1:11:14 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad





37

39

Página 1 de 39

01071-2010-001644 Of. 1º. JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE CON COMPETENCIA PARA CONOCER DE PROCESOS DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D". GUATEMALA, OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. -----

Para resolver la situación jurídica del procesado IGOR BITKOV y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA y/o LEONID ZAHARENCO, sindicado por los delitos de USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL, SUPRESIÓN Y ALTERACIÓN DEL ESTADO CIVIL Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS, se tiene a la vista el proceso penal identificado en el acápite. -----

a) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO: IGOR BITKOV y/o IGOR VLADIMIROVICH BITKOV y/o GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA y/o LEONID ZAHARENCO, de nacionalidad rusa, casado, de cuarenta y nueve años de edad, se identifica con pasaporte de la Federación Rusa número sesenta y dos número siete millones seiscientos diez mil quinientos cuarenta y seis, Ingeniero Forestal y Administrador, nació el siete de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, hijo de Vladimirovich Bitkov y Tamara Bitkova.-----

b) DE LOS HECHOS POR LOS QUE FORMULÓ ACUSACIÓN Y SOLICITUD DE APERTURA A JUCIO EL MINISTERIO PÚBLICO Y SU CALIFICACIÓN JURÍDICA:-----

Los hechos y circunstancias motivo de la acusación que se le atribuye al procesado IGOR BITKOV y/o IGOR VLADIMIROVICH BITKOV y/o LEONID ZAHARENCO y/o GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA, por los delitos de Usurpación del Estado Civil, Supresión y Alteración del Estado Civil y Uso de documentos falsificados, son los hechos contenidos en el memorial de fecha veintisiete de abril de dos mil quince y ratificados en la audiencia de apertura a juicio, que transcritos de las actuaciones son los siguientes: "A usted Igor Vladimirovich Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco, se

72

le imputa que utilizó desde el año dos mil nueve, hasta la fecha, en el territorio guatemalteco, las identidades de Gregorio Igor Benítez y Leonid Zaharenko, y para ello usted, hizo uso de documentos que fueron emitidos por diferentes instituciones y registros públicos, tales como los registros, alcaldías municipales, Registro Nacional de las Personas, Dirección General de Migración, entre otras, que contienen datos de identidad falsos y que corresponden a usted. -----

De esa cuenta, usted hizo inscribir en los registros de personas correspondientes hechos que crearon y alteraron el estado civil de personas y a sabiendas se aprovechó de las inscripciones falsas que se materializaron. En principio utilizó certificación de la partida número trescientos sesenta y dos (362), folio ciento ochenta y uno (181), del libro cuarenta y cuatro (44) de nacimientos del Registro Civil del municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa, cuyo asiento, por medio del peritaje correspondiente, se determinó que se encontraba alterado, Con la certificación del asiento de nacimiento alterado, usted logró obtener la cédula de vecindad número de orden F guion seis y de registro veintidós mil trescientos veinte extendida por el Alcalde Municipal del municipio de Guazacapán, departamento de Santa Rosa, documento de identificación emitido a nombre de Gregorio Igor Benítez García, la cual fue asentada de forma extemporánea. Con base en el documento alterado, ya descrito, usted se apropió en forma ilícita de la identidad de otra persona, quien en un momento determinado estuvo inscrito en la partida que fue alterada y, con ello usted adquirió derechos que el Estado de Guatemala otorga a sus ciudadanos. -----

Utilizando la identidad adquirida, mediante la cédula de vecindad número de orden F guion seis y de registro veintidós mil trescientos veinte, extendida por el alcalde Municipal del municipio de Guazacapán, departamento de Santa Rosa, usted realizó las siguientes gestiones: a) Con fecha veintidós de abril de dos mil nueve, compareció ante los oficios



del notario Héctor René López Sandoval y Sandoval en el otorgamiento de escritura pública número diez, para la constitución de la sociedad mercantil, denominada Mirgib Investments, Sociedad Anónima; b) Con fecha veintitrés de abril de dos mil nueve, obtuvo la licencia de conducir clase B-Liviana, la cual fue emitida por la dependencia correspondiente de la Policía Nacional Civil, a nombre de Gregorio Igor Benitez García; c) En fecha dieciséis de mayo de dos mil nueve, gestionó y obtuvo el pasaporte guatemalteco número ciento diez billones seiscientos once mil millones doscientos veintitrés mil doscientos tres a nombre de Gregorio Igor Benitez García, emisión de documento que generó alerta en la autoridad competente de la Dirección General de Migración, sobre posibles anomalías en la documentación, y en consecuencia el documento en referencia fue cancelado con posterioridad.-----

Derivado de la advertencia realizada por la autoridad migratoria, para usted fue necesario crear y utilizar una nueva identidad, por lo que gestionó la obtención de Documento Personal de Identificación en el Registro Nacional de las Personas, utilizando para ello, los siguientes documentos: a) Certificación de la partida número cuatrocientos ochenta y dos (482), folio doscientos veintiocho (228), del libro catorce-GN (14-GN) de guatemaltecos naturalizados del Registro Civil de la municipalidad del municipio de Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, la cual materialmente es inexistente, ya que la investigación determinó que en el folio doscientos veintiocho (228) del libro catorce GN (14 GN) de guatemaltecos naturalizados, obra la partida número veintidós (22), y consta la inscripción de la naturalización del señor Ernesto Villa Alfonso; b) Cédula de vecindad número de orden A guion uno (A-1) y número de registro ochenta y tres mil trescientos doce (83,312), presuntamente extendida a nombre de Leonid Zaharenko, por parte del Alcalde Municipal del municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala, sin embargo, dicho asiento de cédula, corresponde a Wendy Jeaneth Mus Chiro, habiendo usted, usurpado el

[Handwritten signature and scribbles]

estado civil de dicha persona.-----

Con los datos de los documentos que usted presentó, para gestionar el Documento Personal de Identificación, fue enrolado el cinco de abril de dos mil once en el Sistema del Registro Civil (SIRECI) del Registro Nacional de las Personas, por Cristian Mauricio Chacón Aguirre, con lo que se le asignó Código Único de Identificación, dos mil doscientos treinta y siete, treinta mil sesenta y ocho, cero ciento uno, a nombre de Leonid Zaharenco, y de esa cuenta el trece de mayo del mismo año, le fue emitido Documento Personal de Identificación, momento en el que usted obtuvo identidad ilegal e ilegítima.----

El Documento Personal de Identificación, expedido por el Registro Nacional de las Personas con Código Único de Identificación dos mil doscientos treinta y siete, treinta mil sesenta y ocho, cero ciento uno (2237 30068 0101), a nombre de Leonid Zaharenco, lo utilizó para realizar las siguientes gestiones: a) En fecha veintidós de abril de dos mil once, cuando compareció ante el notario Héctor René López Sandoval y Sandoval, quien en acta notarial hizo constar su nombramiento como Administrador Único y Representante legal de la entidad Reiki, Sociedad Anónima; c) El cuatro de junio de dos mil once, se identificó con el documento descrito, para comparecer en el acta notarial de matrimonio, en la que consta el matrimonio civil con María Irina Rodríguez Germanis, que fue autorizado por el notario Héctor René López Sandoval y Sandoval; c) El veintiuno de julio de dos mil once, utilizando el documento en cuestión, se le extendió el pasaporte guatemalteco ciento diez billones ciento un mil ciento veintitrés millones setecientos treinta mil sesenta y uno (110,101,123,730,061) a nombre de Leonid Zaharenco.-----

Por lo que usted, aprovechó documentación alterada y/o falsa y obtuvo documentos e identificación, con los que se apropió en forma anómala de la identidad de otras personas, realizó gestiones y adquirió en forma ilegítima derechos, que el Estado de Guatemala otorga a sus ciudadanos, actuando en todo momento, en detrimento del orden jurídico



estatal al haber alterado los datos relativos al estado civil, en perjuicio de la fe pública nacional.-----

Los hechos descritos se encuadran plenamente en los tipos penales de SUPRESIÓN Y ALTERACIÓN DEL ESTADO CIVIL, regulado en el artículo 240 del Código Penal, el tipo penal de USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL, regulado en el artículo 241 del Código Penal y el tipo penal de USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS, regulado en el artículo 325 del Código Penal.-----

CONSIDERANDO:

Que el artículo 341 del Código Procesal Penal establece: "Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez, inmediatamente, decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio o de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por veinticuatro horas, debiendo para ello, en la misma audiencia, citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurren, tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales." Y el Artículo 342 del Código Procesal Penal dice: Auto de Apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1) La designación del tribunal competente para el juicio. 2) Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas, que deben formar parte de ella. 3) La designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez sólo la admite parcialmente. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación."-----

20/06/17

CONSIDERANDO:

Que con fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, esta judicatura dictó auto de apertura a juicio y admitió la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del señor Igor Bitkov y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o Leonid Zaharenco y/o Gregorio Igor Benitez García por los delitos de Usurpación del estado civil, Uso de documentos falsificados y Supresión y alteración del estado civil. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete interpusieron amparo a favor de dicho procesado, siendo el acto reclamado la resolución del veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal número mil setenta y uno guion dos mil diez guion mil seiscientos cuarenta y cuatro (auto de apertura a juicio) a cargo de este juzgado, y con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, del municipio y departamento de Guatemala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo resuelve: "...I) Se otorga el amparo solicitado por Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenco o Gregorio Igor Benítez García en contra de la Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo grupo "D" y para sus efectos positivos, ordena a la autoridad reclamada: a) dejar sin efecto en cuanto al postulante, la resolución del veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la autoridad impugnada dentro del proceso penal número mil setenta y uno guion dos mil diez guion mil seiscientos cuarenta y cuatro, por medio de la cual declaró auto de apertura a juicio y se admite acusación en contra del accionante por los delitos de uso de documentos falsificados, usurpación del estado civil y supresión y alteración (sic) del estado civil; b) Se conmina a la autoridad impugnada a dictar resolución tomando en cuenta lo aquí considerado. II). Ordena a la autoridad reclamada de cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que reciba ejecutoria de lo

17/03/17

19/10/2017



resuelto, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa de un mil quetzales, y de quedar sujeto a las responsabilidades legales consiguientes; III) No hay condena en costas con base al artículo 45 de la ley de la materia; IV) Notifíquese y en su oportunidad envíese copia certificada del presente fallo a la Autoridad Recurrída y a la honorable Corte de Constitucionalidad, para los efectos legales correspondientes.”, sentencia que fue confirmada por la Honorable Corte de Constitucionalidad, en resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la cual en su parte resolutive dice: “...I) Sin lugar los recursos de apelación interpuestos por Banco VTB, Sociedad Anónima, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal y, como consecuencia, confirma la sentencia venida en grado. II) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes.” La Honorable Corte de Constitucionalidad en el considerando V de dicha resolución manifiesta: “...Esto evidencia que la autoridad impugnada faltó al deber de fundamentar, pues el planteamiento de la eximente de responsabilidad penal debió analizarlo en dicha audiencia y, posteriormente conocer de los otros argumentos defensivos, esto porque ese aspecto viabilizaba conocer la subsiguiente tesis de la defensa, y no simplemente indicar que la eximente de responsabilidad ya había sido resuelta. Lo anterior conlleva a esta Corte advertir indebida fundamentación en la emisión del acto reclamado, razón por la que la autoridad cuestionada deberá emitir nuevo pronunciamiento en el que analice cada uno de los planteamientos formulados por las partes.” Siendo que el artículo 51 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad preceptúa: “Conminatoria al obligado. Decretada la procedencia del amparo, en la misma sentencia el tribunal conminará al obligado para que dé exacto cumplimiento de lo resuelto dentro del término de veinticuatro horas salvo que para ello fuere necesario mayor tiempo a juicio del tribunal, que en este

*no esta
actuando el
base a la
ordenado*

*tenen
a la orden
+ la CC*

caso fijará el que estime conveniente.", por lo que encontrándome dentro del plazo conferido y en cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte de Constitucionalidad con observancia de lo establecido en el artículo 11Bis del Código Procesal Penal, procedo a emitir nueva resolución de etapa intermedia con respecto a la acusación y solicitud de apertura a juicio formulada por el Ministerio Público en contra del señor Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco, después de haber escuchado los argumentos de todas las partes y analizar los elementos de investigación que han sido incorporados dentro de este proceso. Siendo que el Ministerio Público formuló acusación y solicitud de apertura a juicio en escrito de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, petición que fue ratificada en la audiencia intermedia que para el efecto se realizó, respecto de dicha solicitud los querellantes adhesivos y agraviado realizaron sus argumentaciones correspondientes y solicitaron que se declarara con lugar la petición del Ministerio Público. El señor Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco hizo uso de su derecho de defensa material, manifestando que él no tuvo relación con ningún otro acusado, que los extorsionaban en Rusia y por eso tuvieron que venir en año dos mil nueve, que la Convención de Palermo establece que no puede ser juzgado por el uso de documentos falsificados, que no pudo haber intervenido en la falsificación de los documentos porque no habla el español, además que no era posible burlar la seguridad del Registro Nacional de las Personas, que contactó un bufete profesional y ellos les ofrecieron un trámite legal y a él le explicaban que hacer, que si cambiaron los nombres y que de eso no se arrepentía, que lo que si le sorprendió fue que cambiaron el lugar de su nacimiento, indicó que él no debía estar en la cárcel, porque él es inmigrante y es víctima. Por su parte el Abogado Defensor planteó una excepción de falta de acción y se opuso a la constitución definitiva del Querellante Adhesivo Banco VTB, habiéndose resuelto lo pertinente en cuanto a la excepción de falta de acción,



resolución que fue impugnada y en cuanto a este aspecto la Honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio revocó la resolución emitida por esta judicatura que confería intervención definitiva al Banco VTB en condición de querellante adhesivo, siendo que a partir de dicha resolución se ha tenido por separado al Banco VTB, en el presente caso corresponde pronunciarme únicamente en cuanto a que ha sido declarada con lugar la excepción de falta de acción y oposición a la constitución del Querellante Adhesivo Banco VTB, al estimarse que no posee legitimación activa para tal efecto, toda vez que no se encuentra debidamente acreditado que dicha institución pueda ser considerada como víctima en este proceso, atendiendo a los delitos que se investigan en contra del señor Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco y el bien jurídico tutelado por cada uno de esos delitos, por lo que es procedente aclarar que la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa del señor Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco, quedó debidamente resuelta y a la presente fecha se encuentra firme. En cuanto a la formulación de acusación y solicitud de apertura a juicio, el abogado defensor argumentó entorno a cinco motivos de improcedencia de la solicitud del Ministerio Público, constituyendo todos ellos motivos jurídicos de fondo, que hacen notoriamente improcedente lo pedido por el Ministerio Público, en cuanto al primer motivo, resaltó que la acusación formulada en contra de su patrocinado indica que él hizo inscribir, lo que resalta la intervención directa; sin embargo recordó que su cliente no es funcionario ni empleado público, por lo tanto no pudo haber tenido acceso al papel o los insumos necesarios para alterar documentos públicos, dijo que los mismos querellantes adhesivos reconocieron que su patrocinado no hablaba el idioma español cuando vino a Guatemala, esta parte de la acusación del Ministerio Público indicó la defensa que es contradictoria, porque en la misma acusación indica que su patrocinado, intervino directamente en la falsificación, y después de que

hizo inscribir se aprovechó de los documentos, por lo que pidió que se analizara la tipicidad y los verbos rectores de cada delito, así como el sujeto activo y el sujeto pasivo, el dolo, la conducta delitos de acción, etc. En el delito de supresión y alteración del Estado Civil, dijo el defensor que el Ministerio Público señala que el señor Igor Bitkov hizo inscribir, donde establece la intervención que el tipo penal contempla una conducta directa, un delito de acción, pero cuando lo acusan por el uso de documentos falsificados dice que él no intervino, el delito de Supresión y alteración del estado civil y Usurpación del estado civil son dos figuras delictivas que se excluyen mutuamente, esa exclusión de delitos es por participación del sujeto activo, indicó así mismo que la gran interrogante es ¿intervino o no intervino? ¿Alteró o usó el documento?, pero no se puede acusar de dos conductas por un mismo hecho cuando se excluyen mutuamente. El Ministerio Público dice que el señor Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco usurpó el estado civil, el bien jurídico tutelado es el estado civil de la persona usurpada, Creus dijo que: "Un ser que no existe, no posee estado civil alguno y por lo tanto no es posible su usurpación", resaltó esto por lo siguiente, el Ministerio Público dijo en el primer párrafo que se le imputa a su patrocinado, que utilizó desde el año dos mil nueve las identidades de Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco, lo que consultaron al Registro Nacional de las Personas quien les indicó que no se encontró ningún homónimo para esos nombres y apellidos, (Leonid Zaharenco no existe, por lo tanto no puede usurparse su identidad) según el informe del Registro Nacional de las Personas, Registro Civil ciento noventa y cinco guion treinta mil novecientos setenta y seis (195-30976) interesado Miguel Ángel Giordano Navarro. Ese es el segundo motivo de fondo, la persona cuyo estado civil se usurpa debe ser real, debe llevarse a cabo para usar los derechos y acciones de las personas, por lo que no tipifica en el caso de su patrocinado, toda vez que argumenta que dichas identidades no existen, por lo tanto no



hay perjudicado. El tercer motivo de improcedencia de la acusación o requerimiento del Ministerio Público por motivo de fondo, argumentó que consistía en que en la acusación se dice que la alteración en una parte fue directa y por la otra parte se dice que fue a través del Sireci, manifestó que creía que existe una confusión del Ministerio Público, porque ellos dicen que se echó corrector, que se hicieron alteraciones, pero no dicen quien lo hizo, el enrolador hace caso omiso de la alteración, pero él no fue el que hizo la alteración, solo hace el enrolamiento, pero no nos dice quien fue, en el caso del señor Bitkov involucran a Cristhian Mauricio Chacón Aguirre, porque el Ministerio Público dice que fue él quien hizo la alteración a través del usuario Cchacón y a través del equipo transcrito, hizo el enrolamiento a través de un usuario, él nunca recibió el usuario, el abogado defensor puso a la vista la sentencia del señor Cristhian Mauricio Chacón Aguirre donde se absuelve a dicha persona en otro juzgado. El cuarto motivo según el abogado defensor, es la eximente de responsabilidad penal, la cual manifestó que consiste en que se encuentra regulada en tres cuerpos normativos, uno de carácter internacional y dos decretos del Congreso de la República dentro de los cuales destaca el Decreto 36-2003 que aprueba el contenido de la Convención de Palermo, para entenderlo indicó que tenemos que entender que es un migrante, dijo que extranjero es sinónimo de migrante, el artículo 1 de la Ley de Migración tiene por objeto profundizar en esa definición de migrante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número OC guion dieciocho diagonal tres, (OC-18/03), también dijo que UNICEF y la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES, en la página siete de la guía normativa de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que produjo Unicef y la OIM; los migrantes efectúan los procesos de migración por buscar oportunidad de mejores niveles de vida, pobreza, escapar de la guerra, persecución, desempleo y violaciones de derechos humanos, dijo así mismo que la familia Bitkov antes de migrar a Guatemala eran

empresarios exitosos en Rusia, presentó fotos de las fábricas, y la relación social que ellos pudieron haber tenido, dijo que fueron víctimas del allanamiento corporativo, que su país de origen es Rusia y que ellos se trasladaron a Guatemala, están sus pasaportes rusos en el expediente, hay copias y fueron sujetos de secuestro, y se encuentran en poder del Ministerio Público, mostró fotos para acreditar que vienen de Rusia, que fueron empresarios exitosos y que son migrantes, dijo que ellos salieron de Rusia, hubo un estado de necesidad, cuando se piensa en migrantes se piensa en personas de escasos recursos, pero no hay duda que extranjero o migrante son sinónimos. Agregó que el Diccionario de la Real Academia Española dice que migrar es trasladarse desde el lugar en el que se habita hacia otro diferente. Hizo análisis de los artículos 5 y 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y que la otra eximente se debe a que entró en vigencia el decreto 10-2015 del Congreso de la República de Guatemala en el artículo 107 ter, sin perjuicio de la responsabilidad que por otros ilícitos penales pudieran tener los migrantes, pero que las acciones imputadas a su patrocinado no son punibles. El quinto motivo es la existencia de una red criminal relacionada con la entidad Cuttino Internacional Off Shore, que es la entidad que le cobró la cantidad de cincuenta mil dólares por los documentos falsos, por lo que su patrocinado es víctima de esos hechos y debe investigarse a la entidad Cuttino Internacional Off Shore, respecto de la cual presentaron una denuncia penal. Como lo he indicado, la Honorable Corte de Constitucionalidad en resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho emitida dentro de los expedientes acumulados seis mil noventa y ocho guion dos mil diecisiete y seis mil ciento treinta guion dos mil diecisiete, ordena emitir nuevo pronunciamiento partiendo del análisis de la eximente de la responsabilidad penal invocada por el Abogado Defensor del procesado, para ello entonces procederé al análisis



de la normativa nacional e internacional vigente, la que fue invocada por el procesado y su abogado defensor, realizando el análisis de convencionalidad. Al respecto el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional tiene como finalidad prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico, de conformidad con lo preceptuado en el artículo dos de dicho Protocolo. Importante deviene entonces definir el término migrante, para ello por orden de la Honorable Corte de Constitucionalidad se analiza el informe remitido por el Director General de la Dirección General de Migración, en el que establece: "...migrante es la persona que decide salir de su país, ya sea de forma regular o irregular, voluntaria o forzada y que desea permanecer de forma temporal o permanente, en este caso, en el territorio guatemalteco." El Decreto 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala en el artículo 73 contempla el Estatus Ordinario migratorio, y dice que es el que se les otorga a las personas extranjeras en razón de su ingreso y permanencia en el territorio nacional de acuerdo a la siguiente clasificación: a) Turista, b) Residente temporal y c) Residente Permanente, mientras que el extranjero en situación irregular de conformidad con el artículo 197 del mismo cuerpo legal es la persona extranjera cuando ingresó o habita en el territorio nacional, de buena fe y de forma pacífica, pero que no cuenta con ninguno de los estatus ordinarios migratorios definidos por dicho decreto. Mientras que en la opinión consultiva OC guion dieciocho diagonal cero tres: -Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados-, resolución del diecisiete de septiembre de dos mil tres, en la que definió los siguientes conceptos: "a) emigrar o migrar Dejar un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él. b) emigrante Persona que deja un Estado con el propósito de trasladarse a otro y

[Handwritten signature and scribbles]

establecerse en él. c) inmigrar Llegar a otro Estado con el propósito de residir en él. e) migrante Término genérico que abarca tanto al emigrante como al inmigrante." En el caso del procesado podría entonces considerarse que es un inmigrante voluntario en este país de acuerdo a las clasificaciones que anteceden. Pero debemos tomar en consideración que el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, hace referencia a los "migrantes que son objeto de tráfico ilícito", siendo que el mismo Protocolo define que debe entenderse por tráfico ilícito de migrantes, en el artículo tres que literalmente dice: "a) Por "tráfico ilícito de migrantes" se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material." Así en la literal b) del mismo artículo define qué debe entenderse por entrada ilegal, de la siguiente manera: "b) Por "entrada ilegal" se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor". En el caso del procesado Igor Bitkov y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o Gregorio Igor Benítez García y/o Leonid Zaharenko, de conformidad con los medios de investigación que han puesto en conocimiento de la juzgadora las partes, se dice que él ingresó legalmente al país y posteriormente gestionó los diferentes documentos de identificación que pudo haber usado. En cuanto al documento de identidad o de viaje falso, el artículo 3 del referido Protocolo lo define de la siguiente forma: "c) Por "documento de identidad o de viaje falso" se entenderá cualquier documento de viaje o de identidad: i) Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado; o ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; o iii) Utilizado por una persona que no sea su titular

4406



legítimo." Por su parte el Decreto cuarenta y cuatro guion dos mil dieciséis del Congreso de la República de Guatemala en el artículo 90 dice: "Documentos de viaje. Los documentos de viaje del migrante o viajero guatemalteco son los expedidos por el Instituto Guatemalteco de Migración, para que puedan migrar o viajar de acuerdo a los estatus migratorios reconocidos internacionalmente. Son también documentos de viaje del migrante o viajero aquellos expedidos por las autoridades migratorias de otros países para que sus nacionales puedan ingresar, permanecer y egresar de Guatemala conforme al derecho migratorio vigente en el país. Se reconoce para las personas guatemaltecas como para personas extranjeras, el uso de otros documentos de identidad como documentos de viaje cuando existan acuerdos bilaterales o multilaterales con los países respetivos y que validen el uso de otros documentos. La única excepción al uso del pasaporte será cuando exista acuerdo o convenio bilateral o multilateral de poder ingresar a territorio de otro país mediante otro documento de identidad. El pasaporte es el documento de identidad de los guatemaltecos en el extranjero, y es expedido de forma exclusiva por el Instituto Guatemalteco de Migración." Y el artículo 103 del mismo cuerpo legal define los documentos de viaje, así: "Son documentos de viaje los extendidos para guatemaltecos por el Instituto Guatemalteco de Migración y que permiten a las personas obtener las autorizaciones correspondientes, así como registrar los ingresos, permanencia y egresos de otros países. También son documentos de viaje los extendidos por autoridades migratorias de otros países y que le permiten a los nacionales de ese país registrar la autorización, ingreso, permanencia y egreso a territorio guatemalteco." Desde esa perspectiva podemos considerar los pasaportes y el documento personal de identificación que se dice extendidos en Guatemala al procesado, bajo diferentes nombres y datos de identificación personal, como documentos de viaje y de identificación, sin embargo dentro de esta clasificación atendiendo a las definiciones legales que anteceden,

[Handwritten signature]

no podríamos incluir el Certificado de Guatemalteco Naturalizado, la Licencia de Conducir clase B-Liviana, las Certificaciones de Partida de Nacimiento, la Certificación de Matrimonio, las tarjetas de crédito, documentos que se dice fueron extendidos al procesado y que contienen diferentes nombres y datos de identificación personal, que se dice no corresponden con la verdadera identidad del procesado. En este punto deviene importante también la consideración de lo preceptuado en los artículos 5 y 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, de la Convención de Palermo, que dicen: "Artículo 5. Responsabilidad penal de los migrantes. Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo." "Artículo 6. Penalización. 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material: a) El tráfico ilícito de migrantes; b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes: i) La creación de un documento de viaje o de identidad falso; ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal documento; c) La habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o cualquier otro medio ilegal. 2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito: a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 del



presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del presente artículo; y c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo. 3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que: a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados; o b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación. 4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno." El tráfico ilícito de migrantes ha sido una preocupación mundial, que representa una tarea compleja debido a su naturaleza clandestina y a la dificultad de determinar cuándo la migración irregular es facilitada por contrabandistas o redes de crimen organizado, este fenómeno delincuenciaal hace vulnerables a los migrantes a la explotación y el riesgo respecto de sus vidas, por la forma en que generalmente son trasladados y tratados, debido a que no recurren a vías legales para su movimiento migratorio, siendo conocido que muchas veces son trasladados en condiciones inhumanas, en el doceavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, indicaron que las mejores formas para captar la complejidad de este delito, es enfocarlo como una red de transacciones, en la que para que se produzca una operación es necesario que los nodulos fundamentales de las redes cumplan su función, puede abarcar desde empresarios individuales que

[Handwritten signature and scribbles]

guían a los migrantes a través de segmentos de frontera hasta grandes grupos sofisticados de traficantes transnacionales que controlan todos los aspectos de la operación delictiva. En este Congreso clarificaron que los migrantes objeto de tráfico ilícito no son víctimas de este delito, pero pueden serlo de otros delitos y de violaciones de sus derechos humanos a lo largo de todo el proceso de su tráfico. En el caso concreto el procesado y su abogado defensor han argumentado que le es aplicable la eximente de responsabilidad penal debido a que la juzgadora desconoció su calidad de migrante tratándolo como criminal cuando en realidad dice ser víctima, dijo también que no se tomó en consideración que no podía alterar los documentos de soporte de los documentos de viaje o de identidad que le fueron extendidos por empleado o funcionarios de las instituciones públicas que le emitieron los documentos referidos, que oportunamente denunció al bufete de abogados denominado "Cuttino International Off Shore" por su responsabilidad en el delito de Tránsito Ilícito de personas, al ser la entidad que tramitó los documentos por los que se le acusa (estos argumentos también están plasmados en las páginas dos y tres de la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho a que hemos hecho referencia) siendo que también dijo que esa estructura criminal lo engañó; esta judicatura al analizar la normativa citada, los elementos de convicción incorporados al proceso y el argumento del procesado y su defensa, encontramos que no existen elementos de investigación que nos permitan pensar fundadamente que la entidad Cuttino International Off Shore que señala el procesado, pueda ser una estructura criminal que opera de manera transnacional para el tráfico ilícito de migrantes, toda vez que no se aportó ningún documento que refleje la operatividad de la red criminal a que hizo referencia Naciones Unidas en el doceavo Congreso Sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, ni los países en que pudiera operar, o la presentación de algún elemento de convicción que mostrara la estructura



jerárquica y los roles de esa red criminal que señala el procesado y su defensa, por el contrario al analizar detenidamente lo que el propio procesado ha manifestado respecto que el documento de viaje o de identidad que se dice contiene datos falsos, le fue extendido y entregado por autoridades del Estado de Guatemala que fueron las que se los emitieron con base en documentos de soporte falsos, si bien en su defensa ha indicado que pagó la cantidad de cincuenta mil dólares para que le fuera extendido, no existe en el proceso de mérito algún medio de convicción que respalde el dicho del procesado en cuanto a este aspecto, por el contrario encontramos dentro de los medios de convicción las constancias de pago y entrega de los documentos de soporte que fueron documentados en fotografía tras su incautación en el allanamiento que se realizó en la residencia del procesado, donde se encontraron los documentos que fueron utilizados para obtener las cédulas de vecindad, el documento personal de identificación y los pasaportes que poseen la foto del procesado pero consignan datos de identificación personal distintos a los que en realidad le corresponden, por ejemplo en cuanto a su nacionalidad, ya que como él mismo lo ha manifestado es de nacionalidad Rusa, sin embargo en todos esos documentos se hace referencia a que es guatemalteco, y en algunos de ellos se dice que es nacido en Guatemala y en otros que es Guatemalteco naturalizado, dentro de esos documentos que fueron encontrados en la residencia del procesado y los que fueron remitidos a solicitud del Ministerio Público por las entidades relacionadas con su emisión, encontramos el documento personal de identificación que le fue extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, el cual requirió la presencia del solicitante (en este caso el procesado) para tomar la fotografía correspondiente y la firma que debe plasmarse en presencia del empleado público encargado de esta tarea, en el formulario respectivo, menciono esto debido a que atendiendo a la lógica y la experiencia, tenemos elementos de convicción que conducen a

[Handwritten signature and scribbles]

pensar que el procesado acudió personalmente a las instituciones que extendían dichos documentos, realizó acciones de pago, de solicitud y de recepción de los referidos documentos, sin que en todo ese trámite pueda observarse algún elemento de convicción que conduzca a pensar en la intervención de la entidad Cuttino International Off Shore, en la creación del documento de viaje o de identidad falso, así como la facilitación, el suministro o posesión de dichos documentos o la facilitación al procesado para permanecer sin llenar los requisitos legales en el país. También es importante resaltar que el Protocolo Contra el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire establece el ámbito de aplicación en el artículo 4, cuando indica que se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del referido Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado. Es precisamente en el artículo 3 de la Convención de Palermo, aprobada con el Decreto 36-2003 del Congreso de la República de Guatemala, que se establecen los parámetros de los crímenes transnacionales, al precisar que los delitos imputables al crimen organizado tendrán carácter transnacional cuando se cometen en más de un Estado, cuando se cometen dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado, o se comete en más de un Estado. Pero en el presente caso, no se ve reflejado en los elementos de investigación ese carácter transnacional de quienes pudieron haberle extendido los documentos de identificación al procesado, debido a que los elementos de convicción presentados establecen la posibilidad de que se trate de una estructura criminal que operaba al interior de instituciones públicas en el país, dentro de ellas se ha mencionado el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y en el caso concreto no se percibe de los elementos de investigación que



alguna de las fases de preparación, planificación, dirección o control en la expedición de los documentos de identidad falsos hubiese sido realizada por la entidad que refiere el procesado y ni que el procesado hubiese podido darles al ingresar con ellos en otros países, una vinculación con alguna estructura criminal transnacional, por lo que reitero que en el caso concreto no existen elementos de convicción que nos muestren el carácter transnacional de quien pudo extender los documentos de identificación falsos que indica el Ministerio Público en su acusación. Por otra parte el artículo 106 de la Ley de Migración preceptúa: "Facilitación ilícita de permanencia. Comete delito de facilitación ilícita de permanencia quien, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, facilite la estadía de personas extranjeras en el territorio nacional mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso, o facilite el suministro del documento. El responsable será sancionado con prisión de seis a ocho años.", así como lo contenido en el artículo 107 Ter de la misma ley, el cual establece: "Sin perjuicio de la responsabilidad por otros ilícitos penales, no serán punibles las actividades o acciones que para entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, realicen el migrante o su familia.", en el presente caso el Ministerio Público ha formulado acusación en contra del señor Igor Bitkov y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o Leonid Zaharenko y/o Gregorio Igor Benítez García por acciones distintas a las contempladas en el artículo 107 Ter de la Ley de Migración, debido a que ha acusado la utilización de documentos falsos para diferentes actos, como por ejemplo la obtención de la Licencia de conducir clase B-Liviana, el contraer matrimonio, adquirir tarjetas de crédito, constituir empresas, etc., en los cuales ha dejado plasmados datos relativos al Estado Civil de las Personas, los cuales existe la probabilidad de que no le correspondan al acusado, en congruencia con lo regulado en el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas

Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, esta judicatura estima que las acciones acusadas por el Ministerio Público no están contenidas dentro de las exenciones de responsabilidad penal que contempla el artículo 107 Ter de la Ley de Migración, por las disposiciones contenidas en el referido Protocolo que hemos mencionado. En el caso Velez Llor vs. Panamá. Excepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil diez manifestó que: "...el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana. En efecto, si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes", reiterando la posibilidad de que el Estado de Guatemala pueda deducir responsabilidades penales, y delimitando el ámbito de discrecionalidad a las políticas migratorias, porque ello conlleva también la observancia de la seguridad pública que también es una obligación estatal contenida en la Constitución Política de la República. Tomando en consideración que el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que en materia de Derechos Humanos tienen preeminencia los Tratados y Convenios Internacionales, se ha analizado la aplicabilidad de lo preceptuado en la Convención de Palermo y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa dicha Convención, sin embargo, esta judicatura llega a la conclusión de que en el presente caso no se dan los presupuestos legales ni fácticos para considerar la aplicabilidad de la eximente de responsabilidad penal establecida en el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la



Delincuencia Organizada, Transnacional, a favor del procesado, toda vez que por lo expuesto, no estima esta judicatura que existan elementos de convicción que nos permitan establecer la calidad de víctima que aduce poseer el procesado, aunado a lo indicado por Naciones Unidas al respecto. Es importante también agregar que en el caso de la procesada ANASTASIA BITKOVA, ella interpuso amparo el veinticinco de junio de dos mil quince en contra de la resolución en la cual se le dictó prisión preventiva en esta causa penal y dentro de las violaciones que denunció en ese amparo, se encuentran la violación a los derechos humanos y de los migrantes, haciendo referencia a la preeminencia del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos y el quebrantamiento de lo establecido en la Convención de Palermo, en virtud de que la Sala de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, en resolución de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince declaró sin lugar el recurso de apelación promovido y confirmó lo dispuesto por el juez de primer grado, ante ello acudió en amparo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien en resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis dentro del amparo identificado con el número mil ciento noventa y seis guion dos mil quince, se pronunció de la siguiente manera: "Realizado el examen del amparo y las copias certificadas de los expedientes que sirven de antecedentes, es oportuno mencionar que si bien es cierto Guatemala firmó, aceptó y ratificó el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (...) también lo es, que los tratados y convenios internacionales en cuya categoría se encuentren la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no son parámetros para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma, tal como lo indicó la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente número ciento treinta y uno guion noventa y cinco en sentencia del doce de marzo de mil novecientos noventa y siete, y haciendo

referencia específicamente a lo estipulado en el artículo 6 del Protocolo antes mencionado preceptúa: "...Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno ..." lo antes citado deja claro que el Estado de Guatemala tiene plena libertad de accionar penalmente si tiene conocimiento de la comisión de hechos delictivos. A este respecto, es preciso aclarar que la Promulgación del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la Convención de Palermo, como su nombre bien lo indica es para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes, delito que no debe ser confundido con la comisión de un ilícito penal encuadrado en el Código Penal de Guatemala. Derivado de lo anterior, se establece que tanto el órgano de primer grado como el de segundo grado actuaron en el ámbito de la ley, pues se determina que concurrieron elementos suficientes para que la A quo de acuerdo a su sana crítica razonada, estimara la participación de la postulante en la comisión de los hechos delictivos que se le acusan y la existencia de indicios racionales de suponer peligro de fuga por ser la amparista persona extranjera aún y cuando resida en el país (...) y no evidencia ninguna violación de derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala, ni en instrumentos internacionales y que la decisión fue tomada y fundamentada conforme a derecho..." habiendo denegado por notoriamente improcedente dicho amparo la Honorable Corte Suprema de Justicia, contra esta sentencia la procesada interpuso recurso de apelación que fue conocido por la Honorable Corte de Constitucionalidad en el Expediente número dos mil setecientos sesenta y seis guion dos mil dieciséis, y en resolución de fecha diez de julio de dos mil diecisiete en la página dos indica: "D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: indicó que la autoridad cuestionada al emitir el auto que constituye el acto reclamado vulneró los derechos y el principio jurídico enunciados, debido a que incumplió con lo establecido en



el artículo 46 constitucional respecto a la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos, ya que el auto de prisión preventiva dictado en su contra viola la Convención de Palermo, que prohíbe enjuiciar penalmente a los migrantes por hechos relacionados a la creación o posesión de un documento de identidad o de viaje falsos, derivado de lo cual tanto ella como sus padres, se encuentran exentos de responsabilidad penal, considerando la clase de delitos por los que se les acusa..." y al resolver declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la postulante Anastasia Bitkova. De manera que la Honorable Corte Suprema de Justicia había hecho el análisis de convencionalidad respecto de la aplicabilidad de la exención de responsabilidad penal al amparo de la Convención de Palermo y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, estimando que en el caso concreto Anastasia Bitkova podía ser sometida a proceso penal, por su parte la Honorable Corte de Constitucionalidad estimó que no existía agravio al momento de resolver, debido a que la amparista ya no se encontraba en prisión preventiva, por haberle sido otorgadas medidas sustitutivas de la prisión preventiva, pero teniendo conocimiento de que tal circunstancia implica el sometimiento a proceso penal de la procesada Anastasia Bitkova, por lo que con fundamento en lo considerado y en los antecedentes que dentro de esta causa penal obran en materia constitucional, conocida por la Honorable Corte Suprema de Justicia y la Honorable Corte de Constitucionalidad, esta judicatura estima que no concurren los presupuestos para considerar la existencia de la eximente penal invocada por el procesado y su abogado defensor, atendiendo a ello considero que respecto de lo indicado por la Honorable Corte de Constitucionalidad en el penúltimo párrafo del folio treinta y ocho de la resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, atendiendo al principio de igualdad contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de

[Handwritten signature and scribbles]

la República de Guatemala, lo resuelto por la Honorable Corte Suprema de Justicia respecto de la exención de la responsabilidad penal invocada por la defensa, es aplicable al procesado y su núcleo familiar lo resuelto por la Honorable Corte Suprema de Justicia que permite el juzgamiento penal de los mismos. En cuanto a la tipicidad de los delitos, La supresión y alteración del estado civil contemplado en el artículo 240 del Código Penal establece que: "Será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de cien mil a quinientos mil quetzales quien: 1. Falsamente denunciare o hiciere inscribir en el registro de personas correspondiente, cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona, o que a sabiendas, se aprovechare de la inscripción falsa. 2. Ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil. 3. Inscribiere o hiciere inscribir un nacimiento inexistente o proporcionare datos falsos de los progenitores. El funcionario público que a sabiendas autorizare o inscribiere un hecho falso en el registro de personas correspondiente, será sancionado con prisión de seis a diez años e inhabilitación para empleo o cargo público por el doble de la pena impuesta." Es un tipo penal que no requiere de la cualificación del sujeto activo, ya que puede ser cualquier persona, así también establece la posibilidad de que el sujeto activo hiciere inscribir en el registro de personas correspondiente, cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona, entendido este como el conjunto de cualidades inherentes a la persona, que toma la ley civil para asignarles determinados efectos, como la nacionalidad, el matrimonio, la filiación, el parentesco, la capacidad, etc., es importante recordar que el estado civil presenta tres características que son la indivisibilidad, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad. La indivisibilidad del estado de las personas implica que una misma persona no puede tener dos o más estados contrarios, no puede ser guatemalteco natural, guatemalteco naturalizado y ruso a la vez, tampoco puede la persona modificar por sí misma su estado por el principio de inalienabilidad, y es un



derecho imprescriptible, una persona no podría perder su nombre por el transcurso de determinado período de tiempo, es materia de interés público, porque en los litigios que se generan en torno al estado civil de las personas es obligada la intervención del Estado, como en los casos de rectificación de las inscripciones de las diferentes actas del estado civil asentadas en el Registro lo que conlleva un procedimiento especial, en el caso concreto han sido incorporados elementos de convicción en los cuales se dice que se encontraron partidas de nacimiento que han sido alteradas, sobreponiendo datos relativos al estado civil del procesado, respecto de los datos relativos al estado civil de la persona a quien corresponde el documento según los peritajes llevados a cabo, así la Cédula de Vecindad número de Orden A guión Uno y de Registro ochenta y tres mil trescientos doce que figura extendida al procesado, indica el Ministerio Público que corresponde a Wendy Jeaneth Mus Chiro, quien es la persona que podría verse afectada, estando viva o muerta según lo que la doctrina establece para este tipo penal, porque ese documento no podría servir a ambas personas, consecuentemente una de ellas se verá perjudicada, de los elementos de convicción se genera la probabilidad de que el procesado hubiere actuado con conocimiento de esas circunstancias. El delito de Usurpación del Estado Civil está contemplado en el artículo 241 del Código Penal que dice: "Usurpación del Estado Civil. Quien usurpare el estado civil de otro será sancionado con prisión de dos a cinco años." La usurpación es un término que procede del latín usurpatio, y ha sido conceptualizado como la acción de apoderarse de una propiedad o de un derecho ajeno, en el presente caso el tipo penal hace referencia a la apropiación de un derecho ajeno que es el estado civil, por lo que el delito en sus elementos es distinto al delito de Supresión y alteración del estado civil y por ende no se excluyen mutuamente. De conformidad con los elementos de convicción el procesado pudo haber gestionado la extensión de documentos, llenando formularios con datos relativos al estado civil distintos a los que le

[Handwritten signature and scribbles]

corresponden, dentro de ellos con respecto a la nacionalidad, siendo que él es de nacionalidad Rusa, pero en pasaportes que le fueron habidos indican que es guatemalteco a excepción de uno de esos pasaportes en el que si consta que es ruso, siendo que de conformidad con el movimiento migratorio se puede observar que él ha viajado con dichos pasaportes a países en los cuales no necesitan visa los guatemaltecos, pudiendo ejercer un derecho reservado a los guatemaltecos, a través de documentación que se dice falsa, y dentro de esos datos relativos al estado civil se refiere a la nacionalidad, ya que se dice que el procesado en realidad es de nacionalidad rusa. El artículo 325 del Código Penal establece que comete este delito: "Quien, sin haber intervenido en la falsificación, hiciere uso de un documento falsificado, a sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual pena que la que correspondiere al autor de la falsificación." Es un tipo penal que tampoco exige una cualificación especial en el sujeto activo, por lo que puede ser cometido por cualquier persona, su verbo rector es hacer uso y es necesario que no haya intervenido en la falsificación, recordemos que la falsificación puede ser material, que es la dirigida a la corporeidad del documento y en este caso como lo indicara el abogado defensor no es razonable pensar que él pudo participar directamente en la emisión del documento falso, porque se dice que esto se realizó por funcionarios y empleados públicos que tenían el acceso a las bases de datos y los materiales para la emisión de los documentos, y por ello también es lógico pensar que quienes insertaron finalmente la información en documentos como las cédulas de vecindad y los pasaporte fueron otras personas, siendo que el Ministerio Público no le acusó al señor Igor Bitkov y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o Leonid Zaharenko y/o Gregorio Igor Benitez García, la creación de los documentos falsos, sino solo su uso, a sabiendas de su falsedad, la probabilidad del conocimiento acerca de la falsedad del documento, se colige del hecho que los nombres de los padres y lugar de nacimiento por ejemplo eran



distintos a los reales y era un dato muy evidente en la documentación que se dice falsificada, por lo que existe la probabilidad de que se hubiese actuado por parte del procesado con dolo o intencionalidad, por lo que esta judicatura estima que se dan los elementos de los tipos penales en los hechos acusados por el Ministerio Público en este caso, y existe la probabilidad de participación del procesado, estimando que ninguno de los tipos penales es excluyente con respecto del otro, por las razones expuestas. Respecto de los elementos de investigación que ha incorporado el Ministerio Público en el proceso encontramos: la certificación extendida por la Subdirectora de la Subdirección de Documentos de Identificación Internacional, de la Dirección General de Migración de fecha seis de marzo de dos mil catorce, que corresponde al expediente completo que se identifica en dicha institución con el número trescientos veintiocho guion dos mil once guion HIT (328-2011-HIT) a nombre de Leonid Zaharenko, en el cual se detectó que existía registro de trámite de pasaporte con datos diferentes y que anteriormente se le extendió el pasaporte número ciento diez billones seiscientos once mil millones doscientos veintitrés mil doscientos tres a nombre de GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA, trámite en el cual consta que se identificó con el documento personal de identificación número dos mil doscientos treinta y siete espacio treinta mil sesenta y ocho espacio cero ciento uno extendido en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, según consta en la solicitud de fecha once de julio de dos mil once dirigida a la Dirección General de Migración. Estos elementos de convicción nos hacen pensar en la probabilidad del conocimiento que el señor Igor Bitkov y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o Leonid Zaharenko y/o Gregorio Igor Benitez García tenía, debido a que los datos proporcionados para la emisión de los referidos pasaportes era muy distinta, y consta en las actuaciones que el procesado envió una solicitud para que le extendieran el pasaporte con los datos de la nueva petición, a lo cual accedieron, constando la resolución favorable, no obstante

[Handwritten signature and scribbles]

haber dado hit. Dentro de este expediente se presentó así mismo el certificado de nacionalidad que acredita al procesado como GUATEMALTECO NATURALIZADO, y en el que se consigna que de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número ciento cuarenta y seis guion mil novecientos noventa y ocho, se ha concedido a Leonid Zaharenco la nacionalidad guatemalteca, consta una copia del documento de identificación personal que utilizaba a nombre de Leonid Zaharenco, la Certificación del Certificado de Guatemalteco Naturalizado, del Registro Civil de las Personas de la República de Guatemala extendida con fecha veintiuno de febrero de dos mil once, la constancia del HIT identificado con el número seis mil ochocientos treinta y cinco guion GTM y el informe remitido por el Ingeniero José Antonio Samayoa, Gerente General de Corporación Inmobiliaria La Luz, Sociedad Anónima, en el que detalla los datos del pasaporte del señor Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco, detectado por el Reporte de Coincidencias "HIT" número seis mil ochocientos treinta y cinco GTM en el cual se indica que es la misma persona, pero nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento diferentes, señalando los datos de ambos pasaportes de la siguiente manera: pasaporte actual, números de los casos novecientos mil un millones novecientos ochenta y siete mil cincuenta y siete, centro de captura: Guatemala, identificación dos mil doscientos treinta y siete espacio treinta mil sesenta y ocho espacio cero ciento uno y A guion Uno ochenta y tres mil trescientos doce, nombre: Leonid Zaharenco con fecha de nacimiento veinticinco de junio de mil novecientos setenta y tres, pasaporte sin información y lugar de nacimientos Rusia, Rusia; mientras que el pasaporte anterior presentaba los siguientes datos: número de casos novecientos mil un millones seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho, centro de captura: Guatemala, identificación: F guion seis veintidós mil trescientos veinte, nombre: Gregorio Igor Benitez García, fecha de nacimiento siete de agosto de mil novecientos sesenta y siete, número



de pasaporte ciento diez billones seiscientos once mil millones doscientos veintitrés mil doscientos tres, lugar de nacimiento: Taxisco, Santa Rosa. Además contiene las fotografías que identifican al solicitante nuevo y al posible duplicado y se establece que ambas fotografías corresponden a la misma persona (el procesado), las firmas que fueron colocadas en cada solicitud y se observa que ambas firmas son diferentes, consta el formulario de solicitud de pasaportes de fecha veintiuno de julio de dos mil once firmada por el sindicato bajo el nombre de Leonid Zaharenko, la solicitud de pasaportes, renovación firmada por el sindicato bajo el nombre de Gregorio Igor Benítez García de fecha dieciséis de mayo de dos mil nueve, la copia de la cédula de vecindad número de orden F guion seis y de Registro veintidós mil trescientos veinte con que se identificaba el sindicato bajo el nombre de Gregorio Igor Benítez García, el Certificado de Nacimiento número de partida trescientos sesenta y dos, del folio ciento ochenta y uno del libro cuarenta y cuatro, a nombre de Gregorio Igor Benítez García, en el que consta como fecha del nacimiento el siete de agosto de mil novecientos sesenta y siete, y el lugar, municipio de Taxisco, del departamento de Santa Rosa, Guatemala, figurando como datos de la madre María Elena García Palencia e Igor Fernando Benítez Fernández, extendida con fecha treinta de abril de dos mil nueve, Certificación del Libro de Cédulas número veintinueve, en donde a Folio doscientos doce se encuentra inscrito el Asiento F guion seis veintidós mil trescientos veinte, en el que se inscribe el señor Gregorio Igor Benítez García, indica que es hijo de Igor Fernando Benítez Fernández y María Elena García Palencia, que nació en Taxisco, Santa Rosa, el día siete de agosto de mil novecientos sesenta y siete, es soltero, comerciante, si sabe leer y escribir, que reside en Barrio de Agosto, consta la fotocopia de la inscripción en el libro que coincide con la certificación descrita anteriormente en cuanto a sus datos, consta el Certificado de Guatemalteco Naturalizado inscrito en la partida número cuatrocientos ochenta y dos, folio doscientos

veintiocho del libro catorce guion GN, consta la copia del formulario de sustitución de cédula, de fecha cinco de abril de dos mil once, en el que consta la fotografía del sindicado, quien en ese formulario se identificó con el nombre de Leonid Zaharenco, se identificó con la cédula de vecindad número de orden A guion Uno y de registro ochenta y tres mil trescientos doce, dicho formulario aparece firmado, la fotocopia de la Cédula de Vecindad número de orden A guion Uno y de Registro ochenta y tres mil trescientos doce, extendida por el Alcalde de Villa Canales, del departamento de Guatemala, en el cual se indica que su lugar de nacimiento es la Unión Soviética y sus padres son Andrey Zaharenco y Nina Cutacova, y que la fecha de emisión de la primera cédula es el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, que se inscribió como guatemalteco naturalizado el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, y que se le emitió dicha cédula con fecha dos de febrero de dos mil nueve, figura el oficio de fecha cuatro de marzo de dos mil trece en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Jurídicos, informa que no existe expediente de nacionalidad a nombre del señor LEONID ZAHARENCO, la copia simple del informe de la Superintendencia de Administración Tributaria en el que aparece registrado a nombre de LEONID ZAHARENCO el vehículo tipo automóvil con placa de circulación P cero seiscientos nueve FPC, el movimiento migratorio del sindicado solicitado con los nombres de Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco, en el que le aparece movimiento migratorio con el nombre de LEONID ZAHARENCO, de las siguientes fechas y destinos: nueve de agosto de dos mil doce a El Salvador, diez de septiembre de dos mil doce a España, veintisiete de noviembre de dos mil doce a Panamá, veintinueve de noviembre de dos mil doce a Panamá, veintiséis de junio de dos mil trece a Panamá, veintinueve de septiembre de dos mil trece a Costa Rica, nueve de junio de dos mil catorce a Panamá, el informe circunstanciado DIG doscientos treinta y tres guion dos mil



trece diagonal doscientos treinta y cinco guion dos mil trece diagonal doscientos treinta y siete guion dos mil trece diagonal trescientos noventa y nueve guion dos mil trece, en sus conclusiones indica: "1. La identidad de LEONID ZAHARENCO y GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA, corresponden a una misma persona, que presuntamente es de nacionalidad rusa, utilizando para identificarse como LEONID ZAHARENCO, una inscripción registral que no existe en libro físico, y para identificarse como GREGORIO IGOR BENÍTEZ GARCÍA, una partida de nacimiento que se encuentra totalmente alterada en los datos principales del inscrito. 2. El señor LEONID ZAHARENCO, utilizó documentos fraudulentos a sabiendas que los mismos eran irregulares, al momento de solicitar el Documento Personal de Identificación, con ésta identidad, presentando para el efecto copia de una cédula de vecindad que no le corresponde, así como la certificación de la partida de Guatemalteco Naturalizado.", el oficio de fecha trece de enero de dos mil quince en el que se remite información de licencia de conducir del señor LEONID ZAHARENCO Y/O GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA, en el que consta que se le extendió licencia de conducir con el nombre de GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA, el veintitrés de abril de dos mil nueve, con fecha de vencimiento siete de agosto de dos mil trece, se identificó con la cédula de vecindad número de orden F guion cero seis y de registro veintidós mil trescientos veinte, extendida en Guazacapan, Santa Rosa, con fecha de nacimiento siete de agosto de mil novecientos sesenta y siete, casado, comerciante, primera licencia de conducir, el álbum fotográfico identificado como informe ECA quinientos cuarenta y dos guion novecientos noventa y nueve guion dos mil quince guion doscientos sesenta y dos, referencia M tres mil quinientos cuarenta y dos guion dos mil once guion ciento dieciséis mil ciento noventa y seis, de fecha treinta de enero de dos mil quince en el que quedaron documentados los tres pasaportes que le fueron habidos al señor Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco, en las.

fotografías números tres, cuatro, cinco y seis, en la fotografía número cuatro figura el pasaporte a nombre de GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA extendido el dieciséis de mayo de dos mil nueve, con fecha de vencimiento dieciséis de mayo de dos mil catorce, en la fotografía número cinco el pasaporte a nombre de LEONID ZAHARENCO, extendido con fecha cuatro de enero de dos mil once y fecha de vencimiento cuatro de enero de dos mil dieciocho, en la fotografía número seis el pasaporte a nombre de IGOR BITKOV y en la fotografía número diecinueve el pasaporte a nombre de LEONID ZAHARENCO extendido con fecha veintiuno de julio de dos mil once con fecha de vencimiento veintiuno de julio de dos mil dieciséis, el álbum fotográfico identificado como Informe número ECA quinientos cuarenta y dos guion novecientos noventa y nueve guion dos mil quince guion doscientos veintidós, que corresponde a fotografías tomadas a la evidencia incautada en el momento del allanamiento a la vivienda del sindicado, en el que en la fotografía número doce se observa la constancia de Guatemalteco Naturalizado a que hemos hecho referencia, en la fotografía número trece se observa el formulario de Autorización de Pago del trámite de guatemalteco naturalizado del señor Leonid Zaharenco, el cual tiene un sello que se lee "ENTREGADO", en la fotografía número catorce se muestra el indicio dos consistente en dos hojas de papel engrapadas que corresponden al Certificado de Guatemalteco Naturalizado, en la fotografía número quince se muestra el formulario de sustitución de cédula a nombre de LEONID ZAHARENCO, en la fotografía treinta y dos se observan tres tarjetas de crédito a nombre de GREGORIO BENITEZ GARCÍA con fecha de vencimiento cinco de mayo de dos mil doce la identificada como TOSI, VISA, la DENIZBANK, VISA en julio de dos mil catorce y la BALTIKUMS MASTER CARD en julio del dos mil trece, en la fotografía treinta y cinco el documento personal de identificación a nombre de LEONID ZAHARENCO, en la fotografía treinta y nueve la cédula de vecindad a nombre de GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA y la constancia del número de



identificación tributaria número seis millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco guion nueve a nombre de GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA con fecha de inscripción nueve de junio de dos mil nueve, copia del primer testimonio de la Escritura Pública número veintitrés autorizada en la ciudad de Guatemala, el dieciocho de agosto del año dos mil quince, por el notario Victor Lubeck Rivas Fajardo, otorgó Mandato Especial-Administrativo y Judicial con Representación al Doctor en Derecho Miguel Ángel Giordano Navarro, habiéndose identificado el sindicato con el pasaporte extendido en Rusia y los nombres de Igor Bitkov y/o Gregorio Igor Benitez Garcia y/o Leonid Zaharenco, copia de las actas de fechas veintidós de junio del año dos mil quince y veinticuatro de agosto de dos mil quince en las cuales se indica que el Abogado Jorge Leonel Franco Moran ha comparecido al Consulado y Embajada Rusa para tramitar el pasaporte Ruso del sindicato, fotocopia del acta notarial de matrimonio civil de fecha cuatro de junio de dos mil once, realizada por el Notario Héctor René López Sandoval y Sandoval, en la cual autoriza el matrimonio civil de los señores LEONID ZAHARENCO y MARIA IRINA RODRIGUEZ GERMANIS, en donde el sindicato bajo juramento declara ser de treinta y siete años de edad, soltero, comerciante, guatemalteco, de este domicilio, que se identifica con el Documento Personal de Identificación número dos mil doscientos treinta y siete espacio treinta mil sesenta y ocho espacio cero ciento uno extendido por el Registro Nacional de las Personas, que su nacimiento tuvo lugar en la Ciudad de San Petersburgo, Federación Rusa, el día veinticinco de junio del año mil novecientos setenta y tres y que es hijo de Andrey Zaharenco y Nina Cutacova, en donde se indica que los datos relativos a su estado civil, suministrados por el contrayente, constan en la certificación de la inscripción de guatemaltecos naturalizados, copia del testimonio especial de la escritura pública número diez, autorizada en la ciudad de Guatemala, el día veintidós de abril del año dos mil nueve, por el notario Héctor René López Sandoval y

[Handwritten signature and scribbles]

Sandoval, en la cual consta la comparecencia del señor Gregorio Igor Benitez García, quien declara ser de cuarenta y un años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, persona que se identifica con la cédula de vecindad número de orden F guion seis y de registro veintidós mil trescientos veinte extendida por el Alcalde Municipal de Guazacapán, departamento de Santa Rosa, en la que dice que necesita interprete, la copia del acta notarial de nombramiento del señor GREGORIO IGOR BENITEZ GARCÍA que facciona el notario Héctor René López Sandoval y Sandoval en español y sin interprete. En esta etapa del proceso no se requiere una certeza acerca de la participación del acusado en los hechos que se le atribuyen, sino como lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal solo es necesario analizar los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate, no está permitido a la juzgadora la valoración de los medios de prueba, pero es necesario su análisis para determinar esa probabilidad, que se ve reflejada en cuanto que como ha quedado anotado, el procesado pudo realizar de manera personal las acciones contempladas en los tres tipos penales que se le acusan, debido a que como se dijo fueron incautadas evidencias en su residencia, en las cuales se hace constar pagos y entregas de documentos solicitados para gestionar otros, como cédulas de vecindad, pasaportes y documento personal de identidad, así también pudo haber llenado formularios con datos de identificación personal que no le correspondía según las actuaciones, las discrepancias en los datos de identificación del procesado como ha quedado anotado eran evidentes como por ejemplo en el tema de la nacionalidad, toda vez que se dice que es de nacionalidad rusa, pero le fueron extendidos documentos en los cuales figura como guatemalteco natural, y en otros como guatemalteco naturalizado, los nombres que fueron utilizados en las cédulas de vecindad, documento personal de identificación y pasaportes son muy distintos por ejemplo Igor Bitkov, Leonid Zaharenco y Gregorio Igor Benitez García, lo cual resulta evidente para



55/417

cualquier persona y no se encuentra justificado en los medios de convicción presentados, así mismo con uno de los pasaportes que fue extendido al procesado como guatemalteco y en el cual se identificaba con el nombre de LEONID ZAHARENCO de conformidad con el movimiento migratorio se dice que viajó a El Salvador, Panamá, Costa Rica y España, todos países en los que los guatemaltecos no necesitamos de visa para poder ingresar, teniendo conocimiento que su nacionalidad es distinta, también como se dijo pudo obtener tarjetas de crédito, realizar contratos mercantiles y contraer matrimonio con datos de identificación personal que no le corresponden, todo ello derivado del análisis de esos medios de convicción a los que me he referido en este considerando, por lo que estimo que en el presente caso concurren los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código Procesal Penal, para estimar la probabilidad de que los hechos acusados al señor Igor Bitkov y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o Leonid Zaharenco y/o Gregorio Igor Benitez García, calificados como delitos de Uso de documentos falsificados, Usurpación del estado civil y Supresión y alteración del estado civil, puedan ser demostrados en un juicio oral y público al cumplir las plataformas fáctica, jurídica y probatoria con los requisitos establecidos en la ley, por esa razón considero que es procedente declarar sin lugar el sobreseimiento solicitado por la defensa del señor Igor Bitkov y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o Leonid Zaharenco y/o Gregorio Igor Benitez García, y en consecuencia se admite la acusación y solicitud de apertura a juicio formulada por el Ministerio Público, y en ese sentido debe resolverse.-----

LEYES APLICABLES: Artículos citados y 12, 14, 46, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1,2,3,4,5,11Bis,16,20, 21, 160,169, 332, 332Bis, 336, 337,338,339,340,341,342,343 del Código Procesal Penal; 240, 241, 325 del Código Penal; 56, 57,58, 59, 60, 61, 62,63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76 del Decreto Número 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala; 3 de la Convención de las Naciones

Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; 1, 2,3, 4, 5, 6, del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; 141,142,143 de la Ley del Organismo Judicial.-----

POR TANTO: Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I) **ADMITIR LA ACUSACIÓN Y SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO** en contra del señor Igor Bitkov y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o Leonid Zaharenco y/o Gregorio Igor Benítez García, por los delitos de **USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL, SUPRESIÓN Y ALTERACIÓN DEL ESTADO CIVIL y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS;** II) Se confiere participación definitiva al Ministerio Público que ha actuado a través del Agente Fiscal Rudy Manolo Herrera Lemus, pero que atendiendo a su principio de unidad puede actuar cualquier fiscal en lo sucesivo; Querellante Adhesivo Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala a través de su Mandataria Judicial con Representación, Abogada Claudia González Orellana, Querellante Adhesivo Registro Nacional de las Personas, a través de su Representante Legal Abogado Luis Roberto de León Rodríguez y Abogado Juan Manuel Antonio Mendoza Zepeda, Agraviado Procuraduría General de la Nación a través del Abogado Ismar Gustavo Yapur Estrada, Acusado señor Igor Bitkov y/o Igor Vladimirovich Bitkov y/o Leonid Zaharenco y/o Gregorio Igor Benítez García y Abogados Defensores Licenciado José Rolando Alvarado Lemus, Abogado Luis Alfredo Morales del Cid y Abogada Victoria Sandoval Caceres; III) Se designa para conocer de juicio oral y público en el presente caso, al Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo del grupo "A"; IV) Se señala la audiencia para conocer del ofrecimiento de prueba de la presente causa para el día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho a las catorce horas, debido a la complicada



50418
Página 39 de 39

agenda de audiencias de este órgano jurisdiccional y que se encuentran señaladas otras audiencias con anterioridad; V) No ha lugar al sobreseimiento solicitado por lo antes considerado; VI) NOTIFIQUESE.

Abogada. ERIKA LORENA AIFAN DAVILA

JUEZA

JESSICA ALEJANDRINA MORALES CRUZ

SECRETARIA

91

441
Of-478



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

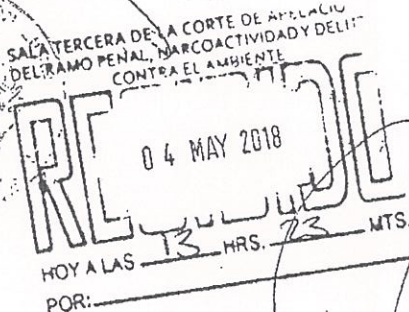
La Infrascrita Secretaria General Adjunta de la Corte de Constitucionalidad

CERTIFICA:

Que la fotocopia anterior, compuesta de veintiseis hojas, es auténtica por ser fiel y exacta reproducción de la sentencia de veinticinco de abril de dos mil dieciocho y el auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictados por esta Corte dentro de los expedientes acumulados seis mil noventa y ocho - dos mil diecisiete y seis mil ciento treinta-dos mil dieciocho (6098-2017 y 6130-2018) formados por apelación de sentencia en amparo directa en la acción constitucional promovida por Igor Bitkov ó Igor Vladimirovich Bitkov o Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García contra la Jueza Primera de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Procesos de Mayor Riesgo Grupo "D" del departamento de Guatemala.

Y, para remitir a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo extendiendo, sello y firmo la presente, haciendo constar que de conformidad con lo que dispone el artículo 69 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad no existen recursos pendientes de resolver ni notificaciones pendientes de practicar, relacionados con la sentencia y el auto definitivos que la Corte de Constitucionalidad dictó en el asunto. Guatemala, dos de mayo de dos mil dieciocho.

MAIRA ANTONIA PIMENTEL DELGADO
SECRETARIA GENERAL ADJUNTA





EXPEDIENTES ACUMULADOS 6098-2017 y 6130-2017

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, treinta de abril de dos mil dieciocho.

Se tiene a la vista, para resolver, la solicitud de ampliación formulada por la Procuraduría General de la Nación, tercera interesada, por medio del abogado Pedro Estuardo Paz Pérez, con relación a la sentencia dictada por esta Corte el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente arriba identificado, formado por apelación de sentencia.

ANTECEDENTES

I. DEL PLANTEAMIENTO DEL AMPARO Y RESOLUCIÓN DE PRIMER

GRADO: Igor Bitkov o Igor Vladimirovich Bitkov o Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García promovió amparo contra la Jueza Primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo, Grupo "D" del departamento de Guatemala, señalando como acto reclamado la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Jueza denunciada, por la que dictó auto de apertura a juicio y admitió la acusación formulada por el Ministerio Público en su contra, por los delitos de Usurpación de estado civil, Uso de documentos falsificados y Supresión y alteración del estado civil.

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, otorgó la protección constitucional solicitada al considerar que los hechos imputados por la Fiscalía contenían como hipótesis normativa, presupuestos inculcados directamente al estado de calidad de



migrante del amparista, Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García y que conforme la normativa aplicable, debía respetarse el derecho que le asistía, no pudiendo ser objeto de proceso penal, porque Guatemala como país signatario del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, Transnacional, no podía dejar de observar lo regulado en este.

II. DE LAS APELACIONES PROMOVIDAS Y LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO

GRADO: el Banco VTB, Sociedad Anónima por medio de su Mandatario Judicial con Representación Juan Carlos Alvizurez Salguero, tercero interesado, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, tercera interesada y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, apelaron lo resuelto.

Esta Corte, al resolver en alzada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho confirmó el otorgamiento del amparo, considerando para el efecto que la autoridad cuestionada no había realizado el debido análisis legal al que estaba obligada, en sujeción al derecho a la debida tutela judicial y al principio jurídico del debido proceso, porque *"... con relación a la eximente de responsabilidad penal planteada por el amparista se limitó a señalar que ese aspecto ya había sido analizado en una audiencia anterior (revisión de la medida de coerción), que esa resolución había sido avalada por la Sala jurisdiccional y que en esa oportunidad hizo la distinción entre migrante y una persona refugiada..."* faltando al deber de fundamentar *"... pues el planteamiento de la eximente de responsabilidad penal debió analizarlo en dicha audiencia y, posteriormente conocer de los otros argumentos defensivos, esto porque ese aspecto viabilizaba conocer la*



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA



Página 3
Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017

subsiguiente tesis de la defensa, y no simplemente indicar que la eximente de responsabilidad ya había sido resuelta...". Agregando que: "... con relación al agravio expuesto por el amparista respecto a que la autoridad impugnada no aplicó la normativa nacional e internacional vigente, especialmente la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 'Convención de Palermo' y, los artículos 5 y 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, de la Convención de Palermo; esta Corte estima pertinente señalar que la autoridad impugnada al momento de dictar nueva resolución, deberá tomar en consideración lo dispuesto en la Ley de Migración, especialmente lo contenido en el artículo 106 que preceptúa: 'Facilitación ilícita de permanencia. Comete delito de facilitación ilícita de permanencia quien, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, facilite la estadía de personas extranjeras en el territorio nacional mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso, o facilite el suministro del documento. El responsable será sancionado con prisión de seis a ocho años.'; así como lo contenido en el artículo 107 Ter, el cual establece: 'Sin perjuicio de la responsabilidad por otros ilícitos penales, no serán punibles las actividades o acciones que para entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, realicen el migrante o su familia.', en congruencia con lo regulado en el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, Transnacional.", debiendo "...analizar y determinar lo referente a lo que debe entenderse por el término migrante, tomando en consideración lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en opinión consultiva OC-18/03, -Condición jurídica y



94

derechos de los migrantes indocumentados-, resolución de 17 de septiembre de 2003, en la que definió los siguientes conceptos: 'a) emigrar o migrar: Dejar un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él. b) emigrante: Persona que deja un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él. c) inmigrar: Llegar a otro Estado con el propósito de residir en él. d) inmigrante: Persona que llega a otro Estado con el propósito de residir en él. e) migrante: Término genérico que abarca tanto al emigrante como al inmigrante' (...) considerar lo rendido en el informe remitido por el Director General de la Dirección General de Migración, en el que se refiere que migrante es la persona que decide salir de su país, ya sea de forma regular o irregular, voluntaria o forzada y que desea permanecer de forma temporal o permanente, en este caso, en el territorio guatemalteco. (...) tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sobre la aplicación de Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, debiendo analizar la aplicabilidad del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, Transnacional, el cual se sustenta en el aumento de actividades de grupos dedicados al tráfico ilícito de personas, estimando que ello ha generado perjuicio para estas y para los Estados y en la inexistencia de un instrumento apropiado que abordara todos los aspectos relativos a ese delito y otras cuestiones conectadas con el mismo; asimismo que en dicho instrumento, los Estados Parte se comprometieron a abordar la problemática desde un enfoque más amplio e internacional, para facilitar la cooperación, el intercambio de información y para adoptar medidas, que se estimen necesarias para afrontarlo, proteger los derechos humanos,



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



343

Página 5
Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017

principalmente la vida, integridad y seguridad de las personas, lógicamente refiriéndose a los migrantes; que en el propio Protocolo, se establece que este complementa el texto de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumento internacional que está dirigido específicamente al tráfico ilícito de migrantes, por cualquier medio, para combatir la delincuencia y que el mismo debe interpretarse en forma conjunta, mutatis mutandis, salvo disposición expresa en contrario (Organización de las Naciones Unidas. Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Adoptado mediante Resolución A/RES/55/25, del 13 de noviembre del año 2000, durante la 55ava. Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos de América); y que las acciones tendientes a obtener como fin, directa o indirectamente, un beneficio económico o de orden material, deben ser consideradas y legisladas internamente como delitos, señalando en estas acciones el tráfico ilícito de migrantes, el posibilitar el tráfico ilícito de migrantes, ya sea mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso o la facilitación, suministro o posesión de dicho instrumento; asimismo, el habilitar la permanencia de personas, nacionales o extranjeras, para que permanezcan en el Estado, sin cumplir los requisitos legales, por cualquier medio; la tentativa de comisión del delito de tráfico ilegal de migrantes, el grado de participación, la organización y dirección para la comisión de los mismos, así como las circunstancias agravantes que se estimen necesarias y en cuanto a los migrantes la responsabilidad penal de estos. (...) la autoridad objetada deberá desentrañar lo regulado en el referido Protocolo en sus artículos 5 y 6, para determinar su aplicabilidad al caso concreto, (...) corresponderá a la jueza reprochada pronunciarse realizando el análisis legal que está obligada, con



23



95

relación a lo establecido en el Protocolo citado, específicamente en cuanto a lo que debe entenderse por documento de identidad o de viaje falso, conforme lo regulado en el artículo 3, en atención a que este contiene varias definiciones (...). Asimismo, la juzgadora deberá analizar lo establecido en el numeral 4) del artículo 6 del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que regula: 'Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno.'; de donde se entiende que los Estados que han ratificado el Convenio de Palermo y el Protocolo citado, no limita a los Estados para sancionar a los migrantes que cometan delitos conforme a la normativa sustantiva correspondiente; pero ello en concatenación con lo indicado en los artículos 5 y 6, del mismo Protocolo, en cuanto a si estos son distintos a los relacionados con la creación o posesión de un documento de identidad o de viaje falso, es decir, dichas personas pueden ser sometidas a enjuiciamiento penal por cualquier conducta delictiva distinta a aquellas, ya que por virtud de esa normativa tienen exención de responsabilidad penal, dada la calidad de migrante, víctima, de la persona que los cometa. En ese sentido, corresponderá a la autoridad cuestionada, previo a disponer la apertura a juicio, contra la persona que invoca la eximente de responsabilidad penal, con sustento en la calidad de migrante que aduce tener, determinar si, conforme la normativa citada, la conducta de dichas personas es o no susceptible de enjuiciamiento, por su participación en actividades ilícitas relacionadas con la creación o posesión de documento de identidad o de viaje falso, la determinación de dicha calidad y, en su caso, su condición o no, de víctimas, lo cual se relaciona directamente con la vulnerabilidad en el caso concreto; ello sin dejar de observar que el Estado de



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.



Página 7
Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017

Guatemala como parte de la convención relacionada y su protocolo, no deben sancionar a personas migrantes por la adquisición o posesión de documentos que no reúnan las condiciones de legalidad requeridas....”.

III. DE LOS ARGUMENTOS DE LA AMPLIACIÓN: la Procuraduría General de la Nación –tercera interesada– requiere se amplíe la sentencia emitida, estimando que esta Corte eludió pronunciarse respecto al presupuesto que habilita la aplicación del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, Transnacional, refiriendo, la existencia o no de Tráfico ilícito de migrantes, señalando que las conductas ilícitas sindicadas al amparista no fueron realizadas con motivo de una migración ilícita, por constar que este ingresó en forma legal al territorio nacional en el mes de abril de dos mil diez y, posteriormente se realizan las acciones típicas que se le sindicán, lo cual permitió que en el mes de junio del mismo año saliera del país portando un pasaporte guatemalteco sin haber realizado los trámites correspondientes con arreglo a la ley nacional. En ese sentido no se llenaba las condiciones para considerar que sucediera un tráfico ilícito de migrantes, consecuentemente, al no ser objeto de dicho tráfico no resultaba aplicable, al presente caso, la exención de responsabilidad penal establecida en el artículo 5 del Protocolo citado, resultando fundamental para la emisión de una resolución apegada a derecho el análisis de ese extremo.

CONSIDERANDO

– I –

El Artículo 179 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que así se hubiere omitido resolver alguno de los



[Handwritten signature]



96

puntos sobre los que versare el amparo, podrá solicitarse la ampliación.

— II —

La ampliación regulada en la norma invocada en el considerando anterior, tiene como única finalidad, resolver aquellos puntos sobre los que hubiere versado el amparo y que hubiesen sido omitidos.

En el presente caso, de la lectura del escrito contentivo de la solicitud instada, esta Corte al efectuar el estudio de la sentencia aludida, advierte que no se incurrió en omisión alguna susceptible de ampliación, por cuanto que, en la parte considerativa de la sentencia dictada, estimó que la autoridad cuestionada al emitir la resolución reprochada, actuó sin realizar el debido análisis legal al que estaba obligada. Ello, porque con relación a la eximente de responsabilidad penal planteada por el amparista se limitó a señalar que ese aspecto ya había sido analizado en una audiencia anterior (revisión de la medida de coerción), decisión que fue avalada por la Sala Jurisdiccional, lo que evidenció que la autoridad impugnada faltó al deber de fundamentar su decisión, pues el planteamiento de la eximente de responsabilidad penal debió analizarlo en dicha audiencia y, posteriormente conocer de los otros argumentos defensivos, esto porque ese aspecto viabilizaba conocer la subsiguiente tesis de la defensa.

De ahí que, este Tribunal señaló que la autoridad cuestionada a efecto de emitir una decisión debidamente fundamentada, en la que analice la totalidad de los argumentos presentados por las partes, al resolver, debe tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sobre la aplicación de Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, debiendo analizar la aplicabilidad del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA



Página 9

Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017

Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, Transnacional; es decir, se señaló que correspondía a la jurisdicción ordinaria realizar el análisis sobre la correcta aplicación de la normativa internacional invocada en concordancia con la regulación constitucional, por cuanto que debe tenerse presente que es a la jurisdicción ordinaria a la que corresponde resolver y que únicamente en caso de que exista vulneración a derechos y garantías que regula la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes, puede el tribunal constitucional de amparo pronunciarse sobre lo dispuesto por dicha jurisdicción.

Por lo anterior, se advierte que los argumentos que formula la solicitante no van encaminados a solicitar la ampliación del fallo emitido por esta Corte, sino a cuestionar lo resuelto en la sentencia correspondiente, lo cual no es procedente mediante la utilización de este mecanismo.

En ese sentido, al no haberse incurrido en omisión de resolver alguno de los puntos sobre los que versó el amparo la ampliación solicitada debe declararse sin lugar.

LEYES APLICABLES

Artículos citados, 265, 268, 272, literal i) de la Constitución Política de la República de Guatemala de Guatemala; 1º, 7º, 8º, 163, literal i), 179, 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 bis del Acuerdo 3 – 89; 33, literal h) y 34 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad.

POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: **I. Por ausencia temporal del Magistrado Neftaly Aldana Herrera e**



97

inhibitoria de la Magistrada María Consuelo Porras Argueta, se integra el Tribunal para conocer del presente asunto con el Magistrado José Mynor Par Usén. II. Sin lugar la solicitud de ampliación presentada por la Procuraduría General de la Nación –tercera interesada–, con relación a la sentencia dictada por esta Corte el veinticinco de abril de dos mil dieciocho. III. Notifíquese y remítase certificación de lo resuelto al tribunal de primer grado para los efectos correspondientes.



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA



Página 11
Expedientes acumulados
6098-2017 y 6130-2017

Firmado digitalmente
por DINA JOSEFINA
OCHOA ESCRIBA
Fecha: 30/04/2018
1:00:07 p. m. Razón:
Aprobado Ubicación:
Corte de
Constitucionalidad

Firmado digitalmente
por BONERGE
AMILCAR MEJIA
ORELLANA Fecha:
30/04/2018 1:00:30 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad

Firmado digitalmente
por GLORIA
PATRICIA PORRAS
ESCOBAR Fecha:
30/04/2018 1:01:05 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad

Firmado digitalmente
por JOSE
FRANCISCO DE
MATA VELA Fecha:
30/04/2018 1:01:36 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad

Firmado digitalmente
por JOSE MYNOR
PAR USEN Fecha:
30/04/2018 1:02:00 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad



Firmado digitalmente
por MARTIN RAMON
GUZMAN
HERNANDEZ Fecha:
30/04/2018 1:02:55 p.
m. Razón: Aprobado
Ubicación: Corte de
Constitucionalidad



98



Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo. Guatemala, veintidós de mayo del dos mil dieciocho.-----

I) Se tiene a la vista para resolver en definitiva, la solicitud de la debida ejecución de la sentencia de amparo promovida por Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García, e Irina Bitkova, único nombre y apellido, identificada legalmente también como: María Irina Rodríguez Germanis, Smelova Irina Vyacheslovovna e Irina Vyacheslovovna Smelova y Anastasia Bitkova, único nombre y apellido en contra de la Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer de Procesos de Mayor Riesgo D.-----

Considerando

-I-

Para la debida ejecución de lo resuelto en amparo, el tribunal, de oficio o a solicitud de parte, deberá tomar todas las medidas que conduzcan al cumplimiento de la sentencia. Para este efecto podrá librar órdenes y mandamiento a autoridades, funcionarios o empleados de la administración pública o personas obligadas.-----

Considerando

-II-

A esta Sala comparecieron Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova a gestionar la Debida Ejecución de la sentencia de Amparo emitida dentro del presente expediente. Manifestó Igor Bitkov: La Autoridad recurrida, señaló para el nueve de mayo del presente año, audiencia oral para dictar el nuevo pronunciamiento derivado del amparo otorgado a favor del postulante, audiencia en la que esperaron más de cuatro horas y pasado dicho tiempo, se presentó personal del Juzgado, quienes les informaron que no funcionaba el



AMPARO 01019-2017-00017

Of. 4to. NoL. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia
Para conocer procesos de Mayor Riesgo D
Ejecución de Sentencia
2 de 14

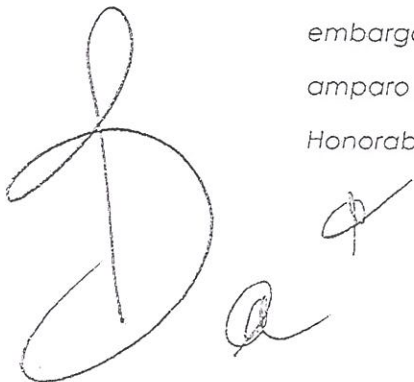
audio en la sala donde se encontraban todos constituidos y por ese motivo la Juez, enviaba de forma escrita la resolución, la cual para su sorpresa tenía fecha ocho de mayo del año en curso y además no cumplía con el amparo otorgado en primera y segunda instancia pues resolvió admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del hoy amparista por los delitos de *Usurpación del estado civil, Supresión y alteración del estado civil y Uso de documentos falsificados*. Agrega, que es un total irrespeto al Tribunal constitucional pues no ha dado el debido cumplimiento a la sentencia de amparo definitivo otorgado en primera instancia y confirmado en su totalidad por la Corte de Constitucionalidad, la cual le obligaba a declarar la inexistencia de elementos típicos en los hechos imputados al postulante, lo cual, con base al principio de igualdad, debe hacerse extensivo a su núcleo familiar, es decir a los terceros con interés *Irina Bitkova y Anastasia Bitkova*, lo que implicaba no admitir la acusación en contra del postulante por los delitos ya identificados y dictar el Sobreseimiento a favor del postulante. Irina y Anastasia Bitkova: Manifestaron que la Juez reclamada no cumple con lo ordenado por este Tribunal y confirmado por la Corte de Constitucionalidad en sentencia del veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, pues nuevamente resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del postulante Igor Bitkov, por los delitos de *Usurpación del estado civil, Supresión y alteración del estado civil y Uso de documentos falsificados* y otorgándoles participación para el juicio al Ministerio Público, a los querellantes adhesivos y designando al Tribunal que conocerá del proceso en el Debate oral y público. Agregan que con la resolución de la Juez recurrida de fecha ocho de mayo del año en curso, nuevamente no aplicó la normativa internacional vigente, relacionado con la *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada e incumple con los artículos 5 y 6 relacionados con el Protocolo del Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar*

y Aire, tampoco tomó en cuenta lo dispuesto en la *Ley de Migración en sus artículos 106 y 107*, que complementa la *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada* y lo más grave aún es que incumple con lo que establece el *artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala*, pues ha quedado establecido que ni el postulante ni las presentadas están sujetas a enjuiciamiento penal con arreglo al Protocolo antes relacionado.-----

Considerando

-III-

Esta Sala dio trámite a las solicitudes planteadas por lo que se le requirió informe a la Jueza arriba identificada, quien expresó lo siguiente: "... h) En cumplimiento de lo ordenado en las sentencias tanto de esa Honorable Sala de Apelaciones, como de la Honorable Corte de Constitucionalidad, realicé el análisis correspondiente, y he plasmado en el fallo de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, la fundamentación requerida, observando cada una de las consideraciones de la Honorable Corte de Constitucionalidad, para dar estricto cumplimiento al fallo, pero al realizar el respectivo análisis concluí que la eximente de responsabilidad penal que invocara el postulante no es aplicable al caso concreto y así lo he detallado en la referida resolución, procedí al análisis de los demás argumentos vertidos por las partes y estimé que se dan los requisitos establecidos en la ley para admitir la acusación y apertura a juicio formuladas en contra del señor Igor Bitkov, por lo que en ese sentido resolví notificando a las partes por escrito dicha resolución, con fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho. i) El procesado y su defensa han manifestado su inconformidad con lo resuelto, aduciendo que fue ordenado el sobreseimiento a favor de dicho proceso y de su núcleo familiar, sin embargo como ha expuesto esta judicatura del análisis integral de las sentencias de amparo proferidas en el presente caso, tanto por esa Honorable Sala como por la Honorable Corte de Constitucionalidad, únicamente se revocó el auto de apertura a





AMPARO 01019-2017-00017

OL. 4to. Nol. 3to.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia

Para conocer procesos de Mayor Riesgo D

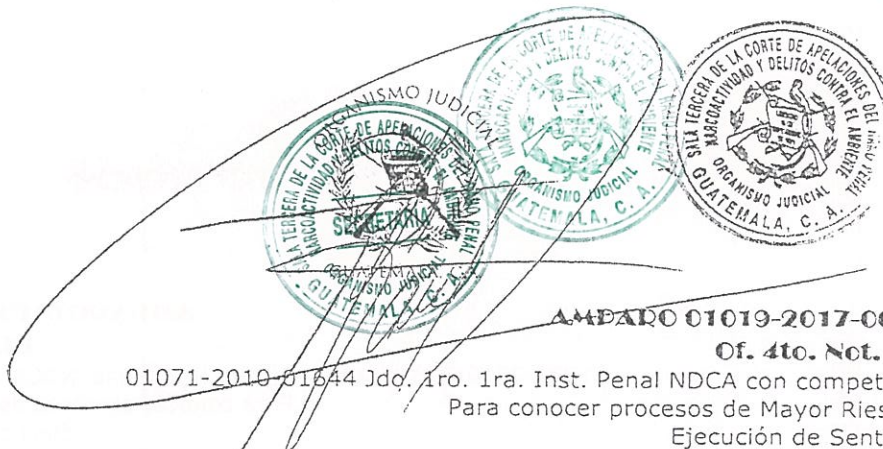
Ejecución de Sentencia

4 de 14

juicio del señor Igor Bilkov, por lo que se procedió a emitir nueva resolución. // Si esa Honorable Sala de Apelaciones estima que lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en la parte considerativa de la sentencia de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, respecto de analizar si era procedente o no la aplicación de la normativa nacional e internacional en el caso del señor Igor Bilkov, no debió ser interpretado por esta judicatura de esa manera y por lo tanto no debió ser acatado, y estima pertinente ordenar el sobreesamiento a favor del señor Igor Bilkov y su núcleo familiar, como se lo han solicitado dichas acusadas y sus abogados defensores, de manera respetuosa le solicito que se sirva indicar la forma de proceder, tomando en consideración que en el caso de las señoras Irina Bilkova y Anastasia Bilkova, no fue revocado el auto de apertura a juicio ni por esa Honorable Sala de Apelaciones, ni por la Corte de Constitucionalidad, que dichas acusadas no se encuentran a disposición de este órgano jurisdiccional y que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo A ya profirió sentencia condenatoria en contra de ambas acusadas y de conformidad con la ley, no es factible retrotraer el proceso a etapas precluidas...".

Al recibir dicho informe en este Tribunal, se les dio audiencia a las partes que intervinieron en la presente acción, quienes manifestaron lo siguiente: En cuanto al Amparista: Manifestó que: "...La autoridad recurrida, en un total irrespeto al Tribunal Constitucional de Amparo, no ha dado el debido cumplimiento a la sentencia de amparo definitivo otorgado en primera instancia y confirmado en su totalidad por la Honorable Corte de Constitucionalidad, que le obliga a declarar la inexistencia de elementos típicos en los hechos imputados al Postulante, lo cual, con base al principio de igualdad, debe hacerse extensivo a su núcleo familiar, es decir, a las terceras interesadas Irina Bilkova y Anastasia Bilkova, lo que implica no admitir la acusación en contra del postulante por los delitos de uso de documentos falsificados, usurpación del estado civil y

460



AMPARO 01019-2017-00017
Of. 4to. Not. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia
Para conocer procesos de Mayor Riesgo D
Ejecución de Sentencia
5 de 14

supresión y alteración del estado civil, y que no debe abrir a juicio y dictar el Sobreseimiento a favor del postulante..."; En cuanto a Irina Bitkova y Anastasia Bitkova: Ratificaron lo manifestado en su memorial de solicitud de la Debida ejecución de sentencia de amparo; El Ministerio Público por su parte a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal: Se pronunciaron en el sentido que: "...En ese contexto corresponde al Tribunal de amparo analizar si la Jueza de Primera Instancia del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer de procesos de mayor riesgo grupo D, dio efectivo cumplimiento al fallo de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, emitido por la Corte de Constitucionalidad, en estricto cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por ser el Tribunal de primer grado y a quien por mandato legal le corresponde realizar el análisis respectivo, solicitando al tribunal de amparo emita la resolución que en derecho corresponde...". La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala: Manifestó que: " ...De los antecedentes se puede concluir que la autoridad cuestionada al emitir el fallo aludido ha cumplido con lo ordenado, tanto por lo que establece la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, así como señalado por la Corte de Constitucionalidad. Es importante señalar el hecho de que la resolución de fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, ha cumplido con lo establecido, y si tal decisión es contraria a los intereses de los interponentes no constituye de manera alguna indebida ejecución de lo ordenado, ya que la protección interina decretada tenía como finalidad superar la fundamentación en los puntos señalados lo cual como se puede apreciar fue cumplido debidamente. Cada uno de los puntos señalados, fue claramente razonado conforme las constancias procesales, especialmente al analizar la eximente de la responsabilidad penal que invocara el interponente del amparo, así como cada uno de los aspectos contenidos en el artículo 332 del Código Procesal Penal. Por lo que se puede concluir que se ha cumplido con el principio de legalidad, tutela judicial efectiva

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AMPARO 01019-2017-00017

Of. 4to. Not. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia
Para conocer procesos de Mayor Riesgo D
Ejecución de Sentencia
6 de 14

garantizando el cumplimiento de la ley...". Y por su parte la Procuraduría General de la Nación: Expresó: "...La resolución emitida con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, cumple con lo ordenado por los honorables Tribunales de Amparo, por lo que la presente solicitud de asistencia para la debida ejecución debe ser declarada sin lugar, teniendo por cumplida lo requerido en sentencias de amparo de primer y segundo grado..."

Considerando

-IV-

1. En cuanto a la pretensión de los interponentes se hace una recapitulación de los acontecimientos que generaron la Acción Constitucional de Amparo, siendo así que se establece que a este Órgano Jurisdiccional compareció el señor *Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García* a promover amparo en contra de la resolución de fecha veinte de febrero del dos mil diecisiete dictada por la autoridad impugnada Jueza de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer de Procesos de Mayor Riesgo D, a cargo de la abogada Erika Lorena Aifán Dávila. El interponente reclamaba que la autoridad impugnada, sin fundamento alguno y violando sus derechos constitucionales y normas internacionales en materia de derechos humanos, le ha perjudicado deliberadamente al no reconocerlo como MIGRANTE en Guatemala, que el derecho de no reconocerlo como MIGRANTE en la República de Guatemala ha sido determinante y trascendente para dictarle AUTO DE APERTURA A JUICIO, estimando que tiene eximente de responsabilidad penal conforme la ley de migración y convenciones internacionales.

2. A la Acción Constitucional de Amparo se le dio el trámite correspondiente y con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, este Tribunal Constitucional dictó sentencia declarando *procedente la Acción Constitucional*



AMPARO 01019-2017-00017

Of. 4to. Not. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia

Para conocer procesos de Mayor Riesgo D

Ejecución de Sentencia

7 de 14

de Amparo, toda vez que se estableció que la jueza contralora dejó de pronunciarse sobre la pretensión del señor *Igor Bitkov*, también conocido como *Igor Vladimirovich Bitkov*, *Leonid Zaharenko* o *Gregorio Igor Benitez García*, advirtiéndole esta Sala que por su condición de MIGRANTE se encuentra incluido dentro de las personas que no pueden ser objeto de proceso penal, por los delitos de Usurpación del estado civil, Supresión y alteración del estado civil y Uso de documentos falsificados hechos íntimamente ligados a su condición de migrante, lo anterior tomando en cuenta que el Estado de Guatemala es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos en este caso el Protocolo Contra el Trafico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la referida convención; en ese orden de ideas se advirtió a la jueza contralora que para fundamentar la pretensión del amparista debía tomar en cuenta lo establecido en los artículos 107 (ter) de la Ley de Migración Decreto 95-98 que quedó vigente mediante el artículo 241 literal (j) del Decreto 44-2016, ambas normativas son coherentes con lo establecido en los artículos 5 y 6 del Protocolo mencionado. Este andamiaje jurídico debe ser aplicado como *norma imperativa*, la cual en el derecho internacional, específicamente en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 53 establece lo siguiente: "*Norma imperativa*. En derecho se considera norma imperativa a aquella norma jurídica que posee un contenido del que los sujetos jurídicos no pueden prescindir, de manera que la regulación normativa que se haga de la materia tendrá completa validez independientemente de la voluntad del individuo (...) Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser

[Handwritten signature]



AMPARO 01019-2017-00017

Of. 4to. Not. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia
Para conocer procesos de Mayor Riesgo D
Ejecución de Sentencia
8 de 14

modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter".

En consecuencia, el Estado de Guatemala es parte de esta Convención por lo que en atención a esa normativa enfáticamente se advirtió que el señor *Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benitez García* no puede ser objeto de proceso penal, ordenando a la jueza contralora dar respuesta a las pretensiones del accionante debiendo tomar en cuenta las consideraciones anteriores.

3. Cabe advertir que toda sentencia contiene un apartado de consideraciones en la que se fundamenta la decisión judicial y es esa fundamentación o motivación la que le da la razón de ser a la decisión vertida en la parte resolutive, es decir la parte resolutive es la consecuencia de lo manifestado en las consideraciones, siendo este último apartado en donde la sentencia encuentra la fuerza ejecutiva de que debe ser acatada por quien va dirigida, porque es a partir de esta decisión judicial que se crea el derecho que reclaman las personas.

4. Esta Sala constituida en Tribunal de Amparo advierte que la Juez irrumpió en el debido proceso al dictar una resolución de forma escrita tal y como lo hace de conocimiento de este Tribunal en el informe que oportunamente presentó, no observando la oralidad que impera en el proceso penal, misma aunque no se le haya indicado expresamente como conocedora del derecho debía emitir una resolución respetando los principios procesales en materia del derecho procesal penal, violentando así el Derecho de Audiencia a las partes, el principio de oralidad y celeridad procesal, circunstancia que no puede dejar de advertir este Tribunal cuando la Juez equivocadamente emite su resolución de forma escrita, además verificamos que en efecto no acató lo ordenado en la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada por este Tribunal



58
457

AMADO 01019-2017-00017

Of. 4to. Not. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia

Para conocer procesos de Mayor Riesgo D

Ejecución de Sentencia

9 de 14

Constitucional, incumpliendo con una decisión a la cual le correspondía obedecer. La Autoridad impugnada manifestó en su informe de fecha catorce de mayo del dos mil dieciocho, la jueza argumenta que la Corte de Constitucionalidad modificó lo considerado por este Tribunal al momento de dictar sentencia, indicando extremos que se verificaron de manera conducente en lo informado específicamente en la literal f) en donde dice: "Como puede observarse la Honorable Corte de Constitucionalidad modifica lo considerado por esa Honorable Sala en la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, ordenando analizar, fundamentar y establecer si la normativa nacional e internacional es aplicable al caso concreto, en ningún momento, ni en la resolución de la ampliación instada por la Procuraduría General de la Nación se pronuncia en cuanto a la aplicabilidad o no de la Convención de Palermo en el caso concreto, dejando a la justicia ordinaria la facultad de pronunciarse. De manera tal que ni esa Honorable Sala de Apelaciones ni la Honorable Corte de Constitucionalidad ordenan de manera expresa a esta judicatura, ni en los considerandos ni en la parte resolutive de sus respectivas sentencias, dictar el sobreseimiento a favor del postulante de dicho amparo o de las personas integrantes de su núcleo familiar, como lo aducen el señor Igor Bitkov, las señoras Irina Bitkova, Anastasia Bitkova y sus abogados defensores",

Así también en la literal g) del referido informe, la Juez reitera que: "Esa Honorable Sala de Apelaciones ordenó dejar sin efecto el Auto de Apertura a Juicio en contra del señor Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benitez García dentro del proceso penal número 1071-2010-1644 y dictar la resolución tomando en cuenta lo considerado por dicha Sala de Apelaciones, lo cual fue modificado por la Corte de Constitucionalidad pero en ninguna de las dos sentencias de amparo se deja sin efecto el auto de apertura a juicio".

Asímismo en la literal j) del informe indica: "(...) de manera respetuosa le solicito que se sirva indicar la forma de cómo proceder (...) aunado a que es distinto el criterio de



AMPARO 01019-2017-00017

Of. 4to. Nol. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia
Para conocer procesos de Mayor Riesgo D
Ejecución de Sentencia
10 de 14

esta judicatura como quedó plasmado en la resolución de fecha 8 de mayo de 2018, por lo que en caso de que esa Honorable Sala de Apelaciones estime procedente ordenar el sobreseimiento a favor de dichas acusadas, le solicito se pronuncie en cuanto al procedimiento a seguir, a efecto de evitar vulneraciones al debido proceso".

5. Este Tribunal de Amparo establece que los argumentos antes manifestados por la Autoridad Impugnada, no son congruentes con lo acontecido en autos, toda vez que la Corte de Constitucionalidad no modificó la decisión de este Tribunal sino mas bien amplió las consideraciones vertidas en la sentencia de primer grado y al respecto se pronunció en el numeral romanos I de la parte resolutive de la sentencia de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho de la siguiente manera: "*I) Sin lugar los recursos de apelación interpuestos por Banco VTB, Sociedad Anónima, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal y, como consecuencia, confirma la sentencia venida en grado...*" la referida sentencia del máximo tribunal en materia constitucional, evidencia expresamente la confirmación de lo ordenado por esta Sala constituida en Tribunal de Amparo en la sentencia ya cuestionada en la que se le ordena a la autoridad impugnada atender a lo considerado en la misma.

6. De tal cuenta que no puede soslayarse la justificación vertida por la jueza, en cuanto a que no se le indicó de manera expresa ni por parte de la Corte de Constitucionalidad ni por parte de este órgano jurisdiccional que debía dictar el sobreseimiento de la causa a favor del interponente, cuando esa es una decisión de carácter ordinario que surge como consecuencia de la integración de la normativa que debía tomar en cuenta para resolver la situación jurídica del interponente, atendiendo a las consideraciones realizadas por este Tribunal Constitucional, que como anteriormente se indicó debía por imperativo legal verificar la motivación realizada por este Tribunal la cual sirvió de sustento jurídico



para dictar la sentencia de primer grado de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, por lo que los argumentos manifestados por la autoridad impugnada no son atendibles por este Tribunal, toda vez que las resoluciones del Tribunal Constitucional deben ser acatadas y obedecidas, para que no se conviertan en meras declaraciones de intensión y sin alcances efectivos en donde se evidencia que los órganos jurisdiccionales no solo se limitan a juzgar sino que también ejecutan lo resuelto. Por lo que se concluye que existió incumplimiento por parte de la autoridad impugnada de la orden emanada por este Tribunal Constitucional en la sentencia ya enunciada, la que debió ser cumplida atendiendo a las consideraciones vertidas, pues ya había sido confirmada por la Honorable Corte de Constitucionalidad.

7.- En virtud que la declaratoria de procedencia del amparo, conlleva la estricta formalidad de que las decisiones y resoluciones sean debidamente acatadas, por tener el carácter superlativo y además porque se demuestra que tanto funcionarios públicos y sociedad en general evidencien sujeción al ordenamiento jurídico, máxime las que se toman en materia constitucional; siendo que en el presente caso existió *desobediencia de la autoridad impugnada* y consecuentemente *incumplimiento de la resolución emanada por esta Sala constituida en Tribunal de Amparo*, a tenor de lo establecido en los artículos 50, 54 y 55 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, este Tribunal después de haber revisado si se procedió a efectuar una debida ejecución de lo resuelto, realizando para el efecto el procedimiento respectivo, observando el derecho de audiencia de las partes establece que es necesario dictar las medidas para el cumplimiento de la sentencia de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la cual fue debidamente confirmada en su totalidad por la Honorable Corte de Constitucionalidad con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por lo



AMPARO 01019-2017-00017

Of. 4to. Not. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia
Para conocer procesos de Mayor Riesgo D
Ejecución de Sentencia
12 de 14

que se anula la resolución de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho (08/05/2018) dictada en contra del señor IGOR BITKOV también conocido como IGOR VLADIMIROVICH BITKOV, o LEONID ZAHARENCO o GREGORIO IGOR BENITEZ GARCIA y en consecuencia se le fija plazo de veinticuatro horas (24) a la Jueza reprochada para que proceda a dictar la resolución que en derecho corresponde de acuerdo a lo resuelto y considerado en la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional que resuelve la acción de amparo promovida a favor del accionante. Así también, en vista de que en la sentencia dictada por este Tribunal se le ordenó en el *numeral romano II* a la autoridad impugnada el exacto cumplimiento de lo resuelto bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondría una multa de un mil quetzales (Q.1,000.00), ésta se le impone y además queda sujeta a las responsabilidades legales que correspondan y tal como prescribe el artículo 54 de la Ley de la materia, que establece: "...Incumplimiento de la resolución. Si el obligado no hubiere dado exacto cumplimiento a lo resuelto, de oficio se ordenará su encausamiento certificándose lo conducente, sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de la resolución de amparo. Si el obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo, gozará de antejudio, se certificará lo conducente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca del caso..." (Lo resaltado es de los suscritos), por lo que se ordena resolver lo que en derecho corresponde por el incumplimiento y desobediencia de una decisión en materia constitucional.-----

Leyes aplicables:

Artículos: citados y 265, de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º., 2º., 3º., 4º., 8º., 10, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 67, 149, 163 inciso c), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.-----

Por tanto:



AMDARO 01019-2017-00017

Of. 4to. Not. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia
Para conocer procesos de Mayor Riesgo D
Ejecución de Sentencia
13 de 14

Este Tribunal Constitucional con fundamento en lo considerado y leyes citadas por unanimidad resuelve: I) Declarar procedente la debida ejecución de la sentencia de amparo dictada por este Tribunal Constitucional con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, solicitada por Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benitez García, e Irina Bitkova, único nombre y apellido, identificada legalmente también como: María Irina Rodríguez Germanis, Smelova Irina Vyacheslovovna e Irina Vyacheslovovna Smelova y Anastasia Bitkova, único nombre y apellido, ordenando a la Autoridad Impugnada: a) Dejar sin efecto en cuanto al postulante, la resolución de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Autoridad Reprochada y todo lo actuado con posterioridad que afecte al señor Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benitez García, por lo acá considerado; b) Se conmina a la autoridad impugnada a dictar nueva resolución tomando en cuenta lo considerado por esta Sala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la cual fue confirmada en su totalidad por la Honorable Corte de Constitucionalidad; c) Se ORDENA a la autoridad impugnada a dar cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de VEINTICUATRO horas a partir de la fecha en que reciba la respectiva ejecutoria, II) Se le impone a la abogada Erika Lorena Aifán Dávila, Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, con competencia para conocer procesos de mayor riesgo D, una multa de un mil quetzales, por el incumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Constitucional; y III) Con fundamento en el artículo 54 segundo párrafo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, se Certifica lo conducente al Ministerio Público contra la abogada Erika Lorena Aifán Dávila, Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el



AMPARO 01019-2017-00017

Of. 4to. Not. 3ro.

01071-2010-01644 Jdo. 1ro. 1ra. Inst. Penal NDCA con competencia
Para conocer procesos de Mayor Riesgo D
Ejecución de Sentencia
14 de 14

Ambiente, con competencia para conocer procesos de mayor riesgo D, para lo
que corresponda, en virtud de que la autoridad impugnada goza de antejuicio;
IV). Notifíquese.

Jaime Amílcar González Dávila
Magistrado Presidente

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos

Magistrado Vocal I

Zonia De la Paz Sanjiao Corleto de Bocanegra
Magistrado Vocal II

Ligia Margarita Rodas Hurtado y Lisbeth Noemí García Quintanilla
Testigos de Asistencia



LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE:-----

CERTIFICA

Que las setenta hojas de papel de fotocopia que anteceden, impresas de ambos lados, son autenticas por haber sido reproducidas el día de hoy de su respectivo original, las cuales reproducen los documentos siguientes: **a.** memorial de interposición de la acción de amparo número un mil diecinueve guión dos mil diecisiete guión cero cero cero diecisiete, presentado por Igor Bitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Bitkov, Leonid Zaharenko o Gregorio Igor Benítez García, de fecha dieciséis de marzo del dos mil diecisiete; **b.** Resolución de fecha diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, emitida dentro del amparo un mil diecinueve guión dos mil diecisiete guión diecisiete; **c.** resolución de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, emitida dentro de los expedientes acumulados seis mil noventa y ocho guión dos mil diecisiete y seis mil ciento treinta guión dos mil diecisiete de la Corte de Constitucionalidad; **d.** Resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho emitida dentro del expediente un mil setenta y uno guión dos mil diez guión cero cero un mil seiscientos cuarenta y cuatro por el Juez Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con Competencia para conocer de Procesos de Mayor Riesgo, Grupo D; **e.** Resolución de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, emitida dentro de los expedientes acumulados seis mil noventa y ocho guión dos mil diecisiete y seis mil ciento treinta guión dos mil diecisiete de la Corte de Constitucionalidad; **f.** Resolución de fecha veintidós de mayo del dos mil dieciocho, emitida dentro del amparo un mil diecinueve guión dos mil diecisiete guión cero cero cero diecisiete; Y para entregar a la **Doctora Zonia De la Paz Santizo Corleto de Bocanegra** extendiendo, sello y firmo la presente en una hoja de papel membretado del Organismo Judicial. En la ciudad de Guatemala, el once de febrero de dos mil veinte.-----


Ligia Margarita Rodas Hurtarte
Secretaria

Anexo 11



Ref.: 01077-2017-00527 Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.-----

APELACION 238-2018 Of. 5º.-----

**SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. Guatemala,
veintinueve de junio de dos mil dieciocho.**-----

I) Se tienen a la vista los antecedentes, provenientes del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; II) Se tiene a la vista para resolver el recurso de apelación interpuesto por: el Ministerio Público, contra auto del once de junio de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado arriba identificado, en el proceso que se conoce en contra de Williams Agberto Mansilla Fernández, en dicho auto se declaró: "...I) SIN LUGAR la formulación de acusación y solicitud de apertura a juicio planteada por el Ministerio Público en contra de WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ por los delitos de PECULADO POR SUSTRACCION Y ABUSO DE AUTORIDAD; II) No se admite la acusación presentada por el Ministerio Público fechada veinticinco de abril de dos mil dieciocho; III) CON LUGAR PARCIALMENTE las objeciones planteadas por la defensa del acusado y en ese sentido, se declara SIN LUGAR la solicitud de SOBRESEIMIENTO instada a favor del señor WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ y CON LUGAR de CLAUSURA PROVISIONAL del presente proceso..."-----

CONSIDERANDO

- I -

Son apelables los autos dictados por los jueces de Primera Instancia que, entre otros, los autos en los que se declare el sobreseimiento y clausura provisional y será permitido al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la



resolución a que se refieren los agravios, y permitirá al Tribunal confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución.-----

CONSIDERANDO

- II -

Manifiesta el recurrente su inconformidad en la resolución que decreta Clausura Provisional a favor del señor Williams Agberto Mansilla Fernández, por considerar que existe una errónea aplicación de la ley así como carece de elementos que conforman la sana crítica razonada lo que contradice lo plasmado en la plataforma fáctica y probatoria, por lo que a criterio del ente investigador, contiene la resolución impugnada vicios que provocan agravio al Ministerio Público al decretar la clausura provisional por los delitos de Abuso de Autoridad y Peculado por Sustracción a favor del acusado Williams Agberto Mansilla Fernández, y por consiguiente no apertura a debate oral y público, considerando el ente investigador que si existen elementos de prueba con los cuales se demuestra que los hechos planteados deben ser dilucidados en un juicio oral y público; por lo que solicita que se revoque la resolución impugnada, y en consecuencia se dicte auto de apertura a juicio en contra del acusado Williams Agberto Mansilla Fernández por los delitos de Abuso de Autoridad y Peculado por Sustracción, respetando el debido proceso y la debida fundamentación, y que sea coherente con las constancias procesales, aplicando para el efecto la sana crítica razonada admitiendo la acusación presentado por el Ministerio Público.-----

CONSIDERANDO

- III -

El Ministerio Público a través de la Agente Fiscal Mónica Rene Palacios Lima de la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero u otros Activos y Extinción de Dominio interpuso Recurso de Apelación en contra la resolución de once de junio de dos mil



dieciocho, dictada por el juez Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente, del departamento de Guatemala, que dictó clausura provisional a favor del acusado Williams Agberto Mansilla Fernández por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad. La Agente Fiscal en lo esencial expuso: derivado de los señalamientos públicos la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, designó una comisión de auditoría integrada por los licenciados Vayron Ramiro Reyes Rancacoj, auditor gubernamental, Erick Giovanni Morales Rivas, coordinador gubernamental y Byron Solimar Díaz Orellana, supervisor gubernamental, para que obtuvieran información relacionada con el "bono de responsabilidad" el cual era otorgado al Presidente de la República, como consecuencia la comisión de auditoría elaboró un informe de cargos provisional número Sog-DC-001-2017 en el que establecieron los siguientes hallazgos: "pagos improcedentes de bono extraordinario de responsabilidad, al revisar el renglón presupuestario 015, complementos específicos al personal permanente, se estableció que durante el período comprendido del uno de diciembre de dos mil dieciséis al treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se realizó pago improcedente al señor Jimmy Morales Cabrera, en calidad de Comandante General del Ejército, mediante el acuerdo administrativo interno 10-2016, de fecha uno de enero de dos mil dieciséis, emitido por el señor General de División Williams Agberto Mansilla Fernández, en su calidad de Ministro de la Defensa Nacional, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil quetzales (Q.450,000.00), de conformidad con el artículo 27 del Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo literales f y m, claramente se establece que los ministros de Estado tienen atribuciones generales en todas las dependencias y entidades bajo su competencia y están facultados para dictar los acuerdos relacionados con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme la ley, por lo que esta comisión de auditoría ha determinado que el cargo de



GUATEMALA, C.A.

Presidente de la República y Comandante General del Ejército, no está bajo la competencia del Ministerio de la Defensa Nacional, por el contrario el Presidente de la República es la autoridad administrativa superior del Organismo Ejecutivo, de tal manera que un inferior jerárquico no puede disponer de asuntos administrativos que competen a su superior". La Contraloría General de Cuentas dispuso conferirle audiencia al Presidente de la República por quince días y le solicitó reintegrar la cantidad recibida de: cuatrocientos cincuenta mil quetzales. Los hechos que le señalan son que en su calidad de Ministro de la Defensa en el período comprendido del catorce de agosto de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil diecisiete en ejercicio de sus funciones suscribió el uno de enero de dos mil dieciséis el acuerdo administrativo identificado con el número diez guión dos mil dieciséis (10-2016) por medio del cual autorizó el Bono Extraordinario de Responsabilidad, como complemento específico al personal permanente que presta sus servicios en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y dependencias auxiliares del Ministerio de la Defensa Nacional, que ha sido regulado en acuerdos administrativos que datan del año dos mil cinco. Realizó un acto arbitrario al incluir en el artículo uno (1) de dicho acuerdo al Comandante General del Ejército, como beneficiario del Bono Extraordinario de Responsabilidad, sin tener fundamento jurídico y financiero, que él no puede ser beneficiario de dicho bono porque no es personal permanente de dicho Ministerio, no está comprendido dentro del personal asalariado de dicho Ministerio. Por esa razón permitió la sustracción de fondos del Ministerio de la Defensa Nacional, al fijarle la cantidad de cincuenta mil quetzales mensuales, a través de la emisión de nueve cheques a su favor. El ente investigador no está de acuerdo con la resolución de la juzgadora al decretar la clausura provisional a su favor, la juzgadora argumentó lo siguiente: "Considero que con los medios de prueba recabados en la fase correspondiente, pues considero que no existe la probabilidad de que los mismos puedan



ser demostrados en el debate y el artículo 340 de la misma, en el párrafo tercero dice en caso de solicitarse la clausura provisional fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes a realizar y fijará día y hora en que se debe realizar la audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este Código..." " Esto en virtud de que hay un principio que es la tutela judicial efectiva y que el procedimiento debe responder a las legítimas tanto de la víctima o agraviado, el agraviado es el Estado y el sindicado, y si me indican que se incorporó al escrito de acusación un documento, una declaración que fue recibida el mismo día que se presentó el acto conclusivo y que no se incorporó otro documento que fue presentado por la defensa técnica del sindicado, también ese día, entonces considero que si deben estar por el debido proceso y la igualdad..." "...Considero que aquí lo correcto es clausurar el procedimiento provisionalmente, entonces quedan pendientes de recabar todos los medios de investigación, a excepción de los que se relacionan directamente con el señor Jimmy Morales que él no está siendo procesado". Considera el Ministerio Público que ha existido una errónea aplicación de la ley, así como la motivación de la misma, porque viene a contradecir lo plasmado en la plataforma fáctica, jurídica y probatoria, la que llena los requisitos de tiempo, modo y lugar, relacionadas a la comisión de los hechos imputados al acusado. Agregó que para el Ministerio Público si existen elementos de prueba con los cuales demuestra los hechos planteados y que deben ser dilucidados en un juicio oral y público, porque el acusado consintió la sustracción de cuatrocientos cincuenta mil quetzales de la cartera a su cargo, por medio de nueve cheques a favor de Jimmy Morales. -----

Esta Sala al verificar la resolución recurrida y los argumentos del recurrente estima lo siguiente: Que la fase intermedia del proceso penal, tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la



GUATEMALA, C.A.

probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Siendo éste el objeto de la fase intermedia, los medios de investigación que se incorporen deben ser relevantes, pertinentes y útiles para decidir acerca de las peticiones formuladas por las partes. En el caso sometido a examen, la clausura provisional fue a petición del Abogado Defensor del acusado que propuso incorporar varios medios de prueba que solicita sean incorporados al expediente, habiendo propuesto varios documentos. Deben tenerse en cuenta los principios que informan el juicio, tales como la oralidad, inmediación, publicidad y el contradictorio, éste último permite que las partes puedan proponer el diligenciamiento de ciertos medios de investigación, tal como lo mencionan José Leonardo Benavente Ramos y otros autores en el libro Manual de Derecho Procesal Penal Tomo Dos (II), en el que expresan: "EL control sobre los fundamentos de la acusación se ejerce conforme el inciso 3, donde la defensa puede expresarse sobre si la acusación está seriamente fundamentada como para abrir a juicio contra el acusado. En este caso, tal como se ha señalado, la defensa podrá argüir que la prueba de descargo producida durante el etapa preparatoria no se realizó de acuerdo a lo prescrito, que el hecho existió pero que una causa de justificación excluye que se trate de un delito, que el acusado es inimputable y, por lo tanto, no puede realizarse un juicio común ni imponerse una pena, la defensa puede considerar que se valora una prueba ilegítima, o en fin valorar en forma desincriminante la prueba en la que se basa la acusación entre otros. En estos casos, la defensa solicitará que se dicte sobreseimiento, la clausura o el archivo". (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y Organización Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo (ICCO) página 126). El párrafo anterior nos ilustra lo relacionado con la actitud que puede asumir el acusado en la etapa intermedia, tal



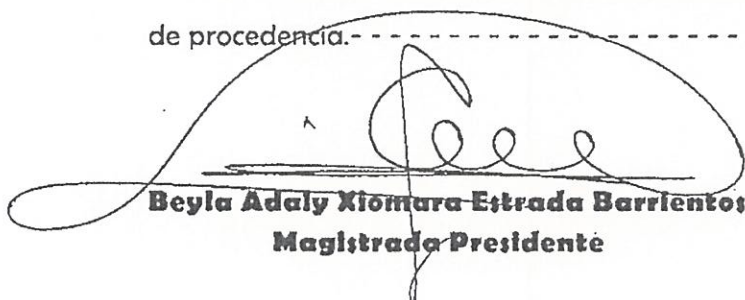
como lo regula el artículo trescientos treinta y seis (336) numeral tres (3) del Código Procesal Penal que relaciona lo siguiente: "3) Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso, por esas razones, el sobreseimiento o la clausura" En este caso solicitó la incorporación de medios de investigación que para la defensa son importantes, lo cual está permitido en la ley, para garantizar los derechos de su patrocinado, para que pueda ejercer la defensa del mismo, cumpliendo con el principio de la tutela judicial efectiva, tal como lo mencionó en la resolución la juzgadora. En conclusión se mantiene con validez lo resuelto por la juzgadora, debiendo resolverse conforme derecho y así deberá resolverse. -----

CITA DE LEY

Artículos: Código Procesal Penal: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11 bis, 14, 16, 20, 21, 43, 45, 47, 49, 160, 404, 406, 407, 409, 410, 411, 501 y 510; Ley del Régimen Penitenciario: 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 97 y 102; Código Civil: 1514; y Ley del Organismo Judicial: 5, 15, 16, 67, 88 literal b), 141, 142 y 143. -----

POR TANTO

Esta Sala, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver **DECLARA: I) SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público, en contra del auto de once de junio de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; **II) En consecuencia se Confirma** la resolución apelada; **III) Notifíquese** y certifíquese lo resuelto a su lugar de procedencia. -----


Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos
Magistrada Presidente



GUATEMALA, C.A.

Zonia de la Paz Santizo Corleto de Bocanegra
Magistrada Vocal II

Edith
Edith Marilena Pérez Ordóñez
Magistrada de Apoyo

Rudelia
Rudelia Betsabe Mazariegos Fuentes
Testigos de Asistencia

Lisbeth
Lisbeth Noemi García Quintanilla



LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE:-----

CERTIFICA

Que las cuatro hojas de papel de fotocopia que anteceden, impresas de ambos lados, son autenticas por haber sido reproducidas el día de hoy de su respectivo original, las cuales reproducen el documento siguiente: Resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho emitida por esta Sala dentro del expediente de Apelación identificado con el número doscientos treinta y ocho guión dos mil dieciocho y numero único un mil setenta y siete guión dos mil diecisiete guión cero cero quinientos veintisiete.-----

Y para entregar a la **Doctora Zonia De la Paz Santizo Corleto de Bocanegra** extendiendo, sello y firmo la presente en una hoja de papel membretado del Organismo Judicial. En la ciudad de Guatemala, el once de febrero de dos mil veinte.-----


Ligia Margarita Rodas Hurtarte
Secretaria



Anexo 12

7-8410
SECRETARÍA
Corte de Apelaciones del Poder Judicial
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
Guatemala

EXPEDIENTE UNICO 01080-2015-00372

SEÑORA JUEZ SEXTA DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

SAMUEL EVERARDO MORALES CABRERA, de datos de identificación personales conocidos dentro del expediente arriba identificado de manera atenta comparezco ante usted con el objeto de interponer **RECURSO DE APELACIÓN**, específicamente en resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, donde declara la medida de coerción de PRISION PREVENTIVA de mi persona, por las argumentaciones referentes en el artículo 263 del Código Procesal Penal. y para lo cual:

EXPONGO:

DEL TIEMPO Y FORMA DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE RECURSO:

Se presenta dentro de los tres días de haber proferida la resolución recurrida y de forma escrita, consecuentemente expongo los motivos en que me fundo para la interposición. Dentro del proceso arriba identificado se ordenó una orden de aprensión o captura en un proceso donde se me liga por el delito de fraude y donde una de las sindicadas han sido beneficiados con algunas medidas sustitutivas, el día en que se realizara mi primera declaración se ordena la prisión preventiva por el supuesto de la Juzgadora de que existía **peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad**, toda vez de que existía el temor por parte de la fiscalía de que mi hermano por ser el Presidente Constitucional de la República de Guatemala y que mi persona pueda influir en testigos como mis empleados y algunas entidades bancarias a que hace alusión la Fiscalía obstaculice la averiguación de la verdad.

ABOGADOS Y NOTARIOS
GUATEMALA
1-0530183
Q. 1.00
TIMBRE FORENSE
Martelo Abogado

La juzgadora en mi primera declaración, ella establece en sus argumentos para la imposición de una medida de coerción o el beneficio de una medida sustitutiva que es imposible creer que con el poder político de mi hermano, realizara un obstáculo a la **averiguación de la verdad** y hace hincapié en que incurriría en un delito, afirmación a la cual es congruente, porque no se puede crear un caos social por la cierta influencia de mi hermano y que afectaría a toda la República de Guatemala, toda vez que el señor Presidente incurriría en un delito como es el de Obstaculización a la acción penal, esto lo manifiesta y argumenta porque fue de los argumentos que estableció el Ministerio Público para negar la obtención de una medida sustitutiva, sin embargo la resolución que hoy recurro, si es bien dicho por la Juzgadora y la Jurisprudencia que cita misma en nuestro derecho penal en que la aplicación de las medidas de coerción establecen un mal necesario para la averiguación de la verdad y bajo su independencia Judicial realiza, dicta una resolución infundada e incongruente, no llenando los requisitos de fundamentación de hecho y de derecho porque los que estableció fueron contradictorios violando lo establecido en el artículo 11bis del Código Procesal Penal, por cuanto dice y argumenta una cosa para beneficiar a mi persona con una medida sustitutiva en virtud de que el tipo penal no tiene una prohibición, pero luego cambia el rumbo de la argumentación y establece la necesidad de dictar la prisión preventiva por el argumento vertido por la Fiscalía, que fueron los mismos por ligar a proceso por el delito de fraude siendo los mismos argumentos facticos y jurídicos teniendo que ser distintos. Esto concatenado a los principios de la constitución en que todos las personas habitantes de la República de Guatemala somos iguales en derechos se toma como base



8411



el parentesco que poseo con mi hermano como Presidente de Guatemala para tratarme como un enemigo de la sociedad, dejándome en **PRISION PREVENTIVA**, al tenor del artículo 263 del Código Procesal Penal, que puede evitarse con todas las reglas contenidas en las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Aunado a ello el auto que se recurre con la argumentación de la Juez conocedora del derecho olvida lo que establece las "Reglas Mínimas de Tokio" en la aplicación a las medidas sustitutivas en las cuales el Estado de Guatemala contempla ya en su ordenamiento jurídico y establece que la última ratio es la prisión preventiva si existen argumentos valederos para poder otorgarla y en el transcurso de la audiencia y desarrollo se demostró lo que doctrinalmente y procesalmente exige la ley para el otorgamiento de una medida. Que lo único que estableció la Juez al dictar el auto de Prisión Preventiva es anticipar una condena que a todas luces tiene un tinte polarizado a la verdad real del presente proceso.

En la parte considerativa de la resolución, se estableció plenamente el arraigo de mi persona y realizo pronunciamiento únicamente en el artículo 263 del Código Procesal Penal por las razones que expuso la misma Juzgadora; que fueron las mismas razones por las que ligo a proceso a mi persona no variando nada y aunado a ella se tomó la amabilidad de reprochar y recalcar del supuesto acto constitutivo de delito interpretándolo como una persona culpable del ilícito, no aplicando a lo que establece el artículo 14 de la Constitución del República de Guatemala como presunta inocencia. Por lo que siendo la regla la libertad del individuo y únicamente la excepción la prisión



preventiva es inaudito creer que las incongruencias establecidas por la Juzgadora de garantías es suficiente para poder declarar la prisión preventiva.

La Juzgadora argumenta la prisión preventiva con el obstáculo a la averiguación a la verdad aun cuando mi persona se declaro todo lo que se imputo cuatro a tres meses a tras ante el Ministerio Público las cuales fueron dadas de forma voluntaria. Dichas declaraciones el Ministerio Público a falta de objetividad y la Juzgadora argumentando ni una sola de estas aseveraciones, funda la argumentación de prisión preventiva en la falta de objetividad y ella violando el mismo esquema judicial de tutela judicial efectiva no teniendo en cuenta las declaraciones dadas en el Ministerio Público que fueron las mismas que el ente acusador uso en contra de mi persona.

DE LO QUE SE PRETENDE POR EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN

Lo que se pretende con el presente recurso de apelación, es que los Honorables Magistrados a los que me dirijo, revoquen la resolución impugnada, en su parte donde *declara la PRISION PREVENTIVA*. Y se pueda otorgar una medida sustitutiva a la prisión preventiva impuesta de conformidad al artículo 264 del Código Procesal Penal.

DE LOS AGRAVIOS CAUSADOS POR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

La señora Juez, en su resolución de fecha dieciocho de enero del año en curso donde *declara la PRISION PREVENTIVA de mi persona*, existe error de interpretación y aplicación de la norma penal como incongruencia a la aplicación a la misma, puesto que como lo expresa la señora juez, que hace pronunciamiento del artículo 263 del Código Procesal Penal donde se demostró que es imposible que mi hermano pueda intervenir en el proceso, pero establece que mi persona sí. "como es posible que mi persona



84123

obstaculice la averiguación de la verdad, SI TODA la investigación realizada se la otorgue juntamente con mi sobrino en declaraciones vertidas en el Ministerio Público y documentos aportados"; es por ello que el Ministerio Público a falta de objetividad teniendo toda la investigación que fue proporcionada por mi persona venga a establecer que pueda interferir y aunado a ello la Juez respalda dichas aseveraciones con los argumentos donde liga a proceso a mi persona. Por tal razón el auto de prisión preventiva no podía ser un copia y pega del auto de procesamiento, por lo que se violenta las normas ya establecidas en mi alegato y recurso de apelación. Como agravio "la libertad de locomoción" "la presunción de inocencia" "la errónea aplicación e interpretación de la ley" "la incongruencia de las argumentaciones de la señora Juez" "falta de fundamentación de hecho y de derecho" consagrado todo en los artículos constitucionales 12, 14, 26 como los 264 del Código Procesal Penal y se niega a dar una medida sustitutiva.

Por lo anterior expuesto, por este medio solicito muy respetuosamente se revoque la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete donde se ordena la **PRISION PREVENTIVA de mi persona, por las razones expuestas**, venido en grado y resolviendo conforme a derecho, se me otorgue una medida sustitutiva de las contempladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal:

FUNDAMENTO DE DERECHO:

El artículo 404 del Código Procesal Penal en su parte conducente reza: "Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelva: ...9) Los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones



Marcelo Renán
Abogad

SOLICITO:

- I. Que se admita para su trámite el presente memorial y se agregue a sus antecedentes.
- II. Que se tenga por interpuesto **RECURSO DE APELACIÓN** en contra de la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete en donde se **declara la PRISION-PREVENTIVA de mi persona**.
- III. Que practicadas las notificaciones correspondientes, le eleven las actuaciones a la Sala de la Corte de Apelaciones jurisdiccional.
- IV. Que se tomen en consideración los hechos antes expuestos, que son los que motivan el presente recurso.
- V. Que en el momento procesal oportuno se resuelva el presente recurso, declarando:
 - A) Con lugar el recurso interpuesto;
 - B) Que se revoque la misma en lo que se refiere a **la PRISION PREVENTIVA** y consecuentemente se dicte nuevamente resolución otorgando medida sustitutiva de las que establecidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, ordenando su libertad inmediata.
- VI. Que con certificación de lo resuelto vuelvan las actuaciones al juzgado de origen.

CITA DE LEYES:

La invocada y los artículos: 1, 3, 4, 5, 12, 14, 26, 28 de la Constitución Política de la República, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11bis, 13, 19, 20, 171, 163, 307 309, 404 al 411 del Código Procesal Penal.



155/
Acompaño duplicado y ~~doce~~ copias del presente memorial. *Asíados: doce Omilax*
Entre líneas: 53; léase.
Guatemala 23 de enero del 2017

A RUEGO DEL PRESENTADO QUE SI SABE FIRMAR PERO POR EL MOMENTO NO PUEDE
FIRMAR Y EN SU DEFENSA



[Signature]
Marcelo Renato Sardi Montroy
Abogado y Notario



ABOGADOS Y NOTARIOS
COSTA RICA

H-0954620

0.1.00 UN QUETZAL
TIMBRE FORENSE

GUATEMALA



EXPEDIENTE: 01080-2015-00372

HONORABLE SEÑORA JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.-

JOSE MANUEL MORALES MARROQUIN, de datos personales conocidos en autos, respetuosamente comparezco ante usted con el objeto de interponer RECURSO DE APELACIÓN, en contra de la resolución de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete (18-01-2017), auto judicial que declara la medida de coerción de PRISION PREVENTIVA en mi persona, y para lo cual:

EXPONGO:

I) TIEMPO Y FORMA DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL PLANTEAMIENTO DEL PRESENTE RECURSO:

I.a)Consta en autos y de conformidad con la ley procesal penal, me encuentro dentro del plazo y en mi derecho para interponer el presente recurso de Apelación. En el proceso penal arriba identificado se ordenó la aprensión de mi persona, donde se me liga a proceso por el ilícito penal de fraude (donde una de las sindicadas por el mismo ilícito penal ha sido beneficiada con algunas medidas sustitutivas); el día en que se realizara mi primera declaración se ordena la prisión preventiva por el supuesto de la Juzgadora de que existía *peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad*, toda vez de que existía el temor por parte de la fiscalía de que mi señor padre, por ser el Presidente Constitucional de la

República de Guatemala y que mi persona pueda influir en testigos como empleados y algunas entidades bancarias a que hace alusión la Fiscalía obstaculice la averiguación de la verdad.

I.b) La honorable Juzgadora en la audiencia de primera declaración, ella considera en sus argumentos para la imposición de una medida de coerción o el beneficio de una medida sustitutiva que es imposible creer que con el poder político de mi señor padre, realizara un obstáculo a la *averiguación de la verdad* y hace hincapié en que incurriría en un ilícito penal, porque no se puede crear un problema político y social, por la cierta influencia de mi señor padre que afectaría seriamente su cargo político y generaría acontecimientos que afecten a la Nación; toda vez que el señor Presidente incurriría en un delito como es el de Obstaculización a la acción penal, esto lo manifiesta y argumenta porque fue de los argumentos que estableció el Ministerio Público para negar la obtención de una medida sustitutiva, sin embargo el Derecho Penal, en que la aplicación de las medidas de coerción establecen un mal necesario para la averiguación de la verdad, y, bajo su independencia Judicial que la honorable Juzgadora como garante del debido proceso, dicta una resolución infundada e incongruente, violando lo establecido en el artículo 11Bis del Código Procesal Penal, por cuanto dice y argumenta una cosa para beneficiar a mi persona con una medida sustitutiva en virtud de que el tipo penal no tiene una prohibición, y establece la necesidad de dictar la prisión preventiva por el argumento vertido por la Fiscalía, que fueron los mismos por ligar a

ABOGADOS Y NOTARIOS
GUATEMALA

H-0954616



Q. 1.00 UN QUETZAL
TIMBRE FORENSE

ABOGADO Y NOTARIO



8415
2

proceso por el delito de fraude siendo los mismos argumentos facticos y jurídicos, argumentación que debieron ser distintos , e indicar los motivos suficientes racionales, lógicos y jurídicos que sustentaran su decisión . Esto aunado a los principios de nuestra norma constitucional que estable, en que todos las personas habitantes de la República de Guatemala somos iguales en derechos se estima únicamente de mencionar , y el grado de parentesco que tengo con mi señor padre y su investidura como Presidente Constitucional de la República de Guatemala , dejándome en **PRISION PREVENTIVA**, al tenor del artículo 263 del Código Procesal Penal, que puede evitarse con todas las reglas contenidas en las medidas sustitutivas a la prisión preventiva regulados en el articulo 264 del Código Procesal Penal.-

l.c)Estimo que el auto que se recurre con la argumentación de la Juez conocedora del derecho , dejo de aplicar y sustentar su decisión ,en lo que establece las " Reglas Mínimas del Convenio de Tokio" en la aplicación a las medidas sustitutivas en las cuales el Estado de Guatemala contempla ya en su ordenamiento jurídico y establece que la última razón es la prisión preventiva si existen argumentos valederos para poder otorgarla y en el transcurso de la audiencia y desarrollo se demostró lo que doctrinalmente y procesalmente exige la ley para el otorgamiento de una medida. Considerando que al tener la postura sin argumento, lo único que estableció la honorable Juez al dictar el auto de Prisión Preventiva es anticipar una condena que a todas luces se puede determinar un

ataque político y mediático a la verdad real del presente proceso.-

l.d) La parte considerativa de la resolución en auto judicial, contra el cual recurso, se estableció plenamente el arraigo de mi persona y realizo pronunciamiento únicamente en el artículo 263 del Código Procesal Penal, por las razones que se expuso se desprende que fueron las mismas razones por las que ligo a proceso a mi persona no variando nada y aunado a ella se tomó la amabilidad de reprochar y recalcar del supuesto acto constitutivo de delito interpretándolo como una persona culpable del ilícito que se me imputa, sin observación a la norma Suprema que establece el artículo 14 de la Constitución del República de Guatemala como LA PRESUNCION DE INOCENCIA. Por lo que siendo la regla la libertad del individuo y únicamente la excepción la prisión preventiva, y que las incongruencias consideradas y estimadas por la Juzgadora de garantías es suficiente para poder declarar la prisión preventiva.

l.e) La honorable Juzgadora argumenta la prisión preventiva con el obstáculo a la averiguación a la verdad, aun cuando mi persona haya declarado todo lo que se imputo desde el mes de Septiembre del año 2016, ante el Ministerio Público las cuales fueron dadas de forma voluntaria. Dichas declaraciones el Ministerio Público a falta de objetividad y la Juzgadora sin considerar ni una sola de estas aseveraciones, funda la argumentación de prisión preventiva en la falta de objetividad y ella violando el mismo esquema judicial de tutela judicial efectiva sin tomar en cuenta las declaraciones dadas en el Ministerio Público que fueron las mismas que el ente acusador uso en



contra de mi persona.-

II) LO QUE PRETENDO, AL PLANTEAR EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN:

Con mi garantía procesal al derecho de recurrir, lo que se pretende con el presente recurso de apelación, es que los Honorables Magistrados a los que me dirijo, revoquen la resolución impugnada, en su parte donde *declara la PRISION PREVENTIVA*. Y, se pueda otorgar una medida sustitutiva a la prisión preventiva impuesta de conformidad al artículo 264 del Código Procesal Penal.

III) SEÑALO LOS AGRAVIOS CAUSADOS POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL RECURRIDA:

El auto Judicial de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete donde se *declara la PRISION PREVENTIVA de mi persona*, existe error de interpretación y aplicación de la norma penal como incongruencia a la aplicación a la misma, puesto que como lo expresa la señora honorable juez garante, que hace pronunciamiento del artículo 263 del Código Procesal Penal donde se demostró que es imposible que mi señor padre pueda intervenir en el proceso, pero establece que mi persona sí. Como es posible que mi persona obstaculice la averiguación de la verdad, SI TODA la investigación realizada se la otorgue juntamente con mi tío Samuel Everardo Morales Cabrera en declaraciones vertidas en el Ministerio Público; es por ello que el Ministerio Público a falta de objetividad teniendo toda la investigación que fue proporcionada por mi persona, por mi tío, y por los esposos Abdy Susselly Estrada García y Mario

Estuardo Orellana López, como la declaración de la señorita Abdy Andrea Orellana Estrada, venga a establecer que pueda interferir y, aunado a ello la honorable señora Juez respalda dichas aseveraciones con los argumentos donde liga a proceso a mi persona; por lo que se violentan las normas ya establecidas por mi alegato y recurso de apelación. . . Como agravio a la libertad de locomoción; la presunción de inocencia; la errónea aplicación e interpretación de la ley; la incongruencia de las argumentaciones de la señora Juez; falta de fundamentación de hecho y de derecho, consagrado todo en los artículos Constitucionales: 12, 14, 26 como los 264 del Código Procesal Penal y se me niega a otorgar una medida sustitutiva permitida por la ley.-

Por lo anterior expuesto, y por este medio solicito muy respetuosamente: se revoque la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete donde se ordena **la PRISION PREVENTIVA de mi persona; por las razones expuestas**, venido en grado y resolviendo conforme a derecho, se me otorgue una medida sustitutiva de las contempladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal:-

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Nuestra Legislación Ordinaria, regula que SON APELABLES los autos dictados por los Jueces de Primera Instancia que resuelvan declarar la Prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. (artículo 404 del Código Procesal Penal).-

Por lo antes expuesto . . .



SOLICITO:

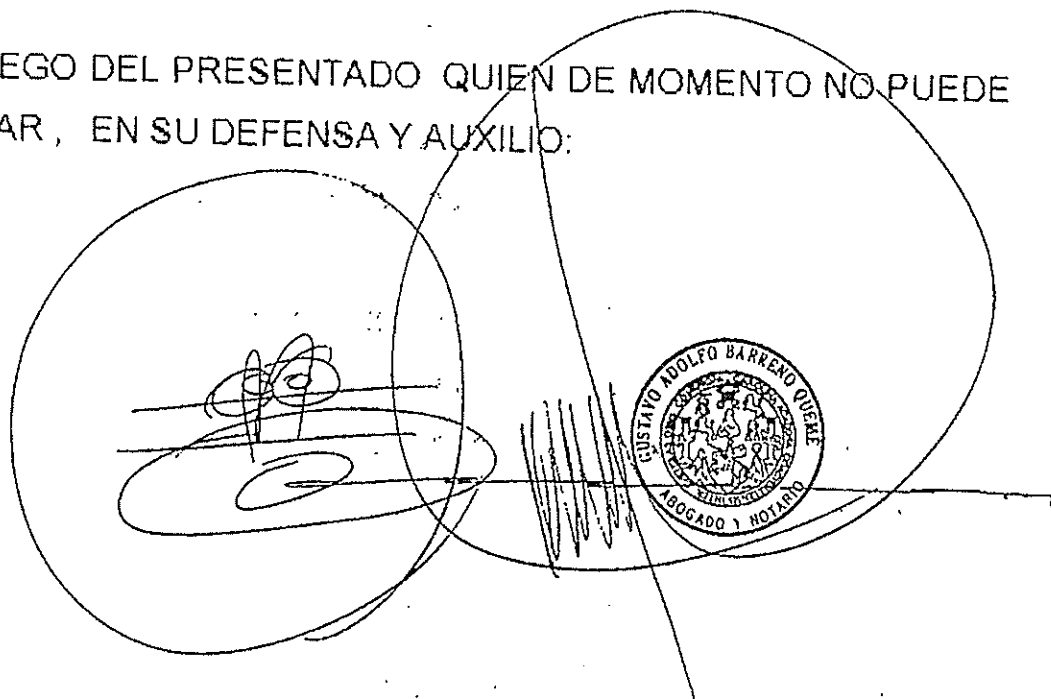
- i) Que se reciba y admita para su trámite el presente escrito y se agregue al expediente judicial de mérito.
- ii) Que se tenga por interpuesto **RECURSO DE APELACIÓN** en contra de la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete en donde se *declara la PRISION PREVENTIVA de mi persona.*
- iii) Que efectuadas las notificaciones correspondientes, se eleven las actuaciones a la Sala de la Corte de Apelaciones jurisdiccional.
- iv) Que se tomen en cuenta y sean considerados los hechos antes expuestos, que son los que motivan el presente recurso de Apelación.
- v) Que en su momento procesal oportuno se resuelva el presente recurso, declarando: a) Con lugar el recurso interpuesto; b) Que se revoque el auto de fecha 18 de Enero del año 2017, en lo que se refiere a *la PRISION PREVENTIVA* y consecuentemente se dicte nueva resolución, otorgando la o las medidas sustitutivas establecidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, ordenando mi libertad inmediata.
- vi) Que con certificación de lo resuelto por el Tribunal de alzada, vuelvan las actuaciones al juzgado de origen.

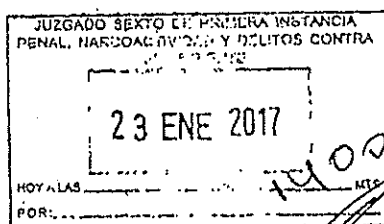
CITA DE LEYES: La invocada y los artículos: 28 de la Constitución Política de la República, 5, 11, 11Bis, 14, 19, 20, 171, 309, 404 al 411 del Código Procesal Penal.

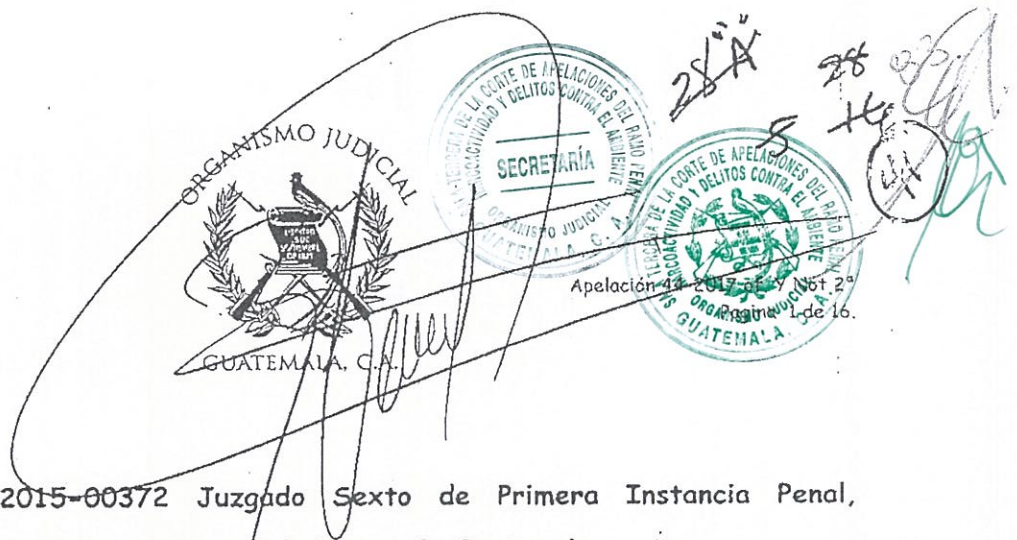
ACOMPAÑO 23 COPIAS.

Ciudad de Guatemala, 23 de Enero del año 2017.-

A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE
FIRMAR, EN SU DEFENSA Y AUXILIO:

A large, handwritten signature is written over a circular notary stamp. The stamp is for Gustavo Adolfo Barredo Quez, an Abogado y Notario. The signature is written in dark ink and is somewhat stylized.





Ref.: 01080-2015-00372 Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.-----

APELACION 44-2017 Of. 2º. SALA TERCERA DE LA CORTE DE
APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA
EL AMBIENTE. Guatemala, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.-----

I) Por recibidos los antecedentes provenientes del Juzgado Sexto de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala; II)
Se tiene a la vista el proceso por apelación planteada por Mario Estuardo
Orellana López, Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales
Marroquín en contra de la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil
diecisiete, dictada por Juzgado Supra identificado, en virtud que el Juzgador al
resolver declaró: "...Se ordena la Prisión Preventiva en contra de JOSE
MANUEL MORALES MARROQUÍN, SAMUEL EVERARDO MORALES CABRERA Y
MARIO ESTUARDO ORELLANA LOPEZ (...)"-----

CONSIDERANDO

- I -

Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que, entre
otros, los que declaren la presión o imposición de medidas sustitutivas y sus
modificaciones; le será permitido al tribunal de alzada el conocimiento del
proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios,
así como confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución venida en grado.--

CONSIDERANDO

- II -

Apelación planteada por Mario Estuardo Orellana López.-----
Argumenta que con esa fecha se le concedió rendir declaración ese mismo día
en donde la juez dictó prisión preventiva en su contra, por el delito de fraude



contenido en el artículo 452 del Código Penal y al momento de discutir las medidas de coerción la juzgadora tomó como presupuesto que existía peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, señalando el ente persecutor que podría influir en la declaración de los trabajadores del Registro General de la Propiedad y no acreditó absolutamente nada para demostrar que eso pudiera ser una grave sospecha de que ello pudiera ocurrir, razón por la que impugna la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, solicitando se modifique el auto de prisión y se dicten las medidas de coerción que el Ad quem considere. -----

Apelación planteada por Samuel Everardo Morales Cabrera. -----

El apelante argumenta que impugna la resolución en donde se dictó prisión preventiva resolución que es infundada e incongruente, no llenando los requisitos de fundamentación de hecho y de derecho porque los argumentos establecidos por Juzgadora fueron contradictorios violando así lo establecido en el artículo 11 Bis del Código Procesal Penal. Solicito se revoque la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en donde se ordena la prisión preventiva y resolviendo conforme a derecho se dicten las medidas sustitutivas que está contemplado en el artículo 264 del Código procesal Penal. -----

Apelación planteada por José Manuel Morales Marroquín. -----

Manifiesta que el auto judicial de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete que declara la prisión preventiva en su contra, existiendo en la resolución error de interpretación y aplicación de la norma penal como incongruencia a la aplicación de la misma, la juez hace pronunciamiento del artículo 263 del Código Procesal Penal donde se demostró que es imposible que mi señor padre pueda intervenir en el proceso, establece que mi persona sí,



Apelación No. 2017-0001 y No. 2º
Página 3 de 16.

como es posible que yo obstaculice la averiguación de la verdad si toda la investigación realizada fue juntamente con mi tío Samuel Everardo Morales Cabrera y por mi persona así como en las declaraciones de los esposos Abdy Susselly Estrada García, Mario Estuardo Orellana López y de la señorita Abdy Andrea Orellana Estrada y establezca que pueda interferir en el mismo. Solicito al Ad quem que revoquen la resolución impugnada y se me otorguen medidas sustitutivas de conformidad con el artículo 264 del código procesal Penal.-----

CONSIDERANDO

-III-

1. Este órgano jurisdiccional revisa los argumentos de los recurrentes y los confronta con la resolución venida en grado con el objeto de emitir una resolución apegada a derecho, estimando pertinente hacer un análisis sobre el objeto y naturaleza de las medidas de coerción; las mismas son de naturaleza pública y su objeto principal es garantizar las resultas del proceso mediante la comparecencia permanente al proceso de las personas vinculadas a la persecución penal, asegurando de tal manera que el o los imputados comparezcan al juicio y se permita el descubrimiento de la verdad. Tanto la Constitución Política de la República de Guatemala en consonancia con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, contemplan las regulaciones fundamentales en relación a las medidas de coerción, prevaleciendo siempre las circunstancias más favorables a los sindicados, conceptos que también han sido objeto de análisis reiteradamente por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.-----

2. En ese orden de ideas el capítulo VI del libro primero del Código Procesal Penal, contempla las medidas de coerción aplicables en el proceso penal

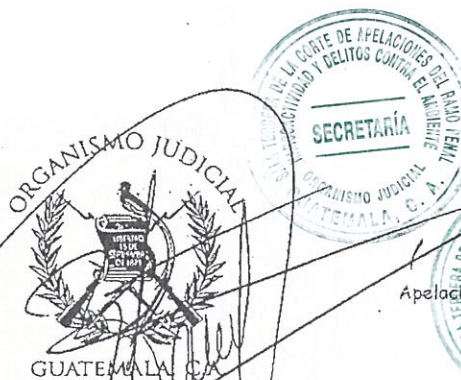


GUATEMALA, C.A.

Apelación 44-2017 of. y Not 2ª
Pagina 4 de 16

guatemalteco, estableciendo el artículo 259 la medida de coerción de prisión preventiva, la cual tiene vinculación directa con la norma constitucional que le da origen (artículo 13 de la Constitución), sin violentar la presunción de inocencia toda vez que su aplicación constituye una medida propicia para garantizar una eventual condena en todos aquellos casos de alto impacto y que solo podría derivarse a través de una sentencia, por lo que se hace necesario restringir de ciertos derechos personales o patrimoniales al procesado o de terceras personas a efecto de que el estado cumpla con su cometido en garantía del bien común y sobre todo de la tutela judicial efectiva; el artículo 264 del mismo cuerpo legal (Código Procesal Penal) contiene todas las medidas de coerción que pueden sustituir a la prisión preventiva, estas últimas deben considerarse como regla general en todos aquellos casos en donde no exista restricción legal para la imposición de medidas sustitutivas, consecuentemente la prisión preventiva resulta ser una medida de coerción excepcional que deberá imponerse obligatoriamente en aquellos casos que no tengan restricción legal para la imposición de las mismas y que exista el peligro procesal inminente de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad por parte de los procesados tal y como lo establecen los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal.-----

3. Siendo así que la regla general es la libertad provisional y la excepción es la prisión preventiva, corresponde al juez de garantía ser cauteloso en considerar los indicios racionales suficientes que generen el peligro procesal tanto de fuga como de obstaculización para la averiguación de la verdad, esos indicios surgen de las peculiaridades de los hechos y de las circunstancias personales de los acusados así como de las hipótesis normativas que contiene los tipos penales los cuales son objetos de investigación.-----



Apelación 44-2012-PJ-V Not 2ª
Página 5 de 16.

4. Por otro lado debe tomarse en cuenta que la apelación de las resoluciones establecidas en el artículo 404 del Código Procesal Penal, facultan al tribunal superior a una revisión total de las actuaciones de primer grado para concluir con certeza jurídica sobre el objeto de la misma, pudiendo establecer los errores de hecho y de derecho si existieren.

CONSIDERANDO

-IV-

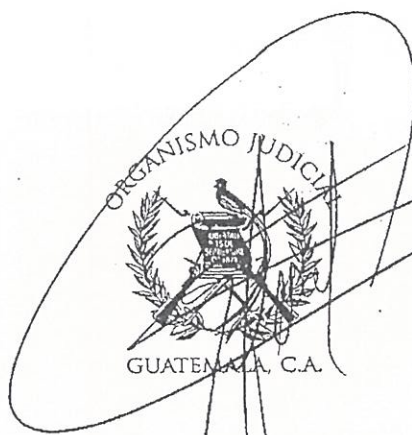
5. En ese orden de ideas este órgano jurisdiccional revisa la totalidad de las actuaciones y especialmente analiza los argumentos vertidos por la A quo en la resolución venida en grado estableciendo que la jueza argumentó según su criterio y análisis el motivo por el cual decretó la prisión preventiva en contra del sindicado Mario Estuardo Orellana López; sin embargo estimamos que sus argumentos no están acordes a los presupuestos contenidos en la norma procesal; para la imposición de la prisión preventiva la jueza hace una extensa relación de los hechos tal y como lo hizo ver al decretar el auto de procesamiento, hace un análisis de la documentación que involucra al sindicado Orellana López en los hechos, y concretamente argumenta que "el señor Mario Estuardo Orellana López para realizar las negociaciones con el Registro General de la propiedad se ocultó en otras personas jurídicas, se hizo valer de esa relación de confianza con José Manuel Morales Marroquín para obtener una factura y luego este otro ofrece factura de una empresa de su tío Samuel Morales, es decir se ocultó para realizar sus negocios y en esa documentación de los negocios se falsificó documentos que forman parte de los eventos de cotización (...). Se puede establecer así que tienen esa facilidad para falsificar elementos de prueba o modificarlos, así también tiene la grave sospecha de que coimputados como en el caso de la subdirectora de relaciones públicas del



GUATEMALA, C.A.

registro general de la propiedad informen falsamente (...)" . Entre otros muchos argumentos manifestados por la A quo que fueron debidamente analizados por esta sala, refiere que estas circunstancias generan la legalidad de la prisión preventiva la cual considera un mal necesario, que si bien la libertad debe prevalecer porque los derechos no son absolutos, y que estima necesaria la prisión preventiva para garantizar que el Ministerio Público pueda realizar la investigación sin ningún obstáculo. Este tribunal estima que los argumentos de la jueza contralora no son suficientes y valederos para no permitirle al sindicado Mario Estuardo Orellana López enfrentar el proceso penal estando en libertad provisional, toda vez que los peligros procesales regulados en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal no fueron debidamente acreditados tanto por el Ministerio Público ni por las otras partes que se opusieron a la medida sustitutiva solicitada por la defensa del sindicado Orellana López.-----

6. En principio debe considerarse que si el sindicado compareció personalmente al Ministerio Público a dar su declaración y proporcionar sus datos inclusive proporcionó informe sobre otras personas involucradas en los hechos, eso implica que dicha institución tenía información donde podría ser localizado el sindicado Orellana López, por lo que debió pedir su citación oportunamente para someterlo a persecución penal, y de no presentarse este podría ser objeto de una rebeldía que consecuentemente si genera la posibilidad de fuga por parte del sindicado, sin poder gozar en este caso de ninguna medida sustitutiva; situación ésta que no fue considera por el ente persecutor ni por la jueza contralora, y que contradictoriamente si fue considerada por la juzgadora para denegar la medida sustitutiva a la sindicada Alma Verónica Barrios Moreno, de quien dijo que no tenía disposición de



Apelación 44-2017-08 Y Not 2º

Página 7 de 16

SECRETARÍA

ORGANISMO JUDICIAL

GUATEMALA, C.A.

resolver su situación jurídica por no comparecer personalmente a la fiscalía sino que únicamente lo hizo por medio de su abogado defensor. Para este órgano jurisdiccional no puede evidenciarse que exista peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad cuando el propio sindicado está acudiendo ante el ente investigador a proporcionar información que inclusive le afecta, contrario sensu esta circunstancia evidencia la disposición del sindicado de someterse a la persecución penal y resolver su situación jurídica. por otro lado los hechos aludidos por la juzgadora que argumentan la prisión preventiva del señor Mario Estuardo Orellana López son propios de la hipótesis normativa que contienen el tipo penal por el cual lo vinculó a proceso penal, considerando este órgano jurisdiccional que no son argumentos propios de las consideraciones necesarias para desvanecer los presupuesto del peligro procesal de obstaculización de la averiguación de la verdad regulados en el artículo 263 del Código Procesal Penal.-----

7. En atención a lo antes considerado estimamos valederos y suficientes los argumentos del procesado Mario Estuardo Orellana López, para modificar la resolución que se conoce en grado además, los delitos por los que se le persigue no tiene caso de improcedencia de la medida sustitutiva, por lo que se acoge el recurso de apelación planteado por este, debiéndose resolver lo que en derecho corresponde.-----

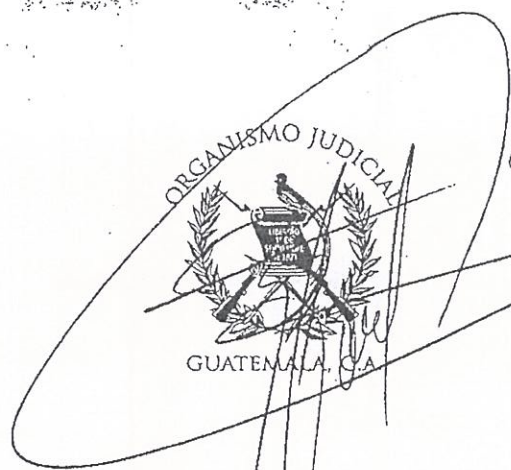
CONSIDERANDO

-V-

8. De la misma manera este órgano jurisdiccional analiza los argumentos vertidos por el apelante Samuel Everardo Morales Cabrera y al confrontarlos con la resolución apelada se establece que la jueza argumentó según su criterio y análisis el motivo por el cual decretó la prisión preventiva en



contra del sindicado Samuel Everardo Morales Cabrera; sin embargo estimamos que sus argumentos no están acordes a los presupuestos contenidos en la norma procesal; para la imposición de la prisión preventiva, la jueza hace una extensa relación de los hechos tal y como lo hizo ver al decretar el auto de procesamiento, hace un análisis de la documentación que involucra al sindicado Morales Cabrera en los hechos, y concretamente entre otros argumentos indica que "el Ministerio Público no tiene fundamentación suficiente que se refiera a que el Presidente de la República quien es hermano del sindicado Morales Cabrera y padre de Morales Marroquín pueda utilizar su autoridad nacional para obstaculizar la investigación por lo cual la juzgadora toma ese aspecto como irrelevante; sin embargo la juzgadora hace énfasis en que el Ministerio Público tiene pendiente entrevistar a trabajadores tanto de la entidad de Fulanos y Menganos como también de la empresa Plus Espectáculos Sociedad Anónima y que la entidad de Fulanos y Menganos, ha dejado en el Ministerio Público una actitud de no querer colaborar, en cuanto a ocultarse por no ser la misma empresa, por lo que no han aceptado la fiscalización de la Sat, es decir se suprime esta entidad para que se obtenga información, asimismo refiere que el Ministerio Público tiene pendiente recabar información bancaria en relación a la actividad económica del sindicado (...)" Este tribunal estima que los argumentos de la jueza contralora no son suficiente ni valederos para no permitirle al sindicado Samuel Everardo Morales Cabrera enfrentar el proceso penal estando en libertad provisional, toda vez que los peligros procesales regulados en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal no fueron debidamente acreditados tanto por el Ministerio Público ni por las otras partes que se opusieron a la medida sustitutiva solicitada por la defensa del sindicado Morales Cabrera.-----



9. Si bien es cierto la juzgadora indicó que no existía peligro de fuga pero si de obstaculización para la averiguación de la verdad por parte del sindicado; el análisis de los hechos debe ser integral por lo que en principio debe considerarse que si el sindicado compareció personalmente al Ministerio Público a dar su declaración y proporcionar sus datos inclusive proporcionó informe sobre hechos que le constan de donde evidentemente resultó sindicado, eso implica que dicha institución tenía información donde podría ser localizado el sindicado Morales Cabrera, por lo que debió pedir su citación oportunamente al órgano jurisdiccional para someterlo a persecución penal, y de no presentarse este podría ser objeto de una rebeldía que consecuentemente sí genera la posibilidad de fuga por parte del sindicado, sin poder gozar en este caso de ninguna medida sustitutiva; situación ésta que no fue considerada por el ente persecutor ni por la jueza contralora, y que contradictoriamente si fue considerada por la juzgadora para denegar la medida sustitutiva a la sindicada Alma Verónica Barrios Moreno, de quien dijo que no tenía disposición de resolver su situación jurídica por no comparecer personalmente a la fiscalía sino que únicamente lo hizo por medio de su abogado defensor. Para este órgano jurisdiccional no puede evidenciarse que exista peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad cuando el propio sindicado Samuel Everardo Morales Cabrera está acudiendo ante el ente investigador a proporcionar información que inclusive le afecta, contrario sensu esta circunstancia evidencia la disposición del sindicado de someterse a la persecución penal y resolver su situación jurídica. Por otro lado los hechos aludidos por la juzgadora que argumentan la prisión preventiva del señor Samuel Everardo Morales Cabrera son propios de la hipótesis normativa que contienen el tipo penal por el cual lo vinculó a proceso penal, además los tipos

enf

[Signature]



penales por los que se le persigue no tienen caso de improcedencia de la medida, considerando este órgano jurisdiccional que no son argumentos propios de las consideraciones necesarias para desvanecer los presupuesto del peligro procesal de obstaculización de la averiguación de la verdad regulados en el artículo 263 del Código Procesal Penal; debe también considerarse que el Ministerio Público al fundamentar la necesidad de vinculación procesal del sindicado Samuel Everardo Morales Cabrera individualizó la evidencia testimonial y documental idónea y necesaria para estimar que el sindicado ha participado en los hechos que se le atribuyen y que podrían constituir fundamento serio, de tal cuenta que la investigación pendiente a la que se refirió la jueza puede ser perfectamente recabada por la fiscalía y por los medios legales correspondientes, siendo este el objeto de que exista un plazo de investigación fijado y eso sucede en todo proceso penal, por lo que no puede ser el fundamento de la prisión preventiva decretada en contra del sindicado referido.-----

10. En atención a lo antes considerado estimamos valederos y suficientes los argumentos del procesado Samuel Everardo Morales Cabrera, para modificar la resolución que se conoce en grado, por lo que se acoge el recurso de apelación planteado por este, debiéndose resolver lo que en derecho corresponde. -----

CONSIDERANDO

-VI-

11. De la misma manera este órgano jurisdiccional analiza los argumentos vertidos por el apelante José Manuel Morales Marroquín y al confrontarlos con la resolución apelada se establece que la jueza argumentó según su criterio y análisis el motivo por el cual decretó la prisión preventiva en contra

del sindicado José Manuel Morales Marroquín; sin embargo estimamos que sus argumentos no están acordes a los presupuestos contenidos en la norma procesal; la jueza contralora utiliza los mismos argumentos para decretar prisión preventiva en contra del sindicado Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín; para la imposición de la prisión preventiva la jueza hace una extensa relación de los hechos tal y como lo hizo ver al decretar el auto de procesamiento, hace un análisis de la documentación que involucra al sindicado Morales Marroquín en los hechos, y concretamente entre otros argumentos indica que "el Ministerio Público no tiene fundamentación suficiente que se refiera a que el Presidente de la República quien es hermano del sindicado Morales Cabrera y padre de Morales Marroquín pueda utilizar su autoridad nacional para obstaculizar la investigación por lo cual la juzgadora toma ese aspecto como irrelevante, sin embargo la juzgadora hace énfasis en que el Ministerio Público tiene pendiente entrevistar a trabajadores tanto de la entidad de Fulanos y Menganos como también de la empresa Plus Espectáculos Sociedad Anónima y que la entidad de Fulanos y Menganos, ha dejado en el Ministerio Público una actitud de no querer colaborar, en cuanto a ocultarse por no ser la misma empresa, por lo que no han aceptado la fiscalización de la Sat, es decir se suprime esta entidad para que se obtenga información, asimismo refiere que el Ministerio Público tiene pendiente recabar información bancaria en relación a la actividad económica del sindicado (...)". Este tribunal estima que los argumentos de la jueza contralora no son suficiente ni valederos para no permitirle al sindicado José Manuel Morales Marroquín enfrentar el proceso penal estando en libertad provisional, toda vez que los peligros procesales regulados en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal no fueron debidamente acreditados tanto por el

conf

[Signature]



Ministerio Público ni por las otras partes que se opusieron a la medida sustitutiva solicitada por la defensa del sindicato Morales Marroquín; además, que el delito por el cual se le vincula no tiene caso de improcedencia de la medida.-----

12. Si bien es cierto la juzgadora indicó que no existía peligro de fuga pero si de obstaculización para la averiguación de la verdad por parte del sindicato; el análisis de los hechos debe ser integral, consta en las actuaciones que el sindicato José Manuel Morales Marroquín solicitó a la jueza contralora prestar su declaración, derecho que le fue vedado en ese momento, cuando el sindicato tiene el derecho de declarar cuantas veces lo requiera siempre y cuando su declaración sea pertinente y no aparezca como un procedimiento dilatorio o perturbador; sin embargo al finalizar los argumentos de todos las partes inclusive posterior a la resolución judicial decide darle la palabra al sindicato cuando ya era inconducente en ese momento procesal, cuando pudo tomarse muy en cuenta los argumentos de su defensa material en la decisión de medida de coerción a imponer; la espontanea declaración del sindicato Morales Marroquín es congruente con los hechos en cuanto a que el referido sindicato voluntariamente se presentó al ente persecutor para dar su declaración e información sobre hechos que le constan de donde evidentemente resultó el sindicato, eso implica que dicha institución tenía información donde podría ser localizado el sindicato Morales Marroquín, situación que generó la citación posterior del sindicato ante la jueza contralora, de no presentarse éste podría ser objeto de una rebeldía que consecuentemente si genera la posibilidad de fuga por parte del sindicato, sin poder gozar en este caso de ninguna medida sustitutiva; situación ésta que no fue considera por el ente persecutor ni por la jueza contralora. Para este

ORGANISMO JUDICIAL

GUATEMALA, C. A.



órgano jurisdiccional no puede evidenciarse que exista peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad cuando el propio sindicado José Manuel Morales Marroquín está acudiendo ante el ente investigador a proporcionar información que inclusive le afecta, contrario sensu esta circunstancia evidencia la disposición del sindicado de someterse a la persecución penal y resolver su situación jurídica. Por otro lado los hechos aludidos por la juzgadora que argumentan la prisión preventiva del señor José Manuel Morales Marroquín son propios de la hipótesis normativa que contienen el tipo penal por el cual lo vinculó a proceso penal, considerando este órgano jurisdiccional que no son argumentos propios de las consideraciones necesarias para desvanecer los presupuesto del peligro procesal de obstaculización de la averiguación de la verdad regulados en el artículo 263 del Código Procesal Penal; debe también considerarse que el Ministerio Público al fundamentar la necesidad de vinculación procesal del sindicado Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín individualizó la evidencia testimonial y documental idónea y necesaria para estimar que ambos sindicados han participado en los hechos que se le atribuyen y que podrían constituir fundamento serio, de tal cuenta que la investigación pendiente a la que se refirió la jueza puede ser perfectamente recabada por la fiscalía por los medios legales correspondientes, siendo este el objeto de que exista un plazo de investigación fijado y eso sucede en todo proceso penal, por lo que no puede ser el fundamento de la prisión preventiva decretada en contra del sindicado referido.-----

13. En atención a lo antes considerado estimamos valederos y sufrientes los argumentos del procesado José Manuel Morales Marroquín, para modificar la resolución que se conoce en grado, por lo que se acoge el recurso de apelación



GUATEMALA, C.A.

Apelación 44-2017 of. Y Not 2ª
Página 14 de 16.

planteado por este, debiéndose resolver lo que en derecho corresponde. -----

LEYES APLICABLES

Artículos: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 28, 29, 203, 204, 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 5, 7, 9, 11, 11 Bis, 19, 43, 49, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 263, 264, 324, 398, 399, 404, 409, 411 del Código Procesal Penal; 9, 10, 16, 86, 88 b), 141, 142, 142 bis y 143 de la Ley del Organismo Judicial.-----

POR TANTO

Esta Sala con base en lo considerado y leyes citadas, **DECLARA: I. CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por el procesado Mario Estuardo Orellana López en contra de la resolución de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete dictada por la Jueza Silvia Violeta De León Santos, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, consecuentemente se revoca la prisión preventiva decretada en su contra; **II.** Se imponen al procesado Mario Estuardo Orellana López las siguientes medidas sustitutivas: a) Caución económica de cien mil quetzales que deberá hacer efectiva en la tesorería del Organismo Judicial por medio del conducto correspondiente; b) la prohibición de salir del país, por lo que la jueza contralora deberá oficiar a donde corresponde para que se haga efectiva dicha restricción, c) Arresto Domiciliario en el departamento de Guatemala, d) la Prohibición de acercarse al Registro General de la propiedad, inmueble ubicado en su sede conocida en esta ciudad de Guatemala, e) La obligación de comparecer cada quince días a la Agencia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público encargada de la persecución penal en este caso; **III) CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por el procesado Samuel Everardo Morales Cabrera en



contra de la resolución de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete dictada por la jueza Silvia violeta De León Santos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, consecuentemente se revoca la prisión preventiva decretada en su contra; IV) Se imponen al procesado Samuel Everardo Morales Cabrera las siguientes medidas sustitutivas: a) Caución económica de cien mil quetzales que deberá hacer efectiva en la tesorería del Organismo Judicial por medio del conducto correspondiente; b) La prohibición de salir del país, por lo que la jueza contralora deberá oficiar a donde corresponde para que se haga efectiva dicha restricción, c) Arresto Domiciliario en el departamento de Guatemala, d) La Prohibición de acercarse al Registro General de la propiedad, inmueble ubicado en su sede conocida en esta ciudad de Guatemala, e) La obligación de comparecer cada quince días a la agencia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público encargada de la persecución penal en este caso; V) **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por el procesado José Manuel Morales Marroquín en contra de la resolución de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete dictada por la jueza Silvia violeta De León Santos, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, consecuentemente se revoca la prisión preventiva decretada en su contra; VI) Se imponen al procesado José Manuel Morales Marroquín las siguientes medidas sustitutivas: a) Caución económica de cien mil quetzales que deberá hacer efectiva en la tesorería del Organismo Judicial por medio del conducto correspondiente; b) La prohibición de salir del país, por lo que la jueza contralora deberá oficiar a donde corresponde para que se haga efectiva dicha restricción, c) Arresto Domiciliario en el



GUATEMALA, C.A.

Apelación 44-2017 of. y Not 2ª
Pagina 16 de 16.

departamento de Guatemala, d) La Prohibición de acercarse al Registro General de la propiedad, inmueble ubicado en su sede conocida en esta ciudad de Guatemala, e) La obligación de comparecer cada quince días a la agencia de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público encargada de la persecución penal en este caso; VII) Notifíquese y con certificación de lo resuelto vuelva al juzgado de procedencia para su cumplimiento.-----

JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA
Magistrado Presidente

ZONIA DE LA PAZ SANTIZO CORLETO DE BOCANEGRA
Magistrado Vocal II

EDITH MARILENA PÉREZ ORDÓÑEZ
Magistrada de Apoyo

MANOLO OTONIEL LÓPEZ MORALES
Secretario



LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE:-----

CERTIFICA

Que las **dieciséis** hojas de papel de fotocopia que anteceden, impresas de ambos lados, son autenticas por haber sido reproducidas el día de hoy de su respectivo original, las cuales reproducen los documentos siguientes: **a.** Memorial presentado por Samuel Everardo Morales Cabrera de fecha veintitrés de enero del dos mil diecisiete, que contiene recurso de apelación interpuesto ante el Juez Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dentro del expediente un mil ochenta guión dos mil quince guión cero cero trescientos setenta y dos; **b.** memorial de José Manuel Morales Marroquín de fecha veintitrés de enero del dos mil diecisiete, que contiene recurso de apelación interpuesto ante el Juez Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dentro del expediente un mil ochenta guión dos mil quince guión cero cero trescientos setenta y dos; **c.** Resolución de fecha dieciséis de febrero del dos mil diecisiete emitida dentro del expediente de apelación cuarenta y cuatro guión dos mil diecisiete y numero único un mil ochenta guión dos mil quince guión cero cero trescientos setenta y dos; -----

Y para entregar a la **Doctora Zonia De la Paz Santizo Corleto de Bocanegra** extendiendo, sello y firma la presente en una hoja de papel membretado del Organismo Judicial. En la ciudad de Guatemala, el once de febrero de dos mil veinte.-----


Ligia Margarita Rodas Hurtarte
Secretaria



Anexo 13

ORGANISMO JUDICIAL

GUATEMALA, C.A.



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º.

1 de 101

Ref.: 01080-2015-00222 Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

APELACION ESPECIAL 02-2019 Of. 1º.

SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. Guatemala, cinco de julio de dos mil diecinueve.

En nombre del Pueblo de la República de Guatemala, se pronuncia sentencia en los Recursos de Apelación Especial por Motivos de Fondo interpuestos por Julio Roberto Suárez Guerra; por Álvaro Manolo Dubón González; por Juan De Dios De La Cruz Rodríguez López; por Mauricio Farfán Donis en la calidad con que actúa; por Francisco Cortez Bocaletti, Vinicio Rafael García Pimentel; Max Erwin Quirin Schoder; Alberto Antonio Morales Velasco; Otto Fernando Molina Stalling bajo el auxilio del abogado Roberto Eduardo Stalling Sierra; Otto Fernando Molina Stalling bajo el auxilio del abogado Douglas Marlon Eduardo Morataya Salguero; el Ministerio Público; Julia Amparo Lotán Garzona; Doris Elubia González Salazar, Mayra Lisbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañon Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñónez; Rene Gilberto Sermeño Guzmán; y CICIG, en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Departamento de Guatemala, en el juicio seguido en contra de 1) OTTO FERNANDO MOLINA STALLING acusado de los delitos de ASOCIACION ILICITA y COBRO ILEGAL DE COMISIONES; 2) HERBERT RODOLFO GARCIA-GRANADOS REYES acusado de los delitos de ASOCIACION ILICITA Y COHECHO ACTIVO; 3) EDGAR RENE DE LA PEÑA ARCHILA acusado del delito de COHECHO

132



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
2 de 101

ACTIVO; 4) RAMIRO ARMANDO LORENZANA ORTIZ acusado de los delitos ASOCIACION ILICITA Y COHECHO ACTIVO; 5) ARTURO ADOLFO CASTELLANOS POOU acusado del delito de ASOCIACION ILICITA; 6) DORIS ELUBIA GONZALEZ SALAZAR; 7) MAYRA LISBETH GOMEZ SUAREZ; 8) ALBA MARITZA MALDONADO GAMBOA; 9) DELIA HAYDEE CASTAÑON GUERRA; 10) CARMEN YADIRA GIL QUIÑONEZ; 11) JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ LOPEZ; 12) JULIO ROBERTO SUAREZ GUERRA; 13) JULIA AMPARO LOTAN GARZONA; 14) MAX ERWIN QUIRIN SCHODER; y 15) ALVARO MANOLO DUBON GONZALEZ acusados del delito de FRAUDE; 16) FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI acusado de los delitos de ASOCIACION ILICITA y FRAUDE EN FORMA CONTINUADA; 17) SALVADOR ROLANDO ALVAREZ MERIDA acusado de los delitos de ASOCIACION ILICITA y FRAUDE; 18) LESTER OTTO DANIEL ORTIZ LIMA acusado de los delitos de ASOCIACION ILICITA; 19) WALTER OMAR LINARES PACHECO acusado del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES; 20) ALMA JUDITH MENDEZ BLANCO acusada del delito de TESTAFERRATO; y 21) JORGE MARIO LOPEZ PELLECCER acusado de los delitos de ASOCIACION ILICITA y FRAUDE.-----

Los procesados son de los datos de identificación personal que obran en la sentencia recurrida, su defensa en esta instancia está a cargo de: Jorge Mario López Pellecer, con el auxilio del Abogado Harry Samayoa Hardy; Doris Elubia Gonzalez Salazar, Mayra Lisbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañon Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñónez, con el auxilio del Abogado Defensor Dénnos Billy Herrera Arita; Julia Amparo Lotan Garzona, con el auxilio del Abogado Defensor Dénnos Billy Herrera Arita; Max Erwin Quirin Schoder, con el auxilio del Abogado Defensor Mario Daniel Carrillo



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º
3 de 101

García; Arturo Adolfo Castellanos Poou, con el auxilio del Abogado Defensor Francisco Javier Gallardo Samayoa; René Gilberto Sermeño Guzmán, con el auxilio de los Abogados Defensores Josué Eliberto Figueroa Son, Byron Renato Duran Menéndez, Guillermo Estuardo Pivaral Beltrán y Jose Luis Felipe Cabria Estrada; Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, con el auxilio del Abogado Defensor César Saúl Calderón de León; Julio Roberto Suárez Guerra, con el auxilio del Abogado Defensor Vinicio Rafael García Pimentel; Lester Otto Daniel Ortiz Lima, con el auxilio del Abogado Defensor Henry Alexander Leonardo Marroquín; Max Erwin Quirin Schoder, con el auxilio del Abogado Defensor Alberto Antonio Morales Velasco; Salvador Rolando Alvarez Mérida, Alvaro Manolo Dubón González y Alma Judith Méndez Blanco de Alvarez, con el auxilio del Abogado Defensor Arturo Miranda Rieckhof; Otto Fernando Molina Stalling, con el auxilio de los Abogados Defensores Sandra Elizabeth Aguilar de Falco y Roberto Eduardo Stalling Sierra; Herberth Rodolfo García-Granados Reyes, con el auxilio del Abogado Defensor Edwin Estuardo Mayen García; Francisco Cortés Bocaletti, con el auxilio del Abogado Defensor Luis Fernando Godoy Gil; Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, con el auxilio de los Abogados Defensores César Saúl Calderón de León y Ester Noemí Guerrero Gálvez de Wohlers; el Ministerio Público a través de la Agente Fiscal Olga Rubilia Monzón Soto; como Querellante Adhesivo la Procuraduría General de la Nación, a través de su Mandatario Especial Judicial German Ambrosio Alvarado López; Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a través de su Mandatario Especial Judicial y Administrativo Abogado René Gilberto Sermeño Guzmán; y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a través de su Mandatario Judicial con Representación Abogado César Augusto Rincón Sabogal; dentro del



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
4 de 101

presente proceso no hay Actor Civil ni Tercero civilmente demandado.-----

ANTECEDENTES

Resumen de la sentencia recurrida:

a) De la acusación: El Ministerio Público previa investigación realizada, estableció la posible participación de los acusados en el hecho calificado como delito de Fraude, por lo que formuló la acusación que aparece en el auto correspondiente y transcrito en la sentencia objeto del recurso de apelación especial.-----

b) De la parte resolutive de la sentencia impugnada: El Tribunal Sentenciador en el presente caso por unanimidad declaro: *"I) Que el procesado OTTO FERNANDO MOLINA STALLING es autor responsable del delito de COBRO ILEGAL DE COMISIONES y por tal ilícito le impone las penas siguientes: A) SEIS AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN INCONMUTABLES, ya aumentada en una cuarta parte, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal; B) MULTA DE CINCUENTA MIL QUETZALES, que deberán ser pagados en un plazo no mayor de tres días, contados a partir de la fecha en que se encuentre firme el presente fallo y que se convertirán en un día de prisión por cada CIEN QUETZALES NO PAGADOS; y C) INHABILITACIÓN ESPECIAL, para ejercer cargos públicos durante el plazo de cuatro años, conforme lo dispuesto en el artículo 58 del Código Penal, debiendo oficiar el Juzgado de Ejecución Penal competente, a donde corresponda al encontrarse firme el presente fallo; II) Que ABSUELVE al procesado OTTO FERNANDO MOLINA STALLING del delito de ASOCIACION ILICITA, por el cual se formuló acusación en su contra, dejándolo libre de este cargo, por las razones consideradas; III) Que ABSUELVE al procesado HERBERT RODOLFO GARCIA-GRANADOS REYES de los delitos de*



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
5 de 101

ASOCIACION ILICITA Y COHECHO ACTIVO, por los cuales se formuló acusación en su contra, dejándolo libre de ambos cargos; IV) Que ABSUELVE al procesado EDGAR RENE DE LA PEÑA ARCHILA del delito de COHECHO ACTIVO, por el cual se formuló acusación en su contra, dejándolo libre del cargo, por las razones consideradas y encontrándose bajo medida de coerción personal, se ordena su inmediata libertad, por el sentido del fallo; V) Que ABSUELVE al procesado RAMIRO ARMANDO LORENZANA ORTIZ de los delitos ASOCIACION ILICITA y COHECHO ACTIVO, por los cuales se formuló acusación en su contra, dejándolo libre de ambos cargos, por las razones consideradas y encontrándose bajo medida de coerción personal se ordena su inmediata libertad, por el sentido del fallo; VI) Que ABSUELVE al procesado ARTURO ADOLFO CASTELLANOS POOU del delito de ASOCIACION ILICITA, por el cual se formuló acusación en su contra, dejándolo libre del cargo; VII) Que los procesados: a) DORIS ELUBIA GONZALEZ SALAZAR; b) MAYRA LISBETH GOMEZ SUAREZ; c) ALBA MARITZA MALDONADO GAMBOA; d) DELIA HAYDEE CASTAÑON GUERRA; e) CARMEN YADIRA GIL QUIÑONEZ; f) JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ LOPEZ; g) JULIO ROBERTO SUAREZ GUERRA; h) JULIA AMPARO LOTAN GARZONA; i) MAX ERWIN QUIRIN SCHODER; j) ALVARO MANOLO DUBON GONZALEZ; y k) FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI, son autores responsables de la comisión del delito de FRAUDE, cometido en contra de la Administración Pública, infracción penal regulado en el artículo 450 del Código Penal y por tal ilícito se les impone las penas siguientes: A) SEIS AÑOS DE PRISIÓN y TRES MESES INCONMUTABLES, ya aumentada en una cuarta parte, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Penal; y B) INHABILITACIÓN ESPECIAL, para ejercer



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
6 de 101

cargos públicos durante el plazo de cuatro años, conforme lo dispuesto en el artículo 58 del Código Penal, debiendo oficiar el Juzgado de Ejecución Penal competente, a donde corresponda al encontrarse firme el presente fallo y encontrándose gozando de medidas sustitutivas las procesadas: a) DORIS ELUBIA GONZALEZ SALAZAR; b) MAYRA LISBETH GOMEZ SUAREZ; c) ALBA MARITZA MALDONADO GAMBOA; d) DELIA HAYDEE CASTAÑON GUERRA; y e) CARMEN YADIRA GIL QUIÑONEZ; se les deja en la misma situación hasta que el fallo se encuentre firme; VIII) Que ABSUELVE al procesado FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI, del delito de ASOCIACION ILICITA, por el cual se formuló acusación en su contra, dejándolo libre de este cargo, por las razones consideradas; IX) Que ABSUELVE al procesado SALVADOR ROLANDO ALVAREZ MERIDA, de los delitos de ASOCIACION ILICITA y FRAUDE por los cuales se formuló acusación en su contra, dejándolo libre de ambos cargos; X) Que ABSUELVE al procesado LESTER OTTO DANIEL ORTIZ LIMA, del delito de ASOCIACION ILICITA, dejándolo libre del cargo; XI) Que ABSUELVE al procesado WALTER OMAR LINARES PACHECO, del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, por el cual se formuló acusación en su contra, dejándolo libre de este cargo; XII) Que ABSUELVE a la procesada ALMA JUDITH MENDEZ BLANCO del delito de TESTAFERRATO, por el cual se formuló acusación en su contra, dejándola libre de este cargo; XIII) Que ABSUELVE al procesado JORGE MARIO LOPEZ PELLECCER, de los delitos de ASOCIACION ILICITA y FRAUDE, por los cuales se formuló acusación en su contra, dejándolo libre de ambos cargos; XIV) Encontrándose los procesados: OTTO FERNANDO MOLINA STALLING, JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ LOPEZ; JULIO ROBERTO SUAREZ GUERRA; JULIA AMPARO LOTAN GARZONA; MAX



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º
7 de 101

ERWIN QUIRIN SCHODER; ALVARO MANOLO DUBON GONZALEZ; y FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI, bajo medida de coerción personal de privación de libertad, por las razones consideradas, este Tribunal de oficio les otorga el beneficio de MEDIDA SUSTITUTIVA consistente en OBLIGACIÓN DE FIRMAR EL LIBRO DE CONTROL DE PROCESADOS DE ESTE TRIBUNAL EL PRIMER DÍA HÁBIL QUE CORRESPONDA, CADA QUINCE DÍAS, previo faccionamiento del acta correspondiente con las advertencias respectivas, ordenándose su inmediata libertad; XV) Se revocan las medidas de coerción que pesan sobre los procesados HERBERT RODOLFO GARCIA GRANADOS REYES, EDGAR RENE DE LA PEÑA ARCHILA, RAMIRO ARMANDO LORENZANA ORTIZ, ARTURO ADOLFO CASTELLANOS POOU, SALVADOR ROLANDO ALVAREZ MERIDA, LESTER OTTO DANIEL ORTIZ LIMA, WALTER OMAR LINARES PACHECO, ALMA JUDITH MENDEZ BLANCO y JORGE MARIO LOPEZ PELLECCER. XVI) Se suspende a los condenados: a) OTTO FERNANDO MOLINA STALLING; b) DORIS ELUBIA GONZALEZ SALAZAR; c) MAYRA LISBETH GOMEZ SUAREZ; d) ALBA MARITZA MALDONADO GAMBOA; e) DELIA HAYDEE CASTAÑÓN GUERRA; f) CARMEN YADIRA GIL QUIÑONEZ; g) JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ LOPEZ; h) JULIO ROBERTO SUAREZ GUERRA; i) JULIA AMPARO LOTAN GARZONA; j) MAX ERWIN QUIRIN SCHODER; k) ALVARO MANOLO DUBON GONZALEZ; y l) FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI, en el ejercicio de sus derechos políticos, durante el tiempo que dure la condena; XVII) CON LUGAR LA ACCION REPARADORA, QUE RECLAMA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CONTRA DE LA ENTIDAD TERCERA CIVILMENTE DEMANDADA, DROGUERÍA PISA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
8 de 101

consecuencia SE LE CONDENA AL PAGO DE LA CANTIDAD DE TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES Y VEINTISIETE CENTAVOS; XVIII) LAS COSTAS PROCESALES deberán ser soportadas por el Estado de Guatemala, en cuanto a la naturaleza absolutoria del presente fallo; y derivado de que los procesados condenados: a) OTTO FERNANDO MOLINA STALLING, b) DORIS ELUBIA GONZALEZ SALAZAR; c) MAYRA LISBETH GOMEZ SUAREZ; d) ALBA MARITZA MALDONADO GAMBOA; e) DELIA HAYDEE CASTAÑON GUERRA; f) CARMEN YADIRA GIL QUIÑONEZ; g) JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ LOPEZ; h) JULIO ROBERTO SUAREZ GUERRA; i) JULIA AMPARO LOTAN GARZONA; j) MAX ERWIN QUIRIN SCHODER; k) ALVARO MANOLO DUBON GONZALEZ; y l) FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI; han permanecido privados de libertad, condición que evidencia una situación económica precaria, el Tribunal los exime del pago de Costas procesales quedando a cargo del Estado; XIX) Se ordena la devolución de la evidencia documental, material y audiovisual, a los sujetos procesales, en la forma como fue incorporada; XX) Léase integralmente esta sentencia en la audiencia del TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, a las CATORCE HORAS, y entréguese copia de la misma a quien posteriormente la reclame y tenga legítimo interés procesal; XXI) Al estar firme esta sentencia, se ordena remitir el expediente al Juez de Ejecución competente, para los efectos legales correspondientes; debiéndose dejar copia certificada del mismo, para su archivo en relación a los procesados absueltos; XXII) Notifíquese..."-----

c) De la admisibilidad formal del recurso: En su oportunidad procesal se admitió formalmente el recurso.- -----



5
APELLACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º.

9 de 101

d) De la audiencia de debate: Fijada para el veinte de junio de dos mil diecinueve a las nueve horas.-----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FORMA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo once (11) bis del Código Procesal Penal.

AGRAVIO CAUSADO: El agravio que le causa la sentencia impugnada en apelación especial, no es que no obstante, la inexistencia de fundamentación, se emite un fallo de absolución, lo que hace que la misma contenga vicios de no ser expresa, clara y precisa y legítima con aplicación y expresión de los razonamientos que fueron concluyentes para el Tribunal en aplicación de la sana crítica razonada como lo exige la ley. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Al ser inexistencia la fundamentación legal en la sentencia recurrida, y por ende al no cumplir con las exigencias procesales de ser clara, precisa, expresa ni legítima en cuanto a los razonamientos efectuados en relación a la valoración de la prueba y comprobación de participación y autoría en aplicación de la sana crítica razonada, es procedente que se revoque la misma y se ordene el reenvío del expediente para la repetición del debate por jueces distintos. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia de los artículos ciento ochenta y seis (186), trescientos ochenta y cinco (385) y trescientos noventa y cuatro (394) numeral tres (3) del Código Procesal Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: El agravio que le causa la sentencia impugnada en



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
10 de 101

apelación especial, lo que no obstante, la inexistencia de fundamentación, se emite un fallo de absolución, lo que hace que la misma contenga vicios de no ser expresa, clara, precisa y legítima con aplicación y expresión de los razonamientos que fueron concluyentes para el Tribunal en aplicación de la sana crítica razonada como lo exige la ley. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Al ser inexistente la aplicación de los principio de valoración de la prueba en la sentencia recurrida, y por ende al no cumplir con las exigencias procesales de ser clara, precisa, expresa ni legítima en cuanto a los razonamientos efectuados en relación a la valoración de la prueba y comprobación de participación y autoría en aplicación de la sana crítica razonada, es procedente que se revoque la misma y se ordene el reenvío del expediente para la repetición del debate por jueces distintos. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo diez (10) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: El agravio que causa el Tribunal de Sentencia con el fallo emitido, quedó demostrado de modo legal cuando emite sentencia condenatoria por el delito de fraude para los sindicados Doris Elubia González Salazar de Barrientos, Mayra Lissbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañón Guerra, Carmen Yadira Gil Quiñónez, miembros de la junta de licitación; Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Julio Roberto Suárez Guerra, Julia Amparo Lotán Garzona, Max Erwin Quirim Shoder, miembros de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social;

ORGANISMO JUDICIAL



GUATEMALA, C.A.



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
11 de 101

Francisco Cortez Bocaletti Jefe del Departamento de Servicios Contratado y Álvaro Manolo Dubón González, Subgerente administrativo y representante legal del instituto, sin embargo absuelve a los sindicados Otto Fernando Molina Stalling, Herbert Rodolfo García Granados Reyes, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Arturo Adolfo Castellanos Poou y Francisco Cortez Bocaletti, a pesar de estos los hechos y acciones realizadas por estos, revestidas de los elementos del delito de asociación ilícita, por lo que la sentencia debió emitirse en sentido condenatorio por este ultimo delito para los sindicados identificados, para que no quede en impunidad las acciones cometidas. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se aplique la norma inobservada en el sentido que la prueba analizada y valorada en la sentencia, estableció en forma legal la relación causal en cuanto al hecho atribuido a los sindicados, lo que constituye el delito de Asociación Ilícita, subsumiendo la imputación objetiva en el presente caso a través de la identidad entre la acción, el resultado y la obligada sentencia condenatoria, en aplicación legal de la relación de causalidad establecida en el artículo diez (10) del Código Penal. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Con relación a la sentencia absolutoria emitida a favor de los procesados Edgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, por el delito de Cohecho Activo. -----

AGRAVIO CAUSADO: El agravio que causa el Tribunal de Sentencia con el fallo emitido, quedó demostrado de modo legal cuando emite sentencia condenatoria por el delito de fraude para los sindicados Doris Elubia González Salazar de Barrientos, Mayra Lissbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañón Guerra, Carmen Yadira Gil Quiñónez, miembros de la

137



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
12 de 101

junta de licitación; Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Julio Roberto Suárez Guerra, Julia Amparo Lotán Garzona, Max Erwin Quirim Shoder, miembros de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; Francisco Cortez Bocaletti Jefe del Departamento de Servicios Contratado y Álvaro Manolo Dubón Gonzalez, Subgerente administrativo y representante legal del instituto, sin embargo absuelve a los sindicatos Edgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, a pesar de estos los hechos y acciones realizadas por estos, revestidas de los elementos del delito de cohecho activo, por lo que la sentencia debió emitirse en sentido condenatorio por este ultimo delito para los sindicatos identificados, para que no quede en impunidad las acciones cometidas. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se aplique la norma inobservada en el sentido que la prueba analizada y valorada en la sentencia, estableció en forma legal la relación causal en cuanto al hecho atribuido a los sindicatos, lo que constituye el delito de Cohecho Activo, subsumiendo la imputación objetiva en el presente caso a través de la identidad entre la acción, el resultado y la obligada sentencia condenatoria, en aplicación legal de la relación de causalidad establecida en el artículo diez (10) del Código Penal. -----

TERCER SUBMOTIVO

Con relación a la sentencia absolutoria emitida a favor del procesado Herbert Rodolfo García Granados Reyes, por los delitos de Asociación Ilícita y Cohecho Activo. -----

AGRAVIO CAUSADO: El agravio que causa el Tribunal de Sentencia con el fallo emitido, quedó demostrado de modo legal cuando emite sentencia condenatoria por el delito de fraude para los sindicatos Doris Elubia González Salázar de



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
13 de 101

Barrientos, Mayra Lissbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañón Guerra, Carmen Yadira Gil Quiñónez, miembros de la junta de licitación; Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Julio Roberto Suárez Guerra, Julia Amparo Lotán Garzona, Max Erwin Quirim Shöder, miembros de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; Francisco Cortez Bocaletti Jefe del Departamento de Servicios Contratado y Álvaro Manolo Dubón Gonzalez, Subgerente administrativo y representante legal del instituto, sin embargo absuelve al sindicato Herbert Rodolfo García Granados Reyes, a pesar de estos los hechos y acciones realizadas por este, revestidas de los elementos de los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, por lo que la sentencia debió emitirse en sentido condenatorio por este ultimo delito para los sindicatos identificados, para que no quede en impunidad las acciones cometidas. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se aplique la norma inobservada en el sentido que la prueba analizada y valorada en la sentencia, estableció en forma legal la relación causal en cuanto al hecho atribuido al sindicato, lo que constituye el delito de Asociación Ilícita y Cohecho Activo, subsumiendo la imputación objetiva en el presente caso a través de la identidad entre la acción, el resultado y la obligada sentencia condenatoria, en aplicación legal de la relación de causalidad establecida en el artículo diez (10) del Código Penal. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FORMA DE LA COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo once (11) bis del Código Procesal Penal. ---



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
14 de 101

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal, por violación al principio lógico de razón suficiente. -----

TERCER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo once (11) bis del Código Procesal Penal, respecto a los procesados involucrados en el caso IGSS CHIQUIMULA. -----

AGRAVIO CAUSADO: El Tribunal *a quo* no utilizó las reglas de la sana crítica razonada, específicamente la ley de la lógica, regla de la coherencia, en su principio de razón suficiente, violando con ello el sistema valorativo que exige el artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal, tampoco indicó los motivos de hecho y de derecho para fundamentar la sentencia dictada, lo cual causa agravio al dejar de sancionar los ilícitos penales calificados como delitos en nuestro ordenamiento penal sustantivo, limitando la función del Ministerio Público que por imperativo constitucional es el ente encargado de la persecución penal. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que al resolver el presente recurso de apelación especial por motivo de forma, se advierta que efectivamente fueron inobservados los preceptos contenidos en el artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal, se declare procedente y en aplicación del artículo cuatrocientos treinta y dos (432) del mismo cuerpo legal, se anule la sentencia que se recurre y se ordene el reenvío de la causa al Tribunal competente para su respectiva renovación, solo en lo que tiene que ver con los hechos de Chiquimula. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º

15 de 101

GUATEMALA APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del último párrafo del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: El tribunal recurrido no sancionó en su justa dimensión legal la conducta delictiva total ejecutada por los procesados, con lo cual vulneró el ejercicio de la acción penal y el interés de la justicia. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se declare procedente el recurso de apelación especial por motivo de fondo y en consecuencia se anule la sentencia impugnada y se declare que Doris Elubia Gonzalez Salazar, Mayra Lissbeth Gomez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Cataron Guerra, Carmen Yadira Gil Quiñónez, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Julió Roberto Suárez Guerra, Julia Amparo Lotan Garzona, Max Erwin Quirin Schoder, Álvaro Manolo Dubon González y Francisco Cortez Bocaletti, son autores responsables del delito de Fraude, por lo que la pena que en derecho corresponde a imponer es un total de nueve años con cuatro meses de prisión inconvertibles. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta interpretación indebida del artículo cuatrocientos cuarenta y dos (445) y treinta y seis (36) inciso primero del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: El Ministerio Público acusó a los procesados Edgar Rene de la Peña Archila y Herbert Rodolfo García Granados Reyes, por el delito de Cohecho Activo, sin embargo el Tribunal de Sentencia los absuelve en virtud de una interpretación errónea de la ley sustantiva, haciendo caso omiso a lo regulado en el artículo cuatrocientos cuarenta y dos (442) y artículo treinta y seis



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
16 de 101

(36) inciso primero del Código Penal, con lo cual vulneró el ejercicio de la acción penal y el interés de la justicia, desconociendo las reglas de la sana crítica razonada y la falta de fundamentación en la sentencia emitida por dicho tribunal. -

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Al dictar sentencia, se revuelva procedente el recurso de apelación especial por motivo de fondo de manera parcial, en consecuencia se anule el apartado sentencia impugnado y por ser los procesados Herbert Rodolfo García Granados Reyes y Edgar Rene de la Peña Archila autores penalmente responsables del delito de Cohecho Activo, se dicte la pena que en derecho corresponde y justicia corresponde imponer. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FORMA DEL MINISTERIO PÚBLICO APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo once (11) bis del Código Procesal Penal. - - -

AGRAVIO CAUSADO: El Tribunal *a quo* no consignó claramente las circunstancias de hecho y los razonamientos de derecho en que basa su conclusión, dado que debió explicar el proceso lógico que siguió en la valoración de los distintos medios de prueba, en virtud que la motivación de la sentencia constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el Tribunal apoyó su decisión, que reviste de importancia no solo para el acusado sino también para el Estado; en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia y dado que toda resolución carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal se concluye que el Tribunal sentenciador faltó al requisito esencial de fundamentación y por lo tanto la sentencia impugnada adolece de un requisito esencial para darle validez, lo cual causa agravio al ente encargado de la persecución penal, puesto que a través de



02-2019
Oficial 1º.
17 de 101

una sentencia que no reúne los requisitos esenciales el *a quo* deja de sancionar ilícitos penales calificados como delitos en nuestro ordenamiento penal sustantivo, limitando la función del Ministerio Público que por imperativo constitucional es el ente encargado de la persecución penal. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se declare procedente el recurso de apelación especial en virtud de la ausencia de un requisito fundamental de la sentencia y en aplicación del artículo cuatrocientos treinta y dos (432) del mismo cuerpo legal, anule parcialmente la sentencia que se recurre y ordene el reenvío de la causa al Tribunal competente para su respectiva renovación, obviamente sin la participación de los mismos jueces. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal, por violación al principio lógico de razón suficiente. -----

AGRAVIO CAUSADO: En la apreciación del material probatorio de valor decisivo, no se utilizaron las reglas de la sana crítica razonada, específicamente la ley de la lógica, regla de la coherencia, en su principio de razón suficiente, violando con ello el sistema valorativo que exige el artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal así tampoco consigno motivos de hecho y de derecho para fundamentar la sentencia dictada, lo cual causa agravio al dejar de sancionar ilícitos penales calificados como delitos en nuestro ordenamiento penal sustantivo, limitando la función del Ministerio Público que por imperativo constitucional es el ente encargado de la persecución penal. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que al resolver el presente recurso de apelación especial se advierta que efectivamente fueron inobservados los preceptos contenidos en el artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
18 de 101

Procesal Penal, lo declare procedente, y se anule parcialmente la sentencia que se recurre y ordene el reenvío de la causa al Tribunal competente para su respectiva renovación, sin la participación de los mismos jueces. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL MINISTERIO PÚBLICO APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del ultimo párrafo del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: El tribunal recurrido no sancionó en su justa dimensión legal la conducta delictiva total ejecutada por los procesados, con lo cual vulneró el ejercicio de la acción penal el interés de la justicia. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se declare procedente el recurso de apelación especial por motivo de fondo y en consecuencia se anule el apartado sentencia impugnado y por ser los procesados Doris Elubia Gonzalez Salazar, Mayra Lisbeth Gomez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañon Guerra, Carmen Yadira Gil Quiñónez, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Julio Roberto Suárez Guerra, Julia Amparo Lotan Garzona, Max Erwin Quirin Schoder, Álvaro Manolo Dubon González y Francisco Cortez Bocaletti autores penalmente responsables de Fraude, gradué la pena impuesta de conformidad con lo regulado en el ultimo párrafo del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, lo que hace un total de nueve años con siete meses de prisión inconvertibles. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DE LAS ACUSADAS DORIS ELUBIA GONZALEZ SALAZAR, MAYRA LISBETH GOMEZ SUAREZ, ALBA MARITZA MALDONADO GAMBOA, DELIA



02-2019
Oficial 1º.
19 de 101

HAYDEE CASTAÑON GUERRA Y CARMEN YADIRA GIL QUIÑONEZ
APELANTES:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo diez (10) del Código Penal, por inexistencia de una relación de causalidad en los hechos previstos como tipos penales y los hechos que se tuvieron por acreditados. -----

AGRAVIO CAUSADO: Causa agravio la errónea aplicación del artículo diez (10) del Código Penal, por inexistencia de una relación de causalidad en los hechos previstos como tipos penales y los hechos que se tuvieron por acreditados, porque violenta sus derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de la República de Guatemala de presunción de inocencia, el derecho de defensa en juicio es una garantía fundamental de toda persona y contempla tres grandes tubos, el derecho a ser citado, oído y de no ser privado de los derechos de ser vencido en juicio. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo (11) del Código Penal por considerar que existió dolo en las acciones que se tuvieron por acreditados por el Tribunal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Causa agravio la inobservancia del artículo once (11) del Código Penal, por considerar que existió dolo en las acciones que se tuvieron por acreditados por el Tribunal, ya que se puede tener por acreditado la intención dolosa de defraudar al Estado cuando este no tuvo detrimento de ninguna circunstancia con la licitación, no se vio algún aprovechamiento ilícito de su parte, no se tuvo por acreditada tal situación. -----

TERCER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
20 de 101

Código Penal que regula el delito de fraude y del presupuesto del artificio para defraudar al Estado. -----

AGRAVIO CAUSADO: Al aplicar erróneamente el tipo penal de Fraude artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, violenta sus derechos fundamentales como seres humanos, ya que fueron condenadas por un actuar que no fue el debidamente demostrados, ni que pueda incurrir en los verbos rectores de tipo penal. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que la Honorable Sala de la Corte de Apelaciones acoja el recurso de apelación especial planteado en contra de la sentencia recurrida y resuelva que el Tribunal de Sentencia acoja cualquiera de los tres submotivos de fondo relacionados con los artículos diez (10), once (11) y cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, determinando que este vicio ha tenido influencia decisiva en la parte resolutive de la sentencia y en consecuencia se anula la sentencia de mérito y se absuelva a las señoras Doris Elubia Gonzalez Salazar, Mayra Lisbeth Gomez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañon Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñónez, del delito de Fraude. -----

ARGUMENTACION; FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ LOPEZ APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo diez (10) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Le causa agravio la errónea aplicación del artículo diez (10) del Código Penal, por inexistencia de una relación de causalidad en los hechos previstos como tipos penales y los hechos que se tuvieron por



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º

21 de 101

acreditados, porque violenta sus derechos y garantías consagradas en la constitución Política de la República de Guatemala de presunción de inocencia, el derecho de defensa en juicio; es una garantía fundamental de toda persona y contempla tres grandes puntos, el derecho a ser citado, oído y de no ser privado de los derechos de ser vencido en juicio, significa que se respetará lo preceptuado en ley en cada uno de sus presupuestos. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo once (11) del Código Penal, por considerar que existió dolo en las acciones que se tuvieron por acreditados por el Tribunal. -

AGRAVIO CAUSADO: Le causa agravio la inobservancia del artículo once (11) del Código Penal, por considerar que existió dolo en las acciones que se tuvieron por acreditados por el tribunal, ya que se puede tener por acreditado la intención dolosa de defraudar al Estado cuando este no tuvo detrimento de ninguna circunstancia con la licitación, no se dio algún aprovechamiento ilícito de su parte, no se tuvo por acreditada tal situación. -----

TERCER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Al aplicar erróneamente el tipo penal de fraude violenta, sus derechos fundamentales como ser humano, ya que fue condenado por un actuar que no fue el debidamente demostrado, ni que pueda incurrir en los verbos rectores del tipo penal. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se acoja el recurso de apelación especial planteado, en contra de la sentencia recurrida, y resuelva que el Tribunal de Sentencia incurrió en una errónea aplicación de los artículos uno (1), siete (7),



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
22 de 101

diez (10), once (11) y cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, determinando que este vicio ha tenido influencia decisiva en la parte resolutive de la sentencia y en consecuencia se anule la sentencia de mérito y se le absuelva del delito de Fraude. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO JULIO ROBERTO SUREZ GUERRA APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta interpretación indebida de los artículos cuatrocientos cincuenta (450), diez (10) y once (11) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Al llegar a una sentencia condenatoria por parte del tribunal que lo sentenció por el delito de Fraude, resulta arbitrario y violatorio del principio de seguridad jurídica, de legalidad y de tutela judicial efectiva, pues es claro, que no existió de su parte ninguna intención de cometer el injusto penal en mención y como quedó demostrado no se dio ninguna conducta que pueda encuadrar dentro de la figura tipo de Fraude. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se realice un análisis lógico jurídico de los hechos probados en juicio, de manera que se examine la sentencia recurrida, en donde se constate y declare la existencia del vicio referido y como resultado la inexistencia del delito de Fraude y en consecuencia lógica y legal se emita una nueva sentencia donde se le declare inocente. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: El agravio causado es que el Tribunal de Sentencia aplicó de manera errónea el artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, en



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º.

23 de 101

relación al artificio que el sujeto activo de fraude debe cometer para concretar dicha figura delictiva, toda vez que la autoridad recurrida erróneamente interpreta que la conducta artificiosa puede ser cometida por otra u otras personas y en el presente caso, usar tal artificio para defraudar al Estado, circunstancias que produce que se le condene injustamente, pues no se acreditó que su persona en forma personal y directa realizara una conducta ilícita para defraudar al Estado, además de haber sido acreditado que dentro del proceso de licitación con fundamento en la Ley de Contrataciones del Estado, su participación fue obligatoria y atendiendo lo dispuesto en la ley, sin que fuera probada una manifestación de voluntad de su parte que pretendiera defraudar al Estado. ---

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se anule la parte resolutoria contenida en los numerales romanos VII y XVI de la sentencia impugnada, y emitir una sentencia absolutoria, en virtud de los argumentos presentados y como consecuencia deberá ordenar su inmediata libertad y dictar las demás consideraciones propias del nuevo fallo judicial. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DE LA SINDICADA JULIA AMPARO LOTAN GARZONA APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo diez (10) del Código Penal, por inexistencia de una relación de causalidad en los hechos previstos como tipos penales y los hechos que se tuvieron por acreditados. -----

AGRAVIO CAUSADO: Le causa agravio la errónea aplicación del artículo diez (10) del Código Penal, por inexistencia de una relación de causalidad en los hechos previstos como tipos penales y los hechos que se tuvieron por acreditados, porque violenta sus derechos y garantías consagradas en la



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
24 de 101

Constitución Política de la República de Guatemala de presunción de inocencia, el derecho de defensa en juicio, es una garantía fundamental de toda persona y contempla tres grandes tubos, el derecho de ser citado, oído y de no ser privado de los derechos de ser vencido en juicio, significa que se respetara lo preceptuado en ley en cada uno de sus presupuestos. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo once (11) del Código Penal por considerar que existió dolo en las acciones que se tuvieron por acreditados por el Tribunal. -

AGRAVIO CAUSADO: Le causa agravio la inobservancia del artículo once (11) del Código Penal por considerar que existió dolo en las acciones que se tuvieron por acreditados por el tribunal, ya que se puede tener por acreditado la intención dolosa de defraudar al Estado cuando este no tuvo detrimento en ninguna circunstancia con la licitación, no se dio algún aprovechamiento ilícito de su parte, no se tuvo por acreditada tal situación. -----

TERCER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal que regula el delito de fraude y del presupuesto del artificio para defraudar al Estado. -----

AGRAVIO CAUSADO: Al aplicar erróneamente el tipo penal de Fraude artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, violenta sus derechos fundamentales como ser humano, ya que fue condenado por un actuar que no fue el debidamente demostrado, ni que pueda incurrir en los verbos rectores del tipo penal. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se acoja el recurso de apelación especial interpuesto, anule la parte declarativa de la sentencia recurrida, y



139
702
APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
25 de 101

declare la absolución de la acusada Julia Amparo Lotan Garzona, del delito de Fraude.-----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO MAX ERWIN QUIRIN SCHODER APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo diez (10) y veintiocho (28) de la Ley de Contrataciones del Estado, decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92) del Congreso de la República-----

AGRAVIO CAUSADO: El Tribunal de Sentencia, al no tomar en consideración conforme el Principio de Legalidad Administrativo, las funciones y atribuciones que competen a cada funcionario o empleado público que participa en un proceso de licitación, dio por acreditados hechos que implican funciones que corresponden a la Junta de Licitación; siendo estos los mismos hechos que el Tribunal de Juicio da por acreditados para dicho órgano, lo cual le causa agravio de haber sido condenado por hechos que no le competían, pero a la vez, no constituyen delito de Fraude en la Administración Pública.-----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se realice un análisis lógico jurídico de los hechos probados, y las normas que se denuncian infringidas como inobservadas, constatando así el vicio *in indicando* denunciado, a efecto de que la sentencia de Segunda Instancia se declare la existencia de dicho vicio de fondo y como consecuencia que los hechos que se dieron como acreditados, constituyen una violación por inobservancia de los artículos diez (10) y veintiocho (28) de la Ley de Contrataciones del Estado.-----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta interpretación indebida del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
26 de 101

Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: La interpretación indebida del Tribunal de Sentencia, del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, le causa agravio, pues a dicha norma se le da un sentido y alcance que no tiene, al pretender que el delito de Fraude se comete por omisiones, cuando es claro que la conducta que se reprocha es el hacer uso de un artificio para defraudar al Estado; lo que implica que en ese plan utilizó su ingenio para engañar, lo cual dista por mucho, a lo que el Tribunal considera ser un artificio y resulta absurdo, no obstante ello, se le hace autor responsable del delito de Fraude, lo cual el agravio se deriva precisamente de la errónea interpretación que se le dio al artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se realice un análisis lógico jurídico de los elementos que el Tribunal de Sentencia dio por probados, especialmente y arribe a la conclusión, de que se hizo una interpretación indebida del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, y por lo tanto se le dé su verdadero sentido y alcance. Esto es estableciendo que el delito de Fraude en la administración pública es un delito de acción y no de omisión, cuya conducta reprocha es el hacer uso de un artificio para defraudar al Estado, mismo que no se da por acreditado. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO VINICIO RAFAEL GARCIA PIMENTEL APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: El agravio causado es que el Tribunal de Sentencia aplicó

ORGANISMO JUDICIAL

GUATEMALA, C.A.



APELACIÓN ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º

27 de 101

de manera errónea el artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, en relación al artificio que el sujeto activo del fraude debe cometer para concretar dicha figura delictiva, toda vez que la autoridad recurrida erróneamente interpreta que la conducta artificiosa puede ser cometida por otra u otras personas. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se acoja el recurso de apelación especial planteado y en consecuencia se revoque la sentencia impugnada y se dicte una sentencia absolutoria, en virtud de los argumentos presentado y como consecuencia deberá ordenar la inmediata libertad. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO ALBERTO ANTONIO MORALES VELASCO APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, infringiéndose por inaplicación de los artículos uno (1), diecisiete (17) de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, siete (7), diez (10) y trece (13) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: El Tribunal de Sentencia, al tratar de subsumir los hechos que dio por acreditados, en el artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, cometió una errónea aplicación de dicha norma, al no percatarse que uno de los supuestos para la tipificación del delito de Fraude en la Administración Pública, y que determina la conducta que se reprocha, es el hacer uso de un artificio para defraudar al Estado, y que los hechos que da por acreditados, ni por asomo pueden homologarse a un artificio, y menos aún cuando se describe en los hechos acreditados, conductas omisivas. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se realice un análisis lógico jurídico de



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
28 de 101

los hechos probados, y las normas que se denuncian infringidas tanto el artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, que se considera que fue erróneamente aplicado, para que se constate ese vicio *in indicando* denunciado, a efecto de que en la sentencia de Segunda Instancia se declare la existencia del mismo y como consecuencia que los hechos que se dieron como acreditados, no pueden subsumirse en los supuestos de hecho de esa norma, esto como corolario de la inaplicación de los artículos diecisiete (17) de la Constitución Política de la República de Guatemala; uno (1), siete (7), diez (10) y trece (13) del Código Penal. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO OTTO FERNANDO MOLINA STALLING APELANTE:
PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta interpretación indebida del artículo cuatrocientos cincuenta (450) bis del Código Penal, infringiéndose por inaplicación de los artículos uno (1), siete (7) y diez (10) del Código Penal; cuatro (4) de la Ley del Servicio Civil; y uno (1) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. -----

AGRAVIO CAUSADO: Que debido a la interpretación indebida de la ley, se le impone una sentencia condenatoria, violando con ello no solo el principio de legalidad penal, sino que la prohibición de la analogía, con ello se restringe su libertad y su derecho a la vida familiar. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se acoja el recurso de apelación especial por motivo de fondo por interpretación indebida de la ley; específicamente el artículo cuatrocientos cincuenta (450) bis del Código Penal, el cual tiene íntima relación con los artículos uno (1), siete (7) y diez (10) del Código Penal; cuatro (4) de la ley de Servicio Civil y uno (1) del Reglamento de la ley de



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1°.

29 de 101

Servicio Civil, porque el tribunal de primer grado insiste en que por ser funcionario público cometió el delito de cobro ilegal de comisiones y al dictar sentencia de segundo grado que se revoque la sentencia condenatoria y emita una sentencia de carácter absolutorio en donde se le deje libre de todo cargo. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo cuatrocientos cincuenta (450) bis del Código Penal, porque se dejó de aplicar el artículo diez (10) del Código Penal, relacionado con el artículo veinte (20) del mismo cuerpo legal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Que al haber dejado de aplicar el artículo diez (10) del Código Penal, dio lugar a que se aplicara erróneamente el artículo cuatrocientos cincuenta (450) bis del Código Penal, y con ello se le condena a prisión, siendo inocente de los hechos, lo que se confirma porque no se pudo probar su participación, al hacer el análisis de la sentencia y los vicios que se denuncian, con ello se viola su derecho a una sentencia justa, a la libertad y a la igualdad. --

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se acoja el recurso de apelación especial por motivo de fondo por errónea aplicación de la ley, específicamente el artículo cuatrocientos cincuenta (450) bis del Código Penal, por haber inaplicado el artículo diez (10) del Código Penal, relacionado con el artículo veinte (20) del mismo cuerpo legal, y al dictar sentencia de segundo grado que se revoque la sentencia condenatoria y emita una sentencia de carácter absolutorio en donde se le deje libre de todo cargo. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO OTTO FERNANDO MOLINA STALLING APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia de los artículos ciento cincuenta y tres (153) y ciento



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
30 de 101

ocho (108) de la Constitución Política de la República de Guatemala. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta interpretación indebida del artículo cuatrocientos cincuenta (450) bis del Código Penal. -----

TERCER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo siete (7) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Al violentar las normas sustantivas relacionadas y los derechos que le asisten, el Tribunal procedió a dictar una sentencia condenatoria en plena inobservancia, interpretación indebida y errónea aplicación de la ley, porque es imperativo establecer a plenitud el grado de participación de la persona implicada, el grado de que se le ha condenado por una aplicación violatoria al principio de Libertad e Igualdad Constitucional. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se proceda a hacer un análisis de las normas invocadas, en concordancia con el contenido y puntos consignados en esta apelación especial de la sentencia recurrida, por lo que al acoger el presente recurso por estos motivos de fondo, con fundamento en que la sentencia adolece de inobservancia de ley e interpretación indebida de ley y como consecuencia de tales extremos la misma adolece de una errónea aplicación de la ley, habiendo citados todos los preceptos legales pertinentes, que se anule la sentencia impugnada y se dicte una sentencia absolutoria por el delito que se le atribuye en calidad de autor. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO MAURICIO FARFAN DONIS APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo ciento treinta y cinco (135) del Código



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1°

31 de 101

Procesal Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Que se hubiese demostrado en la etapa de juicio la culpabilidad penal de los funcionarios de Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, y por ende la responsabilidad civil de la entidad, son consecuencias jurídicas distintas e imposibles para una norma procesal a la cual no se le puede dar características sustantivas. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se advierta que existe un vicio de fondo, por errónea aplicación del artículo ciento treinta y cinco (135) del Código Procesal Penal, lo cual produce una indebida fundamentación, contraviniendo el artículo once (11) Bis del Código Procesal Penal, al haber aplicado una norma eminentemente adjetiva procesal a desarrollarse en la etapa preparatoria o intermedia ante el Juez de Contralor, para cimentar una sentencia de carácter condenatorio de responsabilidad civil, que debe subsumirse en normas sustantivas penales, por lo tanto debe decretarse la inocencia de su representada. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta interpretación indebida del artículo ciento doce (112) del Código Penal.

AGRAVIO CAUSADO: Resulta injusto que mediante la interpretación indebida del artículo ciento doce (112) del Código penal, se trate de hacer responsable civilmente a aquella entidad cuyos funcionarios no son responsables penalmente, justamente la interpretación contraria a la que muy claramente y en español, según el sentido propio de sus palabras, debe de dársele al texto del artículo ciento doce (112) del Código Penal, la figura de tercero civilmente demandado no enfrenta y proceso civil ajeno dentro de un proceso penal, pues los Tribunales Penales no tienen competencia para el primero de los procesos en mención. - - -



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
32 de 101

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se declare la inexistencia de responsabilidad civil por parte de Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima. -----

TERCER SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: La suma reclamada proviene enteramente de las suposiciones que realiza el actor civil, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y esas suposiciones fueron transferidas al informe de auditoría ya relacionado, sin que los Auditores de la Contraloría General de cuentas verificaran los montos en documentación fehaciente, pues esta institución también era querellante adhesivo y pretendía coadyuvar con la condena civil a su representada, alejándose de la naturaleza propia de la entidad fiscalizadora, que precisamente es desconfiar de la información contable de las entidades sujetas a su supervisión, por conveniencia, en el presente caso simplemente aceptaron los datos sin ningún fundamento, cifras que aportó el Instituto Guatemalteco de Seguridad social. ----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Se declare que las sentencias deben de estar debidamente fundamentadas, y que, como parte de la debida fundamentación se debe indicar de qué elementos probatorio derivan las conclusiones del Tribunal de Sentencia, y que, en el presente caso, no existe ningún medio de prueba al que la sentencia le confiera valor probatorio, en donde se pueda inferir la suma reclamada por el actor civil de tres millones trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis con veinte centavos (Q 3,379,466.20). -----

CUARTO SUBMOTIVO



02-2019
Oficial 1°
33 de 101

Manifiesta inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: La mala aplicación de la regla de la sana crítica razonada en cuanto a la experiencia común, es que resulta obvio que las dos millones quinientos ochenta y dos mil ochocientos veintitrés (2,582,823) bolsas con contenido dializante, que corresponde a igual número de tratamientos adjudicados, y su reparto a la puerta de la casa de cada uno de los pacientes, más los productos y servicios que acompañan este reparto, no son gratis para Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, deben de cobrarse, y representan un costo de noventa y ocho millones ciento cuarenta y siete mil doscientos setenta y cuatro (Q.98,147,274), menos la ganancia lícita de la entidad, en valor de los insumos y el transporte de los mismos. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que en la sentencia de segunda instancia que para el efecto dicte la honorable Sala, declare que con base en la experiencia común se puede establecer que el contrato era para tratamiento ambulatorio, lo que significa que se realizaría en la casa de cada uno de los pacientes, y que el contrato privado celebrado entre Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima y Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, no incluía el valor de las dos millones quinientas ochenta y dos mil ochocientos veintitrés bolsas que contenían el líquido dializante, ni el reparto de los mismos a la puerta de la casa de los pacientes y que esta repartición del insumo y el propio insumo constituye la operación más onerosa del contrato. -----

QUINTO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo dos (2) numeral dos (2) del Código de Comercio de Guatemala. -----



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
34 de 101

AGRAVIO CAUSADO: La empresa mercantil como bien inmueble, por su propia naturaleza, se encuentra dentro del comercio de las personas, y le son aplicables todas las normas que rigen la disposición de los bienes. En consecuencia no tiene nada de ilegal que una persona jurídica mercantil, mediante un contrato, haga uso de un bien mueble de distinta propiedad. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se declare que es un hecho irrefutable que Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, sí contaba a su disposición con el recurso humano, sí contaba a su disposición con infraestructura básica y sí contaba a su disposición con el mobiliario necesario para prestar el servicio de diálisis peritoneal continua ambulatoria, que estos no eran de su propiedad, pero sí estaban a servicio de los pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y nunca se interrumpió el acceso a estos servicios. -----

SEXTO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo seiscientos sesenta y nueve (669) del Código de Comercio de Guatemala. -----

AGRAVIO CAUSADO: Que el Estado por medio de sus sentencia reproche que los pacientes renales sean enviados a hospitales tipo A y un posterior traslado a una clínica superior en calidad, y en cambio promueva que se les brinde atención en hospitales tipo C, de inferior categoría como lo hace en la actualidad la entidad Baxter, Sociedad Anónima, que también arrenda los servicios hospitalarios. - - - -

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que la honorable Sala, en cumplimiento del artículo seiscientos sesenta y nueve (669) del Código de Comercio de Guatemala, ley vigente y de obligatorio cumplimiento y sin ninguna norma de igual o mejor jerarquía en contrario, declare que, ni aún los Tribunales pueden contrariar el texto de la Ley, la cual ordena que los contratos mercantiles se interpretarán de



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
35 de 101

conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretaciones arbitrarias sus efectos naturales y que en sentencia se cumpla con la interpretación ordenada por la ley. -----

SEPTIMO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia de los artículos ciento dos (102), ciento tres (103) y ciento tres (103) bis de la ley de Contrataciones del Estado. -----

AGRAVIO CAUSADO: Existe evidente injusticia que se materializa en perjuicio de su representada pues el proceso penal no les permite hacer valer la compensación a la cual tienen derecho, ni la sentencia arribar a las causas reales del crédito que le confiere el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que la honorable Sala, en cumplimiento del artículo ciento dos (102), ciento tres (103), y ciento tres (103) bis de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley vigente y de obligatorio cumplimiento y sin ninguna norma de igual o mejor jerarquía en contrario, declare que, ni aún los Tribunales pueden contrariar el texto de la Ley, la cual ordena que existe una prelación de procedimientos y acciones que opera en virtud de la Ley y que toda controversia relativa al incumplimiento, interpretación, aplicación y efecto de los contratos administrativos, después de agotada la vía administrativa se someterán a competencia de lo Contencioso Administrativo, y únicamente después a procedimiento penal. -----

OCTAVO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Contratar con Medicina Corporativa, Sociedad Anónima,



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
36 de 101

la parte accesoria del Contrato, de conformidad con el artículo dos (2) numeral dos (2) del Código de Comercio de Guatemala, no se encuentra fuera de la Ley, ni tampoco al margen de las actividades de comercio que la propia escritura le confiere a Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, no existe ninguna norma que expresamente prohíba a los comerciantes, realizar actividades mercantiles fuera de los límites que aparecen en sus respectivas escrituras constitutivas. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que en la sentencia la honorable Sala, declara que del texto del objeto social, contenido en la escritura constitutiva de sociedad, de Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, es muy sencillo apreciar, de la simple lectura que el objeto social es sumamente amplio y que incluye tanto la repartición de medicamentos, como materiales de curación, así como todo tipo de actividades comerciales, por lo que es ilógico indicar que su objeto social no es la prestación de los servicios de salud, pues éstos son relacionados con el servicio de provisión de bolsa de contenido dializante y demás insumos, y que los servicios médicos hospitalarios están contenidos en la frase todo tipo de servicios. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO ALVARO MANOLO DUBON GONZALEZ APELANTE:
PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta interpretación indebida de los artículos cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Al absolver a dos personeros de PISA, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Edgar René de la Peña Archila, quienes fueron los que se reunieron conforme a la acusación del Ministerio Público, con Otto Fernando



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º

37 de 101

Molina Stalling, como puede acreditarse que existiese el concierto entre la entidad proveedora, en este caso PISA y su persona o algún funcionario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para poder cometer el fraude de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta interpretación indebida del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Se puede apreciar en la sentencia que existe un dolo de su parte para cometer el supuesto delito de Fraude, así pues, no contienen los hechos acreditados por el Tribunal un dolo de su parte para que existiera un concierto, el haber hecho algún artificio para defraudar el patrimonio del Estado. -

TERCER SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación de los artículos cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, debido a que en todo caso los hechos se enmarcan dentro del delito de confusión regulado en el artículo cuatrocientos cuarenta y nueve (449) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Que los hechos acreditados no constituyen delito de fraude, puesto que no existe un artificio requisito para que se cometa el fraude, tampoco el concierto, ni defraudación al patrimonio del Estado. -----

CUARTO SUBMOTIVO

Manifiesta errónea aplicación del artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, puesto que la acusación y actitud del acusado en todo caso se enmarcaría en omisión no en acción. -----

AGRAVIO CAUSADO: Que los hechos acreditados en todo caso serían de omisión que se enmarcarían en un incumplimiento de deberes y no de fraude. ---



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
38 de 101

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se acoja el recurso de apelación especial y en consecuencia se revoque la sentencia impugnada y se dicte la que en derecho corresponde, siendo que se le absuelva del delito de Fraude, ordenándose la libertad inmediata y que cesen todas las medidas coercitivas en su contra. -----

ARGUMENTACION, FUNDAMENTACION Y AGRAVIOS POR MOTIVOS DE FONDO DEL SINDICADO FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI APELANTE:

PRIMER SUBMOTIVO

Manifiesta interpretación indebida del artículo diez (10) del Código Penal, en relación a lo que establece el artículo veinticuatro (24) del Código Penal. -----

AGRAVIO CAUSADO: Que la pena de seis años con tres meses impuesta le es desfavorable toda vez que en el caso del presentado, al no estar acreditada una acción normalmente idónea para producirla y que la misma tiene las características de una causa de justificación, como lo es el legítimo ejercicio de un derecho, no puede existir la consecuencia jurídica, toda vez que al analizar los medios de prueba el tribunal de sentencia debió de absolverme de todo cargo ya que su persona en ningún momento tenía el poder de decisión y por otro lado tampoco la competencia de advertir alguna anomalía. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que se anule parcialmente la sentencia venida en apelación y en consecuencia se dicte sentencia absolutoria por el delito de Fraude, declarándolo libre de todo cargo. -----

SEGUNDO SUBMOTIVO

Manifiesta inobservancia de la ley, específicamente el artículo veintinueve (29) del Código Penal, con relación a los artículos sesenta y cinco (65) y cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal. -----



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º.

39 de 101

AGRAVIO CAUSADO: Con la inobservancia de la ley, específicamente de los artículos veintinueve (29) y sesenta y cinco (65) del Código Penal con relación al artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, se atenta en contra del principio de legalidad, causando un agravio al imponerse la pena de seis años, tres meses de prisión. -----

APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Que al examinar que el Tribunal Sentenciador al emitir la sentencia apelada, se advierta que inobservó la ley, específicamente los artículos veintinueve (29) y sesenta y cinco (65) del Código Penal, con relación al artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal y en consecuencia se acoja el recurso de apelación por motivo de fondo y se imponga la pena mínima señalada. -----

CONSIDERANDO

El recurso de apelación especial es un recurso que tiene por objeto atacar las resoluciones judiciales establecidas por la ley, cuando a juicio del recurrente se ha incurrido en vicios en la aplicación del derecho, siendo un recurso eminentemente técnico. Podrá plantearse por motivo de forma y fondo, cuando el recurrente considere que el tribunal incurrió en violaciones al aplicar la ley procesal o bien la ley sustantiva o material. Nuestro Código Procesal Penal, establece respecto de la jurisdicción del Tribunal de Apelación Especial, que el recurso facultará a éste el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, así esta instancia se encuentra limitada al alcance de los medios impugnativos y por la motivación del agravio que afecta a la parte que resiste el pronunciamiento al que se atribuye injusticia o ilegalidad. -----

La validez y plena existencia de toda sentencia deriva del cumplimiento de los



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
40 de 101

órganos jurisdiccionales y partes procesales actuantes que ciñan su actuación dentro del debido proceso, dentro del que está imbuido el derecho de defensa y ello no se cumple cuando el sistema valorativo de la sana crítica razonada se inobserva, o bien ha sido aplicado erróneamente, incurriéndose así en arbitrariedades, pues, ni la sociedad en general o las partes en particular y ni siquiera el tribunal *Ad quem* conoce las razones en que el tribunal se sustenta para la emisión de su fallo, para conocer como se administra la justicia penal, como habrá que impugnarla en caso de inconformidad y como deberán resolverse las impugnaciones respectivas.-----

CONSIDERANDO

Ante esta Sala como tribunal de alzada fueron interpuestos distintos recursos por las partes y sujetos procesales, siendo oportuno resolver en inicio aquellos que por técnica procesal resolverían algún reenvío del proceso, por lo que en su orden y por economía procesal se resolverán primeramente los recursos interpuestos por motivos de forma y en conjunto los recursos que versan sobre los mismos motivos a fin de dar respuesta a lo denunciado y realizar los análisis correspondientes.-----

DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR MOTIVO DE FORMA PLANTEADOS POR INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL - IGSS-, COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD -CICIG- Y MINISTERIO PUBLICO, quien desistió del recurso de forma contra el caso denominado IGSS-PISA y no así contra los involucrados del caso denominado IGSS-CHIQUMULA:-----

PRIMER SUB MOTIVO DE FORMA. INOBSERVANCIA DEL ARTICULO ONCE (11) BIS DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-----



202
APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
41 de 101

Argumentan las entidades apelantes que la sentencia adolece de la debida fundamentación ya que no comparten la decisión de haber otorgado absolutorias en algunos tipos penales a los procesados como Otto Fernando Molina Stalling por el delito de asociación ilícita; Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Arturo Adolfo Castellanos Poou, por el delito de Asociación Ilícita y Walter Omar Linares Pacheco por el delito de Incumplimiento de Deberes. Son del criterio que la sentencia objetada no contiene la fundamentación exigida por la ley para su validez, lo cual se evidencia cuando absuelven a los procesados antes referidos utilizando argumentos sin aplicación de elementos fundamentales para otorgar la absolutoria, especialmente cuando el tribunal no da por acreditados los hechos establecidos en la acusación del Ministerio Público específicamente por los delitos de Asociación Ilícita, Cohecho Activo y Testaferrato, careciendo a juicio de los interponentes de la obligatoriedad establecida en el artículo once (11) Bis del Código Procesal Penal. -----

Cuando se invoca la falta de fundamentación en una sentencia, se advierte que de ser cierto lo denunciado se esta ante un vicio de forma que puede producir la invalidez de la decisión y provocar la repetición del juicio, al no generar por parte del tribunal de sentencia las manifestaciones pertinentes, tanto legales como fácticas para decidir de la forma valida de acuerdo a nuestra ley adjetiva penal. A los juzgadores nos compete por imperativo legal el deber de motivar una decisión, a fin de satisfacer al ordenamiento legal como obligatoriedad y porque permite que las partes e interesados conozcan las motivaciones y argumentos de las razones validas del fallo arribado, además se evitan decisiones arbitrarias, y se hace constar que las partes fueron oídas como tomadas en cuenta sus



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
42 de 101

argumentaciones en cuanto a cada pretensión manifestada en el juicio. En consecuencia este requisito deviene siendo esencial para la validez de una sentencia que revista la característica de legal y legítima a la luz del derecho procesal penal moderno. -----

CONSIDERANDO

La Convención Americana de Derechos Humanos, Comentario Christian Steiner 7 Patricia Uribe, en la página 231 refiere en casos concretos puntos referentes al deber de motivar, realizando las siguientes explicaciones: *"...el Tribunal ha sido claro al señalar que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha..."* *"La argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuales fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión de manera clara y expresa, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad..."* A su vez la Honorable Corte de Constitucionalidad ha emitido jurisprudencia al respecto, misma que resaltamos en virtud de permitirlo: *"El derecho a la tutela judicial efectiva (...) consiste en la garantía de acceder en condiciones de igualdad a los tribunales de justicia, con el objeto de solicitar de éstos la reivindicación (tutela) de derechos e intereses legítimos. El acceso a este derecho y la efectividad del mismo, se da por medio de un debido proceso (...) Es mediante este debido proceso como el justiciable puede obtener, de manera legítima, una resolución judicial que dé respuesta al fondo del asunto, misma que para ser válida constitucionalmente y no incurrir en arbitrariedad, debe emitirse con la debida fundamentación jurídica, y la debida congruencia de la decisión con lo pedido y*



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º
43 de 101

aquello que consta en las actuaciones judiciales "Gaceta. Expediente 892-2004 de fecha 06/12/2004. -----

En el orden de ideas necesario, se estima que la obligación de motivar una resolución judicial, permite garantizar constitucionalmente la justicia, por lo que el pronunciamiento judicial asegurará la publicidad de las motivaciones que produjeron el fallo; es decir la fundamentación concretamente es ese proceso intelectual en el cual se apoya el juez para encuadrar el delito y emitir el fallo. Siendo importante destacar que aunque sea breve el razonamiento en el que se fundamente la sentencia, debe de atenderse a que se comprenda la decisión judicial por la sociedad en general, no transcribiendo únicamente lo narrado o evidenciado con el medio de prueba desarrollado en el juicio sino desprender ese elemento vinculativo que haya de producir al final la certeza jurídica. -----

En ese orden de ideas, esta Sala procedió a revisar el fallo venido en grado, estableciendo que aunque los razonamientos no son tan extensos, estos si reúnen los requisitos que se enmarca en la ley procesal penal, siendo estos claros, precisos y expresando los motivos de hecho y de derecho en que se esta basando el Tribunal *A quo* para emitir las absolutorias que decidió de los tipos penales atribuidos a los procesados *Otto Fernando Molina Stalling por el delito de asociación ilícita; Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Arturo Adolfo Castellanos Poou por el delito de Asociación Ilícita y Walter Omar Linares Pacheco por el delito de Incumplimiento de Deberes*, no existiendo ausencia de fundamentación pues el *A quo* realizó manifestaciones expresas del por qué en el juicio no quedó probado y acreditado el delito de asociación ilícita, para ello evidenciamos en la página 675 y 676 de la sentencia apelada que expresa lo siguiente: "*a) En relación al delito de Asociación ilícita*



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
44 de 101

atribuida a los procesados Molina Stalling, García Granados Reyes, Lorenzana Ortiz, Castellanos Poou y Cortez Bocaletti, luego de la valoración realizada por el Tribunal se estima que conforme a los postulados doctrinarios analizados, arriba citados, y la pruebas aportadas, estimadas con valor probatorio, se determina que con excepción de los procesados García-Granados Reyes y Lorenzana Ortiz, todos los demás procesados mencionados laboraban dentro de la Institución, en una forma estructurada pero administrativamente, evidenciando que no formaban parte de una organización criminal, cuyo objeto haya sido cometer ilícitos, tampoco mantenían una permanencia en el tiempo, con ese propósito, ni roles definidos para cada una de las personas ni peligrosidad de sus actividades, en consecuencia el Tribunal no acredita la existencia de este tipo penal, siendo procedente dictar la sentencia que en derecho corresponde..." En cuanto a los procesados Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, el tribunal en la página 677 de la sentencia manifestó la siguiente motivación: "d) Al procesado Herbert Rodolfo García Granados Reyes se le atribuyó la comisión de los delitos de Asociación Ilícita y Cohecho Activo, sin embargo, conforme el análisis que realizó el Tribunal no se reúnen los requisitos para imputarle el delito de Asociación ilícita y Cohecho Activo, el primero, porque no se determinó la existencia de la agrupación delictiva a la cual el perteneciera, porque de las conversaciones escuchadas se establece que el actuaba por su cuenta, por intereses propios y personales y no en función de alguna asociación, y, el segundo de los delitos atribuidos al determinarse que su actuar fue obtener un beneficio de la entidad Droguería Pisa Sociedad Anónima, simulando cierta influencia sobre las partes involucradas en el proceso de licitación, acciones que no encuadran dentro del tipo penal atribuido, sin embargo el Tribunal manifiesta una sanción moral y



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
45 de 101

desaprobación a su conducta totalmente inaceptable para el buen desenvolvimiento de las normas sociales en general..." -----

Por su parte la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- argumentó la falta fundamentación de determinados órganos de prueba que desfilaron en el debate, entre los que mencionan a *Richard Alexander Arévalo Interiano y Manuel Antonio Salazar Vásquez*, los cuales este tribunal analizó la motivación del Tribunal *A quo* y evidenció que en la página 492 y 493 el tribunal argumentó en cuanto a la declaración de Salazar Vasquez lo siguiente: "...Al hacer el análisis de la declaración anterior, no se le asigna eficacia probatoria tomando en cuenta que los hechos sobre los cuales versa su declaración se refieren a un evento de licitación de hemodiálisis en el cual participó como representante legal de la empresa *Ortosa* juntamente con el procesado *García Granados Reyes*, evento que fue descalificado y que no tuvo ninguna relación al evento de diálisis peritoneal continua ambulatoria que motiva la acusación fiscal..." Al examinar la forma en que motivó el Tribunal *A quo* la encontramos apegado a la obligatoriedad prevista en la ley, además de acuerdo a la lógica y al sentido común no es posible que sirva de utilidad para el hecho que se juzga, en virtud de que en el derecho penal se juzga el acto presumido como delito y no al autor. Así también se revisó lo denunciado en cuanto a la fundamentación de los órganos periciales, tales como *Alex Estuardo Álvarez Godoy*, el acta fiscal de fecha once de junio de dos mil quince suscrita por el auxiliar fiscal *Maria Ester Ovando Palacios* y memoriales del Intendente de verificación especial de la Superintendencia de Bancos de fecha 25 de junio de 2015, estimando que la argumentación para no otorgar valor probatorio es acorde a la lógica y las reglas de la sana crítica razonada, no evidenciamos que exista falta de fundamentación



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
46 de 101

alguna, hubo motivación adecuada para considerar que se cumple con el deber de motivar que se nos obliga a quienes emitimos decisiones judiciales. En consecuencia por este sub motivo no es procedente estimar que lo argumentado sobre falta de fundamentación tenga asidero legal o sea procedente, en consecuencia no se le otorga la razón a las entidades interponentes. -----

SEGUNDO SUB MOTIVO DE FORMA. INOBSERVANCIA DEL ARTICULO TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (385) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.

Las tres entidades que conforman la mesa acusadora, Ministerio Público, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, plantearon el presente sub motivo, únicamente el Ministerio Público enfatizó que desistía de este recurso en cuanto a los procesados absueltos por el caso IGSS-PISA y no así contra los procesados IGSS-CHIMULULA. Por lo que en virtud de la estrecha relación de las argumentaciones se resolverán en forma conjunta a fin de determinar si es viable lo denunciado como agravio. -----

Las tres entidades interponentes estiman que en la sentencia se vulneró el principio de razón suficiente, misma que se extrae de la ley de la derivación, mediante el cual todo juicio para ser realmente verdadero se necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o se niega con pretensión de la verdad. Indican que sin pretender que este Tribunal de alzada revalore prueba, consideran que el iter lógico aplicado por el *A quo* para arribar a sus conclusiones adolece de certeza jurídica y contradice la prueba. -----

Argumentó además el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en cuanto a este mismo sub motivo que se inobservó los principios que integran la sana crítica razonada como mecanismos establecidos para valorar prueba y por ende se



24
APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
47 de 101

inobservó los principios de razón suficiente para determinar de forma clara y precisa la fundamentación para decidir la absolución de los procesados *Otto Fernando Molina Stalling, Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, Arturo Adolfo Castellanos Poou y Francisco Cortez Bocaletti* y que a su juicio son responsables de los hechos por los que acusó el Ministerio Público al considerar que las acciones atribuidas en cuanto a estos procesados debieron ser valorados por la prueba producida en juicio, por lo que debe establecerse que existe infracción cometida por parte del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente, toda vez que no fue atribuida la responsabilidad penal a los sindicatos por el delito de Asociación Ilícita pese que a su juicio se acreditó la tesis acusatoria del Ministerio Público. - -

CONSIDERANDO

Para examinar lo argumentado por las entidades apelantes, es oportuno indicar que cuando se denuncia la inobservancia del sistema de valoración como lo es la *Sana Crítica Razonada*, debemos considerar que ese sistema de valoración tiene su base en la razón lógica del razonamiento del juzgador, mediante el cual estará sometido a basar su decisión en las reglas del correcto entendimiento humano, afirmándose entonces que llega a una conclusión que resulta siendo eficaz por el conjunto de razones válidas, consecuentes y certeras que consideró para arribar al fallo. En nuestro sistema procesal penal probatorio, el único medio de valoración aceptado es el sistema de valoración de la *Sana Crítica Razonada*, extremo que se ampara en los artículos ciento ochenta y seis (186) y trescientos ochenta y cinco (385) y trescientos noventa y cuatro (394) numeral tres (3) del Código Procesal Penal. Ese sistema de valoración como método de análisis en la respectiva valoración de la prueba, incluye entre otros, la manera lógica del



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
48 de 101

razonamiento válido, refiere en consecuencia que el juzgador deberá ajustarse a la aplicación de las reglas que integran ese sistema de valoración y que le permitan consignar en la sentencia la motivación y razones que consideró para otorgar o no otorgar valor probatorio a la prueba diligenciada en debate y que hayan sido ante el juzgador el resultado de un criterio recto para juzgar la verdad fuera de error o vicios. -----

Toda motivación en una resolución debe estar amparada bajo la correcta administración de justicia, para ello resulta oportuno referirnos a lo que establece la *Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentario Christian Steiner/Patricia Uribe, páginas 230 y 231*, de lo cual extraemos lo siguiente: *"El deber de motivar las resoluciones es una de las "debidas garantías" vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso(...). Además, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, la motivación proporciona a las partes la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores..."* Asimismo, en el libro *"Recurso de Apelación Especial"* de Yolanda Pérez Ruiz, página cincuenta (50) refiere ciertos pasajes oportunos al tema: *"...Las reglas de la lógica son formas de razonamiento ya comprobadas, (...) Para establecer la razonabilidad y comprensibilidad de los argumentos expresados en la sentencia - lógica- se hace necesario contrastar la argumentación con las reglas de la lógica..."*-----

En el Libro *"Sana Crítica Razonada"* de Ludwin Villalta, páginas 235, 236, 237 expone en cuanto a las máximas de la experiencia, indicando extremos como los siguientes: *"(...) Las máximas de la experiencia son un elemento integrador o regla para aplicar una Sana crítica razonada. Exponía el gran maestro y filosofo del derecho EDUARDO J COUTURE que las máximas de experiencia contribuyen*

ORGANISMO JUDICIAL

GUATEMALA, C.A.



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º

49 de 101

tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba; porque el juez no es una máquina de razonar, sino, esencialmente, un hombre que toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce través de sus procesos sensibles e intelectuales (...) La máxima de experiencia es un valor general aproximado de la realidad, y no de un conocimiento particular, no puede imponerlo el Juzgador el pretexto de un conocimiento privado sino con base a un conocimiento y aceptación general, pues el conocimiento general es lo que le da la legitimidad y fuerza de convicción a una máxima de experiencia para sustentar la explicación de un fenómeno o hecho de relevancia para la decisión judicial..." -

Al manifestar como parte de su argumento las entidades apelantes no están de acuerdo específicamente en cuanto a que las juzgadoras no otorgan valor probatorio a la prueba testimonial, consistente en lo declarado por *Rogelio Alberto Ramírez Cartin*, quien emitió el Informe Externo 067-2015 de fecha 6 de mayo de 2015, provisto en la sentencia en la página 529 y fundamentado por el *A quo* en la página 573, al realizar el análisis este Tribunal de alzada evidencia que en efecto el Tribunal *A quo* no le confiere eficacia probatoria y la explicación que argumenta a nuestro juicio y examen es viable y no se aparta de las reglas del entendimiento que integran el sistema de valoración de nuestro derecho procesal penal, pues manifestar que no se le otorga valor probatorio porque el tribunal escucho directamente las grabaciones de audio de las conversaciones telefónicas sostenidas entre *Otto Fernando Molina Stalling* y *Herbert Rodolfo García-Granados Reyes* y estar amparadas en lo que para el efecto estipula el artículo sesenta (60) de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, es procedente en aplicación al principio de razón suficiente no existiendo razones ilógicas ni insuficientes para decidir sobre ese órgano de prueba de la forma que se decidió.



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
50 de 101

En cuanto a lo denunciado sobre no otorgar valor probatorio a la prueba documental, consistente en *Acta Fiscal de veinte de mayo de dos mil quince*, suscrita por el Auxiliar Fiscal Carlos Alberto de León Moreno en la que se describe el allanamiento realizado en el lugar de aprehensión de Otto Fernando Molina Stalling y el *Acta Fiscal de fecha once de junio de dos mil quince*, suscrita por el Auxiliar Fiscal Maria Ester Ovando Palacios en la que se describe el allanamiento realizado al tercer nivel de las oficinas centrales del IGSS; así también se analizó lo denunciado en cuanto a la motivación efectuada por el *A quo* consiste en prueba pericial del *Perito Axel Estuardo Alvarez Godoy, el Oficio 15136 de fecha veinticuatro de julio de 2015 firmado por Fernando Enrique González Orellana y determinada prueba material consistentes en discos compactos*; este tribunal procedió a examinar lo motivado por el tribunal *A quo* y establece que su razonamiento se encuentra ajustado al principio lógico de razón suficiente, pues el razonamiento fue deducido de la razonabilidad respectiva creando un elemento convincente que justifica la forma en la que se decidió no otorgar valor probatorio a esos órganos de prueba, pues debe de analizarse la prueba en su conjunto en aplicación de la ley de la derivación a efecto de que el razonamiento pueda estar compuesto por las deducciones razonables de la prueba producida en juicio. El desinterés del ente acusador en cuanto a desistir de apelar por motivos de forma contra los procesados del caso IGSS-PISA confirma aún más que lo analizado por este Tribunal se encuentra apegado a la legalidad y legitimidad del examen que se realiza a la fundamentación de los órganos de prueba que no se les otorgó valor probatorio y que son motivo para las demás entidades apelantes de este recurso, pues es importante advertir que el Tribunal *A quo* no puede suplir las deficiencias de la fiscalía en cuanto a probar



APELACION ESPECIAL:
02-2019
Oficial 1º:
51 de 101

su tesis acusatoria; en consecuencia no es procedente darle la razón a las entidades apelantes en cuanto en este sub motivo de forma. -----

DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR MOTIVO DE FORMA POR EL CASO DENOMINADO IGSS-CHIQUMULA.

PRIMER SUB MOTIVO DE FORMA. INOBSERVANCIA DEL ARTICULO ONCE (11) BIS DEL CODIGO PROCESAL PENAL.

Las entidades Ministerio Publico, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, plantearon sus argumentos en cuanto a considerar que en lo resuelto por el Tribunal de sentencia en cuanto al caso denominado IGSS-CHIQUMULA consideran que los razonamientos vertidos específicamente en la página 263 de la sentencia violentan la Sana Critica Razonada al negarle valor probatorio a lo declarado por Danilo Porres González investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.-----

Este Tribunal de alzada procedió a evaluar la forma en que motivó el Tribunal sentenciador, verificando que dicho órgano jurisdiccional indica los siguientes motivos para no darle valor probatorio: *"...El tribunal no les dio valor probatorio a las declaraciones de los peritos Axel Estuardo Álvarez Godoy y Danilo Porres González, por considerar que de conformidad a lo que establece el artículo 60 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, último párrafo, señala que el medio de prueba será las grabaciones, o resultados directos de las interceptaciones; y las transcripciones servirán únicamente como guías para una correcta comprensión de las mismas, en caso de contradicción prevalecerá lo primero sobre las transcripciones. Por lo que al tenor de esa normativa el tribunal consideró que al escuchar las declaraciones de forma directa, resulta innecesario e inútil cualquier*



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
52 de 101

interpretación hecha a las mismas..." De acuerdo al artículo once (11) Bis del Código Procesal Penal, se indica que la fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión; por lo que no es acertado el planteamiento en cuanto a que hay falta de fundamentación pues el tribunal está dando razones valederas y atinadas del porqué no le otorga valor probatorio a los órganos de prueba antes mencionados, esta incluyendo por aparte de su razonamiento la normativa legal que toma de base para emitir la decisión de no otorgar valor probatorio. En relación a lo que argumentan de la forma como se motivo sobre la prueba documental, específicamente en cuanto al Oficio suscrito por el Licenciado Josué Alexander Cifuentes, Sub Gerente de Transparencia e Integridad Administrativa del IGSS de fecha diez de agosto de dos mil quince y el Oficio RM-DJ-5019-2015 de fecha once de junio de dos mil quince, firmado por Lilitana Sánchez de la Unidad de Despachos Judiciales del Registro Mercantil, este Tribunal de Alzada no advierte falta de fundamentación, no es verdad el planteamiento manifestado por los apelantes, toda vez que la página 637 y 640 de la sentencia encontramos que en los numerales 57 y 70 respectivamente lo que expone el tribunal de sentencia, quien para el mismo manifestó lo siguiente:

"... 57) Oficio RM-DJ-5019-2015 de fecha once de junio de dos mil quince, firmado por Lilitana Sánchez de la Unidad de Despachos Judiciales del Registro Mercantil (...) No se le da valor probatorio, por no ser de utilidad para el esclarecimiento de los hechos ilícitos que se imputan a estos procesados. 70) Oficio SITA DIE-956-2015 de fecha 10 de agosto de 2015 suscrito por el Licenciado Josué Alexander Cifuentes, Sub Gerente de Transparencia e Integridad Administrativa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (...) No se le da valor probatorio a este documento por abundante e impertinente, para el esclarecimiento del hecho



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
53 de 101

descrito en la acusación en relación a los delitos de Asociación Ilícita y Fraude..."

Al verificar lo anterior no es procedente darle la razón a los interponentes, pues es evidente cuales fueron las motivaciones razonables y correctas por las que el tribunal sentenciador decidió no otorgar valor probatorio, totalmente entendible en que se apoyaron para no otorgar valor probatorio y se comprende la decisión tomada; en consecuencia no es procedente acoger por este sub motivo planteado. -----

SEGUNDO SUB MOTIVO DE FORMA. INOBSERVANCIA DEL ARTICULO TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (385) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.

Manifiestan las entidades apelantes que advierten inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal por violación al principio lógico de Razón Suficiente y que dicha circunstancia la sostienen en cuanto a la forma como argumentó el tribunal sobre la declaración de Ana Beatriz Samayoa y el Informe Financiero de fecha 11 de septiembre de 2015, mediante el cual se concluye con hallazgos financieros detectados y el *Tribunal A quo* no le da valor probatorio obviando así aplicar la sana crítica razonada puesto que la perito citada fue propuesta para examinar a una entidad denominada NEGEFI, Sociedad Anónima. -----

Al establecer claramente los argumentos de las entidades apelantes, advertimos que el tribunal no irrumpe o inobserva las reglas de la sana crítica razonada, toda vez que el ente acusador mediante este órgano de prueba a criterio del Tribunal y lo cual lo respaldamos, pretende que se tome en consideración para el hecho que se juzga, otros hechos acaecidos con otra entidad mercantil y por otras circunstancias ajenas al hecho puesto en conocimiento y que se presume delictuoso, ellos abiertamente indican que desean manifestar el vinculo existente

152



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
54 de 101

entre los procesados Alma Judith Méndez Blanco y Salvador Rolando Álvarez Mérida y que ese hecho de otras circunstancias sirvan para resolver este proceso, extremos que no se comparten y que además nos permiten sostener que la forma como decidió el tribunal al no darle valor probatorio fue lo mas acertado, pues reiteramos que en la valoración no se arribó a conclusiones superfluas. -----

En cuanto a la forma de motivar sobre lo declarado por los auditores gubernamentales Evelyn Marisol Santiago Moran, Sergio Estuardo Gutiérrez Yaz, Dora Lidia Mota Bolaños y el Auditor gubernamental y arquitecto José Roberto Sosa Morales, quienes fueron propuestos para ratificar, modificar y ampliar los Informes de Auditoria Especial realizada al Instituto Guatemalteco de seguridad Social por la Contraloría General de Cuentas con ocasión al arrendamiento 351-DSC/2014; Oficio de fecha 30 de marzo de 2015 remitido por Liliana Sánchez, Unidad de despachos Judiciales del Registro Mercantil, con lo cual se pretendía probar la individualización de la entidad NEGEFI, Sociedad Anónima; Oficio de fecha 15 de junio de 2015 remitido por Juana López del Registro Mercantil, en el cual se remitían imágenes de los expedientes físicos de inscripción de entidades NEGEFI, Sociedad Anónima y Comercial & Constructora SIBONEY, Sociedad Anónima; además en cuanto a los expediente completo de cotización identificado como DSC-C 55/2014 y expediente completo de operación GUATECOMPRAS 3772632, así como otros medios de prueba y la prueba material que se indica en la sentencia y que es objeto de puntos de apelación. Sobre los cuales este Tribunal de alzada verifico lo manifestado por las entidades apelantes y disiente de sus afirmaciones, toda vez que no se presenta ausencia de los principios que informan y convalidan la aplicación del sistema de valoración de la sana crítica razonada, pues a juicio del tribunal de sentencia dichos órganos de prueba



02-2019
Oficial 1º
55 de 101

acreditan un procedimiento de carácter administrativo y el delito acusado como lo es Fraude no se configura con esos medios de prueba, extremos compartidos por este Tribunal de alzada al calificar que la motivación si se ajusta a las reglas de la lógica, de la coherencia y al principio de razón suficiente, arribando a las conclusiones fundadas en el elemento material directo y eficiente; por lo que el presente recurso no puede prosperar, en consecuencia deberá resolverse conforme a derecho-----

DE LOS RECURSOS POR MOTIVOS DE FONDO. DEL RECURSO INTERPUESTO POR *DORIS ELUBIA GONZALEZ SALAZAR, MAYRA LISBETH GOMEZ SUAREZ, ALBA MARITZA MALDONADO GAMBOA, DELIA HAYDEE CASTAÑON GUERRA, CARMEN YADIRA GIL QUIÑONEZ.*-----

DEL SUB MOTIVO DE FONDO. ERRONEA APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS UNO (1), SIETE (7), DIEZ (10), ONCE (11) Y CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DEL CODIGO PENAL-----

Argumentan las interponentes del recurso que invocan errónea aplicación del artículo uno (1) del Código Penal, toda vez que este artículo expresa de que nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas por una ley anterior al acometimiento del ilícito penal. El error lo evidencian, según lo argumenta, cuando acreditan los hechos, sin embargo en esos hechos estimados para el Tribunal no se configura el delito de Fraude al no darse los presupuestos para el mismo, aplican la analogía y se vulneran los principios de legalidad y la relación causal. Para configurarse el delito de fraude en la administración pública, el funcionario o empleado publico que intervenga en procesos de licitación, cotización, adquisición y compra, concesión usare artificio para defraudar al Estado. Siendo el caso que en la sentencia emitida, al valorar la prueba, jamás



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
56 de 101

dan certeza jurídica sobre el extremo que se hubiere probado el empleo de artificio con lo cual se busco defraudar al Estado, elemento esencial de la figura delictiva por la cual fueron condenadas. -----

CONSIDERANDO

De acuerdo al artículo diez (10) de la Ley de Contrataciones del Estado, las Juntas de Licitación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio, también por imperatividad no podrán abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar donde se encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de adjudicación y el artículo treinta y tres (33) regula lo relativo a la adjudicación, la cual deberá realizarse al oferente que ajustándose a los requisitos y condiciones haya hecho la propuesta mas conveniente para los intereses del Estado; asimismo el artículo setenta (70) estipula lo relacionado a las garantías respectivas para cubrir los riesgos que puedan producirse y que se determinen en el contrato y el artículo ochenta y dos (82) del mismo ordenamiento estipula que el funcionario o empleado publico que sin causa justificada no cumpla, dentro de los plazos con las obligaciones impuestas por esa ley y su reglamento podrá ser sancionado con multa equivalente al 2% del monto de la negociación, sin perjuicio de la destitución si fuere procedente. El artículo ciento uno (101) de la misma ley nos da el resguardo jurídico para la aplicación de recursos administrativos en ocasión a disposiciones dictadas sin acatamiento de lo previsto en esta ley. -----

El Acuerdo Gubernativo 122-96 del Presidente de la República en sus considerandos refiere que para cumplir con las diferentes modalidades de compras y contrataciones y a fin de dinamizar y agilizar procesos se hace necesario realizar reformas pertinentes al Reglamento de la Ley de



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º
57 de 101

Contrataciones del Estado. El artículo dos (2) de dicho Reglamento define que se debe de entender por "Adjudicación Aprobada" y el artículo diez (10) nos indica en cuanto a las actuaciones de las Juntas de Licitación, estipulando que la Junta actuara de forma conjunta y colegiada y es autónoma en sus decisiones y que a su vez quienes la integran serán responsables solidariamente por su actuación, salvo quienes hayan razonado su voto y lo hicieren constar en las actas respectivas, por su parte el artículo diecinueve (19) nos establecen los criterios de calificación de ofertas los cuales deberán hacerse conforme a los requisitos indicados en el proceso de contratación a fin de determinar que cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación. En el artículo veintidós (22) nos establece el Reglamento en cuanto a las "Inconformidades" para prevenir impugnaciones legales que retarden el proceso y que es una práctica administrativa sin formalismos entre las partes que participan en el procedimiento y que de forma pronta puedan ser atendidos los señalamientos que correspondan a efecto de corregir errores u omisiones que afecten los intereses de los interesados, importante es que a través de esta vía de la inconformidad, previo la aprobación definitiva puede subsanar el procedimiento cuando este procediere, y las personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos de la ley o el reglamento pueden presentar su inconformidad por el sistema de GUATECOMPRAS, en dichas inconformidades los interesados pueden solicitar cambios o reclamar cualquier acto administrativo relacionado a la compra o contratación.

CONSIDERANDO

Que el delito de Fraude plenamente estipulado en el artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, establece que comete delito de Fraude en la



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
58 de 101

administración pública el funcionario o empleado publico, quien ejerza funciones publica o quien con ocasión de uno o mas contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios, intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación procesada directamente o por medio de otra unidad ejecutora, o usare cualquier otro artificio para defraudare al Estado, será responsable de cinco a diez años de prisión e inhabilitación especial. -----

De acuerdo al Análisis y Comentario de la Ley Contra la Corrupción (Ensayo Dogmático sobre el Decreto 31-2012) acerca del delito de fraude, indica que es una acción típica que conlleva una conducta en cuanto al sujeto activo de participar en cualquier fase de los procesos de contratación del Estado realizando un artificio para llevarlo a cabo, que aunque advierten que el vocablo intervenir pareciera aludir alguna forma de participación punible, deberá entenderse que el sujeto activo realiza la acción con ocasión de la ejecución de uno o mas contratos de obras o servicios con el Estado. -----

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición, pagina 1057, por Fraude se entiende: "*Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos o de algunos privados, confabulándose con representación de intereses opuestos*"-----

La *Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentario Christian Steiner/Patricia Uribe (editores)*, página 257 artículo nueve (9) se manifiesta que esta estipulación tiene por objetivo proteger al individuo frente al poder punitivo del Estado, otorgando diversas garantías, entre las cuales se encuentra el Principio de máxima taxatividad legal, mediante el cual se establece lo siguiente: "*Según la Corte Interamericana el principio de legalidad, y más específicamente,*



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
59 de 101

el principio de máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa) exige que las "acciones y omisiones" criminales sean definidas "con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas punibles" La tipificación de un delito "debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa" debido a que "el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano" Así también la jurisprudencia obtenida del tribunal constitucional, en referencia al artículo diecisiete (17), bajo la premisa de lo indicado en la norma constitucional la cual indica que no hay delito ni pena sin ley anterior, al respecto se transcriben ciertos pasajes de la doctrina constitucional en este sentido: Gaceta 81. Expediente 639-2006 fecha de sentencia 22/08/2006, *"...Este principio se encuentra definido doctrinariamente como: nullum crimen sine scripta, stricta, certa et previa lege, de manera que a través del mismo se establece la prohibición de calificar como delitos, las conductas, activas u omisivas, que no se encuentren previstas como delictivas en una ley estricta, cierta y anterior a la comisión u omisión sancionada"* Asimismo, en la Gaceta 7 Expediente 164-87 Fecha de sentencia 25/02/1998, la cual literalmente indica: *"...Esta norma, que recoge el principio de legalidad, fija claramente una condición de certeza jurídica para penalizar determinadas conductas, y es que las mismas estén expresamente calificadas como delitos o faltas..."*-----

Lo indicado anteriormente advierte que toda figura delictiva atribuible a una persona sometida a proceso penal, deberá establecerse que fue producto de una consecuencia de una acción idónea ilícita para producirla y a su vez debe de traer aparejado un resultado doloso que en este caso que nos ocupa, era provocar el daño o detrimento patrimonial al Estado de Guatemala, por lo que deviene siendo menester delimitar concretamente la relación causal atribuible a las apelantes,

161



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
60 de 101

quienes manifiestan que no se efectuó un examen adecuado por parte del Tribunal en cuanto a las acciones realizadas por ellas y que el resultado exigido en la legislación hubiese sido lesionar el patrimonio del Estado circunstancia necesaria para que en el caso de ellas pueda darse el delito de Fraude. Al respecto es importante considerar lo establecido en el artículo once (11) del Código Penal, el cual nos refiere al delito doloso e indispensable es evidenciar en los hechos acreditados que el resultado ilícito fue previsto debidamente y esperado o bien se presentó como posible y se ejecutó. Es así como al analizar los hechos acreditados atribuidos a las apelantes, quienes conformaban la Junta de Licitación para la contratación del servicio de diálisis peritoneal continua ambulatoria para pacientes de consulta externa de enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, evidenciamos ciertos y concretos hechos y circunstancias, los cuales para los fines de este fallo resultan siendo indispensables su cita textual, página 139 al 141 de la sentencia apelada: *"a) Que las procesadas DORIS ELUBIA GONZALEZ SALAZAR, MAYRA LISBETH GOMEZ SUAREZ, ALBA MARITZA MALDONADO GAMBOA, DELIA HAYDEE CASTAÑON GUERRA, CARMEN YADIRA GIL QUIÑONEZ, en su calidad de empleadas públicas, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, conformaron la junta de licitación dentro del proceso de licitación identificado DSC-L-25/2014 NOG 3381625 para la contratación de Servicio de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria para Pacientes de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; b) Que según consta en el acta de calificación y adjudicación de ofertas de fecha 2 de octubre de 2014, dentro del proceso referido en el inciso anterior, la junta de licitación integrada por las procesadas (...) autorizó (subrayado propio) que la entidad Droguería PISA de Guatemala,*



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º

61 de 101

Sociedad Anónima, continuará en el proceso (subrayado propio) ya descrito, sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas de la licitación, para participar en dicho concurso, en virtud que: 1) el objeto de la Droguería Pisa, Sociedad Anónima, no es la prestación de servicios de salud; y 2) no contaba con el recurso humano, la infraestructura básica y el mobiliario necesario para prestar el servicio de diálisis peritoneal, por lo que contrató a la entidad Medicina Corporativa, Sociedad Anónima (...) delegando de esa manera en esa entidad mercantil, la esencia de la contratación del proceso de licitación ya relacionado. c) Que las procesadas (...) al realizar el estudio de los documentos de la oferta de licitación presentada por la Droguería Pisa Sociedad Anónima, no tomaron en cuenta (subrayado propio) que en el referido contrato de fecha 9 de septiembre de 2014, no se garantizó la dotación del servicio (subrayado propio) porque se estipuló que entidad Medicina Corporativa, podría dar por finalizado anticipadamente el contrato; (...) d) Que los documentos de la oferta presentada por la entidad Droguería Pisa, Sociedad Anónima, evidenciaron que no tenían la capacidad para la prestación del servicio ofertado y pese a ello, las procesadas (...) como miembros de la Junta de licitación, e inobservancia de la función que desempeñaban, procedieron a adjudicar la contratación del servicio a dicha entidad, (subrayado propio) según consta en el acta 2 de octubre de 2014, con lo cual se engañó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acto administrativo, que permitió la culminación del proceso de licitación aludido. - - -

Verificado lo anterior realizamos el siguiente análisis, cuando se les atribuye a las procesadas la conformación de la Junta de Licitación para la contratación del servicio en referencia, lo hicieron a tenor de lo estipulado en el artículo diez (10) de la Ley de Contrataciones del Estado, acto previsto en la ley sin que implique

162



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
62 de 101

características de delito, en cuanto a que se indica en los hechos acreditados que *la junta de licitación integrada por las procesadas (...) autorizó (subrayado propio) que la entidad Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, continuará en el proceso (subrayado propio)* lo efectuaron también con base a lo preceptuado en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo dos (2) en cuanto a la "Adjudicación Aprobada" y el artículo diez (10) que nos indica en cuanto a las actuaciones de las Juntas de Licitación, a su vez lo estipulado en el artículo diecinueve (19) que establecen los criterios de calificación de ofertas. Es decir que si hubo alguna inobservancia efectuada por parte de la junta de licitación, esos actos son sujetos de ser impugnadas y no necesariamente criminalizar las conductas o errores administrativos que la misma ley da la viabilidad para corregirlos sin llegar a la ultima ratio, pues no se acreditó en los hechos estimados por probados que la autorización y posibilidad que continuara el proceso de licitación de la Droguería Pisa hubiesen circunstancias que se presuman fraudulentas y que sostengan una tesis acusatoria por el delito señalado. Cuando se indica en los hechos acreditados que al realizar el estudio de los documentos de la oferta de licitación presentada por la Droguería Pisa Sociedad Anónima, no tomaron en cuenta (subrayado propio) que en el referido contrato de fecha 9 de septiembre de 2014, no se garantizó la dotación del servicio (subrayado propio) son eventos que de acuerdo a las practicas administrativas pueden darse, sin que ello implique que revistan características de delito y además son circunstancias que la misma ley permite corregir errores o impugnarlas a efecto de reconducir lo aprobado por una junta de licitación, el no tomar en cuenta determinados elementos previstos no puede sostener que el delito de fraude se haya cometido, pues nadie puede ser penado por hechos que



02-2019
Oficial 1º
63 de 101

no se presuman por delitos o faltas señalados por una ley antes de haberse realizado el hecho que se presume delictuoso. El inobservar lo señalado en los hechos acreditados por parte de la Junta de licitación para adjudicar el evento, no lleva un elemento necesario para que se perfeccione y materialice el delito de fraude como lo es el *artificio*, el cual de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición, página 214 significa: "Arte o ingenio o habilidad con la que esta hecho algo." El Diccionario Pan hispánico del Español Jurídico, volumen 1, página 236 define el artificio como lo siguiente: "Habilidad, industria o artimaña para conseguir algo". -----

Es decir de conformidad con los hechos acreditados para el tribunal por el desfile de la prueba producida en juicio, no son actos propios del delito de fraude y comete error de derecho el Tribunal de sentencia al otorgarles esa calificación jurídica que no procede y que de acuerdo a la ley no se configura el hecho acusado y por el cual fueron condenados, en concordancia con lo anterior, la Corte de Constitucionalidad ha sentado precedente en cuanto al delito de Fraude en la administración pública, citamos la sentencia emitida dentro del expediente 3292-2015 de fecha 3 de marzo 2016, que de sus partes conducentes extraemos: "...- artículo 450 del Código Penal regula el delito de fraude en la administración pública que es un tipo penal impropio, en cuanto establece un supuesto específico de la estafa, siendo en estos tipos penales, el engaño un elemento esencial para lograr detrimento económico en perjuicio del sujeto pasivo (...) y b) el supuesto hipotético de hecho, la conducta exigida para la comisión del ilícito consiste en que cualquiera de los sujetos activos intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación (...) o usare cualquier otro artificio para defraudar al Estado (...) es la intervención en cualquier fase de los procesos descritos, pero

163



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
64 de 101

que, necesariamente requiere la existencia de algún artificio que tenga como consecuencia la defraudación al Estado, ya que la intervención del sujeto activo sin que concurra el artificio no podría ser constitutivo de fraude..."-----

Habiendo efectuado el análisis anterior, sobre la base del hecho acreditado, la legislación pertinente al caso, la jurisprudencia al respecto, es procedente indicar que el Tribunal de Sentencia cometió errónea aplicación de los artículos uno (1), siete (7), diez (10), once (11) y cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, en consecuencia el recurso de apelación interpuesto por motivo de fondo debe prosperar y dictarse lo que en derecho corresponde no entrando a conocer los demás motivos de Fondo por la forma en que se resuelve. -----

DEL RECURSO POR MOTIVOS DE FONDO INTERPUESTO POR LOS PROCESADOS *JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIO ROBERTO SUAREZ GUERRA, JULIA AMPARO LOTAN GARZONA y MAX ERWIN QUIRIN SCHODER* y de los Abogados VINICIO RAFAEL GARCIA PIMENTEL, ALBERTO ANTONIO MORALES VELASCO-----

DEL SUB MOTIVO DE FONDO. ERRONEA APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS UNO (1), SIETE (7), DIEZ (10), ONCE (11) Y CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DEL CODIGO PENAL-----

En virtud de guardar estrecha relación las apelaciones interpuestas por los procesados antes mencionados y abogados de defensores, se procederá por economía procesal y en atención a que los hechos acreditados son los mismos para los procesados se resolverán en forma conjunta. -----

Tanto procesados como los abogados que interpusieron los recursos por los motivos de fondo, refieren que existe errónea aplicación del artículo uno (1), siete (7), diez (10), cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, toda vez que la ley



02-2019
Oficial 1º.
65 de 101

expresamente indica de que nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas por una ley anterior al acometimiento del ilícito penal, además al subsumir los hechos acreditados en el delito de Fraude, lo cual denota un yerro por parte del tribunal quien en los hechos acreditados no pudieron evidenciar que existía el engaño o ardid para que el delito tuviera su perfeccionamiento real. El error lo evidencia, según lo argumentan, cuando acreditan los hechos, y esos hechos estimados probados para el Tribunal no se configuran el delito de Fraude al no darse los presupuestos para el mismo y se vulneran los principios de legalidad y la relación causal. Para configurarse el delito de fraude en la administración pública, el funcionario o empleado público que intervenga en procesos de licitación, cotización, adquisición y compra, concesión usare artificio para defraudar al Estado. Siendo el caso que en la sentencia emitida, al valorar la prueba, jamás dan certeza jurídica sobre el extremo que se hubiere probado el empleo de artificio con lo cual se busco defraudar al Estado, elemento esencial de la figura delictiva por la cual fueron condenadas. -----

CONSIDERANDO

Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, artículo tres (3) indica que la Junta Directiva es la autoridad suprema del Instituto y, en consecuencia, le corresponde la Dirección General de las actividades de esa entidad. -----

La Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo nueve (9) numeral siete (7) último párrafo, estipula que en los casos no previstos en el presente artículo, se entenderá como autoridad superior y autoridad administrativa superior la que se establezca en el contrato, convenio, reglamento orgánico interno o las que

164



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
66 de 101

correspondan de acuerdo con la organización funcional. El artículo dieciocho (18), diecinueve (19) bis y veintiuno (21) del mismo cuerpo legal, establecen en cuanto al régimen de licitación y cotización pública, seguidamente el artículo veintiuno (21) en cuanto a la aprobación de los documentos de licitación, nos indican los que deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior previo a los dictámenes técnicos que se determinen en el reglamento. -----

El artículo diez (10) del Código Penal establece lo siguiente: *"Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado, cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta."* -----

La *Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentario Christian Steiner/Patricia Uribe (editores)*, página doscientos cincuenta y siete (257) artículo nueve (9) tiene por objetivo proteger al individuo frente al poder punitivo del Estado, otorgando diversas garantías, entre las cuales se encuentra el Principio de máxima taxatividad legal, mediante el cual se establece lo siguiente: *"...Según la Corte Interamericana el principio de legalidad, y más específicamente, el principio de máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa) exige que las "acciones y omisiones" criminales sean definidas "con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas punibles" La tipificación de un delito "debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa" debido a que "el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano"* -----

CONSIDERANDO

En virtud de lo señalado por los apelantes es conveniente descender y verificar



31
APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º,
67 de 101

los hechos estimados por acreditados para el tribunal, siendo estos los siguientes:

"a) Que los procesados JUAN DE DIOS DE LA CRUZ RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIO ROBERTO SUAREZ GUERRA, JULIA AMPARO LOTAN GARZONA y MAX ERWIN QUIRIN SCHODER, en las calidades de Presidente, Primer Vicepresidente y Vocales, respectivamente, de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el desempeño de sus funciones, (el subrayado es propio) en el proceso de licitación DSC-L-25/2014, NOG 3381625, para la contratación de Servicio de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria para Pacientes de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el 4 de noviembre de 2014, aprobaron lo actuado por la junta de licitación, (el subrayado es propio) en detrimento de los intereses de la prestación del servicio ya citado que proporcionaría el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a sus afiliados, no obstante no haberse cumplido por parte del oferente adjudicado con los siguientes aspectos: (el subrayado es propio) 1) El objeto de la Droguería Pisa Sociedad Anónima, no es la prestación de servicios de salud; y 2) No contaba con el recurso humano, la infraestructura básica y el mobiliario necesario para prestar el servicio de diálisis peritoneal, por lo que contrató a la entidad Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, según consta en el documento denominado "Documento Privado de Contrato de Prestación de Servicios Médicos y Hospitalarios de Diálisis Peritoneal Ambulatoria" de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, la prestación del servicio, delegando de esa manera en esa entidad mercantil, la esencia de la contratación del proceso de licitación ya relacionado; b) Al realizar el estudio de los documentos de la oferta de licitación presentada por la Droguería Pisa Sociedad Anónima, los procesados mencionados, no tomaron en cuenta que en el referido contrato de

165



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
68 de 101

fecha 9 de septiembre de 2014, no se garantizó la dotación del servicio porque se estipuló que la entidad Medicina Corporativa, podría dar por finalizado anticipadamente el contrato; no podría "interferir, ni dar instrucciones al personal que presta el servicio";(...) c) Como consecuencia de lo anteriormente indicado, los procesados mencionados, miembros de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en fecha 13 de enero de 2015, aprobaron el Contrato Administrativo celebrado el 17 de diciembre de 2014, (el subrayado es propio) suscrito entre el representante legal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el representante legal de la entidad Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, Carlos Alberto Revolorio Galindo, con lo que se avalaron en forma fraudulenta todas las anomalías de la oferta realizada por Droguería Pisa Sociedad Anónima, (el subrayado es propio) anteriormente descritas, en detrimento de los intereses del instituto.

Del examen a los hechos estimados por acreditados para el Tribunal *A quo*, establecemos que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el inciso a) de los hechos acreditados, el tribunal expresamente indica que en los hechos el tribunal actuó en el desempeño de sus funciones, (el subrayado es propio) en el proceso de licitación DSC-L-25/2014, NOG 3381625, para la contratación de Servicio de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria para Pacientes de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el 4 de noviembre de 2014, extremo que advertimos que no reviste de ilegalidad alguna, además se acreditó que fue aprobado por la Junta Directiva no obstante *no haberse cumplido por parte del oferente adjudicado con algunos aspectos*, circunstancias que infieren una adecuación distinta al delito acusado, no precisamente el delito de fraude y en cuanto al inciso b) de los



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º.

69 de 101

hechos acreditados, cuando se indica que al *realizar el estudio de los documentos de la oferta de licitación presentada por la Droguería Pisa Sociedad Anónima*, los procesados mencionados, no tomaron en cuenta que en el referido contrato de fecha 9 de septiembre de 2014, no se garantizó la dotación del servicio porque se estipuló que la entidad Medicina Corporativa, podría dar por finalizado anticipadamente el contrato; ese extremo, se entiende como una inobservancia pero no enfatiza precisamente elementos fácticos que permitan considerar el perfeccionamiento del delito acusado y cuando indican que con lo que se avalaron en forma fraudulenta todas las anomalías de la oferta realizada por Droguería Pisa Sociedad Anónima, acreditan que el avalar sin el elemento fáctico que es necesario e indispensable para ameritar unir lo circunstancial en la tesis acusatoria. -----

El inobservar lo señalado en los hechos acreditados por parte de la Junta Directiva para aprobar el evento, no lleva un elemento necesario para que se perfeccione y materialice el delito de fraude como lo es el *artificio*, el cual de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición, página 214 significa: "Arte o ingenio o habilidad con la que esta hecho algo." El Diccionario Pan hispánico del Español Jurídico, volumen 1, página 236 define el artificio como lo siguiente: "Habilidad, industria o artimaña para conseguir algo". -

Tomado en cuenta lo anterior, establecemos que con los hechos acreditados para el tribunal por el desfile de la prueba producida en juicio, no son actos propios del delito de fraude y comete error de derecho el Tribunal de Sentencia al otorgarles esa calificación jurídica que no procede y que de acuerdo a la ley no se configura el hecho acusado y por el cual fueron condenados, así ha resuelto la Corte de Constitucionalidad ha sentado precedente en cuanto al delito de Fraude en la

166



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
70 de 101

administración pública, citamos la sentencia emitida dentro del expediente 3292-2015 de fecha 3 de marzo 2016, que de sus partes conducentes extraemos: "...- artículo 450 del Código Penal regula el delito de fraude en la administración pública que es un tipo penal impropio, en cuanto establece un supuesto específico de la estafa, siendo en estos tipos penales, el engaño un elemento esencial para lograr detrimento económico en perjuicio del sujeto pasivo (...) y b) el supuesto hipotético de hecho, la conducta exigida para la comisión del ilícito consiste en que cualquiera de los sujetos activos intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación (...) o usare cualquier otro artificio para defraudar al Estado (...) es la intervención en cualquier fase de los procesos descritos, pero que, necesariamente requiere la existencia de algún artificio que tenga como consecuencia la defraudación al Estado, ya que la intervención del sujeto activo sin que concurra el artificio no podría ser constitutivo de fraude..."-----

Teniendo en consideración todo lo anteriormente planteado, sobre la base del hecho acreditado, la legislación pertinente al caso, la jurisprudencia al respecto, es procedente indicar que el Tribunal de Sentencia cometió errónea aplicación de los artículos uno (1), siete (7), diez (10), once (11) y cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, en consecuencia el recurso de apelación interpuesto por motivo de fondo debe prosperar y dictarse lo que en derecho corresponde. -----

DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL PROCESADO OTTO FERNANDO MOLINA STALLING-----

El procesado Molina Stalling presento varios motivos de fondo, los cuales por conservar similitud en cuanto a la argumentación y planteamiento persiguen el mismo resultado, motivo por el cual se resolverán en uno solo. -----

MOTIVO DE FONDO. INTERPRETACION INDEBIDA DEL ARTÍCULO



CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DEL CODIGO PENAL. -----

Se denuncia vulnerados además los artículos uno (1), siete (7), diez (10) del Código Penal y cuatro (4) de la Ley de Servicio Civil y uno (1) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Considerando II de la Circular conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, Acuerdo No. A-077-06 Del Sub Contralor de Probidad, Encargado de Despacho de la Contraloría General de Cuentas y artículos cuatro (4), diez (10) de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. ---

Argumenta que en inicio se le condenó en calidad de funcionario público mediante el cual se le atribuyó haber cometido el delito de Cobro Ilegal de Comisiones, condena que no esta de acuerdo, toda vez que existen aspectos que el tribunal no tomo en cuenta y que riñen con la normativa aplicable, interpretando según el apelante erróneamente el tipo penal atribuido como lo es de Cobro Ilegal de Comisiones. Para sostener su argumentación refiere al artículo cuatro (4) de la Ley de Servicio Civil y su reglamento para los efectos de indicar que no reúne la calidad de funcionario público, al haber sido contratado y devengar honorarios por la prestación de servicios. A su vez incorpora la normativa considerada a su juicio que se encuentra en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos; así mismo transcribe los contratos que suscribió con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- en donde se le da la categoría de contratista y donde hace constar que no gozaba de prestaciones laborales, no tenia jefe inmediato, no estaba sujeto a jornada de trabajo y que percibía honorarios profesionales en ocasión de ser contratista con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aunado argumenta que el ente acusador no presentó prueba alguna que lo atribuyera como funcionario publico, ya que de

167



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
72 de 101

haber incorporado el contrato de servicio profesionales hubiese tenido que era contratista con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sostiene que la prueba diligenciada nunca demostró que exigía o haya acordado o solicitado o gestionado el beneficio directo o indirecto hacia su persona antes de la reunión del cinco de noviembre de dos mil catorce en el comercio denominado Zurich. --- El apelante agrega que de conformidad con los hechos acreditados para el tribunal debió establecerse esa relación causal para el determinado resultado a fin de formular un juicio normativo que permitiera imputar objetivamente. -----

CONSIDERANDO

Que en virtud de lo argumentado como agravio, es evidente realizar un examen de los hechos acreditados por parte del Tribunal a fin de establecer si se ha cometido error de derecho. -----

La Corte de Constitucionalidad ha emitido fallos oportunos al tema puesto a nuestro conocimiento, para el efecto verificamos que en la sentencia de fecha 22 de enero de 2016 dentro del expediente identificado como dos mil cuatrocientos ochenta guión dos mil quince (2480-2015) se establecen lo siguiente: *"...En cuanto al agravio relativo a que la incidentante no ejerció funciones públicas, en virtud que no cumplió con los requisitos exigidos para el proceso de selección el cual esta conformado por las fases de convocatoria y evaluación de conformidad con las disposiciones reguladas en la ley de Servicio Civil y su Reglamento..."* -----

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. *"...Art. 2) Definiciones. A los efectos de la presente convención: a) Por "funcionario público" se entenderá: i) Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de*



37
127
APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
73 de 101

esa persona en el cargo; (...) No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas, incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por "Funcionario Público" toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el Derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte..."-----

El artículo cuarenta y seis (46) de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, establece preeminencia del Derecho Internacional, en ese sentido la Corte de Constitucionalidad ha emitido doctrina legal que impera, manifestándose de la siguiente manera: *"...la interpretación jurídica en un Estado Constitucional de Derecho debe realizarse de forma sistemática, teniendo presente la necesaria sujeción del orden jurídico interno a los preceptos de la Constitución..."* Gaceta 120. Expediente 4-2016 de fecha 26/05/2016. -----

El Decreto No. 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Público. Artículo tres (3) que da el indicativo de quienes se consideran funcionarios públicos, todas las personas que se refiere el artículo cuatro (4) de la misma ley y en el inciso a) de ese artículo indica que los dignatarios, autoridades, funcionarios públicos que por elección popular o nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos entre otros. El artículo diez (10) de ese mismo cuerpo legal estipula acerca de la responsabilidad penal, lo cual es generado mediante la decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiera el artículo cuatro (4) de la ley. -----

Los Acuerdos del Sub Contralor de Probidad, encargado del Despacho de la Contraloría General de Cuentas, identificado con los números A-77-06 y A-118-

168



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
74 de 101

2007, establece que: "Artículo 1. El personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, por carecer de calidad de servidor público y/o funcionario público, prestan servicios eminentemente profesionales o técnicos; por lo que no le son aplicables las normas contenidas en el Decreto 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento. El Decreto 1748 Ley de Servicio Civil, artículo cuatro (4). Servidor Público. "Para los efectos de esta ley, se considera servidor publico la persona individual que ocupe un puesto en la administración publica en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración publica." El Acuerdo Gubernativo No. 18-98 Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Artículo uno (1) "Servidores Públicos. Para los efectos de la ley de servicio civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado, los siguientes: a) Funcionario Publico: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario". Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas. Normas para la contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "Otras remuneraciones de Personal Temporal" "I Con cargo al renglón 029, debe establecerse que únicamente pueden contratarse personas individuales para la realización de servicios y/o estudios específicos de naturaleza técnica o



profesional.(...) II Para la contratación de servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia, con cargo al renglón presupuestario 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" por parte del sector público, que comprende los Organismos del Estado, sus entidades autónomas y entidades descentralizadas las Municipales del país, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las empresas publicas, estatales o municipales, además de los requisitos que establece la ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, observaran las siguientes normas: 1. Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario mencionado, no tienen la calidad de "servidores públicos" de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley del Servicio Civil y 1 de su Reglamento, por lo que debe quedar claramente estipulado en el contrato respectivo que dichas personas no tienen derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, (...) 3. Además que el acto contractual no crea relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es para ningún puesto, empleo o cargo publico en concordancia con la ley..."-----

CONSIDERANDO

En virtud de lo señalado por el apelante quien invoca errores de derecho acaecidos por el Tribunal quien emitió una sentencia de condena en su contra por el delito de *Cobro Ilegal de Comisiones*, esta Sala procede a revisar los hechos estimados por acreditados para el tribunal en cuanto al apelante e infiere los siguientes extremos: -----

a) Que el procesado OTTO FERNANDO MOLINA STALLING, en su calidad de funcionario asesor de la Subgerencia Financiera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en la ciudad de Guatemala, el cuatro de noviembre de dos mil

169



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
76 de 101

catorce, sostuvo una conversación telefónica con Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, donde planificaron una reunión con los personeros de la entidad Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, para solicitar una comisión para agilizar la contratación del Servicio de Diálisis Peritoneal Continúa Ambulatoria para Pacientes de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que devino del proceso de licitación adjudicado a esa entidad, identificado como DSC-L-25/2014, operación de Guatecompras NOG 3381625; y -b) Que en las conversaciones que el procesado Molina Stalling sostuvo con el acusado García Granados Reyes, hizo referencia al cobro indebido del 15 por ciento sobre el monto total del contrato referido en el punto anterior, reunión que se realizó el cinco de noviembre de dos mil quince en la pastelería Zurich de la zona 10, a la que asistieron los procesados Molina Stalling, García Granados Reyes y el subgerente de la entidad Pisa Sociedad Anónima."-----

Siendo que de conformidad con los hechos acreditados por el *A quo*, este Tribunal de alzada establece que, cuando se le acreditó al procesado Molina Stalling que *en su calidad de funcionario asesor de la Subgerencia Financiera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social*, sostuvo una conversación telefónica con Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, donde planificaron una reunión con los personeros de la entidad Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, para solicitar un cobro indebido de comisión por agilizar la contratación en referencia, el Tribunal de sentencia indicó que le condenaba por ser Funcionario Asesor de una dependencia del IGSS, siendo necesario advertir que nuestra legislación interna vigente, claramente establece cuales son las personas por las cuales se les puede atribuir la calidad de Funcionario Público, siendo toda aquella



GUATEMALA, C.A.



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1ª

77 de 101

persona física e individual que ocupe un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente y que a su vez se le remunera con un salario. Si bien es cierto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento ratificado por el Estado de Guatemala, en el artículo dos (2) define que se debe de entender como *"funcionario publico"* y podría el procesado Molina Stalling identificarse dentro de ese grupo enunciado por dicha Convención, también lo es que ese mismo instrumento expresa la siguiente disposición: *"No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas, incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por "Funcionario Público" toda persona que desempeñe una función publica o preste un servicio publico según se defina en el Derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte..."* es decir entonces que jamás podría la convención ir en contra de nuestra legislación interna y contra oponerse a lo prescrito y permitido en cuanto a calificar a una persona como *funcionario publico*, pues también la Corte de Constitucionalidad como se indicó en el apartado anterior, se ha manifestado en cuanto a la preeminencia del Derecho Internacional indicado que *la interpretación jurídica en un Estado Constitucional de Derecho debe realizarse de forma sistemática, teniendo presente la necesaria sujeción del orden jurídico interno,* en consecuencia si en nuestro ordenamiento interno se define e identifica a la persona que puede llevar intrínseca la sujeción como funcionario publico, no podemos como tribunal de alzada respaldar lo resuelto por el tribunal de sentencia quien erró en cuanto a calificar a la figura legal que pudiera

170



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
78 de 101

corresponderle al procesado Molina Stalling, cuando se le atribuye la calidad de funcionario publico, toda vez que no puede convalidársele en esa categoría pues la analogía no esta permitida dentro del derecho penal y no reúne las condiciones para denominársele de esa manera e imputarle hechos en esa calidad y menos aun condenarle por ese delito. La Corte de Constitucional refiere concretamente que para el ejercicio de *funciones públicas*, debe de cumplirse con los requisitos exigidos para el proceso de selección el cual esta conformado por las fases de convocatoria y evaluación de conformidad con las disposiciones por la ley, circunstancias no acaecidas en cuanto al accionante Molina Stalling pues como se acreditó su relación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se efectúo bajo las condiciones de contratista y para la prestación de servicios profesionales. Además no fue objeto de apelación por alguna otra parte procesal y al haber reclamado, no podemos resolver contrario por el Principio *Reformatio In Pejus* pues el defensor fue el único que impugno sobre la inaplicabilidad de la figura legal lo cual a criterio de este tribunal es procedente evidenciar el error cometido por el Tribunal de sentencia. En consecuencia el presente recurso debe prosperar y emitir la decisión que en derecho corresponde. -----

DE LOS RECURSOS POR MOTIVOS DE FONDO INTERPUESTO POR EL PROCESADO ALVARO MANOLO DUBON GONZALEZ-----

SUB MOTIVO DE FONDO. INTERPRETACION INDEBIDA DEL ARTICULO CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DEL CODIGO PENAL-----

De lo expuesto por el accionante en donde manifiesta su inconformidad del hecho que se le condenó, advierte que de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia claramente se establece que para que exista el delito de fraude debe de darse por acreditado el "artificio" el cual debe de existir en concierto entre el funcionario



GUATEMALA, C.A.



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º

79 de 101

publico y el particular con el objeto de causar un detrimento patrimonial al Estado. Refiere que la sentencia da acreditado en su caso que perjudicó los intereses del Estado al suscribir el contrato en donde la entidad denominada Droguería Pisa, Sociedad Anónima, no cumplió con las especificaciones técnicas conforme a las bases del contrato pero en el caso reprochable para él la suscripción del contrato se realiza posterior y que el evento no fue adjudicado por la Sub gerencia Administrativa ya que es la Junta de Licitación conforme a la ley la encargada de revisar todos los documentos por los oferentes y que es la misma la que determina si cumplen con las bases de licitación, además es la Junta Directiva quien aprueba lo actuado por la Junta de Licitación, ya que su caso ni elaboró la minuta del contrato, la cual iba incluida en las bases de licitación. -----

Además aclara que se le indica que se cobraron Q.7.00 por servicio por parte de Medicina Corporativa, Sociedad Anónima y el precio al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fue de Q.45.00, siendo que el Tribunal de Sentencia no tomó en consideración que se probó en el debate que el precio anterior era por solo el arrendamiento de varios recursos de esta entidad a PISA, sin incluir los insumos que proveía PISA a cada paciente, como bolsas dialisantes y otros insumos, por lo que en la lógica es improcedente pensar que exista fraude. También un punto importante es indicar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no pagó un solo centavo por el servicio prestado por PISA por la prestación del servicio, así que tampoco puede existir fraude sin el artificio de defraudar al Estado cuando no se erogó ni un solo centavo. Aclara a su vez que la cantidad de Q.3,379,466.27 por los costos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social brindó a los pacientes no fue por pago de prestación de servicios, además estaba contemplado en el contrato administrativo que existía garantía de seguro de

171



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
80 de 101

caución de cumplimiento de contrato, el cual podría ser ejecutado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en caso de incumplimiento de PISA- - - - -
Argumenta en su beneficio la falta de detrimento al patrimonio del Estado, la inexistencia del dolo y que su reproche es la omisión al no verificar o no revisar el expediente, lo cual en algún caso podría dar ocasión a otra figura delictiva pero no el delito de Fraude. - - - - -

CONSIDERANDO

De acuerdo al artículo cuarenta y siete (47) de la Ley de Contrataciones del Estado, indica lo siguiente: "*Suscripción del contrato. Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez días, a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo Ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la delegación de tales contratos...*" Artículo 48 Aprobación del contrato. *El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta ley, según el caso...*" asimismo el artículo setenta (70) estipula lo relacionado a las garantías respectiva para cubrir los riesgos que puedan producirse y que se determinen en el contrato y el artículo ochenta y dos (82) del mismo ordenamiento estipula que el funcionario o empleado publico que sin causa justificada no cumpla, dentro de los plazos con las obligaciones impuestas por esa ley y su reglamento podrá ser sancionado con multa equivalente al 2% del monto de la negociación, sin perjuicio de la destitución si fuere procedente. El artículo ciento uno (101) de la misma ley nos da el resguardo jurídico para la aplicación de recursos administrativos en ocasión a disposiciones dictadas sin acatamiento de lo previsto en esta ley. - - - - -



02-2019
Oficial 1º
81 de 101

CONSIDERANDO

Que el delito de Fraude plenamente estipulado en el artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, establece que lo comete delito de Fraude en la administración pública el funcionario o empleado publico, quien ejerza funciones publica o quien con ocasión de uno o mas contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios, intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación procesada directamente o por medio de otra unidad ejecutora, o usare cualquier otro artificio para defraudare al Estado, será responsable de cinco a diez años de prisión e inhabilitación especial. -----

De acuerdo al Análisis y Comentario de la Ley Contra la Corrupción acerca del delito de fraude, indica que es una acción típica que con lleva una conducta en cuanto al sujeto activo de participar en cualquier fase de los procesos de contratación del Estado realizando un artificio para llevarlo a cabo, que aunque advierten que el vocablo intervenir pareciera aludir alguna forma de participación punible, deberá entenderse que el sujeto activo realiza la acción con ocasión de la ejecución de uno o mas contratos de obras o servicios con el Estado. -----

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición, pagina 1057, por Fraude se entiende: *"Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos o de algunos privados, confabulándose con representación de intereses opuestos"*, -----

La *Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentario Christian Steiner/Patricia Uribe (editores)*, página 257 artículo nueve (9) se manifiesta que esta estipulación tiene por objetivo proteger al individuo frente al poder punitivo del Estado, otorgando diversas garantías, entre las cuales se encuentra el

172

Principio de máxima taxatividad legal, mediante el cual se establece lo siguiente:

"...Según la Corte Interamericana el principio de legalidad, y más específicamente, el principio de máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa) exige que las "acciones y omisiones" criminales sean definidas "con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas punibles". La tipificación de un delito "debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa" debido a que "el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano"

Así también la jurisprudencia obtenida del tribunal constitucional, en referencia al artículo diecisiete (17), bajo la premisa de lo indicado en la norma constitucional la cual indica que no hay delito ni pena sin ley anterior, al respecto se transcriben ciertos pasajes de la doctrina constitucional en este sentido: Gaceta 81. Expediente 639-2006 fecha de sentencia 22/08/2006, *"...Este principio se encuentra definido doctrinariamente como: nullum crimen sine scripta, stricta, certa et previa lege", de manera que a través del mismo se establece la prohibición de calificar como delitos, las conductas, activas u omisivas, que no se encuentren previstas como delictivas en una ley estricta, cierta y anterior a la comisión u omisión sancionada"* Asimismo, en la Gaceta 7 Expediente 164-87 Fecha de sentencia 25/02/1998, la cual literalmente indica: *"...Esta norma, que recoge el principio de legalidad, fija claramente una condición de certeza jurídica para penalizar determinadas conductas, y es que las mismas estén expresamente calificadas como delitos o faltas..."*-----

Lo indicado anteriormente advierte que toda figura delictiva atribuible a una persona sometida a proceso penal, deberá establecerse que fue producto de una consecuencia de una acción idónea ilícita para producirla y a su vez debe de traer aparejado un resultado doloso que en este caso que nos ocupa, era provocar el



12
A
APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
83 de 101

daño o detrimento patrimonial al Estado de Guatemala, por lo que deviene siendo menester delimitar concretamente la relación causal atribuible al apelante, quien manifiesto que no se efectuó un examen adecuado por parte del Tribunal en cuanto a las acciones realizadas por el y que el resultado exigido en la legislación hubiese sido lesionar el patrimonio del Estado, circunstancia necesaria para que en el caso de el pueda darse el delito de Fraude. -----

Al respecto es importante considerar lo establecido en el artículo once (11) del Código Penal, el cual nos refiere al delito doloso y resulta necesario evidenciar en los hechos acreditados que el resultado ilícito fue previsto debidamente y esperado o bien se presentó como posible y se ejecutó. La Honorable Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en cuanto al delito doloso, dentro del expediente No. 1724-2012 Sentencia de Casación del 09/01/2013 *"...El artículo 11 del Código Penal establece: "Delito doloso. El delito es doloso cuando, el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible". Dicho artículo recoge en su contenido, dos tipos de dolo, que la doctrina los denomina directo y eventual. El autor Santiago Mir Puig, define las clases de dolo de la siguiente manera: a) en el dolo directo de primer grado, el autor persigue la realización del delito; b) en el dolo directo de segundo grado, el autor no busca la realización del tipo, pero sabe y advierte como seguro o casi seguro que su actuación dará lugar al delito; y, c) en el dolo eventual o dolo condicionado, el resultado se le aparece como posible. El dolo se construye fundamentalmente con base a dos teorías, la de la voluntad y la del conocimiento..."*.-----

Es así como al analizar los hechos acreditados atribuidos al apelante, como lo fue el siguiente: "a) Que el procesado ÁLVARO MANOLO DUBÓN GONZÁLEZ,

173



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
..84 de 101

en su calidad de funcionario público, como Subgerente Administrativo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en la Ciudad de Guatemala, en fecha 17 de diciembre de 2014, suscribió el contrato administrativo identificado como 385-DSC/2014, con el que se adjudicó, por un monto de Q. 116,227,035.00, a la entidad Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, el Servicio de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria para Pacientes de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; b) Que el procesado Dubón González con fecha tres de junio de dos mil catorce, fue el encargado de nombrar y remitir expediente original al Jefe del departamento Médico de Servicios Centrales, para el análisis y revisión de los documentos correspondientes a las bases de licitación, y solicitó la coordinación con el Departamento de Servicios Contratados, para cualquier modificación o enmienda que pudiera surgir de la revisión de documentos de licitación; asimismo, el 2 de julio de 2014, estipuló que los documentos de licitación para el concurso público del servicio de diálisis peritoneal, cumplieron con las estipulaciones legales y reglamentarias, por lo que tuvo pleno conocimiento de todos los requisitos necesarios para la contratación del servicio; c) Que el procesado Dubón González al suscribir el contrato administrativo, ya indicado, perjudicó los intereses del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque la entidad Droguería PISA de Guatemala no tenía como objeto social la prestación de servicios de salud; asimismo, la entidad adjudicada en la cláusula "QUINTA" del contrato, se comprometió a prestar los servicios, con base en la oferta presentada; sin embargo, la misma entidad, incumplió con las especificaciones técnicas necesarias, para participar en el concurso, ya que no contaba con el recurso humano, infraestructura básica y mobiliario, necesarios para participar en el



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
85 de 101

evento; pues Droguería PISA, Sociedad Anónima, contrató a la entidad Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, mediante "Documento Privado de Contrato de Prestación de Servicios Médicos y Hospitalarios de Diálisis Peritoneal Ambulatoria" de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, la prestación del servicio de diálisis, delegando la esencia de la contratación; d) Que al contratar a la entidad Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, se evidencia la defraudación al patrimonio de los intereses del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, pagaría a Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, Q. 7.00 por cada servicio médico y hospitalario de diálisis peritoneal ambulatoria, no obstante, se había pactado que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pagaría la cantidad de Q.45.00 por cada servicio de diálisis peritoneal; y e) Que en el contrato que suscribió el procesado Dubón González, se acordó que los servicios de diálisis peritoneal deberían prestarse en las instalaciones de la contratista, pero la sede ubicada en 10ª calle 2-31 de la zona 14, ciudad de Guatemala, pertenecían a la entidad Medicina Corporativa, Sociedad Anónima. -----

Cuando se analiza la plataforma acreditada por el Tribunal de sentencia se evidencia que este comete error de fondo, pues las acciones que califica como delito de Fraude no son acciones pertinentes que puedan convalidar la figura delictiva de dicho delito, es decir que si hubo alguna inobservancia efectuada por su parte esos actos son sujetos de ser impugnados y no necesariamente criminalizar las conductas o errores administrativos que la misma ley da la viabilidad para corregirlos sin llegar a la *ultima ratio*, pues no se acreditó en los hechos estimados por probados que cuales fueron esas acciones que presuman fraudulentas y que sostengan una tesis acusatoria por el delito señalado. Cabe

174

señalar que los errores administrativos son eventos que de acuerdo a las prácticas administrativas pueden darse, sin que ello implique que revistan características de delito y además son circunstancias que la misma ley permite corregir a efecto de reconducir lo aprobado el no tomar en cuenta determinados elementos previstos no puede sostener que el delito de fraude se haya cometido, pues nadie puede ser penado por hechos que no se presuman por delitos o faltas señalados por una ley antes de haberse realizado el hecho que se presume delictuoso. El inobservar lo señalado en los hechos acreditados reprochable al procesado Dubón González no lleva un elemento necesario para que se perfeccione y materialice el delito de fraude como lo es el *artificio*, el cual de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición, página 214 significa: "*Arte o ingenio o habilidad con la que esta hecho algo.*" El Diccionario Pan hispánico del Español Jurídico, volumen 1, página 236 define el artificio como lo siguiente: "*Habilidad, industria o artimaña para conseguir algo*" pues el acusado Dubón González no tenía obligación de evidenciar si lo adjudicado y aprobado por la Junta de Licitación y consecuentemente Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no habían cumplido con las formalidades específicas, claro no significa que si sabiéndolo lo permite, eso significa tener responsabilidad penal, lo cual no sería atribuible a esta figura sino podría ser otra, la cual la inadvirtió el ente que tiene el monopolio de la persecución penal. -----

Habiendo efectuado el análisis anterior, sobre la base del hecho acreditado, la legislación pertinente al caso, la jurisprudencia al respecto, es procedente indicar que el Tribunal de Sentencia cometió errónea aplicación de los artículos uno (1), siete (7), diez (10), once (11) y cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal,

ORGANISMO JUDICIAL

GUATEMALA, C.A.



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1º

87 de 101

en consecuencia el recurso de apelación interpuesto por motivo de fondo debe prosperar y dictarse lo que en derecho corresponde. -----

DE LOS RECURSOS POR MOTIVOS DE FONDO INTERPUESTO POR EL PROCESADO FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI-----

SUB MOTIVO DE FONDO. INTERPRETACION INDEBIDA DEL ARTICULO DIEZ (10) DEL CODIGO PENAL RELACIONADO AL ARTICULO VEINTICUATRO (24) DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL. -----

El procesado Cortés Bocaletti quien fue condenado por el delito de Fraude en forma continuada, presenta su recurso que parte de lo establecido en cuanto a su persona por el hecho acreditado, cuando en la sentencia se debió de interpretar debidamente el artículo diez (10) del Código Penal y veinticuatro (24) del mismo ordenamiento, es decir la relación causal en cuanto a la acción que realizó al momento de ejecutar los actos que fueron acreditados al tribunal, los cuales indica que no fueron consecuencia de una acción idónea para producir el tipo penal de fraude, ya que como quedo evidenciado actué en uso de mis atribuciones y por lo tanto ejecutando actos propios al ejercicio de mi actuar como funcionario publico, por lo tanto no puede atribuirme un acto ilícito por la naturaleza del fraude, el cual tiene circunstancias concretas al caso. Argumenta que ni él ni su departamento podían advertir circunstancias que no eran de su competencia sino de la Junta de Licitación, la cual era recibir, calificar y adjudicar las ofertas presentadas, como parte de sus funciones tuvo a su cargo el desarrollo del evento para la contratación del servicio pero su trabajo es puramente administrativo no de decisión o de adjudicación solo verifica que se cumplan los plazos señalados en la Ley de Contrataciones del Estado. -----

CONSIDERANDO

175



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
88 de 101

Que el delito de Fraude plenamente estipulado en el artículo cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, establece que lo comete delito de Fraude en la administración pública el funcionario o empleado público, quien ejerza funciones pública o quien con ocasión de uno o mas contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios, intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación procesada directamente o por medio de otra unidad ejecutora, o usare cualquier otro artificio para defraudar al Estado, será responsable de cinco a diez años de prisión e inhabilitación especial. -----

De acuerdo al Análisis y Comentario de la Ley Contra la Corrupción (Ensayo dogmático sobre el Decreto 31-2012) acerca del delito de fraude, indica que es una acción típica que conlleva una conducta en cuanto al sujeto activo de participar en cualquier fase de los procesos de contratación del Estado realizando un artificio para llevarlo a cabo, que aunque advierten que el vocablo intervenir pareciera aludir alguna forma de participación punible, deberá entenderse que el sujeto activo realiza la acción con ocasión de la ejecución de uno o mas contratos de obras o servicios con el Estado. -----

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición, pagina 1057, por Fraude se entiende: "*Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos o de algunos privados, confabulándose con representación de intereses opuestos*" -----

La *Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentario Christian Steiner/Patricia Uribe (editores)*, página 257 artículo nueve (9) se manifiesta que esta estipulación tiene por objetivo proteger al individuo frente al poder punitivo del Estado, otorgando diversas garantías, entre las cuales se encuentra el



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
89 de 101

Principio de máxima taxatividad legal, mediante el cual se establece lo siguiente:

"...Según la Corte Interamericana el principio de legalidad, y más específicamente, el principio de máxima taxatividad legal (nullum crimen, nulla poena sine lege certa) exige que las "acciones y omisiones" criminales sean definidas "con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas punibles" La tipificación de un delito "debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa" debido a que "el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano" Así también la jurisprudencia obtenida del tribunal constitucional, en referencia al artículo diecisiete (17), bajo la premisa de lo indicado en la norma constitucional la cual indica que no hay delito ni pena sin ley anterior, al respecto se transcriben ciertos pasajes de la doctrina constitucional en este sentido: Gaceta 81. Expediente 639-2006 fecha de sentencia 22/08/2006, "...Este principio se encuentra definido doctrinariamente como: nullum crimen sine scripta, stricta, certa et previa lege", de manera que a través del mismo se establece la prohibición de calificar como delitos, las conductas, activas u omisivas, que no se encuentren previstas como delictivas en una ley estricta, cierta y anterior a la comisión u omisión sancionada" Asimismo, en la Gaceta 7 Expediente 164-87 Fecha de sentencia 25/02/1998, la cual literalmente indica: "...Esta norma, que recoge el principio de legalidad, fija claramente una condición de certeza jurídica para penalizar determinadas conductas, y es que las mismas estén expresamente calificadas como delitos o faltas..."

Lo indicado anteriormente advierte que toda figura delictiva atribuible a una persona sometida a proceso penal, deberá establecerse que fue producto de una consecuencia de una acción idónea ilícita y con dolo para producirla y a su vez debe de traer ese resultado doloso que en este caso que nos ocupa, era provocar

176



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
90 de 101

el daño o detrimento patrimonial al Estado de Guatemala, por lo que deviene siendo menester delimitar concretamente la relación causal atribuible al apelante, quien indica que no se efectuó un examen adecuado por parte del Tribunal en cuanto a las acciones realizadas por el y que el resultado exigido en la legislación hubiese sido lesionar el patrimonio del Estado circunstancia necesaria para que en el caso de ellas pueda darse el delito de Fraude. Al respecto es importante considerar lo establecido en el artículo once (11) del Código Penal, el cual nos refiere al delito doloso e indispensable es evidenciar en los hechos acreditados que el resultado ilícito fue previsto debidamente y esperado o bien se presentó como posible y se ejecutó. Por lo que deviene siendo importante verificar los hechos estimados acreditados en cuanto al apelante, por lo que los enunciamos:

"EN RELACIÓN A LA ACUSACIÓN EN CONTRA DEL PROCESADO FRANCISCO CORTEZ BOCALETTI, por el delito de FRAUDE EN FORMA CONTINUADA, los siguientes hechos y circunstancias: EVENTO PISA: Que a partir del mes de mayo del año dos mil catorce, en su calidad de funcionario público, como Jefe del Departamento de Servicios Contratados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en la Ciudad de Guatemala, incurrió en irregularidades en el desempeño de sus funciones, (el resaltado es propio) en el curso del proceso de licitación identificado como DSC-L-25/2014:NOG 3381625, para la contratación de Servicio de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria para Pacientes de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; b) Que el procesado Francisco Cortez Bocaletti, como parte de sus funciones tuvo a su cargo el desarrollo del evento (el resaltado es propio) para la contratación de la prestación del servicio ya indicado, pudiendo advertir los siguientes aspectos: 1) Que la entidad Droguería PISA de Guatemala,



02-2019
Oficial 1º.
91 de 101

Sociedad Anónima, incumplió con las especificaciones técnicas necesarias, (el resaltado es propio) para participar en dicho concurso, ya que la misma no contaba con el recurso humano, infraestructura básica y mobiliario, necesarios para participar en el evento, vulnerándose el numeral "3" del apartado "especificaciones generales" de las bases de licitación; 2) Que a la Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, para brindar el servicio de diálisis peritoneal, le fue necesario contratar a la entidad Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, lo que consta en el "Documento Privado de Contrato de Prestación de Servicios Médicos y Hospitalarios de Diálisis Peritoneal Ambulatoria" de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, delegando en la entidad Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, la esencia de la contratación; c) Que en el contrato relacionado en el inciso anterior, la entidad calificada no garantizó la dotación del servicio, (el resaltado es propio) puesto que la entidad contratada podía dar por finalizado anticipadamente el contrato y Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, no podía "interferir, ni dar instrucciones al personal que presta el servicio", aunado a la evidente defraudación al patrimonio e intereses del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya que en el convenio en cuestión, se estipuló que Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, pagará a Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, Q.7.00 por cada diálisis peritoneal, mientras que la oferta que Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima hizo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, fue Q.45.00, por cada diálisis peritoneal, conducta con la cual avaló en forma fraudulenta todas las anomalías de la contratación en detrimento de los intereses del instituto. - - - - -

De acuerdo a los hechos estimados probados con el desfile probatorio, esta Sala advierte elementos importantes para traer a discusión el asunto puesto a nuestro

177



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
92 de 101

conocimiento; cuando en los hechos acreditados se indican, extremos como los siguientes: "*incurrió en irregularidades en el desempeño de sus funciones*" no significa precisamente el acometimiento de un hecho delictivo, puede ser una irregularidad de índole administrativa; además cuando se indica "*1) Que la entidad Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima, incumplió con las especificaciones técnicas necesarias,*" son hechos no reprochables al apelante, en cuyo caso se dieron son eventos que se pueden reprochar a la entidad contratante no al procesado quien se sale de su esfera evitar ese incumplimiento; en cuanto a que "*Que en el contrato relacionado en el inciso anterior, la entidad calificada no garantizó la dotación del servicio,*" tampoco se puede atribuir al procesado Cortez Bocaletti, por lo que evidenciamos que de nueva cuenta el Tribunal de sentencia se equivoca y criminaliza conductas que evidentemente son de índole administrativo y que no pueden ser consideradas hechos punibles con sanciones penales, es decir no se perfeccionó ni materializó el delito de fraude y el elemento porimordial que es el *artificio*, el cual de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición, página 214 significa: "*Arte o ingenio o habilidad con la que esta hecho algo.*" El Diccionario Pan hispánico del Español Jurídico, volumen 1, página 236 define el artificio como lo siguiente: "*Habilidad, industria o artimaña para conseguir algo.*" -----

Del análisis anterior sobre la base del hecho acreditado, la legislación pertinente al caso, la jurisprudencia al respecto, es procedente indicar que el Tribunal de Sentencia cometió errónea aplicación de los artículos uno (1), siete (7), diez (10), once (11) y cuatrocientos cincuenta (450) del Código Penal, en consecuencia el recurso de apelación interpuesto por motivo de fondo debe prosperar y dictarse lo que en derecho corresponde. -----



02-2019
Oficial 1º.
93 de 101

CONSIDERANDO

DEL RECURSO DE APELACIÓN ESPECIAL PRESENTADO POR MAURICIO FARFÁN DONIS EN SU CALIDAD DE MANDATARIO JUDICIAL CON REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD DROGUERÍA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

El recurrente presentó recurso de apelación especial por motivo de fondo, planteando ocho sub motivos los cuales individualizo de la siguiente manera: primer sub motivo de fondo, errónea aplicación del artículo ciento treinta y cinco (135) del Código Procesal Penal; segundo sub motivo de fondo, interpretación indebida del artículo ciento doce (112) del Código Penal; tercer sub motivo de fondo, inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal, en cuanto a la violación de la sana critica razonada, en su principio lógico de razón suficiente por ausencia de prueba; cuarto sub motivo de fondo, inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal, en cuanto a la violación a la sana critica razonada en su principio de experiencia común; quinto sub motivo de fondo, inobservancia del artículo dos (2) numeral dos (2) del Código De Comercio De Guatemala, en cuanto que se intenta criminalizar un acto que la ley expresamente permite; sexto sub motivo de fondo, inobservancia del artículo seiscientos sesenta y nueve (669) del Código De Comercio De Guatemala, en cuanto a que se hizo una arbitraria interpretación, desprotegiendo y extraviando las buenas intenciones de los contratantes Droguería PISA de Guatemala, Sociedad Anónima y medicina Corporativa, Sociedad Anónima; séptimo sub motivo, inobservancia de los artículos ciento dos (102), ciento tres (103), y ciento tres (103) bis de la Ley De Contrataciones Del Estado, toda vez que la sentencia aplica responsabilidad de un supuesto actuar

178



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
94 de 101

penal, incumpliendo la prelación de acciones que ordena la ley; octavo sub motivo, inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal en cuanto a la inadecuada aplicación de la Sana Crítica Razonada en su regla lógica, en el análisis del objeto social de Droguerías PISA de Guatemala, Sociedad Anónima y violación del artículo cinco (5) de la Constitución Política De La República De Guatemala. -----

Este tribunal de alzada advirtió incongruencia en la apelación planteada por el abogado Farfán Donis, por lo que se le confirió audiencia para que aclarara si planteaba apelación por motivos de fondo o por motivos de forma, tomando en cuenta que en el recurso indica que lo plantea por fondo sin embargo en el contenido argumentativo hace alusión a errores *in procedendo* atribuidos al tribunal *a quo*; por lo que con fecha siete de marzo del año en curso evacuó la audiencia de mérito aduciendo que todos los sub motivos debieran ser conocidos por fondo y no por forma, reiteró la misma normativa aludida en el recurso que considera inobservada por parte del tribunal de sentencia. -----

La apelación especial es un recurso que tiene por objeto revisar la logicidad, legalidad y razonabilidad de la sentencia que se conoce en grado, es un recurso eminentemente técnico que tiene consecuencias jurídicas diferentes atendiendo a la pretensión de los recurrentes, se rige por principios específicos dentro de los cuales encontramos el principio de limitación del agravio, el que implica que el tribunal de alzada debe exclusivamente limitarse al agravio reclamado y las consecuencias que provoca el recurso por el referido agravio. En ese orden de ideas tenemos que si se apela un recurso por motivo de fondo la consecuencia lógica es que al acoger el mismo el tribunal de alzada tiene obligatoriamente que emitir un nuevo fallo acorde a la normativa sustantiva denunciada con error en el



momento intelectual del juzgar; ahora bien, si la inobservancia que se reclama esta dirigida a normativa procesal por la aplicación incorrecta que hizo el tribunal de sentencia la consecuencia es ordenar la repetición de juicio (reenvío), ante las dos posibilidades el recurrente debe tener clara sus pretensiones para orientar al tribunal de alzada a la decisión que en derecho corresponde. Dicho lo anterior, este tribunal estima no acoger los siguientes sub motivos planteados por el apelante Mauricio Farfán Donis: primer sub motivo de fondo, errónea aplicación del artículo ciento treinta y cinco (135) del Código Procesal Penal; tercer sub motivo de fondo, inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal; cuarto sub motivo de fondo, inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal; octavo sub motivo de fondo inobservancia del artículo trescientos ochenta y cinco (385) del Código Procesal Penal; toda vez que el recurrente reclama la aplicación de normativa procesal penal, lo que implica el reenvío, consecuentemente un nuevo pronunciamiento en juicio por el tribunal de sentencia que se designe, sin embargo es claro en la aplicación que pretende al indicar que requiere que este tribunal de alzada anule la sentencia que se conoce en grado y declare una sentencia que indique que Droguería PISA de Guatemala Sociedad Anónima, no es responsable civilmente. De lo anterior se colige que el apelante no está claro en sus pretensiones y planteamientos, en los sub motivos indicados, haciendo una mixtura de los mismos, situación que no pudo superar aun habiéndole conferido el tiempo de ley para que corrigiera el recurso de mérito, por lo que se ordena resolver lo que en derecho corresponde. -----

Este tribunal de alzada tampoco acoge los sub motivos identificados como: quinto sub motivo de fondo, inobservancia del artículo dos (2) numeral dos (2) del

179



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
96 de 101

Código De Comercio De Guatemala; sexto sub motivo de fondo, inobservancia del artículo seiscientos sesenta y nueve (669) del Código De Comercio De Guatemala y Séptimo sub motivo, inobservancia de los artículos ciento dos (102), ciento tres (103), y ciento tres (103) bis de la Ley De Contrataciones Del Estado; en principio porque las normativas reclamadas como inobservadas por el *a quo* no tienen el carácter de normas jurídicas penales, en todo caso el recurrente debió haber realizado el trabajo intelectual de subsunción de las referidas normas al caso concreto, referirlas directamente con hechos constitutivos de ilícitos penales y/o normas de carácter general del Código Penal, así como del Código Procesal Penal. Por otro lado a revisar el contenido normativo establecemos que las referidas normas reclamadas como inobservancia por fondo, se refieren a procedimientos de índole administrativos y no jurisdiccionales, razón por la cual se ordena resolver lo que en derecho corresponde. -----

Al hacer el análisis correspondiente del segundo sub motivo de fondo relacionado a la interpretación indebida del artículo ciento doce (112) del Código Penal y confrontarlo con la sentencia que se conoce en grado, quienes ahora resolvemos estimamos que son valederos los argumentos vertidos por del recurrente en este sub motivo, por las siguientes razones: Cabe advertir que el decreto siete guión dos mil once (7-2011) del Congreso de la República creó la institución procesal de la Reparación Digna que se fundamenta en la justicia restaurativa de naturaleza jurídica penal, con el objeto de garantizar a la víctima o agraviado la Tutela Judicial Efectiva a efecto que sin mayores formalismos luego de establecerse la condena penal se procure la justicia restaurativa, esta implica el pronunciamiento inmediato por parte del juez de sentencia sobre la forma de reparar o restaurar el daño ocasionado; la reparación digna es una institución



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º
97 de 101

propia de derecho penal democrático que se desarrolla bajo sus propios principios dentro de los cuales encontramos el principio de Reparación proveniente del delito el cual esta contenido en el artículo ciento doce (112) del Código Penal, este se refiere a que toda persona penalmente responsable de delito o falta, lo es también civilmente, al concatenar la norma sustantiva penal reclamada como indebidamente interpretada con la sentencia apelada, establecemos que efectivamente se cometió error *in iudicando* por parte del tribunal *a quo*, toda vez que en el apartado VIII. *DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES EL TRIBUNAL CONSIDERO LO SIGUIENTE: "(...) En el presente caso se conoció de un hecho delictivo cometido contra la administración pública, por ende resulta directamente agraviada el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y ha figurado dentro del presente proceso como tercera civilmente demandada la entidad Droguería Pisa Sociedad Anónima por la adjudicación del contrato 385-DSC/2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, por lo que de conformidad con lo que se establece en el artículo 135 arriba citado es procedente declarar la reclamación económica de Q. 3,379.466.20 a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estimando el Tribunal que es innecesario discutir en audiencia de reparación digna dicho monto en virtud que quedó establecido dicho monto como perjuicio económico provocado a la institución, el que asciende a la cantidad anteriormente indicada".* De lo transcrito se evidencia que el tribunal consideró condenar civilmente al tercero civilmente demandado dejando de cumplir con dos requisitos fundamentales: primero no decreto condena penal en contra de los sindicados Edgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, quienes fueron acusados el primero en calidad de Gerente de Ventas y el segundo Representante Legal, ambos de la

180



APELACION ESPECIAL
02-2019
Oficial 1º.
98 de 101

entidad Droguería PISA de Guatemala Sociedad Anónima, quien figura dentro del proceso penal como tercera civilmente demandada, el tribunal *a quo* absolvió a los acusados mencionados de los cargos criminales atribuidos por el ente persecutor del Estado, tal y como aparece consignado en los numerales romanos IV y V de la parte resolutive de la sentencia de mérito en los que se resolvió lo siguiente: "IV) Que *ABSUELVE* al procesado *EDGAR RENE DE LA PEÑA ARCHILA* del delito de *COHECHO ACTIVO*, por el cual se formuló acusación en su contra, dejándolo libre del cargo, por las razones consideradas y encontrándose bajo medida de coerción personal, se ordena su inmediata libertad, por el sentido del fallo; V) Que *ABSUELVE* al procesado *RAMIRO ARMANDO LORENZANA ORTIZ*, de los delitos *ASOCIACION ILICITA Y COHECHO ACTIVO*, por los cuales se formuló acusación en su contra dejándolo libre de ambos cargos, por las razones consideradas y encontrándose bajo medida de coerción personal se ordena su inmediata libertad, por el sentido del fallo (...)". De lo anterior se advierte que hubo una interpretación indebida del artículo ciento doce (112) del Código Penal por parte del tribunal *a quo*, al haber condenado a la parte tercera civilmente demandada Droguería PISA de Guatemala Sociedad Anónima, al pago de tres millones trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis quetzales y veintisiete centavos, sin que se determinara la responsabilidad penal en contra del Representante Legal y Gerente de Ventas de la referida persona jurídica y principalmente porque nunca se celebró la audiencia de reparación digna consecuentemente no se dio el contradictorio para determinar con certeza jurídica no sólo la responsabilidad civil, sino también el monto impuesto en concepto de responsabilidad civil a la tercera civilmente demandada. -----



Este tribunal de alzada considera suficientes y valederos los argumentos del apelante Mauricio Farfán Donis en la calidad con que actúa, consecuentemente se acoge el recurso de apelación especial por el segundo sub motivo de fondo ya individualizado, debiéndose resolver lo que en derecho corresponde. -----

En virtud de la naturaleza del fallo, no se entran a conocer los Recursos de Apelación Especial por motivos de Fondo interpuestos por el Ministerio Público, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. -----

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Artículos Citados y: 12, 154, 203, 204 y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 7, 8 y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 27, 65, 70 Código Penal; 5, 11, 11Bis, 14, 16, 20, 26, 43, 49, 160, 161, 162, 163, 166, 178, 252, 388, 389, 394, 415, 416, 418, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 430, 431 del Código Procesal Penal; 16, 86, 88 literal b), 141, 142, 142 bis y 143 de la Ley del Organismo Judicial. -----

POR TANTO

Esta Sala con fundamento en lo considerado y leyes citadas, POR UNANIMIDAD DECLARA: I) NO ACOGE los recursos de Apelación Especial por motivos de forma y fondo interpuestos por: el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Guatemala, planteados en contra de la sentencia recurrida de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala; II) ACOGE los Recursos de Apelación Especial por Motivos de Fondo interpuestos por los procesados: por Julio Roberto Suárez

181

Guerra, Álvaro Manolo Dubón González, Juan De Dios De La Cruz Rodríguez López, Francisco Cortez Bocaletti, Max Erwin Quirin Schoder, Otto Fernando Molina Stalling, Julia Amparo Lotán Garzona; Doris Elubia González Salazar, Mayra Lisbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañon Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñónez, y por los Abogados Vinicio Rafael García Pimentel y Alberto Antonio Morales Velasco, en contra de la Sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala; III) EN CONSECUENCIA se modifican los numerales romanos que a continuación se detallan I y VII, de la parte resolutive del fallo impugnado quedando los mismos de la siguiente forma:

"I) ABSUELVE al procesado OTTO FERNANDO MOLINA STALLING del delito de Cobro Ilegal de Comisiones, dejándolo libre de todo cargo; VII) ABSUELVE a los procesados Julio Roberto Suárez Guerra, Álvaro Manolo Dubón González, Juan De Dios De La Cruz Rodríguez López, Francisco Cortez Bocaletti, Max Erwin Quirin Schoder, Julia Amparo Lotán Garzona; Doris Elubia González Salazar, Mayra Lisbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañon Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñónez, del delito de Fraude dejándolos libres de todo cargo"; IV) NO ACOGE los siguientes sub motivos de fondo: primer sub motivo, tercero sub motivo, cuarto sub motivo, quinto sub motivo, sexto sub motivo, séptimo sub motivo, octavo sub motivo, todos planteados por el apelante MAURICIO FARFAN DONIS en contra de la sentencia apelada de fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho; V) SE ACOGE el segundo sub motivo de fondo planteado por el apelante MAURICIO FARFAN DONIS en contra de la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos



GUATEMALA, C.A.



APELACION ESPECIAL

02-2019

Oficial 1°.

101 de 101

mil dieciocho que se conoce en apelación, consecuentemente se modifica el numeral romanos XVII de la parte resolutive de la referida sentencia la cual conforme lo acá resuelto queda de la siguiente manera: "XVII) *Por la naturaleza absolutoria del presente fallo no se hace condena de responsabilidades civiles*", consecuentemente se revocan las medidas predatorias de embargo decretadas sobre las cuentas bancarias de la entidad Droguería Pisa de Guatemala Sociedad Anónima, debiéndose girar los oficios correspondientes al estar firme este fallo; VI) Como consecuencia del presente fallo se revocan las medidas de coerción decretadas en contra de los acusados *Otto Fernando Molina Stalling, Julio Roberto Suárez Guerra, Álvaro Manolo Dubón González, Juan De Dios De La Cruz Rodríguez López, Francisco Cortez Bocaletti, Max Erwin Quirin Schoder, Julia Amparo Lotán Garzona; Doris Elubia González Salazar, Mayra Lisbeth Gómez Suárez, Alba Maritza Maldonado Gamboa, Delia Haydee Castañon Guerra y Carmen Yadira Gil Quiñónez*; VII) En cuanto a lo demás resuelto queda incólume sin modificación alguna; VIII) NOTIFÍQUESE y con certificación de lo resuelto, vuelvan los antecedentes al Tribunal de procedencia. -----

Jaimé Amílcar González Dávila
Magistrado Presidente

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos
Magistrada Vocal I

Zonia de la Paz Santizo Correto de Bocanegra
Magistrada Vocal II

María de los Angeles Cuevas Asturias

Testigos de Asistencia

Lisbeth Noemi García Quintanilla

182



COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2019-2024

Anexo A-05-CP-CSJ-2019

REQUISITOS DEL ASPIRANTE A MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

(APROBADO EL 09/12/19)

REQUISITOS:

1. Ser guatemalteco de origen.
2. De reconocida honorabilidad.
3. Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
4. Ser Abogado colegiado.
5. Ser mayor de 40 años.
6. Haber desempeñado un período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de Tribunales Colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
7. La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos y con la calidad de ministro de cualquier religión.

DOCUMENTOS SOLICITADOS:

1. Formulario de solicitud de inscripción como postulante, con fotografía reciente tamaño cédula (puede recogerlo en la sede indicada o descargarlo en el sitio: comision-csj.umes.edu.gt).
2. Certificado original de Nacimiento.
3. Fotocopia completa legalizada del Documento Personal de Identificación.
4. Constancia original de ser Colegiado activo.
5. Constancia original del Colegio de Abogados donde se acrediten los años de colegiado del postulante.
6. Constancia original de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
7. Constancia original de no haber sido sancionado por el órgano de disciplina correspondiente de las instituciones públicas en donde se encuentre laborando o de la última donde hubiere laborado (esto aplica para las instituciones que cuenten con órgano disciplinario específico).
8. Constancia original de haber desempeñado un período completo o más como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de Tribunales colegiados que tengan la misma calidad (para los que corresponda).
9. Declaración Jurada de haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
10. Constancia original de carencia de antecedentes policiales.
11. Constancia original de carencia de antecedentes penales.
12. Declaración Jurada donde conste que el aspirante está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
13. Declaración Jurada donde conste que el aspirante no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.
14. Declaración Jurada donde conste que el aspirante no se encuentra comprendido en los casos de impedimentos establecidos en el Artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de funcionarios y empleados públicos.
15. Declaración Jurada donde conste expresamente que el candidato no tiene parentesco con ningún miembro de esta Comisión para la selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación), que no es ministro religioso, ni ocupa cargos dirigenciales en partidos políticos o de representación de asociaciones sindicales.
16. Constancia Transitoria original de inexistencia de reclamación de cargos de la Contraloría General de Cuentas (Finiquito).

183



COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2019-2024

17. Constancia original del Tribunal Supremo Electoral de no estar afiliado a ningún partido político.
18. Constancia original del Tribunal Supremo Electoral, de no estar inhabilitado en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
19. Constancia original del Tribunal Supremo Electoral, de no pertenecer a cargos directivos de entidades con fines políticos, miembros de los comités pro formación de cualquier organización de carácter político, ni directivo de dichas organizaciones.
20. Solvencia original de carencia de multas impuestas por la Corte de Constitucionalidad.
21. Curriculum vitae conforme a la guía aprobada por esta Comisión.
22. Resumen de la información relevante del Curriculum Vitae en un máximo de dos hojas.
23. Copia en formato digital (PDF) del expediente.
24. Los postulantes provenientes de la Carrera Judicial deberán presentar documento en el que conste su manifestación de interés en participar en el proceso de postulación.

NOTA:

- Toda la documentación requerida aplica para todos los postulantes, ya sea en el ejercicio liberal de la profesión de abogado o de la Carrera Judicial y debe presentarse en el orden establecido, con índice, debidamente foliada y rubricada.
- Deben presentarse original y una fotocopia del expediente y una copia digital en formato PDF.
- Todos los documentos deben de haber sido expedidos con no más de seis meses de anticipación a la fecha de presentación; salvo que en la ley o en el propio documento se establezca un plazo distinto de vigencia.
- El expediente no debe presentar ninguna alteración, mancha o tachadura, y los documentos que se acompañen y no se exijan en original, deben presentarse en copia legalizada.
- La entrega del expediente deberá ser estrictamente personal.
- **Los abogados en el ejercicio de la profesión liberal y miembros de la Carrera Judicial, deberán presentar expediente en original, una fotocopia del mismo y otra copia digital en formato PDF en la sede de la Comisión (40 calle 10-02 Zona 8, Ciudad de Guatemala).**
- **Los miembros de la Carrera Judicial que deseen participar en el proceso de selección, deberán acompañar al expediente que ingresen en la sede de esta comisión, el documento que acredite su manifestación de interés presentado ante el Consejo de la Carrera Judicial, órgano que deberá observar el cumplimiento de lo que establece el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial.**
- **Los aspirantes de la Carrera Judicial que no cumplan con presentar el documento que acredite la aludida manifestación de interés en el expediente de mérito, podrán participar únicamente como abogados en el ejercicio profesional.**
- Consulte toda la información y descargue el formulario, así como la guía para elaborar el curriculum vitae en el sitio: comision-csj.umes.edu.gt.

Guatemala, 09 de diciembre de 2019.

Dr. Félix Javier Serrano Ursúa
Presidente

Lic. Mario Raúl García Morales
Secretario

184



TABLA DE GRADACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Nombre del postulante:

Aspectos de calificación	Descripción	Medios de comprobación			Valoración	
MERITOS ACADEMICOS	Se refiere a los títulos académicos, la docencia universitaria, estudios, ensayos, las publicaciones, la participación en eventos académicos y los méritos obtenidos.	Títulos académicos	Doctorado relacionado al área del Derecho, debidamente autenticado y si es del extranjero, la apostilla.	10	10	25
			Doctorado de Ciencias afines al área del Derecho, debidamente autenticado y si es del extranjero, la apostilla.	6		
			Maestría relacionada al área del Derecho.	5		
			Maestría de Ciencias afines al área del Derecho.	3		
			Diplomados y Especializaciones de Post Grados y en Derecho, calificados como tales por la respectiva Universidad. Diplomados de Unidades de capacitación del sector Justicia, en unidades de Capacitación de entidades gremiales que cuenten con el aval de alguna Universidad nacional.	2		
			Diplomas de Participación en Eventos Académicos: calificados como tales por la respectiva Universidad. Diplomados de Unidades de capacitación del sector Justicia, en unidades de Capacitación de entidades gremiales que cuenten con el aval de alguna Universidad nacional.	1		
		Docencia Universitaria	Docencia Universitaria en Doctorado y/o Maestrías y Licenciaturas todas en el área del Derecho (mínimo 5 años de docencia).	5	5	
			Docencia Universitaria en otras áreas distintas al Derecho, ya sea en Doctorado y/o Maestría y Licenciaturas (mínimo 3 años de docencia).	3		
		Producción Doctrinaria	Libros, en temas relacionados con el Derecho. Uno o más libros (4 puntos máximo)	4	4	
			Estudios, ensayos, publicaciones y artículos: Estudios, ensayos, publicaciones y artículos (no menores de 10 páginas, puede ser en formato impreso o revistas electrónicas, 2 puntos máximo).	2		
		Participación en eventos académicos	Participación en eventos académicos relacionados con el Derecho (Como conferenciante, organizador o coordinador).	2	2	
		Méritos obtenidos	Méritos obtenidos (Distinciones académicas, becas de pregrado y postgrado en Derecho, premios, reconocimientos).	2	2	
		Cargos de Dirección	Cargos de Dirección Académica (Autoridad Superior, Autoridad administrativa).	2	2	
MERITOS PROFESIONALES	Comprende todo lo relativo con la experiencia profesional del aspirante, quien tiene que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República o leyes aplicables	EXPERIENCIA JUDICIAL, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA	Haber desempeñado al menos tres periodos completos de Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales de igual categoría y/o haber ejercido la profesión de abogado 20 años o más.	60	60	70
			Haber desempeñado al menos dos períodos completos de Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales de igual categoría y/o haber ejercido la profesión de abogado por más de 15 años y menos de 20 años.	50		
			Haber desempeñado un período completos de Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales de igual categoría y/o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años y menos de 15 años.	40		
			Experiencia en cargos en la Administración Pública por al menos cinco años, como asesor, funcionario o empleado público (puede ser acumulable de institución en institución, ya sea una entidad autonoma, centralizada o descentralizada).	10		
MERITOS DE PROYECCIÓN HUMANA	Son aspectos relacionados con la vocación de servicio y el liderazgo.	Vocación de Servicio	Comprende la vocación de servicio a la comunidad, en la promoción y defensa de sus derechos. (distinciones, diplomas y reconocimientos 5 puntos).	5	5	
		Vocación de Liderazgo	Comprende el conjunto de habilidades que el aspirante tiene para gestionar, convocar, promover, incentivar y motivar a una comunidad, haciendo que estos trabajen y logren sus metas y objetivos (distinciones, diplomas, reconocimientos, cargos de elección dentro del gremio de abogados 5 puntos).	5		
MERITOS ETICOS	Comprende lo relacionado con la moral, la honorabilidad, la probidad, la rectitud, la honradez, la independencia y la imparcialidad de los aspirantes.	PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS MERITOS ÉTICOS SE HA DE PROCEDER CON LA VERIFICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN.			0	
Total						100

185



LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE:-----

CERTIFICA

Que las **cincuenta y cuatro** hojas de papel de fotocopia que anteceden, impresas de ambos lados, son autenticas por haber sido reproducidas el día de hoy de su respectivo original, las cuales reproducen el documento siguiente: Sentencia de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve emitida por esta Sala dentro del expediente dos guión dos mil diecinueve y numero único un mil ochenta guión dos mil quince guión cero cero doscientos veintidós.-----

Y para entregar a la **Doctora Zonia De la Paz Santizo Corleto de Bocanegra** extendiendo, sello y firmo la presente en una hoja de papel membretado del Organismo Judicial. En la ciudad de Guatemala, el once de febrero de dos mil veinte.-----


Ligia Margarita Rodas Hurtarte

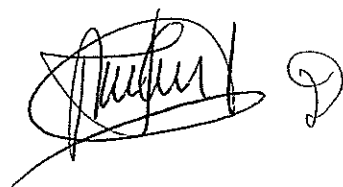
Secretaria



186

Anexo 14

1 de 4



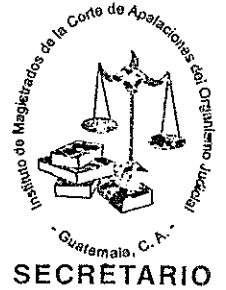
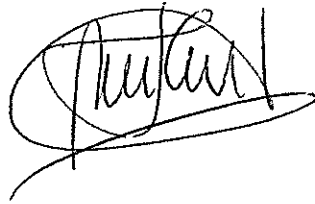
ACTA NÚMERO VEINTICUATRO GUION DOS MIL DIECINUEVE (24-2019)
DEL INSTITUTO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL. En la ciudad de Guatemala, cuando son las trece horas del día jueves veintisiete de junio de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia, tercer nivel, ubicada en la veintiún calle siete guión setenta zona uno de esta ciudad, encontrándonos presentes las Magistradas y Magistrados siguientes: Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos, Presidente; Magistrado Edvin Estuardo López Rodríguez, Primer Vicepresidente; Magistrado Dixon Díaz Mendoza, Segundo Vicepresidente; Magistrado José Alejandro Córdova Herrera, Secretario; Magistrado Edwin Albino Martínez Escobar, Prosecretario; Magistrado Helio Guillermo Sánchez González, Tesorero; Magistrada Ingrid Johana Romero Escribá, Vocal Primero; Magistrado Edwin Alberto Mis Avila, Vocal Segundo; Magistrada Neslie Guísela Cárdenas Bautista, Vocal Tercero; Magistrado Estuardo Cárdenas, Vocal Cuarto y Magistrado Francisco Medrano Zapeta, Vocal Quinto de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial; con el objeto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria del Instituto de Magistrados de conformidad con el artículo número diecisiete (17), literal g de los Estatutos del Instituto de Magistrados, la cual tiene por objeto la elección de los Representantes ante la Comisión de Postulación, que elegirán a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, período dos mil diecinueve dos mil veinticuatro y de conformidad con el artículo número doscientos quince (215) de la Constitución Política de la República de Guatemala, procediéndose de la siguiente manera: **PRIMERO:** El Secretario del Instituto, Magistrado José Alejandro Córdova Herrera, procedió a verificar la presencia de los Magistrados Titulares de las Salas de Apelaciones y demás Tribunales de igual categoría, para celebrar Asamblea General Extraordinaria, estableciendo que no existe quórum. **SEGUNDO:** Siendo las catorce horas en punto el Secretario del



188
15

Instituto, Magistrado José Alejandro Córdova Herrera procedió a verificar nuevamente el quórum y aperturó dicha Asamblea General Extraordinaria como lo regula el artículo número quince (15) de los Estatutos del Instituto, debido a que a las trece horas no había quórum para su inicio; se hizo del conocimiento de la Asamblea que se encontraban inscritos ciento veinticinco (125) Magistrados Titulares y en cumplimiento a lo acordado en la Asamblea del día diecisiete (17) de mayo del presente año, Junta Directiva convocó a todos los Magistrados Titulares para el día de hoy. **TERCERO:** El Presidente de la Junta Directiva, Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos brindó las palabras de bienvenida a los presentes, realizó una oración antes de iniciar y solicitó a la Asamblea una Comisión para llevar a cabo la elección ó si lo deseaba la General, designar a Junta Directiva para dirigir el acto, por lo que se votó y por mayoría se designó a los miembros de Junta Directiva para dirigir el evento en el cual se elegirán por parte de los Magistrados Titulares de la Corte de Apelaciones y demás Tribunales de igual categoría a los Representantes ante la Comisión de Postulación, que elegirán a los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Seguidamente preguntó a los presentes si hay planillas que quieran postular a sus Comisionados para pasar al frente. En ese momento el Magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo solicitó la palabra e indicó que jamás existió convocatoria oficial y expresó que no fue notificado correctamente ya que un chat ó un mensaje no es una notificación, por lo que solicitó tener a la vista el expediente donde se convoca a los Magistrados para establecer documentos y establecer que planillas se inscribirían y si los integrantes cuentan con los requisitos, además hizo referencia a los artículos número cuatro (4), catorce (14) y veinte (20) de la Ley de Comisiones de Postulación ya que indicó que se les vulneraron los derechos porque esta elección se debió regir por convocatoria y se debió de cumplir con los requisitos legales que debe contener, también expresó que existe tiempo de sobra para

2 de 4

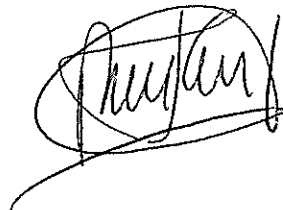


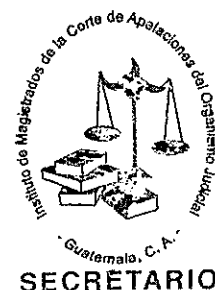
esperar a realizar una elección transparente, que tenga publicidad como por ejemplo haberla anunciado en la pagina web del Instituto para cumplir con los requisitos que se tienen que garantizar, así como la elección que se llevó a cabo en el año dos mil nueve (2009) que fue transparente; adicional manifestó que desea que quede en acta que esta elección tiene vicios y advirtió que con una acción de amparo puede ser anulada, finalmente llamó a la reflexión para realizar un proceso como lo establece la ley e indicó que se niega a participar en esta elección y se retiró de la Sala de Vistas. A continuación solicitó la palabra el Magistrado Igmain Galicia Pimentel, quien indicó que todos los Magistrados fueron convocados y notificados, ya que hay presentes ciento veinticinco (125) Magistrados que son mayoría, por lo cual el procedimiento si va con la Ley. Seguidamente el Presidente de la Junta Directiva, Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos hizo referencia al artículo número doscientos quince (215) de la Constitución Política de la Republica de Guatemala e indicó que el requisito constitucional y legal es ser Magistrado Titular. Solicitó la palabra el Magistrado Amadeo de Jesús Guerra Solís, quien indicó que no quede en punto de acta la petición del Magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo ya que se retiró de la Sala siendo esta una falta de respeto. Inmediatamente después solicitó la palabra el Magistrado Jorge Rolando Sequén Monroy, quien expresó que si debe de quedar en acta lo manifestado por el Magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo porque es algo que aconteció en esta Asamblea, además indicó que todos los Magistrados quedaron notificados desde el día diecisiete (17) de mayo en la Asamblea Extraordinaria. A continuación el Presidente de la Junta Directiva, Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos mostro la firma de la asistencia del Magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo, indicando que esto demuestra que si fue convocado por estar presente el día de hoy. Posteriormente solicitó la palabra el Magistrado Mario Obdulio Reyes Aldana, quien hace del conocimiento de los presentes que a través del correo

189

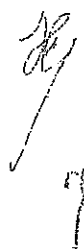
16


personal recibió de Junta Directiva, convocatoria para esta elección y consideró que lo manifestado por el Magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo sí debe estar en el acta ya que compareció a la Asamblea ya que no se puede obviar lo que el dijo públicamente. El Secretario de la Junta Directiva, Magistrado José Alejandro Córdova Herrera indicó que en el correo interno del Organismo Judicial se le convocó de forma individual a cada uno de los Magistrados Titulares, por tal situación informó que quedaron notificados. Seguidamente solicitó la palabra la Magistrada Elvia Ester Velásquez Sagastume, quien hizo la reflexión que esta Asamblea fue convocada a raíz de la resolución tomada también en una Asamblea donde se autorizó y se establecieron los puntos correspondientes para realizar esta convocatoria, en base a lo que indican los Estatutos del Instituto por lo que indicó que no hay inconveniente en la forma de la convocatoria y expresó que la votación para que no quede en acta lo manifestado por el Magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo no corresponde ya que el acta recoge lo que sucedió en la Asamblea y no hay ninguna petición que resolver ya que simplemente hizo una manifestación y se retiró no habiendo solicitado resolución alguna, indicó también que no se tiene porque entrar a conocer sobre ese asunto, simplemente es el derecho que tiene cada uno de exponer lo que considere. El Magistrado José Alejandro Córdova Herrera indicó que al principio de la Asamblea se estableció que el día diecisiete (17) de mayo del presente año se realizó una Asamblea Extraordinaria en la cual, la Asamblea autorizó a la Junta Directiva realizar las gestiones para realizar la Asamblea Extraordinaria en la que se elegirán representantes ante la Comisión de Postulación para elegir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente el Magistrado Jorge Antonio Valladares Arévalo solicitó la palabra e indicó que lo manifestado por el Magistrado Noé Adalberto Ventura Loyo fue un acto que sucedió en la Asamblea por lo que debe de quedar en acta y expresó que por lo que se debe de votar es para

3 de 4


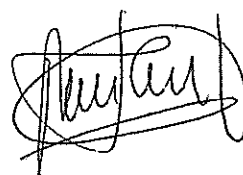


saber que si habrá elección y que los Magistrados si fueron convocados ya que si no, no estarían presentes el día de hoy aquí e indicó que si fueron notificados a sus correos personales; situación por la que el Presidente de la Junta Directiva sometió a votación si se continuaría con la elección, a lo que la Asamblea por mayoría absoluta decidió continuar con la misma. El Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva, Magistrado Dixon Díaz Mendoza solicitó excusa para retirarse de la mesa principal de Junta Directiva por ser candidato a Comisionado. **CUARTO:** El Presidente de la Junta Directiva, Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos indicó a la Asamblea continuar con el procedimiento de elección, por lo que solicitó la presencia de los Magistrados que deseen proponer planillas, a lo cual se hicieron presentes los Magistrados Titulares: Luis Mauricio Corado Campos, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Jenny Noemy Alvarado Tení, Gilma Esperanza Valladares Orellana y Zonia de la Paz Santizo Corleto, quienes presentaron la Planilla número uno (1), aduciendo que esa planilla es producto del consenso de cinco (5) grupos distribuidos por regiones que decidieron estar en unidad, porque unidos se fortalecen y luchan por la justicia, quedando integrada por los siguientes Magistrados: Romeo Monterrosa Orellana, Fausto Fernando Maldonado Méndez, Dixon Díaz Mendoza, Edwin Roberto Ruano Martínez, Harold Estuardo Ortiz Pérez, Jorge Alberto González Barrios, Miguel Enrique Catalán Orellana, Gustavo Adolfo Samayoa Romero, Nicolas Cuxil Güitz, Cathy Rossana López Rodríguez, Aracely Amaya Fabián y Wendy Angélica Ramírez López. Seguidamente el Presidente de Junta Directiva, Magistrado Francisco Soto Santos pregunta si hay alguna otra planilla que quiera ser inscrita, no respondiendo ningún Magistrado, por lo que se le asignó el número uno (1) a la única planilla inscrita. **QUINTO:** A continuación la Magistrada Benicia Contreras Calderón sugirió que se realice un análisis en los requisitos para ser Comisionado y elegir a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya que



190


estos Comisionados deben de reunir las mismas calidades de las personas que se van a elegir, además hizo referencia al artículo número doscientos dieciséis (216) de la Constitución Política de la República de Guatemala el cual indica que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se debe ser mayor de cuarenta años y haber desempeñado un período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones ó de los Tribunales Colegiados que tengan la misma calidad ó haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años, por lo que consideró conveniente para que sea fructífera esta decisión que se verifiquen esos requisitos ya que en la elección del Colegio de Abogados y Notarios en el período 1999-2004 escogieron Comisionados que no cumplían con los requisitos y el tema terminó en la Corte de Constitucionalidad, por lo que solicitó ser cuidadosos en la elección de Comisionados. Seguidamente cada Magistrado candidato a Comisionado pasó al frente indicando su edad y el tiempo de ejercicio profesional con el que contaban, adicional el Presidente de la Junta Directiva, Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos informó que todos los Comisionados reúnen las calidades para poder ser postuladores y preguntó si alguno tiene sanciones ó limitaciones, a lo que respondieron que no. **SEXTO:** El Presidente de la Junta Directiva, Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos solicitó la presencia de los Magistrados César Augusto López López y Nadya Amabilia Morales de León para abrir las urnas y verificar que se encontraban vacías y solicitó a la Asamblea que ellos fueran los fiscales, lo cual fue aprobado. Seguidamente en presencia de todos los Magistrados se sellaron con cinta adhesiva las dos (2) urnas para depositar los votos que realicen los Magistrados Titulares y solicitó el apoyo de los Magistrados Ingrid Johana Romero Escribá y Edwin Albino Martínez Escobar para el llamado de cada Magistrado Titular por su nombre para que pase al frente, recoja su boleta, vote y lo deposite en una de las dos (2) urnas que se encuentran al frente, de lo que solo ciento veintitrés (123) Magistrados Titulares pasaron a recoger boleta y a

4 de 4


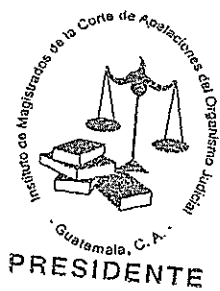


realizar el sufragio. **SÉPTIMO:** Delante de todos los participantes de la Asamblea se abrió la primera urna y se contaron los votos, posteriormente la segunda urna y se contaron también los votos, lo que dió un resultado de ciento veintitrés (123) votos de la siguiente manera: Ciento diecisiete (117) votos a favor de la Planilla número uno (1) y seis (6) votos nulos, luego del escrutinio realizado se contabilizó ciento veintitrés (123) papeletas, dándole lectura a cada una de ellas a viva voz por los Magistrados Nadya Amabilia Morales de León y César Augusto López López. A continuación el Presidente de la Junta Directiva, Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos declaró ganadora a la Planilla número uno (1) antes identificada. **OCTAVO:** El Presidente de la Junta Directiva, Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos convocó y notificó a la Asamblea que el día viernes doce (12) de julio del presente año se llevará a cabo el acto de Toma de Posesión de la nueva Junta Directiva en el Hotel las Américas a partir del medio día. **NOVENO:** El Magistrado José Alejandro Córdova Herrera realizó un resumen indicando que se inscribieron ciento veinticinco (125) Magistrados Titulares de los cuales votaron ciento veintitrés (123), se inscribió solo una planilla a la que se le asignó la número uno (1), votando ciento diecisiete (117) a favor de la Planilla número uno (1) y seis (6) votos nulos por lo que se declaró ganadora la Planilla número uno (1) y finalmente cerró dicha Asamblea General Extraordinaria en su calidad de Secretario de Junta Directiva. Se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres horas más tarde, firmada por el Presidente de la Junta Directiva, Magistrado Giovanni Francisco Soto Santos y el Secretario, Magistrado José Alejandro Córdova Herrera, de conformidad con los artículos número veinticinco, literal c (25 literal c) y número veintisiete, literal a (27 literal a) de los Estatutos del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial. -----

191

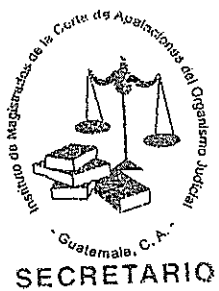
18
→

[Handwritten signature]

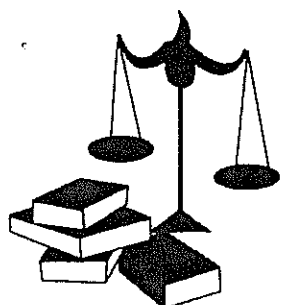


PRESIDENTE

[Handwritten signature]



SECRETARIO



**Instituto de Magistrados
de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial**
Guatemala, C. A.

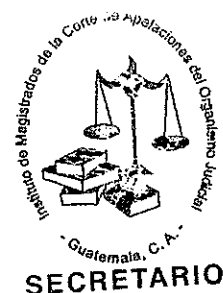
**EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ORGANISMO
JUDICIAL. -----**

CERTIFICA

Que las cuatro hojas de fotocopias que anteceden, impresas en ambos lados, son **AUTÉNTICAS**, por haber sido reproducidas de su original el día de hoy en mi presencia, que reproducen fielmente el acta número veinticuatro guión dos mil diecinueve de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve de la Asamblea General Extraordinaria de los Magistrados Titulares de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial y demás Tribunales de igual categoría, la cual documenta la elección de los representantes para integrar la Comisión de Postulación, que elegirá a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, período dos mil diecinueve dos mil veinticuatro (2019-2024), de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo veintisiete (27) de los Estatutos del Instituto de Magistrados. -----

Se extienden, enumeran, sellan y firman las cuatro hojas que anteceden y la presente certificación en esta única hoja de papel bond con el membrete del Instituto de Magistrados. En la ciudad de Guatemala, a los once días del mes de septiembre de dos mil diecinueve. -----

**Magistrado Luis Fernando Aroche Arrecis
Secretario Junta Directiva
Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones
del Organismo Judicial**



c.c. Archivo

6a. Avenida 4-83, Zona 10 • 2do. Nivel Torre de Marfil
Tel. 2426-7572 ext. 7572

192

19

Anexo 15

1 de 10

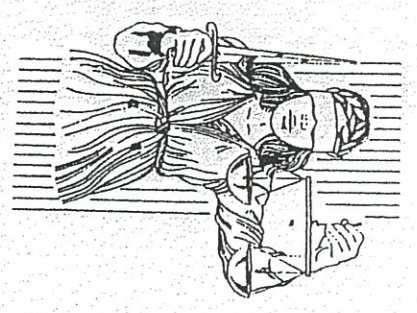
E

[Handwritten signature]

SECRETARIO



IMPRESO EN LA SECCION
DE REPRODUCCION DEL
ORGANISMO JUDICIAL
GUATEMALA-SEPTIEMBRE
2011



ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO
DE MAGISTRADOS DE LA CORTE DE
APELACIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL"
(IMCAOJ)

GUATEMALA, C.A.

194
22

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

Apruébanse los estatutos de la Asociación "El Instituto de Magistrados
de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial" (IMCAOJ); y
reconócese su personalidad jurídica.

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 92-97.

Palacio Nacional: Guatemala, 3 de marzo de 1997.

El Ministro de Gobernación,

CONSIDERANDO

Que el Licenciado HECTOR MAURICIO RODRIGUEZ ARGUETA, se
presentó a este Ministerio, solicitando la aprobación de los estatutos y
reconocimiento de la personalidad jurídica de la Asociación denominada
"EL INSTITUTO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES
DEL ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ).

CONSIDERANDO

Que la legislación guatemalteca prevé la institucionalización, como
personas jurídicas, de las asociaciones sin fines lucrativos que se
propongan promover y proteger los intereses comunes de sus integrantes,
cuando su constitución y estatutos fueren debidamente aprobados por la
autoridad respectiva y que en el presente caso se han cumplido los
requisitos que señala la ley, por lo que es procedente emitir la respectiva
disposición legal.

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194, incisos a) y
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 15, inciso 3º, y
31 del Código Civil; 1, inciso 10, 1º A, incisos a) y b) y 19, inciso 10 de la
Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 93 del Congreso de la
República, modificado por Decreto Ley número 25-86 del Jefe de Estado y
con Base en lo preceptuado por el Acuerdo Gubernativo número 515-93 de
fecha 6 de octubre de 1993.

SECRETARIO



2 de 10

195
28

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

ACUERDA

ARTICULO 1º. Reconocer la personalidad jurídica y aprobar los estatutos de la Asociación denominada "EL INSTITUTO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ), los cuales están contenidos en los Instrumentos Públicos números 103 y 49 de fechas 16 de septiembre de 1996 y 30 de enero de 1997, autorizados en esta ciudad por los Notarios CESAR AUGUSTO MORALES MORALES y FELICIANO LOPEZ CHAVEZ, respectivamente.

ARTICULO 2º. Conforme el artículo 25 de los estatutos de la referida Asociación, contenidos en los Instrumentos Públicos relacionados, la representación legal de la entidad la ejercerá el Presidente de la Junta Directiva.

ARTICULO 3º. La Asociación de mérito antes de iniciar sus actividades, deberá inscribirse en el Registro Civil correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 370 y 438 del Código Civil.

ARTICULO 4º. La aludida Asociación queda sujeta a la vigilancia y supervisión del Estado de Guatemala.

ARTICULO 5º. El presente Acuerdo empezará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

COMUNIQUESE.

SECRETARIO



[Signature]
Rodolfo A. Mendez Pacheco
Presidente de Gobierno



Dr. Cesar Augusto Morales Morales
Ministro de Gobernación

- 2411-4 -

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

En la ciudad de Guatemala, el día veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, siendo las once horas, en el local que ocupa la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, cateceavo nivel de la Torre de Tribunales, Centro Cívico, como Notario soy requerido por el Licenciado Héctor Mauricio Rodríguez Argueta, para hacer constar lo siguiente: Se encuentran reunidos en sesión ordinaria los directivos del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, licenciados: Héctor Mauricio Rodríguez Argueta, Presidente; Otto Marroquín Guerra, Vicepresidente; Leticia Estrella Secaira Pinto, Secretaria; Roberto Arribal Valenzuela Chinchilla, Tesorero; Jorge Alberto Galdámez Escarilla, Vocal Primero; Héctor Emilio Méndez Fernández, Vocal Segundo; y Rolando Segura Grajeda, Vocal Tercero, habiendo procedido de la siguiente manera: PRIMERO: El presidente Licenciado Héctor Mauricio Rodríguez Argueta, abrió la sesión indicando que, como es de conocimiento de la Junta Directiva, consta en el testimonio del Acta de Protocolización número ciento tres (103), de fecha dieciséis de septiembre del año pasado, autorizada por el Notario César Augusto Morales Morales, en esta ciudad, la fundación del INSTITUTO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL -IMCAOJ-. SEGUNDO: Continúa manifestando que, al revisar el Acta Constitutiva, se encontraron algunos errores mecanográficos en los nombres de algunos de los magistrados signantes, por lo que es necesario hacer las correcciones pertinentes; y, estando todos de acuerdo, se procede de dejar constancia que el nombre completo de estos asociados es el siguiente: 8.- Roberto Arribal Valenzuela Chinchilla; 17.- Madlio Carías Rechinos; 18.- Jorge Enrique Quirra Mota; 33.- Milton Danilo Torres Caravantes; y, 38.- Marieliz Lucero Sibley. TERCERO: El Presidente continúa indicando que, seguidos los trámites para el reconocimiento de la personalidad jurídica respectiva ante el Ministerio de Gobernación, en dictamen número mil cuarenta y cuatro de fecha diez de octubre del pasado año, la Licenciada Marta Aída Barrios Rojas de Montúfar, Asesora Jurídica, formó observaciones de forma a los citados Estatutos. CUARTO: Leído que fue el dictamen referido, después de amplia discusión y en uso de las facultades que da, a la Junta Directiva, el artículo cuarenta y nueve de los mismos Estatutos se aprobaron, por unanimidad, las enmiendas de forma sugeridas; por lo que, para facilitar los trámites en el Ministerio de Gobernación, se transcribe el Cuerpo Estatutario en su conjunto, dentro del cual ya se ha cumplido con los requerimientos de dicho Ministerio, así: "ESTATUTOS DEL INSTITUTO DE MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL (IMCAOJ).

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

22 961

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

7 de 10
[Firma]

ARTICULO 1º.- DENOMINACION Y NATURALEZA. La Asociación, se denominará "El Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial" y que podrá abreviarse "IMCAOJ", que en estos estatutos se denominará simplemente "El Instituto", es una entidad de carácter civil, científica, no lucrativa, ajena a intereses políticos y religiosos, e independientemente del pensamiento político de sus asociados; sus fines fundamentales son: El desarrollo integral, técnico y científico, la capacitación en todos sus niveles y dignificación, la obtención de prestaciones laborales justas y tratamiento decoroso de todos los magistrados; así como el estudio, investigación y análisis de las leyes que rigen el ordenamiento jurídico; asimismo, impulsará la cooperación y la solidaridad entre los magistrados, buscando siempre la superación individual y colectiva.

ARTICULO 2º.- DOMICILIO: El Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, tiene su domicilio en el Departamento de Guatemala y podrá establecer secciones en cualquier lugar de la República. Su sede estará en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial, Ciudad de Guatemala.

ARTICULO 3º.- PLAZO: El Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, se constituye por tiempo indefinido.

ARTICULO 4º.- FINES Y OBJETIVOS: El Instituto persigue:

- SECRETARIO**
- Guatemala, C. A.
- a. Vigorizar en todos sus órdenes el desarrollo integral técnico y científico de sus asociados;
 - b. Promover y fortalecer programas de Cooperación nacional e internacional, para la formación, capacitación, actualización, especialización e intercambio de experiencias, por medio de becas y subsidio, para sus asociados.
 - c. Promover el intercambio de ideas y planteamiento de propuestas ante las Autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, relacionados con el estudio de casos concretos y de la aplicación de las normas jurídicas que rigen nuestro ordenamiento jurídico;
 - d. Velar porque se respeten los principios que regulan la actividad, organización y planificación de la Administración de Justicia;
 - e. Velar, fortalecer y exigir la plena independencia de los Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, en el ejercicio de sus funciones y gozar de una dignificación, de justas prestaciones, tratamiento decoroso y adecuadas condiciones en los lugares de trabajo, acorde a su alta investidura;

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

- f. Proponer y promover ante las Autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, reformas de las leyes relativas al Organismo Judicial; el estudio, investigación e incorporación de las nuevas tendencias, concepciones, principios y técnicas jurídicas que permitan coadyuvar a la solución de los problemas que aquejan la Administración de Justicia;
- g. Fomentar el desarrollo científico e integral de los Magistrados, en el estudio de anteproyectos de leyes que tiendan a la eficiencia y eficacia de la Administración de Justicia;
- h. Divulgar entre sus asociados, los estudios, doctrinas y adelantos del Derecho en general;
- i. Colaborar estrechamente con la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en asuntos relacionados con la Administración de Justicia;
- j. Crear y desarrollar la revista de El Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial; y,
- k. Cualquier otro objetivo que la Asamblea General, establezca en el futuro.

**CAPITULO II
DE LOS ASOCIADOS**

ARTICULO 5º.- REQUISITOS DE INGRESO. Para ingresar a El Instituto, se requiere tener la calidad de Magistrado propietario en el momento de su ingreso, y llenar los requisitos siguientes:

- a. Presentar solicitud escrita;
- b. Comprobar la calidad de Magistrado propietario. La Junta Directiva señalará fecha para el acto de juramentación.

ARTICULO 6º.- ASOCIADOS ACTIVOS. Son asociados activos los Magistrados que hayan suscrito el acta de Fundación de El Instituto, quienes se hacen acreedores de un diploma especial de reconocimiento y de aquellos Magistrados propietarios cuya solicitud de ingreso sea aceptada por la Junta Directiva de El Instituto.

Asociados Honorarios, son los Magistrados que hayan cumplido tres periodos de Magistrados Titulares, o bien sean declarados así por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva de El Instituto. Dicha distinción exige a su titular de las obligaciones que se derivan de los presentes estatutos.

ARTICULO 7º.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS. Los asociados activos tienen derecho a:

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

- 5 de 10
- a. Participar en las sesiones de la Asamblea General, con voz y voto;
b. Elegir y ser electos para cargos de la Junta Directiva;
c. Participar en las comisiones y grupos de trabajo que se organicen;
d. Preparar y presentar ponencias y trabajos en los eventos que organice o en los que participe El Instituto;
e. A recibir las informaciones, publicaciones y demás servicios que presta El Instituto;
f. Representar a otros asociados en la Asamblea General;
g. Hacer ponencias y solicitudes ante los miembros de la Asociación; y,
h. Otros que en el futuro se otorguen.

ARTICULO 8º.- DEBERES. Son deberes de los asociados:

- a. Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos, reglamentos y demás disposiciones adoptadas de conformidad con los mismos;
b. Pagar las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias señaladas por estos estatutos o aprobados por Asamblea General;
c. Concurrir a las sesiones a las que fueren convocados;
d. Participar en las comisiones en que se les asigne y presentar los estudios o dictámenes que se les soliciten en el área de especialización; Coadyuvar en el desarrollo integral de El Instituto y en la superación de sus integrantes en todos sus ámbitos.

**CAPITULO III
DE LOS ORGANOS**

SECRETARIO



ARTICULO 9º.- ORGANOS. Son órganos de la asociación:

- a. La Asamblea General;
b. La Junta Directiva;
c. Otros que se establezcan de conformidad con las disposiciones de Asamblea General.

ARTICULO 10º.- ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es la autoridad superior y se constituye con la reunión de los asociados activos.

ARTICULO 11º.- PERIODO DE SESIONES. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria el último viernes del mes de junio de cada año y, en sesión extraordinaria, cuando sea convocada para el efecto por Junta Directiva o a petición escrita y razonada del diez por ciento de los asociados activos.

Todas las sesiones de Asamblea General serán presididas por la Junta Directiva.

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

ARTICULO 12º.- CONVOCATORIA. La convocatoria para Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, deberá hacerla la Junta Directiva mediante citaciones con cinco días de anticipación por lo menos, a la fecha de la sesión, las que se harán llegar por los medios más rápidos.

En la convocatoria para Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, debe especificarse el asunto o asuntos a tratar.

El secretario y el tesorero de El Instituto deben facilitar el examen de libros y documentos a los asociados en los cinco días previos a cada sesión de Asamblea General.

ARTICULO 13º.- RESOLUCIONES. A menos que estos estatutos exijan una mayoría distinta, las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos de los asociados activos presentes y representados en la sesión. Todas las resoluciones emanadas de la Asamblea General siempre que se ajusten a la ley y a los presentes estatutos tienen carácter obligatorio para todos los asociados, quienes no podrán alegar desconocimiento de las mismas, no haber asistido a la sesión en que fueron acordados o haber votado en contra.

ARTICULO 14.- REPRESENTACIONES. En las sesiones de Asamblea General, ya sean ordinarias o extraordinarias, cada asociado puede ejercer sólo una representación. La representación únicamente se puede conferir a otro asociado haciendo ver el motivo de la ausencia, y para el efecto es suficiente una simple carta-poder suscrita y sellada por el asociado que otorga su representación. Al momento de la votación, el Secretario debe elaborar la lista de asociados que acrediten su representación y ejerzan su voto personal, y el de su representante, en su caso.

ARTICULO 15.- QUORUM. Para llevar a cabo la sesión de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, se requiere que en la fecha y hora que se menciona en la convocatoria, asistan asociados que reúnan por lo menos la mitad más uno del total de asociados activos. Si el día y hora fijada en la convocatoria no se reúne el quórum establecido, la sesión se celebrará una hora después, con el número de asociados activos, presentes y representados que concurren.

Para que sean válidos los acuerdos, resoluciones y disposiciones que se adopten, es necesario el voto favorable de por lo menos, la mitad más uno de los asociados activos, presentes o representados.

ARTICULO 16.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Corresponde a la Asamblea General ordinaria:

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

- a. Elegir a los miembros de la Junta Directiva;
- b. Establecer el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias que deberán pagar los asociados;
- c. Conocer y aprobar el informe anual de labores que deberá presentar la Junta Directiva el último viernes del mes de junio;
- d. Acordar la participación de El Instituto en confederaciones, federaciones y entidades nacionales e internacionales;
- e. Conocer del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el próximo ejercicio, que deberá presentar la Junta Directiva, el último viernes del mes de junio;
- f. Conocer y resolver todos los asuntos que no estén específicamente reservados a la Junta Directiva y tomar las disposiciones que juzgue convenientes y oportunas, para la buena marcha y administración de El Instituto.

10 de 10
[Signature]



SECRETARIO Asamblea General;

- ARTICULO 17.- ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:
- a. Autorizar la enajenación, adquisición o gravamen de bienes o derechos de El Instituto cuando el valor de los mismos sea mayor de un mil quetzales, para ello se necesitará el voto favorable de un mínimo de las dos terceras partes de los asociados;
 - b. Acordar la reforma o modificación de los estatutos de El Instituto;
 - c. Aprobar los reglamentos;
 - d. Acordar la disolución y liquidación de El Instituto;
 - e. Resolver los asuntos que, por su importancia, no puedan ser postpuestos hasta la celebración de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General;
 - f. Resolver las impugnaciones que se presenten en contra de actos y resoluciones de la Junta Directiva;
 - g. Convocar, por medio de la Junta Directiva, a los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de la Constitución Política de la República, para la sesión en que se elegirán representantes ante la Comisión de Postulación, con el objeto de elegir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 215 de la Carta Magna.

- ARTICULO 18.- JUNTA DIRECTIVA.** La Junta Directiva se integra con los siguientes cargos:
- a. Un Presidente;
 - b. Dos Vicepresidentes;
 - c. Un Secretario;
 - d. Un Pro-secretario;

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

- e. Un Tesorero;
- f. Un Pro-tesorero; y
- g. Los vocales que se estime necesario, y que deben ser asociados activos al momento de su elección. El desempeño de estos cargos será ad-honorem.

ARTICULO 19.- ELECCION. Los miembros de la Junta Directiva deben ser electos por la Asamblea General Ordinaria, en la sesión del último viernes del mes de junio de cada año.

El sistema de elección para integrar la Junta Directiva será por planilla. Se hará en forma secreta. Para el efecto, la Junta Directiva proporcionará a cada asociado presente, el número de papeletas debidamente selladas y firmadas por el Secretario. Cada votante firmará el documento que acredite el número de papeletas que recibe, así como el nombre y apellidos de sus representantes. Resultarán electos quienes obtengan la mayoría simple de votos.

ARTICULO 20.- POSESION. La Junta Directiva electa tomará posesión, a más tardar, quince días después de la fecha de su elección.

ARTICULO 21.- REELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los miembros de la Junta Directiva durarán un año en el desempeño de sus funciones. Podrán ser reelectos para dos periodos consecutivos, pero para el efecto se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los asociados presentes o representados en la Asamblea General Ordinaria respectiva.

ARTICULO 22.- PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva celebrará sesión ordinaria por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cada vez que lo estime conveniente por decisión de la mayoría de sus miembros y hará quórum para la celebración de sesiones con la asistencia de la mitad mas uno. Las sesiones serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva o por los Vicepresidentes o por los vocales en su orden en ausencia de aquél, y quien presida tendrá doble voto en caso de empate.

ARTICULO 23.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Las resoluciones, acuerdos, decisiones o disposiciones de la Junta Directiva se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes.

ARTICULO 24.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son atribuciones de la Junta Directiva:

1961
25

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

7 de 10


- a. Velar por el buen nombre de la Asociación y tomar todas las disposiciones necesarias para el efecto;
- b. Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos, disposiciones de la Asamblea General, los reglamentos; así como las demás regulaciones que normen la actividad y desarrollo de la entidad;
- c. Administrar el patrimonio de El Instituto;
- d. Elegir los emblemas y demás distintivos de El Instituto;
- e. Convocar a la Asamblea General para las sesiones ordinarias y extraordinarias conforme los estatutos;
- f. Formular y presentar a la Asamblea General Ordinaria, la memoria e informe anual de las labores de El Instituto;
- g. Acordar la suspensión de los asociados conforme a los estatutos, en los casos en que la Junta Directiva esté autorizada para deliberar y decidir al respecto;
- h. Llevar en orden las actas de sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, así como asentar en la misma todos los acuerdos, resoluciones, decisiones y disposiciones que tomen en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones cada fin de año;
- i. Coadyuvar al desarrollo de las actividades que le encomiende el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y mantener estrecha colaboración con la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial; Velar porque se cumplan todos los requisitos de contabilidad en los libros correspondientes y mantener actualizado el inventario de los bienes de la Asociación;
- k. Designar a los asociados que representen a El Instituto en eventos y actividades nacionales e internacionales;
- l. Nombrar y remover al personal, según sea necesario para el desarrollo de la Asociación y fijar sus atribuciones y emolumentos;
- m. Todas las demás atribuciones y obligaciones que le competen conforme a los estatutos, reglamentos, resoluciones y disposiciones de Asamblea General y demás regulaciones de El Instituto.



SECRETARIA

- ARTICULO 25.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.** El Presidente de la Junta Directiva tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de El Instituto y, además, las siguientes atribuciones:
- a. Presidir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, así como las comisiones permanentes o específicas que fueren establecidas y preparar la respectiva agenda;
 - b. Autorizar con el Tesorero todas las cuentas y pagos de El Instituto que se efectúen.
 - c. Autorizar, con el Secretario, las actas de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

202


- d. Ser el órgano de comunicación entre la Junta Directiva y la Asamblea General, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial, así como otras entidades y público en general;
- e. Coordinar y vigilar las actividades de los miembros de la Junta Directiva y de las comisiones permanentes o específicas;
- f. Otorgar poderes especiales, previa autorización de Junta Directiva, renovarlos o revocarlos.
- g. Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones de Junta Directiva y de la Asamblea General;
- h. Todas las demás que le competen de acuerdo con los estatutos, las resoluciones de Asamblea General, de Junta Directiva o las demás disposiciones reglamentarias de El Instituto.

ARTICULO 26.- ATRIBUCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES. En caso de ausencia temporal o por cualquier causa, los Vicepresidentes en su orden numérico asumirán la Presidencia interinamente.

Asimismo, completarán el tiempo de mandato del Presidente en caso de su ausencia definitiva.

ARTICULO 27.- ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO. Le corresponde al Secretario:

- a. Faccionar y autorizar, con el Presidente, las actas de las sesiones de Junta Directiva y de Asamblea General;
- b. Recibir y responder la correspondencia;
- c. Archivar y conservar los expedientes, correspondencia, libros y demás documentos;
- d. Servir de órgano de comunicación entre la Asociación y sus asociados, entidades y público en general;
- e. Guardar y hacer uso debido del sello de la Secretaría;
- f. Preparar y presentar a la Asamblea General ordinaria, la memoria de labores de El Instituto;
- g. Organizar en archivo, notas, publicaciones, recortes de prensa y fotocopias, relacionados con el Instituto;
- h. Extender certificaciones y constancias de los documentos a su cargo;
- i. Notificar los acuerdos de la Asamblea General y de la junta Directiva, así como las demás disposiciones que fueren necesarias conforme los presentes estatutos;
- j. Mantener el registro de asociados;
- k. Desempeñar las funciones que le encomiende la Junta Directiva;

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

- l. Preparar la documentación de los asuntos que se traten en Asamblea General y Junta Directiva.
m. Preparar y enviar por lo menos con tres días de anticipación las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General; y
n. Realizar aquellas otras atribuciones relacionadas con su competencia.
En caso de ausencia temporal de cualquier clase, el Pro-Secretario asumirá estas funciones.

ARTICULO 28.- ATRIBUCIONES DEL TESORERO. Son atribuciones del Tesorero:

- a. Custodiar los fondos de la Asociación y llevar las cuentas de los ingresos que se perciban;
b. Hacer efectivos las ordenes de pago autorizadas por la Asamblea General, la Junta Directiva o el Presidente y el Secretario, por los medios adecuados;
c. Extender los recibos y documentos de pago que sean necesarios;
d. Llevar los libros de contabilidad indispensables;
e. Manejar una caja chica, para los gastos de administración;
f. Verificar el corte mensual de caja y presentar informe del mismo a la Junta Directiva;
g. Llevar y mantener al día el inventario de los bienes de La Asociación;
h. Apercibir a los asociados morosos, con informe a la Junta Directiva;
i. Elaborar de acuerdo con la Comisión de Finanzas el informe financiero y el Proyecto de Presupuesto.
Depositar en una cuenta de depósitos monetarios, cualquier suma de dinero que ingrese a El Instituto.
Otras que le fijen la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, o la Junta Directiva;
l. Informar a la Asamblea General y a la Junta Directiva sobre todos los asuntos de su competencia.
En caso de ausencia temporal por cualquier causa, el Pro-Tesorero asumirá estas funciones.

ARTICULO 29.- ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES. Son atribuciones de los vocales:

- a. Sustituir por su orden a los Vicepresidentes, en caso de ausencias temporal por cualquier causa;
b. Cooperar con el Secretario en los escrutinios que se efectúen en las Asambleas ordinarias y extraordinarias;
c. Colaborar en todas las actividades que les confíe la Junta Directiva;
d. Coordinar las comisiones que se organicen, y

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

- e. Otras que les sean otorgadas por Asamblea General o Junta Directiva.

ARTICULO 30.- COMISIONES. La Junta Directiva organizará las comisiones de trabajo que considere necesarias para el buen desarrollo de las labores de El Instituto. Su integración y funciones serán decididas por la Junta Directiva.

CAPITULO IV
DEL PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO

ARTICULO 31.- PATRIMONIO. El patrimonio de El Instituto se constituye con todos los bienes, derechos y acciones que adquiriera por cualquier título legal. Financiará sus operaciones con los siguientes bienes e ingresos:

- a. Las cuotas mensuales de los asociados;
b. Las contribuciones especiales o extraordinarias de los asociados cuyo monto será fijado por la Junta Directiva;
c. Las donaciones, legados y subvenciones que reciba de cualquier persona individual o jurídica, o entidad pública o privada, y;
d. Otros ingresos lícitos que reciba.

ARTICULO 32.- DESTINO DEL PATRIMONIO. El patrimonio de El Instituto y los bienes particulares que lo constituyen se destinarán exclusivamente a la consecución de sus objetivos, quedando prohibido distribuir entre sus miembros utilidades, dividendos, excedentes o cualquier tipo de ganancias.

ARTICULO 33.- BIENES DE EL INSTITUTO. Ningún miembro de El Instituto podrá alegar derechos sobre los bienes de éste, aunque deje pertenecer a él o el mismo se disuelva.

ARTICULO 34.- FISCALIZACION. Los recursos patrimoniales de El Instituto serán fiscalizados por una comisión de Finanzas. La Comisión de Finanzas se integra por el Tesorero, el Pro-Tesorero y un asociado no perteneciente a la Junta Directiva. Tiene las siguientes funciones específicas:

- a. Velar por el desarrollo y mantenimiento de adecuadas condiciones de financiamiento de El Instituto;
b. Formular el proyecto de presupuesto anual, que debe ser aprobado por la Junta Directiva, quien dará cuenta por escrito a todos los asociados dentro del mes siguiente.

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

c. Antes de la Asamblea anual y cuando se considere necesario, hará llegar a los asociados los documentos relacionados con el cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO V
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 35.- DIFERENCIAS. Toda diferencia que surja entre asociados o de estos para con el Instituto, se resolverá en forma amigable.

ARTICULO 36.- PERDIDA DE LA CALIDAD. La calidad de asociado activo se pierde temporalmente por la suspensión acordada por la Junta Directiva. La pérdida de la calidad de asociado se da en los casos establecidos en estos estatutos. Son causas que terminan con la calidad de asociado de El Instituto:

- a. Renuncia expresa;
- b. Realizar actos contrarios a los fines y prestigio de El Instituto;
- c. No pagar las cuotas durante tres meses consecutivos;
- d. Incumplir reiteradamente las obligaciones que imponen estos estatutos;
- e. Incumplir con las comisiones que se le encarguen para el desarrollo de los fines y actividades de El Instituto;



ARTICULO 37.- RECUPERACION DE LA CALIDAD. La calidad de asociado activo se recupera por el cumplimiento del plazo por el cual el miembro fue suspendido o, en su caso, por cesar la causa que motivó la suspensión, previa resolución de la Junta Directiva.

SECRETARIO

ARTICULO 38.- FALTAS. Se consideran faltas cometidas por los asociados, las siguientes:

- a. El incumplimiento a lo resuelto por la Junta Directiva;
- b. El incumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea General;
- c. El incumplimiento a estos estatutos o sus reglamentos.

ARTICULO 39.- SANCIONES. La Junta Directiva podrá aplicar a cualquier asociado por las faltas cometidas, según sea el caso, las siguientes sanciones:

- a. Amonestación;
- b. Suspensión de la calidad de asociado activo hasta por seis meses. Esta suspensión implica la imposibilidad de ejercer los derechos establecidos en los presentes estatutos; y,
- c. Pérdida de la calidad de asociado.

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

ARTICULO 40.- PROCEDIMIENTO. La Junta Directiva debe resolver los casos previstos en las literales a, b, y c, del artículo 39 de estos estatutos. Para dictar la sanción respectiva, la Junta Directiva hará saber por escrito al asociado los cargos que hayan en su contra, concediéndole un plazo no menor de cinco días para que por escrito haga valer los argumentos de su defensa. Con su contestación o sin ella, la Junta Directiva dentro de los quince días siguientes, dictará la resolución correspondiente, la que se notificará a los interesados dentro de los cinco días de dictada. Se exceptúa del trámite anterior, lo relativo a las amonestaciones.

ARTICULO 41.- RECURSOS. El afectado dentro de los tres días siguientes de haber sido notificado de la disposición o resolución que le afecte, podrá interponer por escrito ante la Junta Directiva, recurso de apelación. La Junta Directiva elevará el expediente al conocimiento de la Asamblea General Extraordinaria, la que estará obligada a conocerlo y resolverlo sin más trámite. En contra de lo resuelto por la Asamblea General en relación al caso de apelación, no cabrá ningún otro recurso propio de estos estatutos.

ARTICULO 42.- ACTUACIONES. Todas las actuaciones referentes a este capítulo deben constar por escrito.

CAPITULO VII
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE EL INSTITUTO

ARTICULO 43.- DISOLUCION. Además de los casos previstos en las leyes de Guatemala, El Instituto podrá disolverse por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria de conformidad con el artículo 17 literal d, de los presentes estatutos.

ARTICULO 44.- LIQUIDACION. El procedimiento de liquidación lo realizará un liquidador de acuerdo con el nombramiento y atribuciones que determine la Asamblea General Extraordinaria. En todo caso, una vez pagados los pasivos, el activo pasará al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Obligadamente, el liquidador deberá:

- a. Tener la representación de El Instituto en liquidación;
- b. Exigir la cuenta de su administración a toda persona que haya manejado intereses de El Instituto;

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

- c. Cumplir con las obligaciones pendientes;
d. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución;
e. Otorgar finiquitos;
f. Disponer que se practique el balance general final;
g. Rendir cuentas a la Asamblea General Extraordinaria de su administración liquidadora y somete a su consideración toda la documentación para su aprobación final; y
h. Comunicar al Ministerio de Gobernación la disolución de la entidad a efecto de que se proceda a derogar el Acuerdo mediante el cual se reconoció la personalidad jurídica de la entidad y se cancele la inscripción en el Registro Civil correspondiente.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 45.- MODIFICACIONES. Los presentes estatutos únicamente podrán ser modificados o reformados por la Asamblea General Extraordinaria, convocada especialmente para el efecto. Las modificaciones entrarán en vigor hasta que sean aprobadas por el Acuerdo respectivo.

ARTICULO 46.- SOLICITUD. La modificación o reforma de los estatutos debe ser solicitada por escrito a la Junta Directiva, razonándose adecuadamente la solicitud.

SECRETARIOARTICULO 47.- ESTUDIO. La Junta Directiva deberá realizar un estudio de la solicitud de la modificación o reforma de los estatutos y presentará sus observaciones y un proyecto que contenga las mismas, a la Asamblea General Extraordinaria correspondiente.

ARTICULO 48.- MAYORIA ESPECIAL. Para la aprobación de modificaciones o reformas, se requerirá la presencia en la Asamblea General Extraordinaria, de una mayoría especial formada por el sesenta y cinco por ciento de asociados activos.

ARTICULO 49.- CASOS NO PREVISTOS. Lo no previsto en estos estatutos o en los reglamentos de la Asociación, será resuelto por la Junta Directiva.

ARTICULO 50.- DURACION. Los integrantes de la Junta Directiva Provisional continuarán en el desempeño de sus cargos, como propietarios, hasta la fecha en que, de acuerdo a estos estatutos, la Asamblea General Ordinaria deberá elegir a los nuevos".

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION "EL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL
ORGANISMO JUDICIAL" (IMCAOJ)

QUINTO: El Presidente dió por finalizada la sesión. No habiendo más de qué hacer constar termino la presente cuando son las doce horas de la fecha al principio indicada, por lo que leído lo escrito al requeriente lo aceptó, ratificó y firmó juntamente con los demás miembros directivos y el infrascrito Notario que de todo da fe.

ANTE MI:





**Instituto de Magistrados
de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial**
Guatemala, C. A.

**EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE
MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ORGANISMO
JUDICIAL**, de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo
veintisiete (27) de los Estatutos del Instituto de Magistrados. -----

CERTIFICA

Que las diez hojas de fotocopia que anteceden, impresas únicamente en su
anverso, son **AUTÉNTICAS**, por haber sido reproducidas de su original el día de
hoy en mi presencia, que reproducen fielmente los Estatutos de la Asociación "El
Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial",
aprobados mediante Acuerdo Ministerial número noventa y dos - noventa y siete, el
trece de marzo de mil novecientos noventa y siete. -----

Se extienden, enumeran, sellan y firman las diez hojas que anteceden y la presente
certificación en esta única hoja de papel bond con el membrete del Instituto de
Magistrados. En la ciudad de Guatemala, a los once días del mes de septiembre de
dos mil diecinueve. -----

**Magistrado Luis Fernando Aroche Arrecis
Secretario Junta Directiva
Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones
del Organismo Judicial**



c.c. Archivo

204
30